

La recuperación de los servicios públicos

Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos



EDITADO POR
Satoko Kishimoto
y Olivier Petitjean

La recuperación de los servicios públicos

Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos

www.tni.org/recuperacion-servicios-publicos

Editado por Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean

Coordinación de la investigación Lavinia Steinfort

Revisión y corrección en inglés Madeleine Bélanger Dumontier y Ann Doherty

Traducción al español Beatriz Martínez

Diseño e infografías Karen Paalman

OCTUBRE DE 2017

(La edición original en inglés se publicó en junio de 2017.)

Publicado por Transnational Institute (TNI), Observatorio de las Multinationales, Cámara Federal del Trabajo de Austria (AK), Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPUS), Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Internacional de Servicios Públicos (ISP-PSI), Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), We Own It, Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega (Fagforbundet), Proyecto Servicios Municipales (MSP) y Sindicato Canadiense de la Función Pública (SCFP-CUPE).

Ámsterdam y París

ISBN 978-90-70563-61-5

Copyright: Esta publicación y cada uno de sus capítulos cuenta con una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0. Se puede copiar y distribuir el documento, en su integridad o en capítulos separados, siempre que se reconozca la autoría y las organizaciones que lo han publicado, que se cite la fuente original de la publicación en el sitio web donde aparezca y que se utilice con fines no comerciales, educativos o de incidencia en materia de políticas públicas.

Agradecimientos

Este libro nunca se habría hecho realidad sin la generosa ayuda y el compromiso de todas las organizaciones que han participado en su publicación ni sin la colaboración de los autores y las autoras de los distintos capítulos. También deseamos expresar nuestro agradecimiento por los valiosos comentarios y consejos para confeccionar la lista de casos de remunicipalizaciones a escala mundial a: David Hall, PSIRU, Universidad de Greenwich; Oliver Wagner, Instituto Wuppertal; Gabor Scheiring, Universidad de Cambridge; y Mildred E. Warner, Universidad Cornell. La recopilación de datos fue realizada por Nina Aichberge, M^lLisa Colbert, Kristen Dalby, Alexandra Griffin, Satoko Kishimoto, Benny Kuruvilla, Emanuele Lobina, Georgi Medarov, Matthijs Peters, Olivier Petitjean, Míriam Planas, Lavinia Steinfort, Laurentius Terzic, Sol Trumbo Vila y Sarah Vukelich.

Los sindicatos y las organizaciones siguientes colaboraron con la encuesta participativa: Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega (Fagforbundet); Sindicato Finlandés de Enfermería Profesional (SuPer); Sindicato Danés de la Función Pública (FOA); Sindicato para los Sectores Público y del Bienestar Social (JHL, Finlandia); Kommunal (Suecia); UNISON (Reino Unido); Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV); ver.di (Alemania); Sindicato Checo de la Salud y la Asistencia Social; Sindicato Eslovaco de la Salud y los Servicios Sociales; Sindicato RB de Personal Estatal, Municipal y de los Servicios Públicos (Armenia); Federación Sindical de la Construcción, la Madera y los Servicios Públicos de Albania (FSNDSH-PSH); Sindicato de la Salud de Montenegro; S p s f o (Francia); Sindicato de la Función Pública de Turquía (DİSK/ Genel-İş); Federación de Sanidad de CC.OO. (Estado español); Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (Estado español); FESP UGT (Estado español); STAL (Portugal); Hansewerk AG/ Hamburg Netz GmbH (Alemania); Stadt Erlangen (Alemania); Hospitales Universitarios de Brighton y Sussex NHS Trust (Reino Unido); Amrta Institute (Indonesia); y Communauté de communes du briançonnais (Francia). Sus aportaciones nos ayudaron a identificar casi 100 nuevos casos de remunicipalización.

Por último, gracias a nuestra revisora y correctora, Madeleine Bélanger Dumontier, que ha brindado coherencia a los distintos capítulos y ha conseguido que la lectura resulte más amena.

Índice

Infografías (Re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo	5
Introducción La historia nunca contada – <i>Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean</i>	11
Capítulo 1 Las remunicipalizaciones en Francia: desde responder a los abusos de las grandes empresas a reinventar unos servicios públicos democráticos y sostenibles – <i>Olivier Petitjean</i>	26
Capítulo 2 ¿Por qué renacionalizar? Fundamentos contemporáneos en América Latina – <i>M’Lisa Colbert</i>	37
Capítulo 3 Las 835 razones para no firmar acuerdos de comercio e inversión – <i>Lavinia Steinfort</i>	54
Capítulo 4 Los municipios noruegos recuperan el control público de los servicios sociales – <i>Bjørn Pettersen y Nina Monsen</i>	75
Capítulo 5 Las remunicipalizaciones en Alemania y Austria: consecuencias para el personal – <i>Laurentius Terzic</i>	90
Capítulo 6 Contra la corriente: nuevos modelos para garantizar los servicios esenciales en la India – <i>Benny Kuruvilla</i>	103
Capítulo 7 El peligroso espejismo de las asociaciones público-privadas al descubierto – <i>María José Romero y Mathieu Vervynckt</i>	117
Capítulo 8 Nuestra ciudad, nuestra red: la tendencia hacia la remunicipalización de la energía en Alemania – <i>Sören Becker</i>	132
Capítulo 9 La propiedad pública vuelve al orden del día en el Reino Unido – <i>David Hall y Cat Hobbs</i>	147
Capítulo 10 Una ola ciudadana reivindica unos servicios públicos y democráticos de agua en los municipios catalanes – <i>Míriam Planas</i>	162
Conclusión Ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos – <i>Olivier Petitjean y Satoko Kishimoto</i>	175
Anexo 1 Lista de (re)municipalizaciones	200
Anexo 2 Lista de (re)nacionalizaciones	247
Anexo 3 Metodología del estudio	251

(Re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo



La (re)municipalización por sectores

267

Agua

País

País	Número de casos
Francia	106
Estados Unidos	61
Estado español	27
Alemania	17
Argentina	8
Canadá	4
Hungría	4
Italia	3
Kazajistán	3
Sudáfrica	3
Bolivia	2
Colombia	2
India	2
Indonesia	2
Mozambique	2
Turquía	2
Ucrania	2
Uzbekistán	2
Venezuela	2
Albania	1
Bélgica	1
República Centroafricana	1
Ecuador	1
Guinea	1
Libano	1
Malasia	1
México	1
Portugal	1
Rusia	1
Suecia	1
Tanzania	1
Uganda	1



Número de casos



31

Residuos

País

País	Número de casos
Alemania	13
Reino Unido	7
Canadá	5
Francia	3
Estado español	2
Noruega	1

311

Energía

País

País	Número de casos
Alemania	284
Estados Unidos	6
Reino Unido	5
Japón	4
Países Bajos	3
República Dominicana	2
Francia	2
Argentina	1
Dinamarca	1
Estado español	1
India	1
Lituania	1



Número de casos



38

País

País	Número de casos
Francia	20
Reino Unido	7
Austria	3
Alemania	2
Portugal	2
Canadá	1
República Checa	1
India	1
Turquía	1



11

Educación

País

País	Número de casos
Alemania	5
Reino Unido	3
India	1
Nicaragua	1
Estado español	1

Administración local 140



24 edificios y limpieza



15 seguridad y emergencias



19 espacios públicos (verdes)



18 vivienda



20 comedores escolares



10 deporte



9 cultura



8 construcciones y reparaciones



4 funerarias



3 recursos humanos



5 tecnología de la información

5 otros



País

País	Número de casos
Reino Unido	37
Alemania	26
Francia	21
Estado español	21
Austria	13
Canadá	9
Finlandia	3
Noruega	4
Dinamarca	2
Países Bajos	2
Armenia	1
India	1

Atención de la salud y asistencia social 37



País

País	Número de casos
Noruega	16
Suecia	7
Reino Unido	5
Estado español	4
Dinamarca	2
Finlandia	1
India	1
Montenegro	1

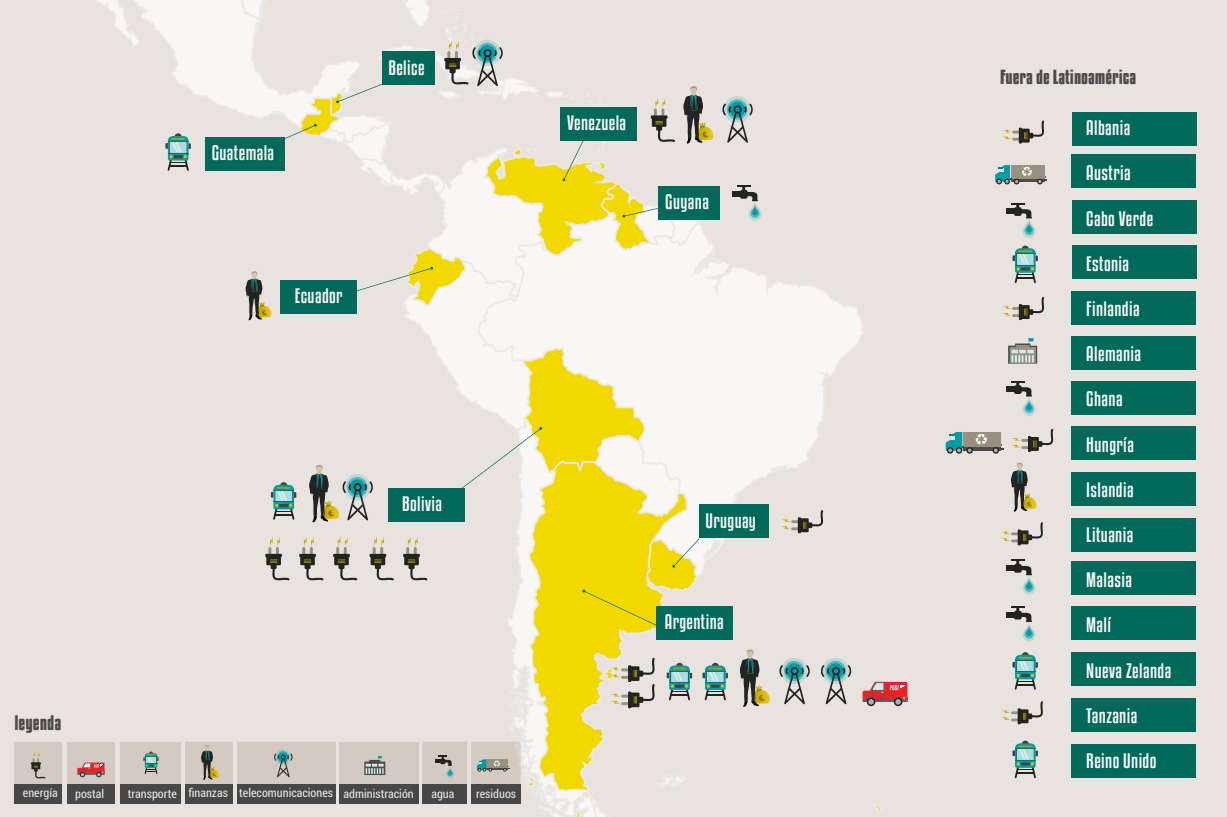


8 asistencia social



29 atención de la salud

(Re)nacionalizaciones con beneficios públicos



(Re)municipalizaciones: recuperar y crear servicios públicos locales

Remunicipalización

692



Municipalización

143



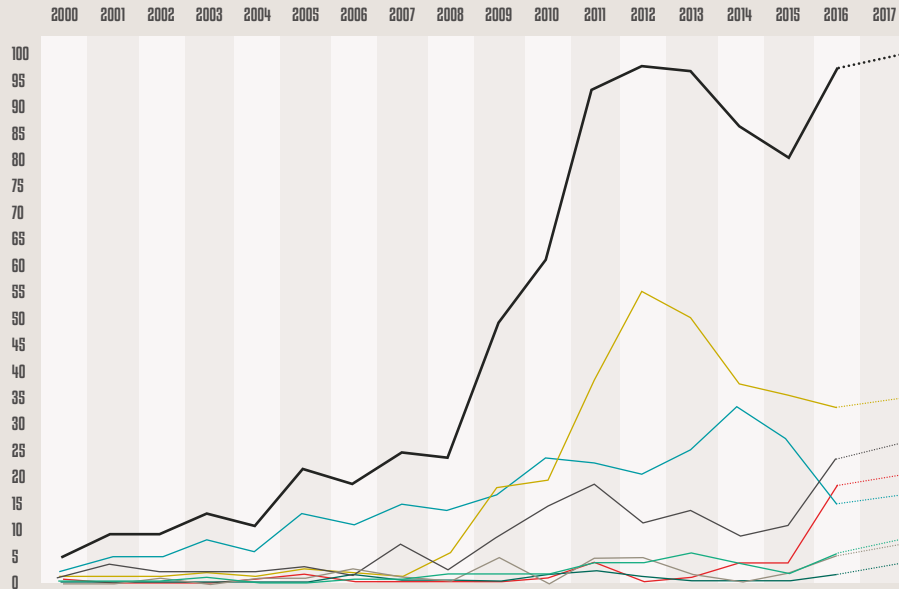
Cómo se ha producido la desprivatización



Nivel de la recuperación del control



Desprivatizaciones por año



Introducción

La historia nunca contada

Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean

No sería de extrañar, especialmente si vive en Europa, que opine que los servicios públicos son, por su propia naturaleza, caros, poco eficientes, incluso algo obsoletos, y que reformarlos para adaptarlos a los nuevos retos de nuestra época representa una tarea ardua. Parece lógico dar por sentado —porque eso es lo que nos dicen la mayoría de los políticos, los medios de comunicación y los llamados ‘expertos’— que nosotros y nosotras, en tanto que ciudadanos y usuarios, debemos resignarnos a pagar unas tarifas cada vez más altas por unos servicios de una calidad cada vez más baja, y que al personal de esos servicios no le queda otra salida que aceptar unas condiciones laborales cada vez más precarias. Da la impresión de que las compañías privadas irán asumiendo un papel cada vez más destacado en la prestación de servicios públicos, porque todo tiene un precio, porque la clase política ha perdido de vista el bien común y porque a los ciudadanos solo les preocupan sus intereses particulares.

En este libro, sin embargo, se explica una historia totalmente distinta. A veces, da la sensación de que vivimos en una época donde los únicos horizontes que se dibujan son los del lucro y la austeridad. Pero en realidad, al margen del foco mediático, miles de políticos, funcionarios públicos, trabajadores y sindicatos, y movimientos sociales están trabajando para reivindicar o crear servicios públicos eficaces que satisfagan las necesidades básicas de las personas y respondan a nuestros desafíos sociales, ambientales y climáticos. Normalmente, lo hacen en el ámbito local. Nuestro estudio demuestra que en los últimos años se han producido al menos 835 casos de (re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo, algunos de los cuales aglutinan a varias ciudades. En total, hemos identificado iniciativas remunicipalizadoras en más de 1600 ciudades de 45 países. Y estas (re)municipalizaciones, por lo general, logran rebajar los costes y las tarifas, mejorar las condiciones laborales y mejorar la calidad

del servicio, garantizando al mismo tiempo una mayor transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

Esta ola remunicipalizadora¹ es especialmente intensa en Europa, pero está cobrando impulso en otras regiones del mundo. Y lo que es más: muchos de los 835 ejemplos que hemos identificado no constituyen un mero cambio técnico en la titularidad, sino que suelen entrañar reformas económicas, sociales y ambientales más amplias. Las iniciativas de (re) municipalización responden a muchos y diversos motivos, desde acabar con las prácticas abusivas o el incumplimiento de las normas laborales por parte del sector privado al deseo de reconquistar el control de la economía y los recursos locales, el afán de ofrecer a las personas unos servicios asequibles, o la intención de poner en práctica unas estrategias ambiciosas a favor del medioambiente o de la transición energética, por citar algunos. Las (re)municipalizaciones se producen en todos los niveles, siguiendo distintos modelos de propiedad pública y con distintos grados de implicación por parte de la ciudadanía y la propia plantilla del servicio. Sin embargo, pese a la gran pluralidad de experiencias, se dibuja un panorama con un denominador común: el movimiento (re)municipalizador está creciendo y expandiéndose, a pesar de la constante ofensiva a favor de las privatizaciones y las medidas de austeridad.

La remunicipalización alude al hecho de retornar el carácter público a la prestación privada de un servicio. Más en concreto, la remunicipalización supone que los servicios públicos pasen de la privatización en cualquiera de sus diversas formas —como la propiedad privada de los activos, la externalización de los servicios y las asociaciones público-privadas (APP)— a la propiedad pública, la gestión pública y el control democrático. Aunque nuestro estudio pone el acento en los casos en que se ha retomado la plena titularidad pública, también incluye casos de servicios de propiedad principalmente pública cuando el modelo se aplica con claros valores públicos, para servir objetivos públicos y cuando comprende algún elemento de responsabilidad democrática.

Las remunicipalizaciones más allá del sector del agua

Nos pareció que era fundamental estudiar y documentar la tendencia remunicipalizadora, precisamente porque las instituciones de conocimiento, los centros de estudios y las instituciones financieras dotadas de los recursos necesarios no han hecho nada para investigarla. Las grandes empresas, los ‘expertos’ en economía y los Gobiernos nacionales han ignorado las remunicipalizaciones; quizá porque no tienen interés en que se conozcan. Preferirían que se perpetúe la idea de que la privatización es algo inevitable. En 2015, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos emprendimos una iniciativa común para estudiar las remunicipalizaciones en el sector del agua. Descubrimos que, desde el año 2000, se habían producido al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países, que afectaban a más de 100 millones de personas.² La remunicipalización del agua, un suceso poco habitual hace apenas 15 años, se ha acelerado de forma espectacular y la tendencia cobra cada vez más fuerza. A raíz de aquí, se nos planteó la cuestión de hasta qué punto se estaba produciendo el fenómeno también en el ámbito de otros servicios esenciales, como la energía, la recogida de residuos, el transporte, la educación, la salud y los servicios sociales. También sentíamos curiosidad por saber si la remunicipalización en estos sectores respondía a motivos parecidos a los del sector del agua y si estaba logrando los mismos resultados.

Metodología del estudio

Obviamente, la lista de remunicipalizaciones que presentamos en este libro dista mucho de ser exhaustiva. Se trata, simplemente, de un primer hito; seguiremos documentando nuevos casos. La lista es fruto del esfuerzo concertado de varias organizaciones de la sociedad civil, investigadores y sindicatos para reunir casos de (re)municipalización en un gran número de países, como parte de un proceso de aprendizaje colectivo. Once organizaciones iniciaron un proyecto de colaboración y recopilaron datos durante un período de 18 meses. Trece personas se encargaron

de la investigación documental. Con el fin de ampliar nuestro alcance y localizar casos que aún no eran conocidos a escala internacional, distribuimos una encuesta participativa entre sindicatos y redes de la sociedad civil. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU) difundió el cuestionario de la encuesta entre sus organizaciones afiliadas y recibimos información considerable de 19 sindicatos en 16 países. Estas aportaciones nos ayudaron a identificar casi 100 nuevos casos.

La metodología que empleamos en el estudio se explica con mayor detalle en el anexo 3. Nuestra lista no incluye los casos en los que un servicio que se había remunicipalizado se ha vuelto a privatizar, ni en los que un contrato ha pasado de un proveedor privado a otro, ya que quedan fuera del alcance de nuestra investigación.

Una tendencia dinámica y cada vez más veloz

Gracias a la encuesta participativa y a nuestra propia investigación, identificamos 835 casos de (re)municipalización en siete sectores de servicios públicos en todo el mundo. Son casos que encontramos en todo tipo de contextos, desde pequeños pueblos a grandes capitales, y en entornos tanto urbanos como rurales. La mayoría de las experiencias de remunicipalización se presentan en los sectores de la energía (311 casos) y del agua (267 casos). En varios países, como Canadá, el Estado español y el Reino Unido, las autoridades locales han asumido el control de diversos servicios, como piscinas, comedores escolares, mantenimiento del espacio público, vivienda, limpieza y seguridad (14,0 casos en total).

En torno al 90 por ciento de las (re)municipalizaciones en el sector de la energía tuvieron lugar en Alemania (284 casos), un país famoso por su ambiciosa política de transición energética (conocida como *Energiewende*). Muchas experiencias de remunicipalización del agua han tenido lugar en Francia (106 casos), el país con la historia más larga de privatización en este sector y donde tienen su sede las grandes multinacionales Suez y Veolia. En los sectores de la salud y la asistencia social, más de la mitad de

los casos proceden de Noruega y otros países nórdicos (37 casos en total).

Nuestro estudio abarca iniciativas (re)municipalizadoras que se produjeron en un lapso de 16 años, entre 2000 y enero de 2017. En la primera mitad de este período (2000-2008), se registró el 17 por ciento de los casos y, en la segunda (2009-2017), el 83 por ciento.³ Esto significa que, durante la segunda mitad de nuestro período de estudio, se produjeron cinco veces más (re)municipalizaciones que durante el primero. El año en que se dieron más casos, un total de 97, fue 2012; desde entonces, el número de experiencias se ha mantenido elevado. En el caso concreto del agua, durante la segunda mitad de nuestro período de estudio, se produjeron 2,3 veces más (re)municipalizaciones que durante el primero. La remunicipalización del agua tiene una historia de mayor recorrido, y es probable que las buenas experiencias en este sector hayan sido una fuente de inspiración para acabar con las privatizaciones en otros sectores en los últimos años.

Aparte del período que cubre la encuesta, existen numerosos ejemplos de que la tendencia remunicipalizadora se mantiene con fuerza en 2017. La ciudad catalana de Cabrils remunicipalizó el mantenimiento de los espacios públicos y los servicios de limpieza y, en los próximos años, prevé remunicipalizar un total del 90 por ciento de los puestos de trabajo, que antes estaban subcontratados. La ciudad española de Cádiz también dejó de externalizar el servicio de socorristas en las playas y la limpieza de edificios públicos, unas medidas que representan solo el principio de todo un plan del gobierno municipal para reestructurar los servicios.

Distintos modelos de desprivatización

Usamos el término '(re)municipalización', con paréntesis, porque la encuesta también incluye iniciativas en las que las administraciones locales establecieron nuevas empresas municipales en mercados liberalizados. Así ha sucedido, sobre todo, en el sector de la energía. Las administraciones locales también pueden crear servicios públicos totalmente nuevos

para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Por ejemplo, el estado indio de Tamil Nadu creó comedores populares con el propósito de ofrecer comida a un coste muy bajo y, de este modo, reducir los índices de hambre y desnutrición (véase el capítulo 6). En total, nuestra encuesta identificó 143 nuevas empresas municipales o regionales establecidas para suministrar servicios públicos. La gran mayoría de ellas son empresas municipales de energía (122). Según nuestra encuesta, solo en Alemania, se han creado 109 nuevas empresas municipales de energía en los últimos años. Hay también otros ejemplos, como algunas empresas municipales de servicios funerarios en el Estado español y Austria, que pueden ofrecer a las familias una alternativa asequible en un momento crítico para la dignidad de las personas.

La desprivatización también puede adoptar la forma de una (re)nacionalización. La remunicipalización y la renacionalización muchas veces comparten características comunes en la medida en que ambas entrañan que las administraciones públicas retomen unas funciones que antes dependían del sector privado, pero los motivos que las impulsan pueden ser de lo más variado. Por ejemplo, en Europa occidental, después de la crisis financiera de 2008, se rescataron y recapitalizaron muchos bancos privados con fondos públicos. En Japón, tras la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, también se nacionalizó la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), que era la responsable del reactor nuclear. El Gobierno japonés tiene la intención de volverla a privatizar cuando el mercado esté preparado para ello. En Hungría, el actual régimen autoritario ha renacionalizado más de 200 servicios, sobre todo en los sectores de las finanzas y la energía, con el objetivo de consolidar el poder central.⁴ Estos ejemplos tienen más que ver con encontrar una solución temporal a un problema del sector privado sin introducir mecanismos de escrutinio público o con planteamientos nacionalistas. Por otro lado, en América Latina, pasada la oleada de privatizaciones de muchos servicios públicos en la década de 1990, varios Gobiernos renacionalizaron sectores estratégicos desde el punto de vista social y económico, como la energía, el gas, el agua, los fondos de pensiones, el servicio postal y el transporte aéreo. Por lo tan-

to, presentamos una lista selectiva de casos de renacionalización, cuyos objetivos y motivos consistían en fomentar unos servicios equitativos y asequibles que lleguen a toda la población. Estos casos se encuentran, sobre todo, en América Latina (véase el capítulo 2).

Nuestro estudio se centra primordialmente en las medidas adoptadas con el objetivo de promover la capacidad local y con el potencial de suministrar unos servicios públicos mejores y democráticos. Aunque el 70 por ciento de las experiencias (589) han estado encabezadas por autoridades locales y regionales, algunas también se han coordinado a escala intermunicipal. La mitad de los casos del sector del agua en Francia, por ejemplo, se han producido en este plano. De este modo, los municipios circundantes de un área metropolitana se unen para beneficiarse de los servicios remunicipalizados de gestión pública del agua, como sucedió en la ciudad francesa de Niza. Las iniciativas intermunicipales también son algo habitual en el sector de la energía (148 casos) y del transporte (19 casos).

Cómo se acaba con las privatizaciones

En nuestra encuesta, también analizamos cómo se desprivatizaron los servicios en 662 casos de (re)municipalización. En el 67 por ciento de los casos (445), los gobiernos locales y regionales aprovecharon la oportunidad de que el contrato vencía y, simplemente, se limitaron a no renovarlo y dejar de apostar por la prestación privada. Es comprensible que los gobiernos locales esperen hasta el momento en que vence el contrato para evitar conflictos con las empresas privadas. Destinar unos años a prepararse para la etapa de transición mientras se espera a que se extinga el contrato del sector privado es un elemento estratégico para los municipios. En el 20 por ciento de los casos (134), el contrato privado se rescindió mientras seguía vigente, una medida que suele ser mucho más difícil de tomar y que, normalmente, resulta conflictiva. El índice de rescisión de los contratos es relativamente alto en el sector del agua (35 por ciento) y del transporte (26 por ciento). Esto podría significar que los gobiernos locales tomaron medidas firmes para hacer frente a los contratistas pri-

vados, a pesar de que ello podría tener graves consecuencias económicas ya que, en caso de rescisión unilateral de un contrato, puede que las empresas exijan una indemnización, entre otras cosas por la pérdida de los beneficios previstos en el futuro. En estos casos, parece que los problemas que causaba el modelo privatizado eran demasiado acentuados como para esperar a que finalizara el plazo del contrato. En el sector de la energía, solo hemos detectado la rescisión de tres contratos. Este hecho podría ser reflejo del gran poder que ostentan las grandes compañías energéticas, que no están dispuestas a dejar que las administraciones locales adopten esta medida. En todo caso, cuando finaliza el plazo del contrato es un momento estratégico para que los gobiernos locales recuperen el control de los servicios públicos. En el resto de los casos (46), las compañías privadas vendieron sus acciones o se retiraron por voluntad propia, por motivos diversos.

Un mandato de mayor alcance, pero menos recursos

Los servicios públicos se enfrentan a un reto polifacético. La mayoría de los países siguen luchando por recuperarse de la crisis económica. Los Gobiernos neoliberales se aferran obstinadamente a la estrategia de reforzar la austeridad e intensificar la competencia y la presión sobre las normativas ambientales y sociales a través de los acuerdos neoliberales de comercio e inversión. Evitar un cambio climático catastrófico exige una transformación profunda de la economía. El acceso universal a servicios esenciales como el agua y el saneamiento sigue siendo un gran reto en todo el mundo. Se ha denunciado y revelado la escandalosa elusión y evasión fiscal que practican grandes empresas y personas multimillonarias, pero los Gobiernos siguen permitiendo que esta realidad se mantenga. A las administraciones locales y regionales se les pide que hagan más con menos recursos. Estas administraciones se encuentran en la primera línea de batalla de numerosos retos, como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la creación de resiliencia frente a catástrofes naturales y la acogida de personas refugiadas. Al mismo tiempo, se enfrentan a un desafío titánico en lo que

se refiere a cómo financiar las infraestructuras y los servicios públicos.

Durante décadas, se nos ha dicho que las externalizaciones, las privatizaciones, las asociaciones público-privadas y los sistemas de financiación, como las iniciativas de financiación privada en el Reino Unido, son las únicas opciones de las que disponen las autoridades locales en un contexto caracterizado por más obligaciones y menos recursos. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que ese tipo de políticas son perjudiciales en el largo plazo para los presupuestos públicos, y que acaban desembocando en servicios deficientes y en una pérdida de responsabilidad democrática. Y cada vez es más evidente que abandonar las externalizaciones, las asociaciones público-privadas y otras políticas neoliberales parecidas, y optar en su lugar por la prestación interna de los servicios públicos genera, como veremos a continuación, ahorros importantes. El creciente número de iniciativas remunicipalizadoras, que son el principal punto de interés de este libro, es un reflejo del fracaso de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas.

Los beneficios inmediatos de las desprivatizaciones

En el estudio sobre remunicipalizaciones en el sector del agua que realizamos en 2015, detectamos que los principales motivos para acabar con la privatización de un servicio estaban vinculados con el ahorro de los costes, la mejora de la calidad, la transparencia financiera y la recuperación de la capacidad y el control operativos. En esta encuesta más amplia, que incorpora otros servicios esenciales además del agua, encontramos los mismos motivos. Otros factores clave son los objetivos ambientales, como acelerar el desarrollo de energías renovables, las medidas ambientales integradas para reducir los residuos o mejorar los sistemas de transporte público. La prestación de servicios asequibles para los hogares de bajos ingresos en el contexto de la pobreza energética y de agua (por el que muchas familias no pueden pagar las altas facturas del servicio) es también un motivo importante, especialmente en el Estado español y el Reino Unido, donde esos servicios están dominados por grandes compañías comerciales.

En lo que se refiere a los resultados de la remunicipalización, en 2015 hallamos que un gran número de los casos se tradujo en un ahorro de los costes y en una mayor inversión en el sector del agua. Puede que aún sea demasiado pronto para evaluar de manera sistemática los resultados de las (re)municipalizaciones en otros sectores, ya que muchos casos se han producido en los últimos años. Sin embargo, existen pruebas empíricas significativas de otros sectores que apuntan a que la remunicipalización ha supuesto un ahorro de costes inmediato para los gobiernos locales. Por mencionar solo algunos ejemplos (ya que estos se analizan con mayor detalle en los distintos capítulos y en la Conclusión), la ciudad de Bergen, en Noruega, que retomó la gestión de dos centros para el cuidado de personas mayores, logró un superávit de 500 000 euros, incluso aunque se habían previsto unas pérdidas de un millón de euros (véase el capítulo 4). La rescisión de las asociaciones público-privadas de transporte en Londres ayudó a reducir los costes en 1000 millones de libras esterlinas, sobre todo gracias a la eliminación de los dividendos de los accionistas y los gastos jurídicos, y a la introducción de medidas de eficiencia en las adquisiciones y el mantenimiento (véase el capítulo 9). Chiclana, en el Estado español, asumió la contratación municipal de 200 trabajadores y trabajadoras de tres servicios públicos y, aún así, el municipio prevé que ahorrará entre un 16 y un 21 por ciento de su presupuesto.

La ciudadanía apuesta por las desprivatizaciones

Muchas de las iniciativas remunicipalizadoras tienen su origen en unos dinámicos movimientos ciudadanos. La transición energética en Alemania es promovida por municipios y grupos ciudadanos; la mayoría de la población del Reino Unido exige que el agua, el suministro de energía y el transporte sean de titularidad pública; la fuerte resistencia popular contra los recortes sociales provocó la eclosión de una nueva política progresista en los municipios del Estado español, y más de 2300 ciudades de toda Europa se mostraron contrarias al acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la UE (el acuerdo TTIP). Todas estas historias nos dicen que las vías alternativas que buscan poner freno a la expansión de

las privatizaciones, la austeridad creciente y el constante deterioro de la calidad de los servicios públicos gozan de un firme apoyo.

En una gran mayoría de los casos documentados por nuestra encuesta, la ciudadanía y el personal del servicio se ha implicado en distintos grados en los procesos de desprivatización. En los países nórdicos, los trabajadores organizados experimentaron problemas en el lugar de trabajo después de que se privatizaran ciertos servicios, y presionaron por que se desprivatizara el trabajo en el ámbito social y de la salud. Lo mismo ocurrió con varios servicios del gobierno local en el Reino Unido y Canadá. En estos países, varias plataformas de trabajadores y ciudadanos llevan muchos años luchando contra la privatización del agua y colaborando con los ayuntamientos para que, en cuanto surge la oportunidad política, estos desprivaticen los servicios. La organización de importantes campañas de base a favor de un referendo llevó a la desprivatización de la red energética en Hamburgo, Alemania (véase el capítulo 8), y en Boulder, Estados Unidos,⁵ y del agua en Berlín.⁶ Los ciudadanos y las ciudadanas no son meros usuarios de un servicio. Las nuevas empresas municipales de energía cuentan con el respaldo de una ciudadanía comprometida y de movimientos comunitarios. Los londinenses, por ejemplo, están haciendo campaña para que se cree una empresa de suministro de energía sin fines de lucro que cuente con un amplio mecanismo de participación ciudadana.⁷ La participación y la movilización ciudadanas representan un factor esencial del movimiento (re)municipalizador.

Modelos mixtos y desprivatizaciones desde abajo

Empleamos el término ‘público’ en un sentido deliberadamente amplio, ya que eso nos permite abarcar un mayor abanico de iniciativas. Por ejemplo, dentro de nuestro ámbito de investigación, entrarían las cooperativas ciudadanas que han ocupado el lugar que antes dominaban proveedores de servicios de energía de carácter puramente comercial y orientados a los beneficios (por ejemplo, Minnesota y la isla hawaiana de Kauai en los Estados Unidos).

A diferencia de las autoridades locales, las cooperativas ciudadanas y las asociaciones de vivienda que han contribuido a prestar unos servicios de energía asequibles son, en principio, entidades privadas y, como tales, solo deben responder ante sus propios integrantes. No obstante, también suelen ser entidades sin ánimo de lucro y es evidente que pueden atender a objetivos de interés público. Por ese motivo, la perspectiva más importante de este estudio no es tan solo la distinción entre actores estatales y no estatales, sino los objetivos que persiguen las iniciativas y otros factores, como la proximidad (es decir, que se hayan impulsado desde el plano local). En otras palabras, confrontamos los modelos de propiedad corporativa y financierizada y los modelos de propiedad sin fines de lucro, organizadas a escala local y que persiguen de forma explícita servir el interés público general, basándose en principios como la igualdad, el acceso universal, la sostenibilidad ambiental y la democracia. Por ejemplo, Our Power, una empresa que fue creada en 2015 en la ciudad escocesa de Glasgow por parte de 35 asociaciones de vivienda social, es un modelo mixto de asociación entre autoridades locales y cooperativas ciudadanas. El Gobierno escocés ha invertido 2,5 millones de libras en la empresa, que aspira a que las cosas sean distintas para los hogares de bajos ingresos que actualmente se encuentran en situación de desventaja en el mercado de la energía y que tienen problemas para pagar las facturas.

Diversidad de contextos nacionales y dinámicas sectoriales

Dibujar un panorama de las iniciativas desprivatizadoras constituye un auténtico desafío, ya que se están produciendo de distintas formas y cada país tiene una legislación y contexto específicos. Ante tal desafío, nuestra estrategia consiste en presentar diez capítulos que destacan algunos de los casos documentados de diferentes países y sectores. Ocho de los capítulos han sido escritos por investigadores que se dedicaron a la recopilación de datos, y otros dos por colaboradores invitados, con la idea de mejorar la solidez de nuestro análisis. Los capítulos centrados en países y dedicados a Francia, la India, el Reino Unido y Noruega tratan sobre

cómo se produjo la remunicipalización en los respectivos países. Dos capítulos examinan el sector del agua en Cataluña y el sector de la energía en Alemania: ambos esbozan la importancia estratégica de reorganizar estos sectores de forma que abandonen el modelo de extracción de los recursos y afán de lucro y tiendan hacia modelos públicos democráticos y sostenibles. El capítulo sobre América Latina nos recuerda lo importantes que son los procesos de renacionalización para garantizar unos servicios equitativos y universales.

Tres capítulos analizan algunos temas transversales en las experiencias desprivatizadoras y que resultan relevantes para todos los sectores y países. El primero aborda qué significa la remunicipalización para el personal de los servicios, y cómo les pueden beneficiar las iniciativas de remunicipalización. El segundo se centra en la creciente amenaza que plantean los regímenes internacionales de comercio e inversión, y en especial los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) que contemplan los principales tratados. En este capítulo se demuestra que el ISDS representa un obstáculo para las remunicipalizaciones y que limitaría de manera significativa el margen normativo democrático que necesitan las administraciones locales y regionales para revertir el modelo privado de prestación de servicios. La tercera cuestión transversal se discute en el último capítulo, que se posiciona en contra las asociaciones público-privadas y el espejismo de asequibilidad que transmiten a las autoridades públicas, y que advierte a responsables de políticas y a la ciudadanía sobre los costes ocultos y los pasivos contingentes.

Extrayendo lecciones y desafíos de cada capítulo, la conclusión ofrece una imagen clara de cómo las ciudades y las personas están pasando a la acción para recuperar el control democrático de su vida cotidiana y los recursos locales, y alejarse del modelo que solo busca maximizar los beneficios empresariales. Presentamos estrategias para construir alianzas más fuertes y más amplias en favor de las desprivatizaciones y la recuperación de los servicios públicos. A través de esta labor colectiva, deseamos fomentar un debate más profundo sobre las características que debería

tener una futura generación de modelos de propiedad pública y las estrategias impulsadas por la ciudadanía para organizar los servicios públicos de forma más democrática y eficiente.

Consideramos que la (re)municipalización representa un marco estratégico para lograr cambios positivos en nuestras comunidades y ayudar a conectar distintos movimientos y actores: los que promueven la justicia climática y la transición energética, los que luchan contra los regímenes neoliberales de comercio e inversión y las privatizaciones, los que denuncian la elusión fiscal, los movimientos sindicales y sus aliados en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el emergente movimiento municipalista y otras alianzas entre ciudades. El creciente poder colectivo de todos estos grupos a la hora de reivindicar unos servicios públicos democráticos vuelve a situar en el horizonte a unas comunidades llenas de vida y resiliencia.



Satoko Kishimoto es coordinadora del proyecto Alternativas Públicas del Transnational Institute (TNI).



Olivier Petitjean es un escritor e investigador francés que actualmente trabaja como redactor del Observatorio de las Multinacionales, una plataforma digital dedicada a investigar las actividades de las transnacionales francesas.

Notas

- 1 Empleamos el término 'remunicipalización' para aludir al proceso por el que se recupera el control y la gestión públicos a escala local de servicios que antes estaban privatizados o se prestaban de forma privada. Somos conscientes de que no siempre es el término más adecuado, ya que, en algunos casos, los servicios recuperados siempre han estado en manos privadas o, simplemente, no existían. En estos casos, sería más apropiado hablar de 'municipalización'. El término '(re)municipalización' abarcaría ambos casos. Se encuentran también ejemplos de servicios públicos que se han desprivatizado a nivel nacional. Estas 'renacionalizaciones' o 'restatalizaciones' las tratamos por separado, con el fin de centrarnos en las acciones locales y también porque algunas formas de renacionalización (cuando entrañan, por ejemplo, centralizar el poder o rescatar de forma temporal una compañía privada que ha quebrado) no entran en el ámbito de nuestra investigación. Por último, encontramos numerosos ejemplos en los que ciudadanos y usuarios están tomando la iniciativa y recuperando servicios esenciales que antes prestaban entidades comerciales para gestionarlos sin ánimo de lucro y en pro de sus comunidades. Desde nuestra perspectiva, estos casos también podrían catalogarse como una (re)municipalización, en la medida en que comparten valores de servicio público y objetivos no comerciales. El término 'desprivatización' se usa para aludir, en general, a la (re)municipalización, la renacionalización y las iniciativas ciudadanas para recuperar los servicios, que persiguen, en última instancia, acabar con los problemas de las privatizaciones.
- 2 Kishimoto, S., Petitjean, O., Lobina, E. (eds.) (2015) *Our Public Water Future: Global Experiences with Remunicipalisation*. Amsterdam: Transnational Institute. <https://www.tni.org/en/publication/our-public-water-future>
- 3 Cinco de los casos no presentan datos con respecto a los años.
- 4 Mihályi, P. (2016) *Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami gazdaságpolitika Magyarországon, 2010–2015* (Políticas discriminatorias contra el mercado y contra la competencia en Hungría, 2010–2015). IEHAS Discussion Papers, MT-DP - 2016/7, Academia de Ciencias de Hungría.
- 5 Véase en detalle el caso de Boulder en el sitio web de Democracia Energética: Buxton, N. (2016) *La larga lucha de Boulder por la energía local*. <http://es.energy-democracy.net/?p=364>
- 6 Véase en detalle el caso de Berlín en Remunicipalisation Tracker: http://www.remunicipalisation.org/#case_Berlin
- 7 Véase en detalle el caso de Londres en el sitio web de Democracia Energética (2016): <http://es.energy-democracy.net/?p=355>

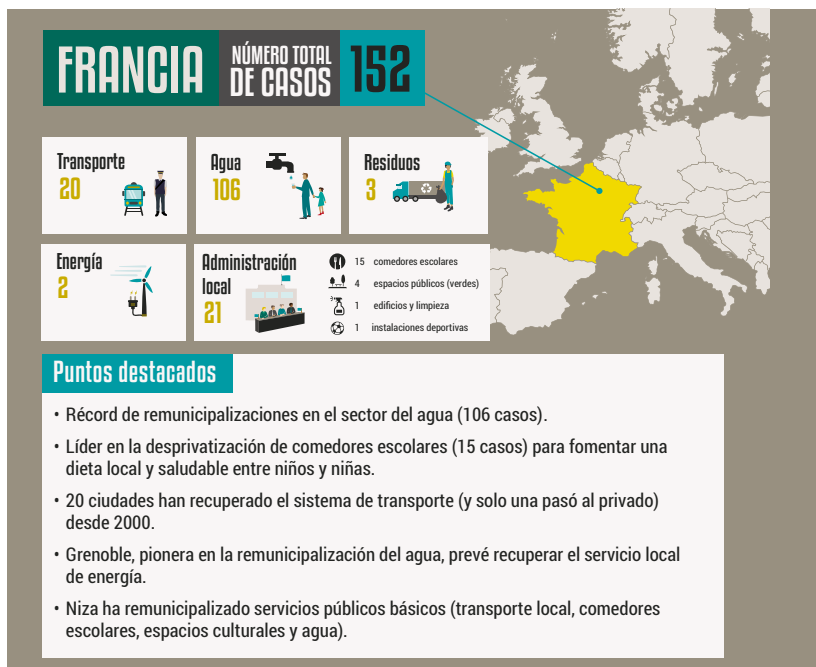
Las remunicipalizaciones en Francia: desde responder a los abusos de las grandes empresas a reinventar unos servicios públicos democráticos y sostenibles

Olivier Petitjean

Francia es conocida por su apego al sector público y la intervención del Estado en la economía, aunque también por ser un paladín de las privatizaciones. Pensemos en Veolia y Suez en los sectores del agua y la gestión de residuos; EDF, Veolia y Engie en los sectores de la energía y la calefacción; Keolis, Veolia-Transdev y RATP en el sector del transporte público; Sodexo en el sector de la restauración; Bouygues y Vinci en el sector de las infraestructuras; Atos y Steria en el sector de las subcontrataciones, etcétera. Todas estas compañías —muchas de las cuales, por paradójico que parezca, son en parte de propiedad estatal— son promotoras activas y beneficiarias directas de las privatizaciones en sus diversas formas, tanto en Francia como en otros países.

Sin embargo, las cosas podrían estar empezando a cambiar en Francia, gracias a muchos políticos locales, funcionarios y movimientos sociales. Una de las novedades más evidentes y difundidas (y más politizadas) es la tendencia actual hacia la remunicipalización del agua. La privatización del agua ha sido durante mucho tiempo el modelo imperante en Francia, por lo que se trata de una situación excepcional en el mundo. Y es que ahora, un gran número de ciudades francesas —incluidas París y otras grandes urbes como Montpellier, Niza, Rennes y Grenoble— ha decidido retomar el control público de los sistemas de agua y saneamiento. En las ciudades pequeñas y medianas se aprecia una tendencia parecida. La gran cantidad de servicios de agua en Francia hace imposible que se

pueda proporcionar una cifra exacta, pero en el último recuento hemos podido identificar 106 casos de remunicipalización del agua durante los últimos 15 años, y se prevén muchos más, a medida que vayan venciendo contratos en los próximos años. Las estadísticas nacionales apuntan a que el número de casos, de hecho, podría alcanzar el doble. Por otro lado, en los últimos 20 años, ninguna ciudad francesa ha decidido pasar de un modelo público a un modelo privado de gestión del agua. Incluso en aquellas ciudades que decidieron no remunicipalizar el servicio, los proveedores privados se vieron a menudo obligados a aceptar un recorte drástico en el precio del agua y nuevos compromisos en materia de calidad del agua e inversiones. En general, aparte de algunos casos infames, como el de Marsella (donde el contrato privado renovado en 2013 ya ha sido impugnado por el Tribunal de Cuentas regional debido a una serie de irregularidades financieras que favorecían a Veolia),¹ la ola remunicipalizadora parece haber puesto fin a las prácticas abusivas más flagrantes que se habían estado produciendo durante décadas en el sector del agua.



Cuadro I

El agua en Montpellier

Montpellier fue la última gran ciudad francesa que remunicipalizó los servicios de agua en 2016. Se trata de un caso especialmente significativo, ya que la zona de Montpellier, donde tienen su sede muchos de los equipos de investigación de Veolia y Suez, ha sido durante mucho tiempo un bastión del sector privado del agua. Montpellier ha creado su operador público de agua basándose en la experiencia previa de ciudades como Grenoble, París y Niza. Como resultado, el precio del agua disminuyó un 10 por ciento, y podría haber disminuido aún más si no hubiera sido por el mal estado en que se encontraban las infraestructuras, como se descubrió después de la remunicipalización. Montpellier creó un Observatorio del Agua, inspirado en el modelo de París, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana. El consejo de administración del nuevo operador público cuenta también con un 30 por ciento de representación de la sociedad civil. Este elemento de participación democrática será tanto más importante teniendo en cuenta que todavía existen discrepancias entre las autoridades locales y los movimientos ciudadanos que impulsaron el nuevo modelo con respecto a la construcción de una nueva planta que transportaría agua del río Ródano, y que los y las activistas consideran innecesaria.

Algo más que un mero cambio de titularidad

En general, el principal factor que ha promovido la remunicipalización en Francia ha sido, sin duda, la reacción frente a las prácticas abusivas de las compañías privadas, sobre todo en términos económicos (tarifas excesivas, falta de inversiones y mantenimiento, altas comisiones cobradas por las empresas matrices). Pero la tendencia también se ha visto impulsada, desde un principio, por un interés en la sostenibilidad am-

biental, la democracia y la justicia social. En otras palabras: la remunicipalización no solo responde a un asunto de simple gestión económica de los servicios públicos, sino también a la propia naturaleza y objetivos de dichos servicios. Obviamente, cada ejemplo tiene sus matices: algunos operadores públicos de agua muestran una gestión que no se diferencia mucho de las compañías privadas, mientras que otros (como París y Grenoble) son más progresistas. La remunicipalización suele implicar, como mínimo, una bajada de las tarifas (justicia social), un acento en la reducción de las fugas mediante el mantenimiento de la red y la inversión en esta (sostenibilidad) y una mayor transparencia financiera, al menos para los cargos elegidos (gestión democrática).

Pero muchos operadores públicos van más allá de estos pasos mínimos. Algunos han introducido modelos más avanzados de gestión democrática (mayor transparencia pública, representantes de la ciudadanía en los consejos de administración y organismos dirigidos por los ciudadanos y las ciudadanas, como el Observatorio del Agua en París y ahora en Montpellier). Muchos han adoptado una política que anima a los usuarios a reducir el consumo, lo cual sería impensable para los proveedores privados que, fundamentalmente, siguen vendiendo el agua como si fuera un producto más. París también ha adoptado medidas para colaborar con los agricultores en las cuencas hidrográficas y está exhortándolos a pasarse a la agricultura ecológica, con el fin de proteger la calidad del agua y reducir las necesidades de tratamiento. Los resultados de estas medidas son aún limitados, ya que para eliminar los pesticidas de las fuentes de agua deben pasar años, pero representa una inversión en la calidad del agua a largo plazo, lo que, a su vez, reduce la exigencia de recurrir a tecnologías costosas. Mientras las compañías privadas sostienen que el precio del agua subirá de forma inevitable en los próximos años debido a unas normas de calidad más estrictas, este modelo alternativo podría resultar más barato y más eficaz para conservar los recursos hídricos y los ecosistemas.

Cuadro II

En la vanguardia de la remunicipalización

Algunas ciudades francesas destacan por su compromiso con los procesos remunicipalizadores en varios sectores. Es el caso de **Grenoble**, una ciudad que fue pionera en la remunicipalización del agua a principios de la década de 2000. Ahora, la ciudad se está planteando remunicipalizar por completo el servicio eléctrico, que incluiría la calefacción de espacios públicos y el alumbrado público, en un intento por luchar contra la pobreza energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, debe adquirir las acciones de Engie en la empresa eléctrica local, lo cual también suscita cuestiones complejas en materia laboral.

Aunque siguiendo otra línea, la ciudad de **Niza**, que tiene una administración conservadora, también se ha embarcado en la remunicipalización de importantes servicios públicos, como el sistema de transporte, comedores escolares, espacios culturales y el sistema de agua y saneamiento, que llevaba 150 años subcontratado con Veolia. Estas iniciativas se pusieron en marcha con el objetivo principal de conseguir un mayor control político y financiero sobre los servicios. Y hasta cierto punto, la administración también ha demostrado que le preocupa la salud pública y el medioambiente, al introducir alimentos locales y ecológicos en los comedores escolares remunicipalizados de toda la ciudad.

Las remunicipalizaciones en otros sectores

El fenómeno remunicipizador en Francia ha cobrado un especial protagonismo en el sector del agua y el saneamiento, por el elevado número de casos, el carácter politizado del debate y la larga trayectoria de dominio del sector privado en el país. No obstante, también se han

vivido experiencias remunicipalizadoras en otros sectores —tanto en grandes como pequeñas ciudades—, en especial en servicios públicos locales como comedores escolares y sistemas de transporte y, en menor medida, servicios como los sistemas de calefacción colectiva, el estacionamiento de vehículos, y la recogida y el tratamiento de residuos. Estos sectores son algo distintos del sector del agua, ya que el predominio de los proveedores privados no está tan extendido ni tiene tanta tradición. Los contratos con el sector privado han sido, por lo general, más breves y fáciles de rescindir que en el sector del agua. Puede que aún sea demasiado pronto para hablar de una ‘tendencia remunicipalizadora’ en estos sectores, excepto quizá en el caso de los sistemas de transporte público local. Según cifras del sector, en los últimos 15-20 años, por lo menos 20 ciudades o regiones han puesto fin a los contratos de privatización y han vuelto a poner en manos públicas los sistemas de transporte, y solo una ha decidido pasar de un modelo público a otro privado. (Puede que estas cifras parezcan inferiores a las que se observan en el sector del agua, pero en realidad son muy significativas, ya que el número de servicios de transporte público es mucho menor porque estos solo se encuentran en las grandes ciudades.)

El sector de la energía plantea cuestiones específicas. Por ejemplo, a diferencia de Alemania, donde se ha producido una fuerte tendencia remunicipalizadora en el sector, el sistema energético francés es de carácter nacional y está dominado por los antiguos grandes operadores públicos nacionales: EDF (ahora propiedad del Estado en un 84 por ciento) y Engie (propiedad del Estado en solo un 33 por ciento). Ambas compañías gozan de un monopolio (aunque sus filiales siguen siendo totalmente públicas, a diferencia de las empresas matrices) sobre las redes de distribución, salvo algunas redes locales de distribución pública (*régies*) que ya funcionaban antes de que se renacionalizara el sector de la energía en 1945. Esta condición de entidad semipública no deja margen para la remunicipalización. De hecho, la ley francesa sigue prohibiendo que se creen nuevos operadores públicos de energía. En los últimos años, grupos ecologistas han intentado que se revise la ley para promover una

transición energética basada en el modelo alemán, pero hasta el momento, sus esfuerzos han sido en vano. Y tampoco han conseguido el apoyo de la opinión pública general, que sigue apegada a la idea de un servicio público de energía nacional.

La remunicipalización como un paso hacia nuevos modelos

La remunicipalización en otros sectores, por supuesto, también responde a los problemas habituales de las privatizaciones, como el descontento con el precio y la calidad del servicio, la falta de inversiones o la falta de control por parte de las autoridades locales. Como en el caso del agua, estos servicios públicos están dominados por un puñado de proveedores privados, que actúan como ‘oligopolios’.

Sin embargo, tal vez incluso más que en el sector del agua, en Francia muchos ejemplos de remunicipalización en los sectores de los residuos, los comedores escolares y el transporte se han visto principalmente impulsados por el deseo político de darle un giro a la forma en la que se prestan los servicios públicos y fomentar paradigmas más sostenibles. Así sucede muy en especial en los sectores de la gestión de residuos y la restauración escolar.

En el primer caso, una de las principales críticas que las autoridades locales dirigen contra los proveedores privados tiene que ver con la renuencia de estos a promocionar una política de reducción o prevención de los residuos. De hecho, los grandes proveedores como Suez y Veolia se han centrado en gran medida en la incineración como método preferido para gestionar los residuos. En los últimos años, incluso han intentado cambiar la imagen de la incineración de residuos para presentarla como una fuente de energía ‘renovable’, aunque no sea eficiente desde el punto de vista energético y sea una fuente de contaminación del aire. Esto significa construir grandes plantas incineradoras que son lucrativas para las compañías privadas, pero costosas para las autoridades locales y los

usuarios. Estas incineradoras, además, necesitan grandes cantidades de residuos, por lo que las compañías privadas no fomentan que estos se reduzcan. Muchas veces, el momento en que se enfrentan a la necesidad de construir una nueva incineradora o crear un nuevo vertedero es cuando las autoridades locales de toda Europa deciden, a fin de evitar estos costes, emprender políticas de reducción activa de los residuos o incluso de ‘residuos cero’.

En el sector de la restauración escolar, la remunicipalización forma parte de una tendencia más general hacia un suministro más local y sostenible de alimentos, en contraposición a los sistemas industriales y estandarizados de abastecimiento que durante mucho tiempo han gestionado compañías como Sodexo o Elior. La remunicipalización ayuda a las autoridades locales a controlar y limitar las diferencias de precios que suelen ir asociadas con la adopción de unos alimentos locales y de mejor calidad. Los proveedores privados se ven cada vez más obligados a adaptarse a estos requisitos. Y obviamente, las ciudades que siempre han mantenido una gestión pública de los comedores escolares, como Grenoble y París, también están liderando la tendencia que persigue suministrar un 100 por ciento de alimentos ecológicos. Esta tendencia remunicipalizadora puede observarse tanto en las grandes ciudades (Niza, Rouen, Amiens, Avignon, Valence) como en los pueblos pequeños. La remunicipalización también permite promover el cambio a través de una estrecha colaboración con la comunidad agrícola de la zona, de forma que la remunicipalización de los comedores escolares se puede convertir en un proyecto más amplio de desarrollo económico local y sostenible. En la pequeña ciudad de Mouans-Sartoux, en el sur de Francia, el municipio incluso adquirió unos terrenos de cultivo y empleó a un agricultor para abastecer a los comedores escolares con un 100 por ciento de alimentos ecológicos.

En el sector del transporte público, uno de los factores que ha impulsado la remunicipalización es la necesidad de mejorar la sintonía entre los servicios de transporte y las políticas de desarrollo urbano, con el fin

de fomentar el uso del transporte público o los medios de transporte no contaminantes en lugar de los automóviles.

Por último, en lo que se refiere a los contratos del sector energético que trascienden el alcance de las compañías nacionales, como los sistemas de calefacción colectiva en contextos urbanos o los servicios de alumbrado público, algunas ciudades se están planteando remunicipalizar para adoptar fuentes de energía renovables y luchar contra la pobreza energética. Por ejemplo, la ciudad de Champigny, en las afueras de París, ha concluido el contrato de calefacción con Engie con la idea de desarrollar un servicio público y asequible de calefacción basado en la energía geotérmica.

Cuadro III

Terrenos de cultivo municipales para proveer a todos los comedores escolares con alimentos ecológicos

Si un municipio desea que todos los alimentos que se sirven en sus comedores escolares sean ecológicos y si los proveedores privados no pueden satisfacer esta demanda, ¿por qué no cultivarlos? Dos pequeñas ciudades francesas, Mouans-Sartoux (en el sur de Francia, 10 500 habitantes) y Ungersheim (Alsacia, 2000 habitantes), han sido pioneras en la idea de comprar terrenos de cultivo y crear un ‘servicio agrícola municipal’ (*régie agricole municipale*) con el objetivo de cultivar alimentos ecológicos para los comedores escolares. Ambas ciudades llevan proporcionando el 100 por ciento de alimentos ecológicos y de temporada a los alumnos y alumnas de sus escuelas desde 2012 y 2009, respectivamente. La mayor parte de estos alimentos proceden de la finca municipal u otras fuentes locales. Este sistema les ha permitido pasar a un modelo de comedor totalmente ecológico a un coste muy bajo. Además, disponer de estas fincas ecológicas ofrece oportunidades educativas para estudiantes y el resto de la ciudadanía. Otras ciudades, como Barjac (en

el sur de Francia) han adoptado un enfoque parecido, pero facilitando que se creen cooperativas locales de agricultura ecológica, que mantienen una colaboración a largo plazo con el municipio y los comedores escolares de este.

Por qué el debate sobre la gestión pública frente a la privada mantiene su relevancia

A raíz de la tendencia remunicipalizadora en el sector del agua y de los cambios en los contratos de privatización, muchos expertos —y, de hecho, las propias compañías privadas— han sugerido que la cuestión ya está, de algún modo, resuelta y que la distinción entre gestión pública y privada de los servicios de agua ya no es tan relevante como en el pasado. Sin embargo, en realidad, la gestión privada del agua sigue planteando muchos problemas, incluso con los nuevos contratos y desde el punto de vista de la transparencia financiera. Aunque cortar el agua a los hogares por el impago de las facturas es ahora una acción ilegal en Francia (en 2013 se aprobó una ley con tal fin, como un reconocimiento implícito del derecho al agua), las compañías privadas siguen intentando que esa ley se derogue y, mientras tanto, se niegan a respetar la prohibición, a pesar de haber perdido varios casos judiciales interpuestos por familias a las que se les había cortado el servicio.

Suez y Veolia están buscando nuevos modelos de negocio en respuesta a la ola remunicipalizadora. Una parte de ese giro que desean dar entraña encontrar nuevos clientes, sobre todo en los sectores energético e industrial, para compensar las pérdidas de mercado en los servicios públicos de agua. También implica poner un mayor acento en las soluciones tecnológicas, incluido el tratamiento y la descontaminación del agua, y las tecnologías de gestión basadas en datos, que ellas mismas utilizan como proveedores, pero que a la vez intentan ‘vender’ a los operadores

públicos de agua. Esto podría dar lugar, en el futuro, a nuevas formas de ‘semiprivatización’ de los servicios de agua, debido a la dependencia tecnológica y a los costes que conllevan estas tecnologías en el largo plazo. Por último, las compañías de agua afirman que la tendencia actual de consolidación de los servicios de agua a gran escala (es decir, la fusión de servicios municipales en servicios intermunicipales de mayor alcance) les beneficiará a largo plazo, pero de momento hay pocas pruebas que confirmen esta idea, que sirve, esencialmente, para tranquilizar a sus accionistas. Es cierto, sin embargo, que unos servicios de agua de mayor envergadura, más alejados de la ciudadanía, podrían conducir a una pérdida de responsabilidad democrática.

El quid del debate sobre la gestión pública de los servicios colectivos y la privatización está en quién paga el precio de estos servicios y quién se beneficia con ellos, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental. Pero supone también abordar la propia naturaleza y el propósito de los servicios públicos. En Francia, la remunicipalización en el sector del agua y otros ámbitos pone de manifiesto que la gestión pública está abriendo nuevos caminos para reinventar unos servicios públicos locales, democráticos y sostenibles centrados en las necesidades básicas y la justicia social.



Olivier Petitjean es un escritor e investigador francés, que actualmente trabaja como redactor del Observatorio de las Multinacionales, una plataforma digital dedicada a investigar las actividades de las transnacionales francesas.

Notas

- 1 Véase: <https://www.mediapart.fr/journal/france/290414/marseille-des-contrats-de-leau-trop-favorables-veolia-et-suez>

Capítulo 2

¿Por qué renacionalizar? Fundamentos contemporáneos en América Latina

M'Lisa Colbert

Tres décadas después de que las medidas de liberalización, privatización y austeridad desarraigaran todo lo público y redujeran de forma drástica el acceso popular al Estado, los Gobiernos latinoamericanos están renacionalizando sus servicios esenciales. Según un estudio a escala regional que realizamos sobre las renacionalizaciones que se produjeron entre 2000 y 2016 en sectores de servicios esenciales como la gestión de residuos, el agua, las telecomunicaciones, las finanzas y la energía, los procesos de transición no habían sido fáciles, y muchos casos enfrentaban desafíos al parecer insalvables. Por lo general, las iniciativas se habían tomado a raíz del descontento que habían generado las privatizaciones impulsadas por el Consenso de Washington en la década de 1990.

En este capítulo, presentamos algunas observaciones sobre los motivos que explican el afán de renacionalizar y democratizar los servicios esenciales en América Latina. Comienza con un breve resumen del contexto de estas renacionalizaciones y, después, pasa a ofrecer un análisis de los motivos declarados de las desprivatizaciones en la región. En sus páginas se destacan también casos ejemplares de renacionalización que han ido acompañados de mecanismos democratizadores y de un compromiso renovado con el espíritu del servicio público. Los casos se exponen en detalle, haciendo hincapié en los beneficios concretos que han reportado estas transiciones.

En sentido estricto, las desprivatizaciones —y las posteriores renacionalizaciones— que hemos presenciado en la región no son casos de ‘remunicipalización’, ya que las concesiones para estos servicios han sido

otorgadas por Gobiernos nacionales (y no por autoridades municipales), que en la mayoría de los casos son también las nuevas autoridades gestoras. Sin embargo, las lecciones que podemos extraer de estos casos son de importancia para el tema de que se ocupa este libro, aunque funcionen a una escala distinta, porque representan un compromiso renovado con la vocación pública en un mundo cada vez más privatizado.

¿Por qué desprivatizar?

En América Latina, los servicios esenciales como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y la gestión de residuos se privatizaron en la década de 1990, en el marco de los programas de ajuste estructural que recomendaban instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se esperaba que, de este modo, se pudiera estabilizar la economía tras la crisis de la deuda de los años ochenta. No obstante, las privatizaciones no lograron el éxito previsto. Sí se logró una estabilidad económica pasajera porque se incrementaron los ingresos con la venta de empresas públicas,¹ pero en su mayor parte, el crecimiento benefició principalmente a compañías multinacionales y grandes grupos económicos. Nunca superó los niveles de crecimiento observados con las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de la década de 1980, y debido a las bajas tasas de impuestos y cánones, los pagos de intereses sobre la deuda y la mentalidad de maximización de los beneficios, una gran parte de los ingresos y beneficios de todo crecimiento que se experimentó acabó volviendo a los países desarrollados.² Según el consenso imperante, cuanto mayor fuera la presencia del mercado, menos influirían la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia del Estado en la estabilidad económica. Incluso en los casos en que las empresas no se privatizaron por completo, las empresas ‘públicas’ empezaron a aplicar medidas corporativas y de ‘nueva gestión pública’, centradas en maximizar la eficiencia y los beneficios, en contraposición a valores de interés público como la equidad y la asequibilidad. Al principio, estas medidas solucionaron algunos de los problemas derivados de la corrupción, pero también socavaron los mecanismos de control

y rendición de cuentas.³ Los datos del estudio ponen de relieve que, en la mayoría de los casos, crearon espacios para nuevos tipos de corrupción, por los que las compañías privadas empezaron a eludir normativas, evitar la transparencia, descuidar sus obligaciones contractuales e ignorar las cuotas de reinversión porque se hizo más difícil para el Gobierno y la sociedad supervisar las acciones del sector privado.

Apenas una década después de que se iniciara la transición, el desarrollo desigual estaba desbocado, los beneficios se habían convertido en algo más importante que la gente, y la propiedad y el control de los servicios esenciales se habían apartado de las personas que los usaban. Esto generó un profundo descontento, y en la región prosperó la idea de que las privatizaciones conllevaban impactos negativos. En 2001, el 60 por ciento de las personas que respondieron a una encuesta regional del Latinobarómetro señalaron que estaban ‘en desacuerdo’ o ‘muy en desacuerdo’ con el uso de las privatizaciones como un instrumento para mejorar el bienestar social.⁴ La gente era consciente del hecho de que las privatizaciones no solo limitaban el acceso a los servicios y los encarecía, sino que también iban acompañadas de un control cada vez menos popular sobre la toma de decisiones. Debido a las privatizaciones, la cultura y la práctica de la formulación de políticas en el seno de las instituciones estatales habían pasado a estar determinadas por la búsqueda de la liberalización económica, lo cual redujo de forma drástica el acceso popular al Estado y reforzó la opinión de que la perspectiva de las personas carecía de valor en estos procesos.⁵ En torno al inicio del nuevo milenio, comenzamos a ver un declive de los partidos políticos de la derecha, sometidos a una presión inmensa de los movimientos sociales, que exigían que se redistribuyeran desde abajo los bienes sociales y de la ciudadanía.⁶ Desde los piqueteros en Argentina, al Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, pasando por los cocaleros en Bolivia, los zapatistas en México y el Consejo de Movimientos Sociales en Chile, estos nuevos movimientos sociales fueron clave a la hora de determinar la sucesión de Gobiernos de izquierda que fueron elegidos en la región a partir de 2000.⁷ Entre 2010 y 2015, la mitad de los países de América Latina —entre los cuales Argentina, Bolivia, Brasil,

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela— eligieron y auparon al poder a presidentes de izquierdas. Muchos de ellos fueron elegidos porque habían hecho campaña expresa para solventar problemas sociales asociados con los fallos de las privatizaciones, y la renacionalización era uno de los medios para lograr este fin.⁸

Motivos declarados

En nuestro estudio, examinamos los motivos declarados en 33 casos de renacionalización en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Belice, Uruguay, Nicaragua y República Dominicana. Los datos recopilados en cada uno de los casos procedían de un estudio documental de decretos ejecutivos, comunicaciones públicas, discursos ejecutivos, noticias de prensa y una revisión de la literatura sobre experiencias de renacionalización. Nos centramos en los objetivos y valores de los casos que priorizaban la transparencia, la equidad, el acceso universal, la asequibilidad, la sostenibilidad ambiental, unos servicios de calidad, la participación pública y/o el salario digno con un empleo seguro. El estudio fue minucioso y se realizó de manera sistemática, pero debido a limitaciones de tiempo y recursos, no incluye todos los casos de renacionalización de la región, por lo que las conclusiones que se presentan aquí sobre los motivos más importantes para renacionalizar en América Latina deben leerse teniendo en cuenta este factor. Tras analizar los datos, en los 33 casos que estudiamos surgieron 10 motivos distintos. Estos motivos se contrastaron con los 33 casos para ver con qué frecuencia aparecían. La frecuencia de cada uno de los motivos aparece en la Tabla 1, donde se enumeran, por orden descendente, de los más frecuentes a los menos.

Tabla 1. Frecuencia de los motivos declarados

Motivos declarados	Frecuencia
Mala gestión del sector privado (corrupción, sobornos, incumplimiento del contrato, dividendos excesivos, beneficios por encima de los límites contractuales, etc.)	60 %
Recuperación de la titularidad y el control públicos	54 %
Redistribución entre ricos y pobres	33 %
Priorización e incremento de las reinversiones	30 %
Aumento de las rentas generales del Estado	15 %
Rebaja del coste de servicios básicos	15 %
Incremento del acceso a servicios	15 %
Programas/Prestaciones sociales	12 %
Puesta en práctica de valores socialistas	12 %
Centralización	12 %

La Tabla 1 destaca que el motivo manifestado de forma más habitual en estos casos fue la mala gestión del sector privado. En 20 de los 33 casos (el 60 por ciento de los casos analizados), este se expresó como un asunto prioritario en la decisión de renacionalizar. Por ejemplo, en Argentina, el Gobierno de Néstor Kirchner renacionalizó en 2004 la empresa francesa de telecomunicaciones Thales Spectrum SA, alegando una falta de inversiones, el incumplimiento del pago de los cánones acordados y el registro de beneficios por encima de los límites contractuales. En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales renacionalizó en 2010 la empresa francesa Electricidad Corani y la rebautizó con el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, por causas como los elevados niveles de insolvencia financiera, las preocupaciones ambientales y porque la mala gestión de las operaciones estaban alterando la capacidad efectiva y amenazando la seguridad energética del país. En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa renacionalizó en 2014 el sistema de fondos privados de pensiones debido a las desigualdades en su cobertura, un rendimiento volátil y quejas de que no se estaban efectuando los pagos de las prestaciones por desempleo. En

Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez renacionalizó en 2007 la empresa de telefonía CANTV, participada mayoritariamente por capital estadounidense, por el incumplimiento de las obligaciones en materia de inversión, unos dividendos excesivos y la mala administración de la empresa. Estos ejemplos ponen de relieve que las asociaciones con el sector privado y la liberalización no son buenas soluciones para financiar con eficacia las infraestructuras de servicios públicos. Además, este planteamiento no se corresponde con el deseo de muchos de estos países de redefinir la sociedad a través de las políticas económicas y políticas. Así lo ilustra el hecho de que, en muchos de los casos analizados, se alegaron motivos que persiguen priorizar a las personas, como la distribución equitativa, la reinversión en los servicios, el acceso universal y la reducción del coste de los servicios. En el apartado siguiente se enfatiza que varios de estos casos —aunque con sus limitaciones— demuestran un compromiso ejemplar con la democratización y los valores públicos que ejemplifican los beneficios de la titularidad pública de los servicios esenciales.

Principales renacionalizaciones en América Latina

Bolivia, sector del gas y el petróleo, 2006

En 2006, sometido a la presión popular y de varios grupos activistas, el presidente Morales declaró que cumpliría su promesa electoral de nacionalizar el sector de los hidrocarburos del país. El Gobierno de Morales redactó, por decreto ejecutivo, un anexo a la Ley de Hidrocarburos, que aludía al carácter inconstitucional de los contratos privados que se habían firmado en la década de 1990 porque despojaban al pueblo de su derecho constitucional a poseer y controlar los depósitos minerales del país, tanto bajo tierra como encima de esta. Los contratos privados habían arrebatado al Estado el derecho a comercializar y vender las reservas una vez que salían a la superficie. El decreto ejecutivo puso fin a lo que los grupos de la sociedad civil entendían que constituía una subversión injusta de los derechos constitucionales de los bolivianos y las bolivianas por

parte de actores privados. Posteriormente, Morales expropió todos los yacimientos de gas y petróleo del país y las multinacionales se vieron obligadas a firmar nuevos contratos en los que recibieron participaciones minoritarias, mientras que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) obtenía una participación mayoritaria y todos los derechos de propiedad. Esta nueva configuración suponía, en la práctica, que las compañías privadas se hicieran con el 18 por ciento de las ganancias en el sector y, el Estado, con el 82 por ciento, y no al revés.⁹ Esta nacionalización fue de especial importancia porque se ha convertido en el eje central de la economía boliviana y simboliza el regreso de Bolivia a una economía de productos básicos. Los ingresos generados con el sector de los hidrocarburos que se ingresan en el erario público son un pilar clave de las iniciativas del Gobierno para fomentar la distribución de la riqueza y la inclusión social. Por otra parte, la recuperación del control y el aumento de los ingresos del sector de los hidrocarburos también facilitó que, más tarde, se materializaran otras nacionalizaciones en los sectores de la electricidad, las pensiones y las telecomunicaciones.¹⁰

Beneficios. El décimo aniversario de la nacionalización se celebró en 2016, cuando Morales anunció que, tras la decisión adoptada en 2006, se habían generado ingresos por un valor de 31 500 millones de dólares, una cifra muy superior a la década anterior, cuando los ingresos ascendían apenas a los 3500 millones de dólares. La nacionalización triplicó el producto interior bruto de Bolivia entre 2005 y 2015, y en los últimos nueve años aumentó la inversión en gasto público en más de un 750 por ciento.¹¹ Además, en comparación con otras renacionalizaciones en el sector de los hidrocarburos, la experiencia boliviana parece mostrar un mayor compromiso con los valores públicos. En Venezuela, parece que el proceso se ve afectado por más problemas de transparencia y corrupción en las asignaciones de contratos, y no se está cumpliendo el requisito legislativo de que la propiedad estatal sea del 50 por ciento. En

Bolivia, en cambio, el Gobierno celebró un referendo en 2004 para evaluar la opinión pública sobre la nacionalización, la propiedad estatal y la ley sobre privatizaciones de 1996. Los resultados del referendo revelaron que el 92 por ciento de los votantes estaba a favor de nacionalizar el sector nacional de los hidrocarburos, y que el 87 por ciento apoyaba la derogación de la ley sobre privatizaciones de 1996.¹²

Hay también otros beneficios, como la posibilidad de priorizar las inversiones locales y nacionales por encima de inversiones de las compañías internacionales. Los compromisos de carácter local, por los que, por ejemplo, se debe contratar a trabajadores y trabajadoras de empresas locales del sector manufacturero, como soldadores, administradores e ingenieros, ahora forman parte de las negociaciones para los contratos de la industria del gas. También se mejoraron los procesos de consulta con las comunidades locales. Morales promulgó el Decreto Supremo N. 3058, junto con la Ley 3058, que establece la obligatoriedad de las consultas ambientales con las comunidades locales y las poblaciones indígenas que viven cerca de donde se desarrollan los proyectos. Aunque este representa un logro en el ámbito de la participación, el alcance y el impacto de esta se sigue considerando como algo que se debe mejorar, ya que la ley deja claro que, en los casos en que no se pueda llegar a un consenso, las decisiones se tomarán en pro del interés nacional.¹³ Por último, la nacionalización ha ayudado a Bolivia a lograr una mayor independencia internacional. Los ingresos del sector de los hidrocarburos se redirigen al Banco Central, que ha estabilizado unos niveles adecuados de moneda estadounidense para cubrir los gastos de importación del país (reservas internacionales). Esto impide que la administración sufra crisis en la balanza de pagos y elimina la necesidad de recurrir a los préstamos del FMI, de los cuales Bolivia dependía en gran medida antes de que decidiera nacionalizar el sector, en 2006.

Bolivia, fondo nacional de pensiones, 2006

Antes de que se decidiera nacionalizar el sistema, el fondo de pensiones de Bolivia estaba organizado a través de un modelo privado y con aportaciones individuales, en que el sector privado —articulado en un consorcio de compañías españolas y suizas— controlaba las decisiones de inversión. En 2010, Bolivia anunció que sustituiría el sistema privado por un sistema público de reparto y crearía una prestación de jubilación universal y no contributiva para los bolivianos y las bolivianas de más de 60 años, llamada Renta Dignidad. Más adelante, la prestación amplió los criterios para que se pudieran acoger a ella más ciudadanos y ciudadanas e incrementó la suma anual en un 25 por ciento, de 1800 bolivianos (235 dólares estadounidenses) a 2400 bolivianos (314 dólares). Además, la prestación tiene en cuenta los distintos pagos, de forma que quienes ya contribuyen a una jubilación o la reciben de otra fuente, solo reciben el 75 por ciento de la Renta Dignidad que recibe el resto de personas beneficiarias.¹⁴ En este caso, los principales motivos que impulsaron la iniciativa fueron rebajar la edad mínima de jubilación, mejorar la distribución de las prestaciones y recuperar el control de la gestión de las inversiones. La reforma invierte los instrumentos que se activaron en el marco del programa de ajuste estructural de 1997, al eliminar la administración privada de los fondos y sustituirla por una sola agencia, que es propiedad del Gobierno y se encarga de gestionar los activos. Desde que el Gobierno de Morales empezó a controlar la gestión del fondo de pensiones, el financiamiento procede de un porcentaje fijo del impuesto directo especial sobre el sector de los hidrocarburos, recién nacionalizado, de aportaciones de todos los niveles de gobierno, y de dividendos de otras empresas públicas recientemente nacionalizadas, como en el sector de la electricidad y las telecomunicaciones.¹⁵

Beneficios. El fondo de pensiones reformado ha recibido excelentes evaluaciones de organizaciones nacionales e internacionales. En general, ha mejorado de manera significativa la calidad de vida de la población de más edad en Bolivia y ha ayudado a reducir las tasas de pobreza extrema en el país. Por ejemplo, el Gobierno de Morales redujo a 60 la edad para poder recibir la prestación y rebajó la edad mínima de jubilación de los 65 a los 58 años, de forma que la edad para jubilarse fuera más realista, teniendo en cuenta que el promedio de esperanza de vida es de 68 años para los hombres y de 73 para las mujeres. La suma de la prestación universal es de unos 340 dólares anuales para quienes no reciben ya una prestación de la Seguridad Social, y del 75 por ciento de esa cantidad para quienes sí la reciben; los pagos pueden ser mensuales o, según una nueva opción que ofrece el sistema público, se pueden acumular hasta 12 meses y cobrarse en un único pago anual. Se trata de un incremento notable de las pensiones, que representa una distribución más equitativa de las prestaciones y beneficia a varios grupos sociales. De las 800 000 personas que cobraron la prestación en 2010, el 83 por ciento no recibía ninguna otra pensión del régimen de la Seguridad Social, porque había trabajado en el sector informal o vivido largos períodos de desempleo. Desde que se puso en marcha la iniciativa, en 2008, se han redirigido más de 500 millones de dólares de márgenes de beneficio del sector privado al pueblo boliviano.¹⁶

Argentina, servicio postal, 2003

El servicio postal de Argentina, Correo Argentino (CORASA), fue el primer servicio público que se nacionalizó durante el Gobierno del presidente Néstor Kirchner. Antes de la nacionalización, Correo Argentino había sido privatizado en 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem, por medio de un decreto ejecutivo. El Grupo Macri, uno de los grupos económicos más importantes de Argentina, se

hizo con el control del sector al obtener una concesión de 30 años como proveedor. Las condiciones del contrato estipulaban que el Grupo Macri abonaría al Estado un canon anual por la gestión del servicio y que mantendría a toda la plantilla, salvo si revisaba los contratos vigentes durante los primeros 180 días de la concesión. A cambio, el Estado le seguiría garantizando una subvención regional para ayudarle a asumir las pérdidas por operar en zonas remotas del país y seguir prestando el servicio a toda la Argentina.¹⁷ Apenas dos años después de que se firmara la concesión, en 1999, el Grupo Macri dejó de pagar al Gobierno los cánones que le correspondían, la calidad del servicio seguía siendo baja pese a que se habían previsto mejoras, las rutas rurales estaban mal atendidas y los precios habían aumentado varias veces. En 2003, por recomendación de la Auditoría General del Estado, el Gobierno de Kirchner rescindió la concesión al Grupo Macri y renacionalizó el servicio postal.

Beneficios. Aunque el servicio postal se vio aquejado por graves pérdidas debido a la privatización, el Gobierno de Kirchner logró mejorar la prestación del servicio y volver a priorizar las rutas rurales que habían sido desatendidas por el Grupo Macri. Además, redujo el coste del servicio postal y aumentó su fiabilidad y los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin embargo, en febrero de 2017, el servicio postal volvió a ser objeto de protestas. El descontento está vinculado con un acuerdo que el presidente Mauricio Macri (hijo de Franco Macri, dueño del Grupo Macri) celebró con la compañía de su padre unos meses después de asumir el cargo en 2015. En el año 2001, mientras aún mantenía la concesión del servicio postal, el Grupo Macri había declarado la bancarrota, y debía más de 128 millones de dólares al Gobierno. Aunque durante el Gobierno de Kirchner nunca se alcanzó un acuerdo de pago, Macri revaluó la deuda en 19 millones de

dólares y permitió a la compañía que la pagara durante 15 años a una baja tasa de interés del 7 por ciento,¹⁸ lo cual suscitó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y transparencia.

Argentina, transporte aéreo, 2008

Los Gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Kirchner (2007–2015) hicieron de la unidad nacional, la inclusión y la equidad una parte importante de las políticas económicas, políticas y sociales que adoptaron durante su mandato. En 2008, el Gobierno de la presidenta Christina Kirchner decidió renacionalizar la compañía Aerolíneas Argentinas. Antes de la nacionalización, la aerolínea era propiedad de un consorcio español llamado Grupo Marsans. En el momento de nacionalizar la compañía privada, esta había acumulado un déficit de 900 millones de dólares debido a la mala gestión, la corrupción y el reparto de dividendos excesivos entre sus más altos ejecutivos. A raíz de la nacionalización, el Grupo Marsans presentó una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, esgrimiendo el trato injusto que se le había dispensado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El Grupo Marsans exigía que el Gobierno le pagara una indemnización de 1400 millones de dólares, en concepto de daños. La controversia aún no se ha resuelto y, desde entonces, el Grupo Marsans se ha declarado en bancarrota. El principal motivo para nacionalizar la empresa era el de prestar una cobertura unificada a las zonas rurales y urbanas de Argentina, garantizando unas rutas internas que el modelo privado consideraba que no resultaban rentables. El Gobierno de Kirchner deseaba recuperar el control público para compensar los años de falta de inversiones, los dividendos excesivos y la mala gestión operativa del sector privado. Además, esperaba que la reorganización de las aerolíneas aumentara el tráfico de pasajeros para reducir el coste

de los pasajes nacionales e instaurar un control estatal sobre el mercado interno.

Beneficios. Desde que se nacionalizó, la situación financiera de la compañía ha mejorado de forma espectacular. El tráfico de pasajeros del grupo alcanzó un récord de 8,5 millones en 2013, lo cual representa un incremento del 57 por ciento desde la renacionalización, en 2008. Los ingresos crecieron hasta un récord de 2000 millones de dólares en 2013, cifra que equivale a un aumento del 85 por ciento con respecto a los ingresos registrados en 2008.¹⁹ Se introdujeron nuevas rutas internas, como un vuelo de conexión entre la ciudad portuaria de Buenos Aires y Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina, y Córdoba y Salta, en el norte del país. En estos momentos, la aerolínea abarca más del 80 por ciento de todos los vuelos nacionales. Sin embargo, tras la elección del presidente Mauricio Macri, del centro-derecha, el Gobierno está interesado en volver a privatizar algunos de los sectores nacionalizados durante los Gobiernos de los Kirchner. A raíz de un estudio reciente de la administración Macri sobre una iniciativa para ‘abrir los cielos’, se está estudiando la posibilidad de reprivatizar la compañía Aerolíneas Argentinas. Aunque se están organizando protestas públicas desde diciembre de 2016 y el plan público concebido por los Kirchner ha experimentado una mejora significativa en materia de crecimiento desde la renacionalización, las nuevas políticas promovidas por el Gobierno Macri catalogan a la empresa de no rentable.²⁰

Conclusión

Como ilustran estos ejemplos, la renacionalización de los servicios públicos en América Latina no está exenta de desafíos. Aunque el descontento manifestado por la privatización y el deseo de cambio fueron la principal fuerza motora en la mayoría de estos casos, muy pocos lograron alcanzar

su anhelo expreso de abandonar por completo la participación del sector privado. Muchos Gobiernos acabaron viéndose obligados a mantener estrategias económicas impopulares para financiar los programas sociales o desplegaron programas que satisfacen solo una parte de las demandas originales. En otros casos, las deudas generadas por la privatización han influido de forma negativa en la mejora de la calidad de los servicios en la región. Y sin duda, para los países de la región cada vez es más difícil romper con el molde del sector privado y ofrecer unos servicios totalmente públicos debido a las consecuencias que enfrentan por la aplicación previa de instrumentos neoliberales. También resulta preocupante el hecho de que, en muchos casos, el cambio se esté produciendo por decreto ejecutivo, y no se esté creando consenso. Por otra parte, algunos países están volviendo a adoptar el planteamiento estatista centralizado y jerárquico típico de la década de 1950 y restableciendo unas economías centradas en los productos básicos, que garantizan estabilidad en el corto plazo, pero que conllevan el riesgo de las etapas de auge y caída en largo plazo, ya que el precio de los productos fluctúa constantemente.²¹ Por último, algunos prominentes y acaudalados grupos sociales con viejos lazos familiares continúan controlando muchas industrias importantes de la región, lo cual dificulta las acciones que pueda emprender cualquier Gobierno para democratizar los servicios y convertirlos en propiedad pública.

Sin embargo, los ejemplos también ponen de relieve que retomar el control público de los servicios no solo representa un deseo expreso en la región, sino también una alternativa viable. Los bolivianos y las bolivianas recibieron 500 millones de dólares que, de otro modo, habrían acabado en bolsillos privados. Y gracias a la renacionalización, a quienes viven en entornos rurales en Argentina se les dio la posibilidad de enviar y recibir correo de forma regular. Como muchas de las renacionalizaciones se produjeron en 2012, aún no está claro qué resultados brindarán en el largo plazo. No se sabe si la renacionalización logrará satisfacer de manera democrática la demanda social de servicios básicos, o si la magnitud de la labor, teniendo en cuenta la tremenda presión de las restricciones

neoliberales y los recientes giros electorales hacia la derecha, superará las iniciativas que abogan por el cambio. Pero pese a todas las incertidumbres, estos procesos de transición son fuente de inspiración. Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que estos casos constituyen espacios en la región donde se están concibiendo y desplegando alternativas progresistas en materia normativa, y donde están prosperando debates y políticas²² —en un mundo cada vez más apolítico—,²³ que socavan la hegemonía del Consenso de Washington. Y eso no es poca cosa.



M'Lisa Colbert está finalizando un máster en Estudios de Desarrollo Global en la Universidad de Queen, Kingston, Canadá. El tema de su tesis de máster se centra en la transición a las energías renovables en América Central, y en las relaciones de poder que rodean a las iniciativas para democratizar la energía y mejorar el acceso a esta. También colabora como asistente de investigación en el Proyecto Servicios Municipales (MSP).

Notas

- 1 Gwynne, R. N. y Kay, C. (2000) Views from the periphery: Futures of neoliberalism in Latin America. *Third World Quarterly*, 21(1): 141–156.
- 2 Cannon, B. (2009) *Hugo Chávez and the Bolivarian revolution: Populism and democracy in a globalised age*. Londres: Manchester University Press.
- 3 Chavez, D. (2012) 16 Alternatives in the Electricity Sector in Latin America. *Alternatives*, 453.
- 4 Latinobarómetro Corp. (sin fecha) The privatization of state companies has been beneficial to the country. Base de datos del Latinobarómetro. <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (consultado el 10 de febrero de 2017).
- 5 Grugel, J. y Riggirizzi, P. (2012) Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and reclaiming the state after crisis. *Development and Change*, 43(1): 1–21.
- 6 Dominguez, F., Lievesley, G. y Ludlam, S. (2011) *Right wing politics in the new Latin America: Reaction and Revolt*. Londres: Zed Books.
- 7 Prevost, G., Oliva Campos, C. y Vanden, H. (eds.) (2012) *Social movements and leftist governments in Latin America: Confrontation or co-optation*. Londres: Zed Books.
- 8 Berrios, R., Marak, A. y Morgenstern, S. (2011) Explaining hydrocarbon nationalization in Latin America: Economics and political ideology. *Review of International Political Economy*, 18(5): 673–97.
- 9 Kaup, B. Z. (2013) *Market justice: Political economic struggle in Bolivia*. Nueva York: Cambridge University Press.
- 10 Flores-Macías, G. A. (2010) Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments' economic policies in Latin America. *Comparative Politics*, 42 (4): 413–433.
- 11 *TeleSur* (2014) Ten Important Accomplishments Under Evo Morales. <https://www.telesurtv.net/english/analysis/Ten-Important-Accomplishments-Under-Evo-Morales-20141009-0069.html> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 12 Kaup, B. Z. (2013) *Market justice: Political economic struggle in Bolivia*. Nueva York: Cambridge University Press.
- 13 Villegas, P. (2010) Principales fallas y limitaciones del proceso de consulta previa en Bolivia. *Plataforma Energética*, 3 de noviembre. <http://plataformaenergetica.org/content/2375>
- 14 Müller, K. (2009) Contested universalism: From Bonosol to Renta Dignidad in Bolivia. *International Journal of Social Welfare* 18(2): 163–72.
- 15 *Open Democracy* (2014) Lessons from Bolivia: Re-Nationalising the hydrocarbon industry. 19 de noviembre. <http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/stephan-lefebvre-jeanette-bonifaz/lessons-from-bolivia-renationalising-hydrocarbon-indust> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 16 PNUD (sin fecha) The Dignity Pension (Renta Dignidad): A universal old-age pension scheme – Bolivia. En Volume 18: *Sharing Innovative Experiences*. <http://165.65.7.68/GSSDAcademy/SIE/SIEV1CH2/SIEV1CH2P2.aspx#> (consultado el 26 de febrero de 2017).
- 17 Baer, W. y Montes-Rojas, G. (2008) From privatization to re-nationalization: What went wrong with privatizations in Argentina? *Oxford Development Studies*, 36(3): 323–37.
- 18 *Reuters* (2017) Argentine Prosecutor Asks to Investigate President over Postal Service Deal. 14 de febrero. <http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN15T2OY?feedType=RSS&feed-Name=worldNews&pageNumber=2&virtualBrandChannel=0> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 19 *Foco Económico* (2012) Aerolíneas Argentinas post-nacionalización: ¿mejoró la gestión? 12 de diciembre. <http://focoeconomico.org/2012/12/12/aerolineas-argentinas-post-nacionalizacion-mejoro-la-gestion/> (consultado el 27 de febrero de 2017).

- 20 Agencia EFE (2016) Argentine airline workers protest government's push for open skies. 27 de diciembre. <http://www.efe.com/efe/english/business/argentine-airline-workers-protest-government-s-push-for-open-skies/50000265-3135009> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 21 Flores-Macías, G. A. (2010) Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments' economic policies in Latin America. *Comparative Politics*, 42 (4): 413-433.
- 22 Roberts, K. (2009) Beyond neoliberalism: Popular responses to social change in Latin America. In *Beyond Neoliberalism in Latin America?* (1-13). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- 23 Wilson, J. y Swyngedouw, E. (eds.) (2014) *The post-political and its discontents: Spaces of depoliticisation, spectres of radical politics*. Edimburgo: Edinburgh University Press.

Capítulo 3

Las 835 razones para no firmar acuerdos de comercio e inversión

Lavinia Steinfort

La decisión democrática de regular un servicio esencial privatizado o de volverlo a situar bajo control público podría desencadenar una demanda de arbitraje internacional si un país está sujeto a un tratado internacional de inversión. Esto es lo que le sucedió a la capital de Lituania, Vilnius, y a otros municipios después de que decidieran remunicipalizar la calefacción urbana y no renovar el contrato de la concesionaria. A consecuencia de ello, la multinacional francesa de la energía Veolia llevó ante los tribunales al Gobierno lituano.

En 2016, la multinacional recurrió al tratado bilateral de inversión (TBI) entre Francia y Lituania para iniciar un proceso de arbitraje internacional, presentando una demanda para la solución de controversias inversor-Estado (ISDS) por una supuesta “campaña de acoso” y la “expropiación” de sus inversiones.¹ La demanda ISDS llegó en parte como respuesta a la decisión de la ciudad de Vilnius de no prorrogar el contrato de 15 años con Vilniaus Energija, una filial de Veolia, cuyo contrato vencía en 2017. Además, según Veolia, la filial se vio obligada a cerrar una de sus centrales eléctricas cuando el Gobierno lituano anuló los subsidios para el uso de gas.² Por otro lado, tras años de investigación, el ente regulador de la energía de Lituania concluyó que Vilniaus Energija había estado manipulando el precio del combustible destinado a la calefacción, con lo que había incrementado de forma considerable el coste de la energía pagado por los hogares y conseguido unas ganancias extraordinarias ilícitas de 24,3 millones de euros entre 2012 y 2014.³ A raíz de la creciente presión popular, el presunto fraude y la falta de transparencia financiera,⁴ la ciudad de Vilnius se negó a renovar el contrato con Vilniaus Energija, tras lo que Veolia exigió una indemnización de 100 millones de euros en concepto de

daños.⁵ La demanda ISDS podría haber obligado a Vilnius a olvidarse de su decisión y a mantener el contrato. Sin embargo, en 2017, las autoridades emprendieron las medidas necesarias para devolver a manos públicas el sistema de calefacción urbana.

En este capítulo, ponemos de relieve que las demandas ISDS no solo afectan al sector energético, sino también a los sectores del agua, el transporte y las telecomunicaciones. En general, el mecanismo ISDS hace que la remunicipalización acarree un coste excesivo, de forma que sitúa las ganancias de los inversores extranjeros por encima de las responsabilidades del Gobierno.

La protección de las inversiones menoscaba el control público de servicios esenciales

Desde el año 2000, al menos 835 ciudades, regiones y provincias se han enfrentado al precio social y económico de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas. Y su respuesta consistió en volver a situar los servicios privatizados bajo control público. La ola remunicipalizada coincide con la creciente resistencia popular contra los acuerdos de comercio e inversión y demuestra que las ciudades pueden emprender acciones concretas para recuperar un control democrático en el ámbito local. Cada uno de los 835 casos de remunicipalización ofrece un motivo más para que los países no ratifiquen el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá, o cualquier acuerdo parecido de comercio e inversión. En la medida en que estos acuerdos internacionales persiguen proteger los beneficios de los inversores privados extranjeros, limitan la capacidad de los Gobiernos para decidir cómo proporcionar, organizar y regular los servicios públicos.

Las alianzas entre ciudades y ciudadanía pueden contribuir a construir un régimen comercial totalmente distinto, que sea justo desde el punto de vista social y ambiental. Este régimen facilitaría que los servicios esenciales fueran de propiedad pública y que dependieran del control de las autoridades locales, la ciudadanía y el personal.



Manifestación contra el TTIP y el CETA, y a favor de un comercio mundial justo, Berlín
Fotografía: Naturfreunde Deutschlands, Flickr

Este capítulo pone el acento en un riesgo añadido de las privatizaciones que, por lo general, se ha pasado por alto. Cuando un gobierno local, regional o nacional se da cuenta de que la privatización no está cumpliendo con las promesas de bajar los precios, realizar las inversiones necesarias o mejorar la eficiencia, puede que decida remunicipalizar el servicio de agua, energía, transporte o telecomunicaciones. Pero al hacerlo, corre el riesgo de ser demandado por inversores extranjeros, que se amparan en el mecanismo ISDS integrado en los tratados internacionales de inversión y por el que pueden exigir millones —o incluso miles de millones— de dólares. El ISDS, que forma parte de la mayoría de los 3400 acuerdos internacionales de inversión vigentes en todo el mundo, otorga unos privilegios desproporcionados a los inversores extranjeros a expensas de unos servicios públicos universales y de calidad.

En los últimos años ha surgido una nueva generación de acuerdos de comercio e inversión. Entre ellos, se encontrarían el CETA, que está en proceso de aprobación en los parlamentos nacionales de los países de la UE, y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), cuyas negociaciones, al parecer, están suspendidas por el momento. Estos acuerdos pueden restringir gravemente el espacio de maniobra para desplegar políticas públicas progresistas, como la remunicipalización. Son acuerdos de cumplimiento obligado que se negocian en secreto, y que promueven más liberalización y menos regulación. El ISDS constituye la piedra angular de estos acuerdos, tanto vigentes como previstos, e incluso la mera amenaza de que se recurrirá a él puede desincentivar que se desprivaticen los servicios públicos.

Por este motivo, más de tres millones de europeos y europeas firmaron una petición para detener el TTIP y el CETA, y para rechazar los mecanismos ISDS. Más de 2300 ciudades, pueblos y regiones de toda Europa se han declarado zonas libres de TTIP y CETA. En 2015 y 2016, cientos de miles de personas se manifestaron en Alemania en contra de los tratados comerciales. En enero de 2017, una campaña impulsada en Austria tardó solo una semana en reunir medio millón de firmas contra el TTIP y el CETA. Cada vez son más las ciudades y las personas que se movilizan porque entienden que la protección de las inversiones va en contra de la democracia, el interés público y el desarrollo sostenible y local.

Cuadro I

Argentina: cuando el país está en crisis, los inversores hacen huelga

Argentina es, con diferencia, el país más demandado en el marco del ISDS, ya que ha sido objeto de un total de 59 casos. Después de más de una década durante la que se privatizaron la mayoría de los

servicios públicos, en 2001–2002 Argentina atravesó una profunda crisis económica. Algunas de las medidas que el Gobierno adoptó para hacer frente a la crisis entrañaron congelar las tarifas del agua para que fueran asequibles y, en algunos casos, desprivatizar el sector. La rescisión de los contratos y la desprivatización de los servicios de agua respondían a la falta de inversiones, las tarifas excesivas y la mala calidad del servicio.⁶ Las medidas para controlar o desprivatizar el sector del agua dieron lugar a nueve casos ISDS contra Argentina entre 2001 y 2007.

Por poner un ejemplo, en 2005, después de una fuerte campaña ciudadana, la provincia de Santa Fe remunicipalizó los servicios de agua. La ciudadanía consideraba que la mala calidad del servicio, el continuo incremento de las tarifas y los cortes del servicio eran inaceptables. Antes de que Santa Fe decidiera remunicipalizar el servicio, la francesa Suez y la española Agbar, principales accionistas de la compañía privada Aguas Provinciales de Santa Fe, presentaron una demanda ISDS.⁷

Suez y Agbar exigían al Gobierno argentino 243,8 millones de dólares por denegar un incremento de las tarifas durante la crisis del peso, en 2001–2002, ya que ello redujo sus ganancias de la concesión de Santa Fe. Ambas compañías acusaban a Argentina de expropiación y de contravenir la denominada cláusula de trato justo y equitativo de los TBI firmados por el país con Francia y el Estado español. En 2015, un panel arbitral falló a favor de los inversores extranjeros. Sin embargo, como el panel no está obligado a revelar la suma del laudo, no sabemos cuánto tuvieron que pagar los contribuyentes argentinos a los inversores franceses y españoles.

El auge de la protección de las inversiones

El ISDS es una disposición que persigue proteger las inversiones y que no tiene nada nuevo. El ISDS no solo está incorporado en el TTIP y el CETA, sino que también ocupa un lugar destacado en la mayoría de los 2600 acuerdos internacionales de inversión actualmente en vigor (de los 3400 existentes).⁸ La mayoría de estos acuerdos son TBI. El ISDS entró en escena en el año 1959. Durante la última década, las compañías transnacionales lo han utilizado con frecuencia para demandar a los Gobiernos de países con bajos ingresos ante unos tribunales internacionales muy herméticos. Lo que no se conoce tanto es que el ISDS también está integrado en grandes acuerdos comerciales regionales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés), de la que forman parte 16 países del sur y el sudeste de Asia, y del Tratado sobre la Carta de la Energía, en que participan 56 países de todo el mundo. Además, la Comisión Europea está negociando tratados de protección de las inversiones con Myanmar, Vietnam, Filipinas y otra docena de países de ingresos medianos y bajos.⁹ Según las estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), actualmente existen 767 casos conocidos de ISDS, de los cuales ya han concluido 495.¹⁰

Por qué el ISDS va en contra del interés público

Por lo general, las inversiones —sean extranjeras o no— están bien protegidas por los sistemas jurídicos nacionales. Cuando un gobierno local o nacional rescinde un contrato privado, no es extraño que se aplique el derecho mercantil interno, de manera que las autoridades deben desembolsar cierta cantidad en concepto de cancelación prematura o de indemnización a las compañías privadas encargadas del servicio. Entonces, ¿por qué los inversores extranjeros se merecen derechos extraordinarios, que se pueden hacer cumplir a través de tribunales internacionales que carecen de transparencia y que son parciales?

Los tribunales ISDS son una vía de sentido único, que están a disposición exclusiva del uso y abuso de los inversores extranjeros. A ellos no pueden acceder los gobiernos, las empresas con menos recursos, las organizaciones de la sociedad civil ni las personas corrientes. Como ya se ha comentado, la mayoría de los países que son demandados a través del ISDS ya disponen de sistemas jurídicos eficaces e imparciales, que bastarían para proteger las propiedades de los inversores extranjeros. El ISDS discrimina a los inversores nacionales, un hecho que iría mucho más allá del marco jurídico y constitucional de la Unión Europea.¹¹ El ISDS otorga unos privilegios de obligado cumplimiento a los inversores extranjeros *sin* exigirles a cambio unas obligaciones igual de exigentes, desde la creación de empleo a la protección de los derechos laborales, pasando por el cumplimiento de las normas ambientales y el acceso universal a los servicios públicos. En cambio, los Gobiernos que son parte de estos acuerdos, pese a sus derechos democráticos y sus responsabilidades en materia de regulación, deben respetar las condiciones sin que importen los costes sociales.

El alto precio de las remunicipalizaciones y de las medidas de interés general

Son cada vez más las personas que admiten que el ISDS funciona en detrimento de bienes públicos como unos servicios de agua de calidad. En el libro *Our Public Water Future: The global experience with remunicipalisation*, publicado en 2015, se demuestra cómo el ISDS ha socavado las remunicipalizaciones de agua, y en este capítulo se amplía esa idea a otros servicios públicos. ¿Qué dinámicas están en juego cuando los Gobiernos sujetos al ISDS reconocen las carencias del sector privado en los servicios de energía, transporte y telecomunicaciones, y deciden devolverlos al control público?

El ISDS frente a las remunicipalizaciones en el sector de la energía

La demanda creciente de una transición energética justa, por la que la gente exige que la energía se produzca a escala local y esté sometida a un control democrático, es algo que están torpedeando los inversores extranjeros en el sector. En 2016, el Tratado sobre la Carta de la Energía se convirtió en el tratado al que más recurrieron, ya que lo utilizaron en al menos 101 casos ISDS conocidos. En 2012, el gigante sueco de la energía Vattenfall empleó la protección de las inversiones para demandar al Gobierno federal alemán por haber retomado el control del sector de la energía en Hamburgo. La compañía reclamaba daños de 4700 millones de euros por el cierre de dos centrales nucleares, una decisión concebida para promover la transición energética en Alemania (conocida como *Energiewende*). En Hamburgo, desprivatizar y remunicipalizar parte del sector eléctrico fue una respuesta a la creciente demanda popular de una transición energética democrática y socialmente justa. Después de la catástrofe nuclear de Fukushima, el Gobierno federal actuó con respecto a la oposición generalizada en todo el país a la energía nuclear y decidió eliminarla gradualmente de su matriz energética. La decisión fue el resultado de una movilización multitudinaria, que llevó a la calle a 120 000 personas. Juntas, formaron una cadena humana de 120 kilómetros, que conectó a las centrales nucleares de Brunsbüttel y Krümmel, pasando por Hamburgo. Después de esta movilización, la iniciativa ciudadana ‘Nuestro Hamburgo, nuestra red’ aprovechó que la concesión de Vattenfall iba a vencer y presionó con éxito para que se celebrara un referendo en 2013, con el objetivo de volver a adquirir la red eléctrica de la ciudad. El objetivo del referendo era alcanzar “un suministro de energía a partir de fuentes renovables y socialmente justo, respetuoso con el clima y controlado de forma democrática”.¹² Para 2016, todas las acciones de la red de distribución se habían vuelto a transferir al municipio. Solo en el primer año, esta operación de compra generó un beneficio para la ciudad de 34,5 millones de euros. Sin embargo, el caso de Hamburgo pone de manifiesto que los Gobiernos que han firmado acuerdos de comercio e inversión pueden no ser capaces de evitar unas costosas demandas de los inversores cuando

deciden volver a someter el sector de la energía al control público. El capítulo escrito por Sören Becker, en este mismo volumen, analiza con más detalle el caso de Hamburgo.

Después de dos décadas de privatizar casi todas las empresas estatales principales, Albania privatizó la compañía de distribución de electricidad en 2009. Siguiendo el consejo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, el Gobierno albanés vendió el 76 por ciento de sus participaciones en la empresa pública de energía OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike) a la compañía checa ČEZ. Los ciudadanos pronto se vieron afectados por un incremento de las facturas, una calidad del servicio y un suministro de energía insuficientes, y por cortes eléctricos injustificados. Los problemas eléctricos también provocaron incendios que hirieron a personas y destruyeron viviendas; unos daños que la compañía privada nunca admitió.¹³ Debido a otras dificultades económicas, ČEZ redujo las inversiones y empezó a centrarse en ámbitos con mayores tasas de recaudación, con el fin último de aumentar los ingresos a corto plazo, lo cual dio lugar a una serie de acusaciones y contraacusaciones entre el Gobierno de Albania y la compañía checa.¹⁴ Finalmente, Albania suspendió la licencia de la compañía y renacionalizó el servicio energético. La renacionalización se tradujo en una disminución de las deudas y las pérdidas en la red. Sin embargo, en 2013, la compañía checa utilizó el Tratado sobre la Carta de la Energía para demandar al Gobierno albanés por una suma de 190 millones de euros. El caso se resolvió en 2014, y Albania fue condenada a pagar 100 millones de euros a ČEZ.¹⁵

El ISDS frente a las desprivatizaciones en el sector del transporte

El transporte es otro sector de los servicios públicos en el que las medidas desprivatizadoras han desencadenado el arbitraje internacional. Al menos tres gobiernos latinoamericanos que decidieron desprivatizar parte de su sector de transporte se han enfrentado a una demanda ISDS. En 2011, el Gobierno boliviano decidió que recuperaría el control de sus tres mayores

aeropuertos. SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos), que pertenecía en parte a la compañía española Abertis-AENA, había obtenido unos beneficios significativos de los aeropuertos sin cumplir con su plan de inversión inicial.¹⁶ Sin embargo, la multinacional española, amparándose en el TBI entre Bolivia y el Estado español, acusó a Bolivia de contravenir la cláusula de trato justo y equitativo, y exigió una indemnización de 90 millones de dólares. La demanda arbitral sigue en curso.

Hace más de una década, el Gobierno de Guatemala decidió retomar el control público de los servicios ferroviarios. En 1997, Guatemala había firmado una concesión de 50 años con la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, una filial estadounidense de la Railroad Development Corporation (DRC), para que gestionara y renovara el ferrocarril. Dado que la compañía no cumplió con las obligaciones contractuales, en 2006 el Gobierno anunció sus intenciones de desprivatizar el sector ferroviario. Poco después, la DRC invocó el tratado de libre comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos, que se acababa de firmar. El inversor extranjero presentó una demanda por un valor de 64 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que forma parte del Grupo del Banco Mundial. La DRC acusó a Guatemala de violar la cláusula de trato justo y equitativo, y de expropiación, al afirmar que el decreto del Gobierno para desprivatizar el ferrocarril entorpecía sus posibilidades de obtener crédito. El tribunal decidió que el Gobierno de Guatemala debía pagar 14 millones de dólares a la corporación estadounidense.¹⁷ Este caso demuestra que el mero hecho de anunciar que se prevé desprivatizar un servicio basta para ser objeto de demandas multimillonarias.

Argentina tenía varios motivos para desprivatizar sus dos aerolíneas nacionales en 2008. Entre 2001 y 2008, la multinacional española Grupo Marsans, propietaria de las dos aerolíneas, acumuló una deuda de cientos de millones de dólares. Otras de las razones estaban relacionadas con la mala gestión, la falta de inversiones y las sospechas de corrupción.¹⁸ Marsans respondió a la medida desprivatizadora invocando el TBI entre

Argentina y el Estado español, y exigió 1500 millones de dólares en daños y perjuicios, a pesar de que, para entonces, la deuda de las compañías aéreas ascendía a 900 millones de dólares.¹⁹ Como Marsans se declaró en quiebra, el Gobierno descubrió que el bufete de abogados Burford Capital había pagado los costes del litigio a cambio de recibir parte de la posible indemnización o acuerdo. Debido a la falta de transparencia del arbitraje internacional, no está claro en qué fase se encuentra el procedimiento en estos momentos. Lo que sí sabemos es que, después de la desprivatización, la situación económica de las aerolíneas mejoró, y que los ingresos aumentaron un 85 por ciento, hasta los 2000 millones de dólares, en comparación con 2008. Además, para 2013 la flota de aeronaves había aumentado de 26 a 63, y el tráfico de pasajeros había aumentado en un 57 por ciento, con un transporte total de 8,5 millones de personas. El capítulo de M>Lisa Colbert, en este mismo volumen, repasa con más detalle los beneficios de este caso de renacionalización.

El ISDS frente a las desprivatizaciones en el sector de las telecomunicaciones

Las telecomunicaciones son otro sector de los servicios públicos que se ha visto menoscabado por el ISDS. Cuando un Gobierno decide desprivatizar sus servicios de telecomunicaciones, puede convertirse en el blanco de una demanda de arbitraje internacional. En 2007, Bolivia decidió retomar el control público de sus servicios de internet y de telefonía fija y móvil, con el fin último de lograr una cobertura universal. Después de un año de intentar adquirir el 50 por ciento de las acciones propiedad de European Telecom International (ETI), una filial holandesa de Telecom Italia, el Gobierno rescindió el contrato de la compañía. Según el Gobierno, la compañía privada no había proporcionado servicios de calidad y no había invertido los 610 millones de dólares comprometidos en un principio, mientras ganaba millones de dólares en beneficios. ETI respondió demandando a Bolivia ante el CIADI, exigiéndole más de 700 millones de dólares. La demanda se basó en el TBI entre los Países Bajos y Bolivia, lo que permitió a una sociedad pantalla como ETI —que carece de una presencia comercial destacable en los Países Bajos— exigir cientos de millo-

nes de dólares por presuntos daños. Ante esta situación, 15 organizaciones de la sociedad civil holandesa y 863 personas de 59 países pidieron al presidente del Banco Mundial y al Gobierno holandés que apoyaran a Bolivia e investigaran el uso indebido por parte de grandes empresas del TBI entre los Países Bajos y Bolivia, aunque no obtuvieron una respuesta satisfactoria. La renacionalización se tradujo en unas tarifas más asequibles y en un aumento significativo de la cobertura, y el número de usuarios de los servicios pasó de 1,7 a 4 millones. Aunque la desprivatización generó beneficios concretos para la población boliviana, el caso se resolvió a favor de la sociedad pantalla holandesa. Después de tres años de arbitraje, Bolivia fue condenada a pagar 100 millones de dólares a ETI.²⁰

En 2009 y 2010, inversores canadienses, británicos y beliceños iniciaron tres casos ISDS²¹ contra el Gobierno de Belice. Los casos estaban relacionados con la decisión del país de desprivatizar el proveedor de telecomunicaciones Belize Telemedia Limited.²² Los inversores reclamaban un total de 518,9 millones de dólares.²³ Además, uno de los principales accionistas de una de las partes demandantes, British Caribbean Bank (BCB), era lord Michael Ashcroft, que ha sido acusado de usar el BCB para eludir sus obligaciones tributarias en los Estados Unidos.²⁴ En 2016, el Gobierno de Belice anunció que los árbitros habían resuelto que debía pagar a los inversores extranjeros una suma cercana a los 395 millones de dólares, que incluían los honorarios legales y 198 millones de dólares en pagos de intereses.²⁵ Tres meses después, Belice declaró que se encontraba en recesión y, a partir de entonces, el Fondo Monetario Internacional pidió que se incrementaran los impuestos. Es probable que esta medida afecte de forma especialmente severa a los hogares de renta media y baja, y que exacerbe la recesión.

Cuadro II

Los principios del ISDS privilegian a las compañías privadas sin que importen sus contravenciones y el contexto

El principio del ISDS que los inversores privados invocan con más frecuencia es el ‘trato justo y equitativo’. Es una cláusula de carácter general, ya que las compañías —y sus abogados— pueden argumentar fácilmente que las medidas gubernamentales no son justas o equitativas con respecto a las ganancias que dicen merecer. Esto es algo habitual, pues los árbitros tienden a aplicar una interpretación amplia de esta cláusula. El 75 por ciento de todos los casos ganados por inversores estadounidenses están vinculados con el incumplimiento del trato justo y equitativo.²⁶

El caso ISDS presentado por Tallinna Vesi y su compañía matriz, United Utilities Tallinn, utilizó el TBI entre Estonia y los Países Bajos para demandar al Gobierno estonio por rechazar el aumento de las tarifas de agua y alcantarillado. En concreto, se acusa a Estonia de contravenir el trato justo y equitativo porque se considera injusto que la nueva ley del país limite los beneficios empresariales por encima de un nivel “razonable”. Las dos compañías reclaman una indemnización de 90 millones de euros por posibles daños, incluidos los beneficios futuros previstos hasta el final del contrato, en 2020. El caso, aún pendiente, demuestra que los árbitros no tienen en cuenta si las normativas —como asegurar que los servicios sean asequibles y accesibles para todo el mundo— son justas y equitativas para la sociedad. Los árbitros únicamente evalúan si los inversores extranjeros pierden beneficios (reales o potenciales).

Otro principio del ISDS que se usa de forma generalizada es la ‘expropiación’. Cuando las autoridades nacionales, regionales o municipales retornan al control público un servicio esencial que antes estaba privatizado, los inversores extranjeros y los árbitros con-

sideran que se ha producido una expropiación. No importa que el proveedor privado del servicio haya incumplido en varios puntos el contrato; en el marco del ISDS, desprivatizar un servicio público es casi imposible, a menos que el Gobierno pueda arriesgarse a pagar un laudo exorbitante y esté dispuesto a ello. El número de veces que se incrementen las tarifas, el deterioro de la eficiencia, la calidad inaceptable del servicio o la falta de inversiones por parte de la compañía privada no importan. Cuando un Gobierno se compromete con la protección de las inversiones internacionales, no puede evitar ser demandado por cientos de millones de dólares. Además, cualquier medida que afecte de forma negativa a los beneficios puede considerarse como una expropiación del inversor extranjero. Por ejemplo, los árbitros han interpretado a menudo que las medidas para proteger la salud, el medioambiente y el trabajo constituyen casos de expropiación.

Incluso cuando las medidas en pro del bienestar general supondrían una excepción y así constan en el anexo de un acuerdo de inversión —como sucede con el CETA—, el Gobierno aún debe demostrar que esa medida es “legítima” y no “manifiestamente excesiva”. Las represalias al amparo del ISDS contra el Gobierno argentino ponen de manifiesto que ni siquiera una crisis económica devastadora cuenta como una razón legítima para recuperar el control del sector del agua.

La amenaza de una demanda basta para frenar las desprivatizaciones

Una vez que un Gobierno ha firmado un acuerdo de comercio e inversión que incluye un mecanismo ISDS, el mero compromiso con el ISDS puede ser suficiente para que el Gobierno evite adoptar ciertas medidas políticas, como la decisión de recuperar el control público de un servicio

privatizado. Este riesgo es lo que se conoce como ‘enfriamiento reglamentario’. Por lo tanto, el ISDS puede entorpecer y restringir el derecho de un Gobierno a legislar, incluso antes de que los inversores presenten una demanda.

Puede que no resulte sorprendente que grupos de presión como la Federación Europea para el Derecho y el Arbitraje en materia de Inversiones (EFILA) sostengan que no existen pruebas de ese riesgo de enfriamiento reglamentario. Sin embargo, incluso el renombrado abogado Tody Landau, especializado en procesos arbitrales, afirma que ese fenómeno es muy real: “En varias ocasiones, los Gobiernos me han pedido que les aconseje sobre las posibles implicaciones o consecuencias adversas de una determinada política en términos de casos inversor-Estado”.²⁷ En otras palabras, los Gobiernos se preguntan si ciertas políticas podrían desencadenar una demanda ISDS. Cuando las autoridades se dan cuenta de que el posible coste podría ser demasiado grande, puede que eviten desprivatizar servicios esenciales.

El enfriamiento reglamentario, que compromete políticas a favor del inversor, puede producirse antes de que los inversores inicien un litigio internacional, pero también mientras el caso se está dirimiendo. Como hemos visto, a raíz del caso ISDS presentado en 2009 por Vattenfall contra Alemania, el Gobierno modificó su política y eximió de sus obligaciones ambientales al gigante sueco de la energía.

El Gobierno de Bulgaria decidió no remunicipalizar sus servicios de agua debido a la amenaza del ISDS. Los habitantes de la capital, Sofía, y algunos funcionarios municipales se movilizaron para revertir la privatización del agua, y reunieron suficientes firmas para celebrar un referendo que perseguía evaluar el contrato de agua privatizado. El motivo: la compañía privada Sofiyska Voda, filial de Veolia, es conocida por su falta de transparencia, unos salarios de gestión exorbitantes y las pérdidas financieras. Además, la compañía cortó el servicio a 1000 hogares y pidió que se procesara a otros 5000 por no pagar las facturas. Sin embargo, el go-

bierno municipal no permitió que el referendo se celebrara porque temía que los inversores privados pudieran invocar una cláusula que se añadió en secreto al contrato, y que permitía a la compañía demandar a Bulgaria ante el Centro de Arbitraje Internacional de Viena.²⁸ Los casos anteriores revelan que la amenaza de una demanda ISDS puede bastar para impedir que se desprivatice un servicio público y vuelva a someterse al control municipal o nacional.

Cuadro III

El falso abandono del ISDS

Debido a las crecientes críticas del ISDS en muchos países europeos, la Comisión Europea decidió reformular el mecanismo y propuso un Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por su sigla en inglés). Quienes tienen un interés en los acuerdos actuales de comercio e inversión presentan el ICS como un giro radical con respecto al ISDS. Sin embargo, a pesar de algunos cambios en el procedimiento, la estructura fundamental del ISDS, que privilegia a los inversores extranjeros, se mantiene intacta en la propuesta del ICS. En el marco del ICS, las grandes empresas seguirían siendo los únicos actores que pueden demandar a los Gobiernos; no se permite lo contrario. Las grandes empresas todavía podrían invocar la cláusula del trato justo y equitativo, al argumentar que las medidas adoptadas por el Gobierno supusieron una “arbitrariedad manifiesta”. El ICS incluso amplía el trato justo y equitativo porque introduce el concepto de “expectativas legítimas”, que abre las puertas a muchas más demandas por parte de los inversores.²⁹

Puede que la nueva propuesta aluda al derecho a legislar de los Gobiernos, pero estos siguen asumiendo todas las responsabilidades. Los Gobiernos aún deben demostrar que las medidas que adopta-

ron eran “necesarias”, “no discriminatorias” y perseguían unos objetivos “legítimos”. Por último, aunque en la nueva propuesta a los árbitros se les llame “jueces”, no está prevista ninguna salvaguardia para evitar que los mismos representantes del sector empresarial formen parte de los paneles de arbitraje. Cabe señalar que un grupo de jueces europeos ha declarado que la propuesta del ICS no satisface las normas judiciales europeas e internacionales mínimas.³⁰

Cuadro IV

La mayor amenaza del ISDS está por llegar

En los últimos años, la Comisión Europea también anunció que crearía un tribunal internacional de inversiones permanente, que, con el tiempo, “llevará a que el ‘antiguo’ mecanismo ISDS sea sustituido por un sistema moderno, eficaz, transparente e imparcial para la resolución de diferencias en materia de inversión a escala internacional”.³¹ Esta propuesta para instaurar un denominado ‘tribunal multilateral de inversión’ se reduce a un convenio sobre un mecanismo ISDS multilateral. Si dos países signatarios se encuentran en conflicto, se aplicaría el mecanismo multilateral. Aún hay muchos puntos poco claros en la propuesta de la Comisión. Sin embargo, lo que sí es evidente es que, según el proyecto de la Comisión, solo los inversores extranjeros seguirían teniendo derecho a demandar a los Gobiernos, y no al revés.³² Aunque, en teoría, dotar al régimen de protección de las inversiones de un carácter multilateral debería mejorar la transparencia de las demandas inversor-Estado y reducir el riesgo de que se produjeran conflictos de interés, la propuesta no acaba con los problemas de base del sistema actual de protección de las inversiones. De hecho, esa dimensión multilateral del ISDS amenaza con blindar para siempre

unos derechos de protección de las inversiones controvertidos e innecesarios. Este mecanismo haría que el precio de la remunicipalización fuera inasequible.

Conclusión

Nuestro estudio revela que la decisión de desprivatizar un servicio público ha desencadenado al menos 20 casos de arbitraje internacional (diez en el sector del agua, tres en la energía, tres en el transporte y cuatro en las telecomunicaciones). La historia de la protección de las inversiones muestra que varios países han sido demandados por millones y miles de millones de dólares cuando decidieron regular en pro del interés general unos servicios esenciales privatizados o retomar el control público de los servicios privatizados cuando las compañías privadas no habían dado los resultados prometidos.

En el marco del ISDS, a los inversores extranjeros se les adjudican a menudo cientos de millones de dólares, independientemente de su mala conducta, de que hayan contravenido el contrato o de los daños que hayan provocado. Además, los países se encuentran indefensos frente a una demanda ISDS, ya que carecen de la posibilidad de recurrir el veredicto. La protección de las inversiones socava gravemente las posibilidades de desprivatizar y remunicipalizar servicios esenciales, ya que puede poner en peligro los planes para reclamar el control público. Cuando los Gobiernos, pese a todo, deciden seguir adelante, pueden encontrarse con la obligación de pagar un laudo ISDS que repercute en la ciudadanía en la medida en que se cubre con los presupuestos públicos, lo que puede reducir la asequibilidad de los servicios y retrasar unas inversiones muy necesarias. El ISDS añade a las remunicipalizaciones un precio enorme e injusto y, en última instancia, sitúa el interés del sector privado por encima de las responsabilidades del Gobierno.

El régimen de protección de las inversiones, que no deja de expandirse, limitará aún más el margen de maniobra de responsables de políticas y de representantes elegidos. En otras palabras, los acuerdos de comercio e inversión, vigentes y futuros, que engloban un mecanismo ISDS pueden obstaculizar —y lo harán— las propuestas que persigan proteger la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos.

Afortunadamente, la oposición al ISDS y el número de desprivatizaciones y remunicipalizaciones han ido creciendo con los años. Las privatizaciones han resultado ser injustas, costosas e ineficientes. Devolver a manos públicas los servicios esenciales ha puesto de manifiesto, una y otra vez, que facilita un aumento de los ingresos públicos (Hamburgo, Alemania), una disminución de las deudas y las pérdidas de red (Albania), y un aumento en la cobertura y unas tarifas más asequibles (Bolivia). Sin olvidar que la ciudadanía se habría beneficiado más de estas desprivatizaciones si no hubiera sido por el ISDS.



Lavinia Steinfors trabaja en el Transnational Institute (TNI), donde se dedica a los ámbitos de las remunicipalizaciones en los servicios públicos, la democracia energética y el comercio y la inversión.

Desearíamos dar las gracias a Cecilia Olivet por sus aportaciones a este capítulo.

Notas

- 1 Newsman, J. (2016) Veolia tells ICSID Lithuania owes \$109M for ‘harassment’. *Law 360*, 27 de enero. <https://www.law360.com/articles/751339/veolia-tells-icsid-lithuania-owes-109m-for-harassment> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 2 Williams, D. (2016) Veolia takes Lithuania to court over regulatory changes. *Decentralized Energy*, 28 de enero. <http://www.decentralized-energy.com/articles/2016/01/veolia-takes-lithuania-to-court-over-subsidy-scrappage-to-chp.html> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 3 Verslo žinios (2016) „Vilniaus energija“ nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė 24,3 mln. Eur. 22 de septiembre. <http://www.vz.lt/sektoariai/energetika/2016/09/22/vilniaus-energija-nepagrįstai-i-silumos-kainas-itrauke-243-mln-eur> (consultado el 23 de mayo de 2017).
- 4 Savickas, E. (2017) Jie daug metų išrašinėjo sąskaitas vilniečiams: tai greitai nepasimirš. *Delfi Verslas*, 2 de enero. <http://www.delfi.lt/verslas/energetika/jie-daug-metu-israsinejo-saskaitas-vilnieciams-tai-greitai-nepasimirs.d?id=73316836> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 5 Salazar, R. (2016) The Flint water crisis will happen again. *The Huffington Post*, 10 de agosto. http://www.huffingtonpost.com/rafael-salazar/the-flint-water-crisis-wi_b_11390450.html (consultado el 25 de abril de 2017).
- 6 Kishimoto, S. (2015) Trade agreements and investor protection: A global threat to public water. En S. Kishimoto, E. Lobina y O. Petitjean (eds.), *Our Public Water Future: The global experience with remunicipalisation* (p. 99). Amsterdam: Transnational Institute et al. <https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfuture-1.pdf> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 7 Véase el caso en detalle en Remunicipalisation Tracker: http://www.remunicipalisation.org/#case_Santa%20Fe%20Province
- 8 UNCTAD (sin fecha) Número de tratados bilaterales de inversión actualmente en vigor. Investment Policy Hub, base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 9 Comisión Europea (2017) Overview of FTA and other trade negotiations. Abril. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf (consultado el 25 de abril de 2017).
- 10 UNCTAD (sin fecha) Número de tratados bilaterales de inversión actualmente en vigor. Investment Policy Hub, base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 11 *ClientEarth* (2015) Legality of investor-state dispute settlement (ISDS) under EU law, p. 6. <http://documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2015-10-15-legality-of-isds-under-eu-law-ce-en.pdf>
- 12 *World Future Council* (2016) Energy Remunicipalisation: How Hamburg is buying back energy grids. 19 de octubre. <https://www.worldfuturecouncil.org/energy-remunicipalisation-hamburg-buys-back-energy-grids/> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 13 *Independent Balkan News Agency* (2014) CEZ nationalized again, Albania pays to the Czech Republic 95 million Euros. 24 de junio. <http://www.balkaneu.com/cez-nationalized-again-albania-pays-czech-republic-95-million-euros/> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 14 Popp, A. et al. (2015) Energy Law in Albania. In *European Energy Handbook: A survey of current issues in the European energy sector*. Londres: Herbert Smith Freehills. <https://www.pwc.com/cy/en/legal/assets/european-energy-handbook-2015-web-cyprus.pdf> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 15 ČEZ v. The Republic of Albania (2013) Investment Policy Hub, base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/522> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 16 Colitt, R. y Laya, P. (2013) Bolivia nationalizes Spain’s Abertis Airport operations. *Bloomberg*, 18 de febrero. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-02-18/bolivia-nationalizes-spain-s-abertis-airport-operations-1-> (consultado el 25 de abril de 2017).

- 17 *Global Arbitration Review* (2013) Rail investor moves to confirm ICSID award. 19 de junio. <http://globalarbitrationreview.com/article/1032422/rail-investor-moves-to-confirm-icsid-award> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 18 Sala de, P. (2014) Aerolíneas Argentinas: A flying brick up high in the sky (Part II). *Gurufocus*, 19 de septiembre. <http://www.gurufocus.com/news/279582/aerolineas-argentinas-a-flying-brick-up-high-in-the-sky-part-ii> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 19 *Global Arbitration Review* (2013) Argentina claim gets lift off; but causes another split on MFN. 3 de enero. <http://globalarbitrationreview.com/article/1031840/argentina-claim-gets-lift-off-but-causes-another-split-on-mfn> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 20 Perry, S. (2010) Telecom Italia wins payout from Bolivia. *Global Arbitration Review*, 12 de noviembre. <http://globalarbitrationreview.com/article/1029756/telecom-italia-wins-payout-from-bolivia> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 21 British Caribbean Bank Ltd., *Dunkveld I and II v. The Government of Belize* (2009-2010) Investment Policy Hub, base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/CountryCases/20?partyRole=2> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 22 Debevoise & Plimpton LLP (2015) Debevoise advises investors as long-running litigation over nationalized Belize telecoms and electricity companies is settled. 3 de diciembre. <http://www.debevoise.com/insights/news/2015/12/debevoise-advises-investors-as-long> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 23 La cantidad de 518,9 millones de dólares es una suma de los tres casos. *Dunkveld I* exigía al Gobierno de Belice 298,7 millones de dólares, *Dunkveld II*, 175 millones de dólares, y *British Caribbean Bank Ltd.*, 45,2 millones de dólares.
- 24 *Tax Justice Network* (2015) Belize and the curious tale of the British lord. 5 de octubre. <http://www.taxjustice.net/2015/10/05/belize-and-the-curious-tale-of-the-british-lord/> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 25 *The San Pedro Sun* (2016) GOB to pay \$388 Million – final settlement to Ashcroft group for Telemedia shares. 30 de junio. <http://www.sanpedrosun.com/government/2016/06/30/gob-to-pay-388-million-final-settlement-to-ashcroft-group-for-telemedia-shares/> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 26 Wallach, L. (2012) “Fair and Equitable Treatment” and investors’ reasonable expectations. *Public Citizen*, 5 de septiembre. <https://www.citizen.org/documents/MST-Memo.pdf> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 27 Schneiderman, R. et al. (2015) Reply to EFILA. *Investment State Dispute Settlement, comments and observations: Gus van Harten*. 6 de julio. <https://gusvanharten.wordpress.com/2015/07/> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 28 Para más detalles sobre este caso, véase Remunicipalisation Tracker: http://remunicipalisation.org/#case_Sofia
- 29 Cingotti, N., Ebenhardt, P., Grotenveldt, N., Olivet, C. y Sinclair, S. (2016) El Sistema de Tribunales de Inversiones puesto a prueba. *Ámsterdam: Transnational Institute et al.* <https://www.tni.org/es/publicacion/el-sistema-de-tribunales-de-inversiones-puesto-a-prueba> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 30 *European Association of Judges* (2015) Statement on the proposal from the European Commission on the new investment court system. 9 de noviembre. <http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf> (consultado el 25 de abril de 2017).
- 31 Comisión Europea (2015) Press release: EU finalises proposal for investment protection and Court System for TTIP. 12 de noviembre. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6059_en.htm (consultado el 25 de abril de 2017).
- 32 *Seattle2Brussels* (2017) Posición de la red S2B sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). 19 de febrero. <http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/El-ISDS-en-una-peligrosa-enrucijada.pdf> (consultado el 25 de abril de 2017).

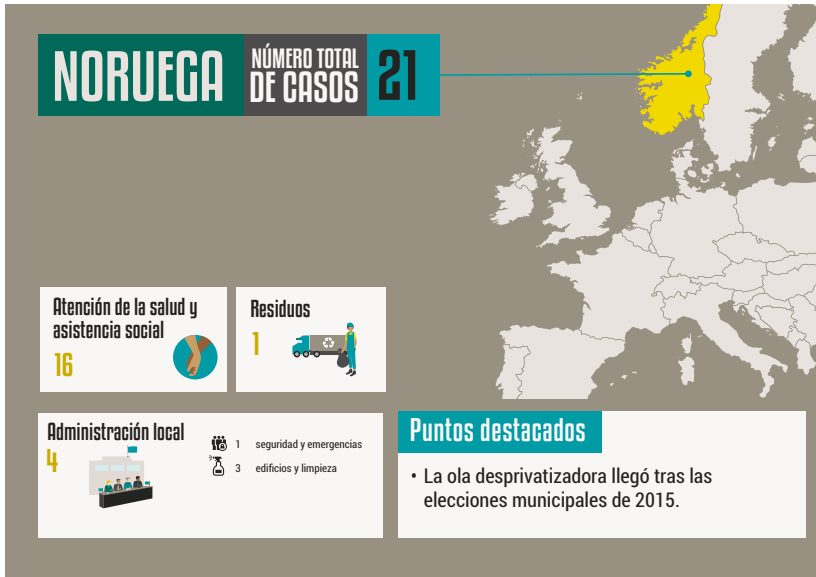
Capítulo 4

Los municipios noruegos recuperan el control público de los servicios sociales

Bjørn Pettersen y Nina Monsen

Los municipios noruegos son organismos semiautónomos y se encargan de ofrecer varios servicios a sus habitantes, como los de bienestar de la infancia y atención preescolar, educación, atención básica de la salud, servicios para personas mayores, y servicios de agua, saneamiento, residuos y limpieza. De los principales sectores enumerados en este informe, el agua, el servicio postal y las administraciones locales son de plena propiedad pública en Noruega. Además, más del 80 por ciento del sector energético se encuentra en manos públicas. Los servicios sociales, de transporte y de residuos son los sectores más afectados por las privatizaciones. Y dentro de estos sectores, los jardines de infancia, el transporte en autobús y la limpieza de los edificios públicos son los ámbitos que más tienden a someter a procedimientos de licitación. Aproximadamente la mitad de los jardines de infancia de Noruega están gestionados por compañías privadas.

En los últimos años, se han desprivatizado 21 servicios en municipios de todo el país, que han retomado el control público de estos. Esta ola desprivatizadora llegó con el cambio político que se produjo en muchos municipios tras las elecciones locales de 2015. La cooperación entre los sindicatos, las administraciones municipales y los políticos locales ha sido un elemento fundamental de estos procesos remunicipalizadores. El año 2017 también comenzó con un caso significativo. En febrero, 170 trabajadores y trabajadoras que estaban contratados por una compañía privada se convirtieron en personal municipal cuando la capital, Oslo, asumió los servicios de recogida de residuos.



Cuadro I

Oslo recupera los servicios de residuos

En 2017, el Ayuntamiento de Oslo retomó el control público de los servicios de recogida de residuos, que durante 20 años habían funcionado a través de un sistema de licitaciones por concurso. El último proveedor privado, Veireno, que en octubre de 2016 había ganado el concurso para encargarse de este servicio en la capital, muy pronto se convirtió en un símbolo del fracaso de este tipo de sistema. En febrero de 2017, Oslo remunicipalizó la recogida de residuos, se hizo cargo de los activos del proveedor privado y contrató a los 170 trabajadores y trabajadoras que antes habían formado la plantilla de este. Se prevé que la adquisición sea costosa, ya que algunas de las personas que antes estaban contratadas a media jornada por Veireno ahora trabajarán a jornada completa para el Ayuntamiento, con los salarios y los derechos de pensión correspondientes.¹

Entre octubre de 2016 y febrero de 2017, el Ayuntamiento recibió decenas de miles de reclamaciones de personas que se quejaban de que no se había pasado por su casa a recoger la basura. El Organismo Noruego de Inspección del Trabajo examinó a Veireno y se encontró con que algunos de los empleados trabajaban hasta 90 horas por semana.

Cuando comenzó el contrato de la compañía privada con el municipio de Oslo, uno de los empleados había mantenido una semana laboral de siete días, durante varias semanas. Una gran parte de la plantilla había trabajado durante más de 70 horas semanales, con una jornada que empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las diez de la noche. Es evidente que el bajo coste de los servicios que estaba prestando Veireno se conseguía a expensas de las condiciones laborales. Estos empleados, que eran los encargados de recoger la basura en la capital noruega y de conducir vehículos pesados, se estaban poniendo a sí mismos y a otras personas en una situación de gran riesgo por seguir unas jornadas laborales tan largas y apenas descansar entre turnos.

El caso de Veireno no es excepcional. La licitación por concurso de los servicios de residuos es mala para los trabajadores y las trabajadoras, y costosa para la ciudadanía. Incluso cuando los servicios se subcontratan, el municipio termina asumiendo todo lo que salga mal. Si Oslo no hubiera recuperado el control de los servicios y se hubiera hecho cargo de las personas contratadas por Veireno, la plantilla no habría cobrado el salario después del 1 de enero de 2017, ya que la compañía se declaró en bancarrota y se desvinculó de toda responsabilidad.



Recogida de basura en Oslo

Fotografía: Simen Aker Grimsrud/Fagbladet

Emil Gasparovic (derecha) y su compañero están ahora contratados a jornada completa por el Ayuntamiento de Oslo, después de que este retomara el control público de la gestión de los residuos, a principios de 2017.

Las remunicipalizaciones en Noruega

El camino hacia las remunicipalizaciones se vio allanado por la nueva orientación política en el ámbito de los gobiernos locales. Diecisiete municipios han empezado a retomar la gestión pública de algunos servicios, incluido en centros urbanos importantes como Oslo, Bergen y Tromsø. En Oslo, el gobierno municipal pasó del centro-derecha a la izquierda por primera vez en 18 años. Y la dirección política de la capital depende ahora de una coalición formada por el Partido Laborista, el Partido Socialista de Izquierda y el Partido Verde. Bergen, la segunda mayor ciudad del país, situada en el oeste, representa un caso parecido, ya que adoptó un gobierno de centro-izquierda después de 15 años de dominio del centro-derecha. La remunicipalización de dos centros para el cuidado de personas mayores que antes estaban externalizados es uno de los resultados concretos de la nueva dirección política. El gobierno local también ha votado

a favor de mantener todos los centros de cuidado de personas mayores en manos del municipio o de externalizar los servicios solo a organizaciones sin fines de lucro.

Cuadro II

La remunicipalización de los centros para el cuidado de personas mayores

El Ayuntamiento de Bergen estaba dispuesto a perder dinero con el proceso de remunicipalización de dos centros de cuidado de personas mayores. Pero sucedió todo lo contrario. En mayo de 2016, el municipio volvió a asumir la gestión de los dos centros. Los partidos políticos de la derecha protestaron contra la remunicipalización y la Confederación del Sector de Servicios de Noruega afirmó que el proceso costaría 11 millones de coronas noruegas (aproximadamente un millón de euros).²

Antes de que hubiera transcurrido un año, los cálculos no dejaban lugar a dudas: uno de los centros había equilibrado su presupuesto y, el otro, había logrado un superávit de casi cinco millones de coronas noruegas (aproximadamente medio millón de euros).

En una entrevista con la revista *Fagbladet*, Christian Magnussen, representante del sindicato Fagforbundet en uno de los centros, señaló que se había respondido a todas las inquietudes que manifestaban los trabajadores y las trabajadoras antes del proceso de remunicipalización, y que ahora todos estaban satisfechos de estar contratados por el Ayuntamiento. Gracias al proceso, se incrementaron los salarios de casi toda la plantilla y se mejoraron los planes de pensiones.³ El principal comisionado del Ayuntamiento de Bergen, Harald Schjelderup, del Partido Laborista, declaró

a *Fagbladet*, antes del proceso remunicipizador, que retornar a manos públicas los servicios no solo supone una medida política importante, sino que tiene también sus razones técnicas. Se trata de asumir la responsabilidad de la contratación en el sector de la salud asegurando unas buenas condiciones de trabajo, seguridad laboral y la posibilidad de un empleo a jornada completa con un contrato permanente.

Bodø, en el norte de Noruega, es otro municipio relativamente grande donde el gobierno local cambió de rumbo tras las elecciones de 2015. En Bodø, el Congreso Noruego de Sindicatos y el Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega desempeñaron un papel importante en las campañas a favor de los partidos políticos que se habían posicionado en contra de las privatizaciones y que apoyaban otros asuntos importantes para los sindicatos. Tras la victoria, el actual gobierno municipal, una coalición del Partido Laborista y otros cuatro partidos de centro-izquierda, acordó crear la plataforma política 'Proyecto Democracia'.⁴ En la plataforma, el gobierno local se ha comprometido a colaborar con los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras en los planes de desarrollo del municipio. La plataforma también ha manifestado que ningún servicio municipal se debería someter a procesos de licitación.

Stord, un municipio relativamente pequeño del oeste de Noruega, volvió a poner en manos públicas los servicios de limpieza después del cambio de gobierno local en 2015. Los servicios consistían en la limpieza de todos los edificios municipales, desde el Ayuntamiento hasta los jardines de infancia, las escuelas y los pabellones deportivos. La sección local del Partido Laborista ya se había comprometido durante la campaña electoral a desprivatizar los servicios de limpieza. El gobierno local también ha decidido utilizar la cooperación a tres bandas como herramienta para el desarrollo del municipio. Según el alcalde de Stord, la cooperación formal entre las tres partes —los delegados sindicales, los líderes de la administración

municipal y los políticos locales— propiciará una mejor toma de decisiones, una mayor calidad y eficiencia de los servicios, y una mejor dirección.

Sandnes es un municipio del sur de Noruega que ha emprendido una iniciativa para reforzar sus servicios de bienestar de la infancia y acabar con los contratistas privados. Hasta 2010, Sandnes externalizaba gran parte de sus servicios de bienestar de la infancia a compañías privadas, en especial los servicios de orientación familiar, asistencia en el hogar y apoyo para las actividades de ocio. En 2010, el gobierno local decidió crear sus propios servicios públicos. Las razones que impulsaron la decisión eran de carácter tanto económico como técnico. Al municipio le salía muy caro adquirir estos servicios de las compañías privadas y, al mismo tiempo, el servicio municipal no desarrollaba sus propias capacidades o conocimientos. Para 2016, tras haber traspasado la responsabilidad de su sistema público de bienestar de la infancia, que goza de una gran capacidad, el municipio de Sandnes estaba subcontratando muy pocos servicios privados. La medida se ha traducido en la mejora de los conocimientos y las competencias internas, una intervención y prevención más tempranas, y un mejor control de la calidad de los servicios. Someter los servicios de bienestar de la infancia a la gestión municipal también ha facilitado que se prioricen los recursos. El municipio ha cosechado un reconocimiento local y nacional por sus servicios. Tanto las familias que reciben los servicios como las autoridades supervisoras están satisfechas con el nuevo modelo.

Atención preescolar y hospitales

En Noruega, todos los niños y las niñas, al cumplir un año, tienen derecho a una plaza en un jardín de infancia del municipio donde viven. Más del 90 por ciento de los niños noruegos (de 1 a 5 años) asisten al jardín de infancia. Los primeros jardines de infancia fueron creados por organizaciones sin ánimo de lucro, que eran las que, tradicionalmente, habían gestionado estos servicios. Pero desde que se autorizó que las compañías privadas con fines de lucro entraran en el mercado, estas han tendido a

ampliar su cuota de mercado, en detrimento de las entidades sin ánimo de lucro.

Hoy día, en torno a la mitad de los jardines de infancia están gestionados por los municipios, y la otra mitad, por compañías privadas. Los principios de financiación y el sistema de control de los jardines de infancia privados son complicados. Se diferencian de otros servicios que son objeto de licitación porque no existe un límite contractual. Los jardines de infancia privados dejarán de prestar servicio cuando ellos mismos lo decidan; por ejemplo, si el mercado ya no es rentable (muy pocos niños y niñas).

Por este motivo, es difícil retornar a manos públicas este servicio. Las ciudades de Oslo y Trondheim, en el centro de Noruega, con la idea de recuperar una mayor cuota del mercado, han aprobado una resolución local para que todos los futuros jardines de infancia estén administrados por el propio municipio o por una organización sin ánimo de lucro. Estas resoluciones excluyen a las compañías privadas con carácter comercial de los futuros servicios preescolares.

Aunque todos los hospitales noruegos son de propiedad estatal, algunos de los servicios que se prestan en ellos están subcontratados. Tres hospitales, que dependen de las autoridades regionales de salud, se han comprometido a volver a encargarse de servicios que se estaban licitando mediante concurso. Sin embargo, se prevé que una nueva ley relativa al impuesto sobre el valor añadido de los servicios hospitalarios incremente la presión para privatizar ciertos servicios, como la limpieza, la tecnología de la información y la contabilidad en los hospitales.

El modelo nórdico

Los servicios universales de bienestar y el mantenimiento de unos servicios públicos de alta calidad son uno de los ejes de lo que se conoce como 'modelo nórdico': las políticas económicas y sociales comunes en Dina-

marca, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia. Aunque entre estos países existen diferencias notables, todos ellos comparten algunas características. Entre ellas, encontramos un paradigma que combina el capitalismo de libre mercado con un Estado del bienestar de gran alcance y sólidos convenios colectivos a escala nacional. Estos países tienen economías de dimensiones relativamente pequeñas, mercados de trabajo bien organizados y Estados del bienestar bien desarrollados. Pero cada uno de los países nórdicos tiene su propio modelo económico y social, como es el caso del ‘modelo noruego’.⁵

El modelo noruego se basa en tres pilares: gobernanza económica, bienestar público y un mercado laboral organizado. Una de las principales características de la vida política noruega es el diálogo social y la cooperación tripartita.⁶

Un alto porcentaje de los trabajadores y las trabajadoras pertenece a algún sindicato, que representan aproximadamente al 50 por ciento de la fuerza laboral del país. En el sector público, cuatro de cada cinco empleados cuentan con una afiliación sindical, mientras que, en el privado, la proporción no supera los dos de cada cinco. El resto de los países nórdicos tienen cifras más altas; en todos se sitúa por encima del 60 por ciento. Sin embargo, la tendencia en Noruega, como en muchos países europeos, apunta a un descenso del número de personas organizadas en sindicatos.

El Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega, llamado Fagforbundet, es el mayor sindicato del país. Sus 360 000 afiliados y afiliadas trabajan principalmente en el sector municipal o en empresas y sociedades de propiedad pública. Casi el 80 por ciento de las personas afiliadas son mujeres, lo cual refleja el desequilibrio de género que impera en la mayoría de las ocupaciones representadas en el sindicato.

Hay economistas que critican el modelo nórdico, sosteniendo que el sector público es desmesurado y el mercado laboral demasiado rígido debido a la fuerza de los sindicatos que participan en la negociación colectiva

y, finalmente, porque los niveles impositivos son demasiado elevados. Según las teorías económicas clásicas, estas economías nacionales son insostenibles. El modelo nórdico se compara en ocasiones con un abejorro: técnicamente, no debería poder volar, ya que sus alas son muy pequeñas con respecto al peso de su cuerpo. Pero el hecho es que vuela. Del mismo modo, el modelo nórdico, en líneas generales, ha demostrado ser un éxito.⁷

Sin embargo, los fundamentos mismos del modelo noruego se encuentran sometidos a una gran presión debido a las políticas introducidas por gobiernos liberales/conservadores, como los cambios en la legislación laboral, las privatizaciones y la rebaja de impuestos. Los opositores del Gobierno afirmarán que aún estamos volando, aunque puede que no tan bien como antes. Y quizá no por mucho tiempo, a menos que se elija una nueva dirección política.

El planteamiento estratégico de Fagforbundet

A finales de la década de 1990, Fagforbundet y otros sindicatos del sector público se enfrentaron a serios desafíos. La corriente de la Nueva Gestión Pública estaba arrasando tanto en el ámbito municipal como regional, y se consideraba que las privatizaciones, la desregulación y las licitaciones brindaban la respuesta necesaria para uno de los desafíos del sector público.

Fagforbundet opuso resistencia a esa presión privatizadora, argumentando que la competencia no funciona en los servicios que implican el cuidado de las personas, y que las licitaciones generan una carrera al abismo y promueven los mínimos en materia de salarios y otras condiciones laborales. Fagforbundet siempre ha sostenido que los servicios públicos deben permanecer en manos públicas, y en 1999 puso en marcha un proyecto destinado a mejorar los niveles de producción y los servicios sin privatizarlos. El objetivo era neutralizar los llamamientos políticos a favor de la privatización.

Gracias a la implicación de las directivas de las distintas administraciones municipales, de representantes y delegados sindicales, y de políticos locales, la calidad de los servicios públicos mejoró y la campaña política que estaba impulsando las privatizaciones perdió fuerza. El proyecto consiguió buenos resultados. Fagforbundet mantuvo sus iniciativas para fomentar el diálogo social y la cooperación tripartita en el ámbito local con el fin de mejorar los servicios públicos en los municipios.

Cuadro III

La cooperación local a tres bandas

El término ‘cooperación tripartita’ —es decir, a tres bandas— alude a la colaboración constructiva entre representantes de la vida política, gerentes de la administración y sindicatos. El objetivo es trabajar en sintonía para generar una cultura de la cooperación que fomente la búsqueda de las mejores soluciones locales a los desafíos concretos que enfrenta el municipio. Al crear un foro para compartir ideas, las sugerencias del personal y de otras voces que no suelen estar presentes en la administración del municipio se pueden plantear y tratar de forma sistemática. La cooperación tripartita no representa una pieza formal de la toma de decisiones políticas; es, simplemente, una parte del proceso de desarrollo. Su razón de ser estriba en la idea de que los diferentes puntos de vista y perspectivas conducen a mejores soluciones.

Diálogo social y cooperación tripartita

El modelo nórdico de diálogo y cooperación tripartita goza de una larga tradición y ha demostrado sus logros. Durante los últimos 10 años, el Ministerio nacional que se encarga de las administraciones locales ha co-

laborado con la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS) y los cuatro mayores sindicatos del país para apoyar programas en los municipios.

Fagforbundet ha desempeñado un papel clave en estos programas. Para poder participar en el programa, los municipios debían basar los proyectos en la cooperación tripartita entre representantes de la vida política, gerentes de la administración y personal y delegados y delegadas sindicales. Más de la mitad de los 426 municipios de Noruega han participado en los programas, que abarcan ámbitos como la reducción de los permisos por enfermedad, el trabajo a tiempo completo, la mano de obra calificada, la comunicación y la innovación. Tanto las evaluaciones internas como las externas de los programas han sido positivas. El Instituto Noruego de Estudios Urbanos y Regionales evaluó algunos de los programas anteriores, con buenos resultados.

La cooperación vale la pena

El centro de estudios Oslo Economics⁸ halló indicios de mejora notable en todos los temas relacionados con un programa denominado 'Juntos por un municipio mejor'. En el ámbito de los permisos por enfermedad, los municipios participantes consiguieron reducir el gasto en casi 38 millones de euros (después de deducir todos los costes administrativos del programa), gracias a unas mejores condiciones laborales que ayudaron a limitar el estrés y disminuir las enfermedades.

A Fagforbundet le complace comprobar que el modelo de cooperación tripartita a nivel municipal está creciendo. En 2015, un centro de conocimiento sobre cuestiones sindicales, De Facto, evaluó el impacto del diálogo tripartito en las economías de los municipios y publicó un informe titulado 'La cooperación vale la pena'. Según la evaluación, el diálogo y la cooperación tripartitos permitieron que cada uno de los municipios redujera entre el 2 y el 3,5 por ciento del total de los costes operativos. La cooperación tripartita también impidió las privatizaciones en tres municipios.⁹

Cooperación política

Las elecciones municipales de 2015, a las que hemos aludido en apartados anteriores, fueron entendidas por muchos analistas como una derrota de los conservadores y una victoria para el Partido Laborista y el Partido Verde en particular. Algunos comentaristas políticos resumieron los resultados electorales diciendo que el mapa de Noruega “se ha pintado de rojo”.

Históricamente, el movimiento sindical ha estado vinculado con el Partido Laborista. Además de allanar el camino para desprivatizar algunos servicios, el nuevo paisaje político en los municipios abrió otras oportunidades para Fagforbundet. El sindicato ha firmado acuerdos oficiales sobre cooperación local entre Fagforbundet y el Partido Laborista en unos 200 municipios. Esa cooperación local se mantiene principalmente con el Partido Laborista, pero puede implicar también a otros partidos afiliados políticamente.

En pocas palabras: Fagforbundet se siente optimista con la situación general de las remunicipalizaciones y las desprivatizaciones en Noruega. Nuestro planteamiento estratégico con respecto a la cooperación tripartita a escala municipal, es decir, el diálogo activo entre los sindicatos y los partidos políticos, está dando sus frutos. Creemos que el modelo basado en la cooperación representa la mejor manera de crear empleos y garantizar unas buenas condiciones de trabajo en el plano local. Y estamos convencidos de que es la vía para prestar unos servicios públicos de gran calidad a la ciudadanía y mantener los servicios municipales en manos públicas.



Bjørn Pettersen es responsable del Departamento de Reestructuración de Fagforbundet (Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega) y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de programas públicos de desarrollo.



Nina Monsen es asesora del Departamento de Reestructuración de Fagforbundet y tiene una amplia experiencia en el ámbito de la cooperación, la ayuda al desarrollo y las inversiones del sector privado de los países nórdicos en los países en desarrollo.

Notas

- 1 Tømmerås, Ola (2017) Veireno politianmeldt igjen. *Fagbladet*, 14 de febrero.
- 2 *Norwegian Broadcasting Corporation* (2017) Sjukeheimen gjekk i pluss sjølv om kommunen tok over. 1 de febrero. <https://www.nrk.no/hordaland/sjukeheim-i-pluss-etter-at-kommunen-tok-over-1.13351394>
- 3 *Fagbladet* (2016) 22 de septiembre. <http://fagbladet.no/nyheter/trives-som-kommune-ansatt-6.91.409748.9e3d1babb3>
- 4 Sitio web del Ayuntamiento de Bodø (sin fecha) Proyecto Democracia. <http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprojektet/category10097.html> (consultado el 16 de junio de 2016)
- 5 Dølvik, Jon Erik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe y Bård Jordfald (2015) The Nordic model towards 2030. A new chapter? NordMod2030. Fafo-report 2015:07. Oslo: Fafo Institute for Labour and Science Research.
- 6 Støstad, Jan-Erik (2016) The Nordic model for dummies – All you need to know in 6 minutes. Oslo: SAMAK (Comité de Cooperación de los Partidos Socialdemócratas y las Confederaciones Sindicales Nórdicos).
- 7 NordMod2030 (2014) Summaries of project reports. Oslo: Fafo. <http://fafoarkiv.no/pub/rapp/953/953.pdf> (consultado el 11 de mayo de 2017).
- 8 Oslo Economics (2016) Evaluation of the programme Together for a Better Municipality. Marzo.
- 9 *DeFacto* (2015) 'Cooperation pays off' an evaluation of local tripartite cooperation in three Norwegian municipalities. Informe.

Capítulo 5

Las remunicipalizaciones en Alemania y Austria: consecuencias para el personal

Laurentius Terzic

En Alemania, se han reseñado 347 casos de (re)municipalización en los últimos 16 años. La mayoría de los casos se han producido en el sector de la energía, pero también en los del suministro de agua, la recogida de residuos y algunos otros. En Austria, por su parte, los municipios gozan de una larga tradición de manejo de los servicios públicos, lo cual explica que más de la mitad de los casos sean municipalizaciones que responden a las crecientes necesidades en materia de servicios de la ciudadanía, como la vivienda. ¿Qué entraña la tendencia remunicipalizadora para el personal de las empresas afectadas? ¿Qué sucede cuando se remunicipalizan sus actividades? La mayoría de los sindicatos apoyan que se retome la gestión pública de los servicios y que esta favorezca unos salarios dignos y una mayor orientación en pro del interés general. Sin embargo, hay también voces críticas que advierten contra las remunicipalizaciones en el contexto actual. Así pues, ¿cómo se posicionan quienes representan a trabajadores y trabajadoras?

Las privatizaciones desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras

En Inglaterra, cuna de la tendencia privatizadora desde la década de 1980, el objetivo declarado de la primera ministra Margaret Thatcher era destruir el poder de los sindicatos y mantener bajos los salarios. En Alemania y Austria, el discurso a favor de las privatizaciones fue menos radical, y se centró más bien en promesas que sostenían que, con la prestación privada de los servicios, se reducirían los costes y se mejoraría la eficiencia. Sin embargo, las privatizaciones en Alemania y Austria también

tuvieron graves repercusiones para el personal de las empresas que antes habían sido públicas.¹ Según cálculos de la Fundación Hans Böckler, solo en Alemania se perdieron unos 600 000 puestos de trabajo entre 1989 y 2007 debido a la privatización de los servicios públicos.² Quienes pudieron mantener el empleo, muchas veces experimentaron que las privatizaciones iban acompañadas de una jornada laboral más intensa, una rebaja de los salarios y un empeoramiento de las condiciones laborales.³ Tras las privatizaciones, también era habitual que se introdujera una práctica de discriminación contractual entre las personas recién contratadas, con peores condiciones, y el personal más antiguo. El empleo precario y temporal fue al alza. En algunos sectores de servicios, como la gestión de residuos y la limpieza de edificios, la situación es especialmente preocupante. Muchos empleados y empleadas no pueden llegar a fin de mes con sus ingresos, y necesitan un complemento salarial del Gobierno para poder mantenerse.⁴

El papel de los representantes de los trabajadores en el debate sobre la remunicipalización

En las últimas décadas, los y las representantes de los trabajadores y las trabajadoras de Alemania y Austria han desempeñado un papel fundamental en la defensa del sector público. Estuvieron muy activos en la Iniciativa Ciudadana Europea 'Right2Water', que perseguía garantizar el derecho al agua y el saneamiento en la UE, detener la privatización de los servicios de agua y lograr un acceso universal al agua y el saneamiento. Casi 1,9 millones de personas de toda Europa firmaron esta iniciativa en 2014. Cabe mencionar también la campaña 'Lo público es esencial', que se puso en marcha para defender los servicios públicos. Iniciada por el sindicato alemán ver.di, la campaña aboga por un Estado social activo, una sociedad social y buenas condiciones laborales.

El mantra de 'más sector privado y menos Estado' ya había sido denunciado por los sindicatos incluso antes de la crisis económica, cuando las privatizaciones aún estaban en boga. Desde entonces, este escepticismo

no ha hecho más que aumentar. En Alemania, la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) y el Sindicato Unido de Servicios (ver.di) exigen “no a las privatizaciones en contra de la voluntad de la ciudadanía”.⁵ En Austria, la Federación Austriaca de Sindicatos (ÖGB) y la Cámara Federal del Trabajo (AK) suelen manifestarse en contra de las privatizaciones y a favor de mantener un amplio abanico de servicios públicos. Esta actitud se ha visto reafirmada últimamente en el debate sobre el proyecto de tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, el CETA.⁶ En Austria, los sindicatos formaron parte del equipo que impulsó la petición de un referendo sobre el CETA y otros tratados comerciales, como el TTIP y el TiSA, que a enero de 2017 había conseguido unas 563 000 firmas.

La esperanza de que los procesos remunicipalizadores brinden mejoras, que suelen compartir quienes representan a los trabajadores y las trabajadoras, se explica en gran medida por las malas experiencias con las privatizaciones de las empresas públicas. El sector público aún mantiene un sistema operativo con condiciones laborales comparativamente buenas y un empleo seguro. En cuanto recuperan el control político, las autoridades públicas pueden poner fin al empleo precario y crear puestos permanentes, sujetos a las cotizaciones obligatorias de la seguridad social. Además, la negociación colectiva suele ser más favorable con un empleador público que con una compañía privada, como lo demuestra el sector de gestión de residuos.⁷ Las remunicipalizaciones también puede beneficiar al mercado de trabajo en general en las ciudades y regiones donde se ponen en práctica, ya que permiten crear empleo local y refuerzan el poder adquisitivo en la zona.⁸

La mejora de las condiciones laborales no son la única razón por la que quienes representan a los trabajadores y las trabajadoras abogan por que el sector público desempeñe un papel protagonista. Ver.di destaca otras ventajas de las remunicipalizaciones, como “la generación de ingresos” para el sector público y la recuperación de la “flexibilidad política”. Además, “el conflicto entre la maximización de los beneficios privados y la orientación hacia el bien común” se resolvería en favor del público.⁹

Las consecuencias de las remunicipalizaciones para el personal: casos prácticos

No existen datos empíricos sobre el impacto de las remunicipalizaciones entre el personal de los servicios, pero los casos concretos ilustran qué clase de cambios suelen llegar de la mano de estos procesos. En el marco de este proyecto de estudio, se recopiló información sobre unos 20 casos en Alemania y Austria para documentar los efectos sobre la plantilla, mediante la consulta de bibliografía y medios de comunicación, el envío de peticiones por correo y la realización de entrevistas semiestructuradas.

Algunos célebres casos de remunicipalización en otros países surgieron como respuesta al rápido deterioro de las infraestructuras después de la privatización. Un buen ejemplo sería la readquisición de la red ferroviaria británica. Los propietarios privados obtuvieron cuantiosas ganancias durante varios años, pero el estado de los ferrocarriles empeoró. Después de que se produjeran algunos accidentes graves, el Estado no tuvo más remedio que rescatar el servicio desembolsando una gran suma de dinero. En Alemania y Austria no encontramos ejemplos tan flagrantes de fracaso operativo, pero sí algunos casos interesantes de menor envergadura, por ejemplo, en el sector de la limpieza. Con las remunicipalizaciones también se pudo mejorar el rendimiento del servicio y las condiciones ofrecidas a la plantilla.

Cuadro I

Los servicios de limpieza en Wilhelmshaven, Friburgo y Dortmund

En **Wilhelmshaven**, el servicio de limpieza urbana se remunicipalizó porque el funcionamiento de la compañía privada era insatisfactorio. Desde entonces, los contratos laborales han pasado a ser permanentes y el salario del personal se corresponde con el establecido por el convenio colectivo para la función pública. El nivel

de satisfacción con el desempeño del personal de limpieza también se ha incrementado.¹⁰ En **Friburgo** y **Dortmund** se vivieron unos cambios positivos parecidos con la remunicipalización de los servicios de limpieza de edificios. En ambos casos, tras el proceso, a los equipos de limpieza también se les encomendaron tareas de mantenimiento (por ejemplo, suelos y muebles). De esta manera, se pueden reducir costes a largo plazo.¹¹

Las remunicipalizaciones también pueden estar vinculadas con motivos de carácter estratégico, económico y político. Por lo general, se trata de casos en los que las autoridades públicas —normalmente de ámbito municipal— intentan recuperar el control político perdido con la privatización. Las empresas municipales pueden ampliar su capacidad para asumir un papel activo en la política de empleo, pero también en la planificación urbana o en las decisiones relacionadas con la transición energética. A veces, el motor que impulsa el cambio es la iniciativa ciudadana. Normalmente, esta responde al deseo de volver a poner en manos de la ciudadanía los servicios públicos y acabar con la fuga de beneficios hacia grandes compañías. Otro de los motivos que se suele encontrar en el sector de la energía es la demanda de acometer con presteza una transición energética. La mejora de las condiciones laborales y los salarios del personal rara vez se plantea de forma explícita como un objetivo, aunque sí se enumeran con más frecuencia las metas en materia de empleo en general.

En **Heinsberg**, el servicio de ambulancias se remunicipalizó en 2012. La decisión contó con el apoyo de socialdemócratas, conservadores, verdes y liberales. En este caso, la mejora de las condiciones en que trabajaba la plantilla fue uno de los objetivos declarados. Y ahora se les ofrece “una seguridad a largo plazo del lugar de trabajo, así como un uniforme y una remuneración adecuada”.¹²

El servicio de limpieza de edificios de **Bochum** se remunicipalizó en la década de 1990, a lo que siguió una segunda fase en 2013. Desde entonces, se han creado 660 empleos sujetos a seguro social y destinados a personas que no lo hubieran tenido fácil en el mercado laboral. La medida no solo fue acompañada de un acuerdo para adecuar los pagos al convenio colectivo, sino también de mejoras en las condiciones laborales. Ahora se respetan las horas de trabajo y las normas de seguridad establecidas, algo que no solía suceder con los antiguos empleadores privados.¹³

Asimismo, se cuentan muchos casos en los que la plantilla no ha vivido ningún cambio, como, por ejemplo, los de la municipalización de varios teatros en Viena. Estos llevaban mucho tiempo bajo la gestión de los mismos directores y no estaban creando nuevos tipos de producciones, por lo que el interés del público estaba disminuyendo. El objetivo de la municipalización era la transformación artística, con el fin de otorgar a jóvenes directores la oportunidad de reformar los teatros. La municipalización fue dirigida por una asociación creada por la ciudad. Aparte del ámbito de la gestión, el personal permanente se mantuvo sin cambios y sigue contratado con las mismas condiciones que antes.¹⁴

En Alemania y Austria, las razones económicas son las que se aducen con más frecuencia para justificar las remunicipalizaciones. Los contextos específicos varían. En el sector de la gestión de residuos, por ejemplo, a veces, cuando se organizaba una licitación pública, solo se presentaban unas pocas ofertas privadas. Y resultó que, en ocasiones, las ofertas eran tan caras que resultaba más favorable asumir la labor de forma interna. Por otro lado, las remunicipalizaciones en el sector de la gestión de residuos en Alemania resultan atractivas porque las empresas municipales disfrutaban de ventajas fiscales. En otros casos, los proveedores de electricidad y gas prometen generar unos beneficios que desean absorber los propios municipios, en lugar de dejarlos en manos de accionistas privados.

En 2013, el municipio de **Elbtalaue**, de 21 000 habitantes, remunicipalizó las redes eléctricas. El motivo principal era reforzar el presupuesto municipal mediante subsidios cruzados. Las redes eléctricas, que generan beneficios, ahora pueden contribuir al mantenimiento de las piscinas, que son deficitarias. Pero la remunicipalización también se consideró como una herramienta para crear empleos en la región y para aumentar la creación de valor regional mediante la adjudicación de contratos a empresas de la zona.¹⁵

En el distrito de **Rhine-Hunsrück**, el sistema de gestión de residuos se remunicipalizó fundamentalmente para que el municipio ahorrara y pudiera reducir los gastos vinculados con los residuos. Sin embargo, también se introdujeron mejoras que repercutieron en la plantilla. Los trabajadores y las trabajadoras ahora cobran el salario establecido por el convenio colectivo. Y al eliminar las horas extraordinarias, que eran una práctica habitual, se crearon cinco puestos de trabajo.¹⁶

Aparte de los ejemplos positivos, como se comentó anteriormente, también hay casos en que los bajos salarios, después de la remunicipalización, no se han adaptado a las condiciones de los servicios públicos. En **Lüneburg**, la remunicipalización de la gestión de residuos se puso en marcha por razones de carácter estrictamente económico. Para evitar elevar los salarios del personal al nivel de la escala salarial pública, la ciudad creó una filial en la que regían “las normativas del sector privado de la gestión de residuos”. Desde entonces, solo se ha contratado a nuevas personas a través de la filial. La decisión se explica por el objetivo de “mantener y mejorar la competitividad frente a las compañías privadas, en especial en el caso de una licitación a escala europea”.¹⁷

El escepticismo de los representantes de los trabajadores en el sector de la energía

A pesar de todos estos argumentos a favor de las remunicipalizaciones, en Alemania se han dado casos en los que quienes representan a los trabajadores y las trabajadoras se han mostrado contrarios a acabar con las privatizaciones. Sobre todo en el sector de la energía, se han producido polémicos enfrentamientos entre representantes del personal de las compañías y los sindicatos del sector público.¹⁸

La postura que defiende mantener las privatizaciones se basa fundamentalmente en las políticas relativas a la energía y el empleo.¹⁹ Thies Hansen y Peter Grau, representantes de personal de la compañía E.ON, critican el hecho de que quienes abogan por la remunicipalización a menudo pierden de vista las condiciones generales y las restricciones de la regulación del mercado de la energía, así como el riesgo económico que entraña el funcionamiento de la red. En estos ámbitos, la remunicipalización podría resultar contraproducente y no servir a los intereses de la plantilla.²⁰

Muchas ciudades considerarían que las redes de energía son “una gallina poniendo huevos de oro”. Para modernizar las redes eléctricas, en especial si se aspira a garantizar una transición energética, se necesitan muchas inversiones. Este desafío resultaría aún más costoso si el número de operadores de redes creciera y las redes se fragmentaran cada vez más. Muchos municipios con presupuestos escasos no podrían efectuar las inyecciones de capital necesarias para el funcionamiento de la red.²¹ Y se teme que los municipios, como nuevos propietarios, pasarían la presión financiera al personal, que acabaría convirtiéndose en víctima del proceso.

Según Hansen y Grau, otro problema en el sector de la energía es la denominada ‘regulación de incentivos’. Desde 2009, a los operadores de redes se les ha impuesto unos límites máximos de ingresos, que se determinan sobre la base de una comparativa de eficiencia a escala nacional. En el

marco de esta regulación de los incentivos, los operadores deben alcanzar mejoras de eficiencia cada año. Esto significa que “se impone una presión de costes por el sistema de incentivos sobre los operadores de redes, lo cual suele afectar de forma negativa al personal”. Los impactos problemáticos de la regulación de los incentivos se intensificarían aún más cuando la red se transfiera a un nuevo operador, por ejemplo, en el caso de una remunicipalización. “El precio de compra de una red no debe incluirse en los cálculos del máximo de ingresos, por lo que el nuevo comprador debe generar todos los pagos de intereses y amortizaciones por la adquisición de la red de forma adicional a los requisitos de la regulación de incentivos.”²²

La preocupante situación financiera de varias autoridades locales, por un lado, y el marco de política energética, por el otro, se traducen en las preocupaciones siguientes: pérdida de empleos, planes de pensiones, seguridad en el lugar de trabajo y pérdida de ingresos, ya que los salarios en el sector energético son en parte superiores a los del sector público.²³

Cuadro II

La energía en Hamburgo

Una de las remunicipalizaciones más duramente criticadas por los sindicatos fue la readquisición de las redes de energía de **Hamburgo**, que en aquel momento pertenecían en un 74,9 por ciento a los grupos energéticos Vattenfall y E.ON., dos de los principales actores del sector en Europa. La iniciativa remunicipalizadora fue puesta en marcha por más de 50 organizaciones de la sociedad civil de Hamburgo, que consiguieron convocar un referendo sobre la remunicipalización de las redes de energía, que se celebró en 2013. El consejo de trabajadores y trabajadoras de la empresa temía una caída de los ingresos, una reducción de las normas sociales y una amenaza para los empleos. La plantilla estaba muy satisfecha con

el empleador privado y deseaba que se mantuvieran los empleos existentes, las condiciones laborales y los salarios. Además, se re- celaba del hecho de que se pudiera ‘contrafinanciar’ el gasto pú- blico que entrañaría el traspaso de la red a expensas del personal.²⁴

A pesar de la resistencia que opusieron algunos sectores sindicales, la mayoría de los partidos políticos (SPD, CDU y FDP) y las asocia- ciones patronales, los habitantes de Hamburgo votaron a favor de remunicipalizar las redes. En 2015, la ciudad readquirió la red eléc- trica. Y se prevé que la red de gas se remunicipalice en 2018-19.²⁵

¿Se han confirmado los temores del consejo tras la remunicipali- zación? No lo parece: las condiciones laborales y el salario no han empeorado. Sin embargo, el compromiso político de mantener el convenio colectivo tiene un plazo limitado. En lo que se refiere a los empleos, se puede sacar una conclusión positiva: ahora hay más puestos de trabajo que antes, ya que ahora los servicios se compran a las filiales (municipales) de la empresa.²⁶

Conclusión

En la mayoría de los casos investigados, las remunicipalizaciones se han traducido en mejoras, y el temor de que empeoraran las condiciones no se ha materializado. Las mejoras son más habituales en los sectores en los que el personal lidia con salarios bajos, malas condiciones laborales y contratos temporales. Sin embargo, no se puede generalizar sobre el hecho de si la remunicipalización tiene un impacto positivo o negativo para la plantilla.

Cuando las remunicipalizaciones están vinculadas con un retorno a los regímenes laborales del servicio público, suelen dar lugar a unas condi- ciones de trabajo notablemente mejores en la mayoría de los sectores. El

sector de la energía es un caso singular, ya que está “dominado por unas pocas grandes corporaciones que tienen altos márgenes de beneficio y ofrecen a sus empleados condiciones de trabajo comparativamente buenas”.²⁷ Sin embargo, incluso en el sector energético, quienes representan a los trabajadores y las trabajadoras expresaron preocupaciones, aunque aún no se haya documentado un empeoramiento real de la situación. Por el contrario, la escala salarial y las condiciones laborales se mantuvieron sin cambios, igual que con el propietario privado.

El motivo que impulsa la remunicipalización también desempeña un papel importante. Si no se trata de garantizar una mayor orientación hacia el bien común, sino más bien de conseguir ahorrar costes y mejorar la eficiencia, conviene introducir una nota de cautela. Estos objetivos no deben conseguirse a expensas del personal.

Pese a toda la emoción que implica que los servicios públicos recuperen la responsabilidad del bien común, es importante no perder de vista los objetivos sociopolíticos asociados con ello. El sociólogo Andrej Holm advierte: “Si para evaluar las instituciones públicas nos centramos únicamente en los indicadores económicos, estamos siguiendo la lógica neoliberal de la acción. La remunicipalización por sí sola no resuelve ningún problema, ya que no lleva necesariamente al fin de la lógica miope que persigue la gestión empresarial”.²⁸ Por lo tanto, la polémica en torno a las remunicipalizaciones no debe limitarse a la cuestión de la figura jurídica y las estructuras de propiedad, sino centrarse en los impactos sociales reales de este proceso.



Laurentius Terzic es asistente de investigación en los departamentos de Medioambiente, Movilidad y la UE, y Política Internacional en la Cámara de Trabajo de Viena. Estudia Urbanismo en la Universidad Técnica de Viena.

Notas

- 1 Hermann, C. y Flecker, J. (2012) *Privatisation of Public Services. Impacts for Employment, Working Conditions, and Service Quality in Europe*. Nueva York, p. 1.
- 2 Brandt, T. t Schulten, T. (2008) Privatisierungen in Deutschland – eine Bilanz. http://www.boeckler.de/pdf/v_2008_11_27_brandt_schulten.pdf (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 3 Matecki, C. y Schulten, T. (2013) Zwischen Privatisierung und Rekommunalisierung. En C. Matecki y T. Schulten (eds.), *Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung*. Hamburgo, p. 14.
- 4 Halmer, S. y Hauenschild, B. (2014) Rekommunalisierungen öffentlicher Dienstleistungen in der EU. Viena, pp. 26–27.
- 5 DGB (ed.) (2011) Keine Privatisierung gegen Bürgerwillen. <http://www.dgb.de/the-men/+co++3f2b2c46-7710-11e0-70fa-00188b4dc422> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 6 BAK (ed.) (2016) Kaske: „Wir bleiben CETA-kritisch“. https://www.arbeiterkammer.at/service/presse/Wir_bleiben_CETA-kritisch.html (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 7 Falk, C. y Schulten, T. (2014) Rekommunalisierung und Gewerkschaften – ein spannungsgeladenes Verhältnis. En O. Prausmüller y A. Wagner (ed.), *Reclaim Public Services. Bilanz und Alternativen zur neoliberalen Privatisierungspolitik*. Hamburgo, pp. 218–219, 230.
- 8 Halmer, S. y Hauenschild, B. (2014) Rekommunalisierungen öffentlicher Dienstleistungen in der EU. Viena, p. 31.
- 9 Sternatz, R. (sin fecha) Rekommunalisierung stärkt die kommunale Selbstverwaltung. <https://gemeinden.verdi.de/themen/rekommunalisierung/+co++d72f28ac-ceed-11e3-b956-525400248a66> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 10 ver.di (ed.) (sin fecha) Geputzt wird wieder kommunal. <https://gemeinden.verdi.de/themen/rekommunalisierung/+co++5644e93e-ceed-11e3-a2cb-525400248a66> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 11 Duttine, A. (2016) Correo electrónico, 9 de diciembre.
- 12 Stumpf y Kossendey (ed.) (2010) Heinsberg für Rekommunalisierung. <http://www.skverlag.de/rettungsdienst/meldung/newsartikel/heinsberg-fuer-rekommunalisierung.html> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 13 Wolf, H. (2013) Warum die Stadt Bochum wieder eigene Putzkräfte hat. <https://www.der-westen.de/region/rhein-und-ruhr/warum-die-stadt-bochum-wieder-eigene-putz-kräfte-hat-id8727386.html> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 14 Pronay, C y Stöphl, T. (2016) Entrevista, 5 de diciembre.
- 15 Horchelhahn, K. (2012) Rekommunalisierung in der Samtgemeinde Elbtaale. En Verband kommunaler Unternehmen (ed.), *Konzessionsverträge. Handlungsoptionen für Kommunen und Stadtwerke*. Berlin, p. 56.
- 16 Halmer, S. y Hauenschild, B. (2014) Rekommunalisierungen öffentlicher Dienstleistungen in der EU. Viena, p. 141–142.
- 17 Candeias, M., Rilling, R. y Weise, K. (2008) Krise der Privatisierung – Rückkehr des Öffentlichen. En Hans-Böckler-Stiftung (ed.), *WSI Mitteilungen 10/2008*. Düsseldorf, p. 566.
- 18 Falk, Claudia y Schulten, T. (2014) Rekommunalisierung und Gewerkschaften – ein spannungsgeladenes Verhältnis. En O. Prausmüller y A. Wagner (eds.), *Reclaim Public Services. Bilanz und Alternativen zur neoliberalen Privatisierungspolitik*. Hamburg, p. 220.
- 19 *Ibid.*, pp. 221–222.

- 20 Hansen, T. y Grau, P. (2013) Ein kritischer Blick auf Rekommunalisierungsprojekte in der Energiewirtschaft. En C. Matecki y T. Schulten (eds.), *Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung*. Hamburgo, p. 141.
- 21 Ibid., p. 142.
- 22 Ibid., p. 144.
- 23 Ibid., p. 147.
- 24 Hansen, T. y Grau, P. (2013) Ein kritischer Blick auf Rekommunalisierungsprojekte in der Energiewirtschaft. En C. Matecki y T. Schulten (eds.), *Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung*. Hamburgo, p. 147.
- 25 Freie und Hansestadt Hamburg (sin fecha) Rückkauf der Energienetze. Umsetzung Schritt für Schritt. <http://www.hamburg.de/energiewende/4110666/ergebnis-volksentscheid/> (consultado el 2 de febrero de 2017).
- 26 Hansen, T. (2016) Correo electrónico, 22 de diciembre.
- 27 Falk, C. y Schulten, T. (2014) Rekommunalisierung und Gewerkschaften – ein spannungsgeladenes Verhältnis. En O. Prausmüller y A. Wagner (eds.), *Reclaim Public Services. Bilanz und Alternativen zur neoliberalen Privatisierungspolitik*. Hamburgo, pp. 226–227.
- 28 Holm, A. (2008) Trendwende statt weiterer Privatisierung. <http://www.bmgev.de/mieterecho/327/09-rekommunalisierung-ah.html> (consultado el 2 de febrero de 2017).

Capítulo 6

Contra la corriente: nuevos modelos para garantizar los servicios esenciales en la India

Benny Kuruvilla

En la India, independientemente de la administración que ostente el poder en el Gobierno central, en los últimos 25 años se ha vivido una consolidación de las políticas neoliberales que despojan al Estado de los servicios esenciales y los pone en manos del sector privado. Esto sucede a pesar de que cada vez son más las pruebas que apuntan al fracaso del sector privado en la prestación de servicios de calidad, eficientes, asequibles y responsables a todos los grupos de la población. Hoy día, la India cuenta con uno de los sistemas de salud más privatizados del mundo, ya que la atención médica privada comprende el 80 por ciento de la asistencia ambulatoria y el 60 por ciento de la asistencia hospitalaria.¹ El deplorable abandono del sector público ha dado lugar al rápido crecimiento de un sistema hospitalario de carácter corporativo, que en gran medida no está regulado, es poco ético y, además, resulta costoso. La privatización de la distribución eléctrica en los estados de Odisha y Delhi no ha funcionado, ya que las compañías privadas han sido incapaces de reducir las pérdidas, abordar la corrupción y mejorar la eficiencia y los servicios. Ahora, después de que se anulara la licencia de Reliance Infrastructure, toda la distribución de energía del estado de Odisha vuelve a estar en manos del Estado.² Hace unos años, la movilización de unas dinámicas campañas ciudadanas consiguió paralizar los intentos de privatizar la distribución del agua en Delhi (2005) y Mumbai (2007), y actualmente el Sindicato de Personal Municipal y la ciudadanía están pidiendo que se cancele la asociación público-privada en Nagpur, en el estado de Maharashtra.³

A pesar de que el Gobierno central mantiene un enfoque favorable al sector privado, los enérgicos procesos de toma de decisiones en el ámbito federal garantizan a las administraciones estatales una notable flexibilidad para promulgar políticas en pro del interés general. En este capítulo se intenta plasmar una reciente tendencia positiva que ha creado nuevas entidades públicas, tanto en el ámbito de los servicios comunitarios de salud como de la seguridad alimentaria, en los estados de Delhi y Tamil Nadu. También repasamos dos iniciativas remunicipalizadoras: una en el estado de Kerala, en el campo de la educación primaria, y otra por la que el Estado tomó el relevo después de que fracasara el intento de gestionar el metro del aeropuerto de Delhi con un modelo de asociación público-privada.

Clínicas comunitarias de salud en Delhi

En febrero de 2015, el Partido Aam Aadmi (AAP, o Partido del Hombre Común), un actor recién llegado a la política electoral, se alzó con una victoria increíble en las elecciones de Delhi, al conseguir 67 de los 70 escaños de la Asamblea Estatal. En julio de 2015, la administración del AAP inició el proceso de hacer realidad una de sus principales promesas electorales —la prestación de un servicio de salud asequible— estableciendo 1000 clínicas comunitarias (*mohalla*) en toda la ciudad de Delhi.⁴ Las clínicas *mohalla* son el último y crucial peldaño de un sistema de salud articulado en torno a tres pilares propuesto por el gobierno del AAP. Además de las clínicas *mohalla*, una serie de policlínicas (donde se atienden varias especialidades) y de hospitales especializados abarcan los niveles secundario y terciario.

En febrero de 2017, en algunas de las zonas más pobres de Delhi estaban funcionando unas 110 clínicas (una cifra muy inferior a las 1000 prometidas). Las clínicas han sido instaladas por el Departamento de Obras Públicas, con un coste aproximado de unos 2 millones de rupias (30 000 dólares) por clínica.⁵ Como son pequeñas y utilizan unas cabinas portátiles prefabricadas y semipermanentes que se pueden instalar con mucha facilidad en prácticamente cualquier lugar, tienen un coste menor que los

dispensarios del Gobierno (cada uno de los cuales cuesta unos 450 000 dólares). En noviembre de 2015, la administración del AAP había anunciado que destinaría 2090 millones de rupias (31,4 millones de dólares) al proyecto de las 1000 clínicas.⁶ A diciembre de 2016, no se había utilizado gran parte de esta suma. Posteriormente, en el presupuesto 2017-2018 que se presentó el 8 de marzo de 2017, la asignación total para el sector de la salud ascendió a 57 300 millones de rupias (860 millones de dólares).⁷ El aumento de las asignaciones presupuestarias se entiende como un claro compromiso por parte del Gobierno de establecer las 890 clínicas restantes.

Cada clínica cuenta con una plantilla integrada por un médico, un enfermero, un farmacéutico y un técnico de laboratorio. Las consultas médicas, los medicamentos y las pruebas de laboratorio se ofrecen de forma totalmente gratuita, independientemente de la situación económica de los pacientes. Aunque la mayoría de los doctores y doctoras son profesionales privados, algunos proceden del Departamento de Salud del estado. A los doctores privados seleccionados se les paga 30 rupias (0,45 dólares) por paciente. Los técnicos de laboratorio cuentan con los equipos necesarios para recoger muestras para más de 200 pruebas de diagnóstico. El gobierno de Delhi afirma que, desde que se empezaron a instalar estas clínicas, en la segunda mitad de 2015, más de 2,6 millones de los habitantes más pobres de la ciudad han recibido un servicio médico gratuito y de calidad.⁸

Dado que se trata de una iniciativa relativamente nueva, todavía no se dispone de estudios exhaustivos para evaluar su eficacia. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública, el modelo de las clínicas *mohalla* presenta algunas deficiencias graves. Por un lado, delegar el servicio a doctores privados sin incrementar la contratación de médicos del gobierno podría conducir a una dependencia excesiva del sector privado. Esta propensión hacia el sector privado se ve aún más reforzada por el hecho de que muchos de los análisis de muestras se están externalizando



Clínica de salud en Delhi

Pacientes en una clínica mohalla en Nueva Delhi

a laboratorios privados. Además, la remuneración del personal médico no debería estar vinculada con el número de pacientes a los que se visita.

Hay ya noticias de que algunas de las clínicas están emitiendo facturas infladas a cuenta de la tesorería pública.⁹ Un artículo reciente en la revista médica *The Lancet* señala que una de las graves limitaciones de la política de salud del AAP se deriva del gran acento que pone en la atención curativa y la negligencia de los cuidados preventivos.¹⁰ Estos últimos entrañarían tener en cuenta una serie de intervenciones sociales y ambientales que podrían mejorar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas más pobres de Delhi.

Pese a estas preocupaciones, para las personas más pobres de Delhi, que antes dependían de costosas clínicas privadas o incluso de médicos curanderos, las clínicas *mohalla* representan un gran éxito.¹¹ El gran número

de pacientes que está acudiendo a estas clínicas supone que la promesa del gobierno del AAP de garantizar una atención básica de la salud gratuita a todos los habitantes de Delhi esté un poco más cerca de materializarse. El modelo de las clínicas *mohalla* se está siguiendo de cerca en los círculos de políticas de salud de todo el país y del extranjero. Si se introdujeran mejoras que evitaran el actual enfoque de asociación público-privada, podrían ayudar a abandonar la peligrosa y costosa dependencia del sector privado y demostrar que un sistema de atención primaria de la salud financiado y gestionado de manera pública supone la vía más adecuada para lograr una atención universal.

La seguridad alimentaria y los comedores ‘Amma’ en Tamil Nadu

El estado de Tamil Nadu ha sido un pionero histórico de los programas sociales en la India. El mayor programa de alimentación escolar del mundo, que cada día proporciona un almuerzo nutritivo gratuito a unos 120 millones de escolares de toda la India, se puso en marcha en la década de 1920.¹² Los comedores ‘Amma’ representan solo la última de una larga lista de políticas innovadoras que han beneficiado a las personas pobres y marginadas.

La ex jefa del gobierno de Tamil Nadu, Jayalalitha, conocida popularmente como ‘Amma’ (madre), estableció los comedores en febrero de 2013. Para empezar, se impulsaron a través de un programa piloto de la Corporación Municipal de Chennai en los 200 sectores de la ciudad. Apenas unos meses después, dada la extraordinaria respuesta que recibieron, el número se incrementó a más de 300 solo en Chennai. Para 2016, se habían extendido ya a otros municipios del estado y, según los últimos cálculos, actualmente funcionan 657 comedores en nueve distritos de Tamil Nadu.

Cada uno de los comedores está gestionado por su respectiva corporación municipal. El gobierno del estado otorga una subvención total de 3000 millones de rupias (45 millones de dólares) a los diversos municipios para

que cubran los gastos operativos de los 657 comedores.¹³ La Corporación de Suministros Civiles de Tamil Nadu también destina a los municipios un subsidio adicional para la compra de arroz y legumbres. A pesar de estos subsidios, teniendo en cuenta el precio increíblemente bajo de las comidas (véase la tabla abajo), alrededor del 50 por ciento del coste de funcionamiento de los comedores corre a cargo de las autoridades municipales. Ninguno de los comedores obtiene beneficios.

Las comedores abren a las siete de la mañana y funcionan hasta las nueve de la noche, en tres turnos que sirven desayuno, almuerzo y cena. El menú y el precio de las comidas se ofrecen en la tabla que sigue.¹⁴

Comida	Plato	Precio
Desayuno	Iidli (pastel de arroz al vapor) con sambhar (curry de lentejas)	1 rupia (0,01 dólares)
	Pongal (un plato de arroz, frijoles, coco, leche y azúcar <i>jaggery</i>)	3 rupias (0,04 dólares)
Almuerzo	Arroz alimonado	5 rupias (0,07 dólares)
	Arroz sambhar	5 rupias
	Arroz con hoja de curry	5 rupias
	Cuajada de arroz	3 rupias
Cena	2 chapatis (pan de trigo) con dal (curry de lentejas) o curry de verduras	3 rupias (0,04 dólares)



Comedor 'Amma' en Tamil Nadu

Un equipo de mujeres cocina en un comedor 'Amma' de Tamil Nadu

Los comedores son una iniciativa en la que solo trabajan mujeres; por lo general, cada uno de ellos contrata hasta 13 personas, pero los más grandes (albergados en los hospitales estatales) cuentan con una plantilla de hasta 25 mujeres. Las mujeres que trabajan en los comedores proceden de los sectores más pobres de la sociedad y reciben del municipio un salario mensual de 9000 rupias (135 dólares). Se calcula que, como promedio, cada comedor presta servicio a unas 500 personas al día, lo cual supone hasta 328 500 comidas nutritivas en todo el estado.¹⁵ Las autoridades gubernamentales estiman que, en 2017, los 300 comedores de la ciudad de Chennai servirán hasta 500 millones de idlis para desayunar.¹⁶

La crisis agraria en el ámbito rural ha desembocado en una migración en masa hacia las ciudades en toda la India.¹⁷ La falta de empleo digno en las ciudades ha dado lugar a unos altos índices de hambre y desnutrición entre las poblaciones migrantes. Durante los últimos cuatro años, los comedores 'Amma' de Tamil Nadu han desempeñado un papel importante

para garantizar que no solo los pobres migrantes, sino también quienes se ganan el jornal a diario y otras comunidades marginadas gocen de acceso a tres comidas diarias por un precio tan bajo como 20 rupias (0,30 dólares). Es evidente que los comedores han alcanzado un éxito notable, ya que facilitan empleos sostenibles a miles de mujeres y garantizan la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas pobres de los entornos urbanos de Tamil Nadu. Ahora se está pidiendo que el programa se extienda a otros municipios semiurbanos y pequeños pueblos del estado. Además, ha animado a otras administraciones estatales, como Odiha, Delhi, Rajastán, Uttarakhand y Andhra Pradesh, a poner en marcha comedores populares parecidos.

Cuadro I

Kerala: el gobierno del estado asume el control de escuelas privadas deficitarias

El Frente Democrático de Izquierdas (LDF), una coalición de partidos de izquierdas, ganó las elecciones estatales de Kerala en mayo de 2016. A los dos meses de haber asumido el poder, el gobierno emprendió medidas para hacerse cargo de unas escuelas primarias privadas que se estaban cerrando con el pretexto de que eran entidades deficitarias. Al parecer, en todo el estado hay más de 1000 escuelas privadas subvencionadas que se enfrentan a un posible cierre. Se trata de escuelas administradas por una dirección privada, pero con cierta ayuda del gobierno estatal, que se consideran insostenibles desde el punto de vista económico debido al bajo nivel de matriculaciones.

La dirección de una escuela primaria con 133 años de antigüedad, de propiedad privada pero que recibe ayudas del estado, en Malaparamba, en el norte de Kerala, intentó cerrar la escuela en 2014.

Empezaron a demoler partes del edificio de la escuela para transformar las instalaciones en un proyecto de promoción inmobiliaria. Pero la acción se topó con las protestas de un comité escolar formado por organizaciones de estudiantes, padres y madres, y público en general. El comité paralizó la demolición y recaudó fondos de la comunidad local para reconstruir el edificio destruido en solo dos meses. A pesar de este valiente esfuerzo por mantener abierta la escuela, el Tribunal Supremo de Kerala emitió un veredicto favorable a la dirección privada en mayo de 2016 y ordenó que la escuela cerrara para junio de 2016.¹⁸ El profesorado y los estudiantes fueron trasladados a un centro temporal para continuar las clases.

En respuesta a la campaña infatigable del comité escolar, en noviembre de 2016 el gobierno del LDF remunicipalizó la escuela cerrada.¹⁹ El ministro de Educación anunció la decisión frente a los estudiantes y prometió una subvención de 10 millones de rupias (150 000 dólares) para un nuevo edificio. La escuela ha cambiado de nombre y ahora se llama 'Escuela Primaria Estatal de Malaparamba'. El estado también asumió el control de otras tres escuelas que se habían clausurado en circunstancias similares. El gobierno del LDF está ahora tramitando una enmienda del Reglamento de Educación de Kerala, con la idea de facilitar los procedimientos para poder hacerse cargo de todas las escuelas privadas deficitarias que se enfrentan al cierre.

Cuadro II

Delhi: la desprivatización de la línea de metro del aeropuerto

La línea rápida de metro del aeropuerto de Delhi (DAME) se completó en 2011, con un coste de 57 000 millones de rupias (857 millones de dólares). Fue el primer proyecto de ferrocarril me-

tropolitano de la India que se emprendió siguiendo un modelo de asociación público-privada, en que la empresa estatal Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) se asoció con una de las mayores compañías indias del sector privado, Reliance Infrastructure. Reliance se hizo con el proyecto de asociación sin dificultades, y consiguió una concesión de 30 años con una oferta agresiva, al aceptar que pagaría a DMRC un cánón anual de 510 millones de rupias (7,6 millones de dólares) más el 1 por ciento de los ingresos brutos anuales, dos sumas que se irían incrementando de forma gradual. Cabe destacar la diferencia de esta propuesta con la de otra compañía que perdió el concurso de licitación, un consorcio conjunto de General-Electric y Larsen & Toubro, que solicitó a DMRC que, en caso de ganar el contrato, se le concediera un subsidio anual y un préstamo a largo plazo sin intereses.²⁰ Reliance creó la compañía Delhi Airport Metro Express Private Limited (DAMEPL) para poner en marcha y ejecutar el proyecto de 22,7 km de línea, desde el centro de negocios de la ciudad hasta la terminal internacional del aeropuerto de Delhi.

El proyecto empezó a derrumbarse rápidamente, en menos de dos años. En un principio, la compañía DAMEPL suspendió el servicio durante seis meses (de julio de 2012 a enero de 2013) por problemas técnicos, y después, en junio de 2013, anuló el contrato de concesión con DMRC, argumentando su falta de capacidad para cumplirlo. Este fiasco se explica por numerosos motivos. Por un lado, DAMEPL sobrestimó claramente el rendimiento y subestimó los elementos más complejos que entraña un proyecto de infraestructura que requiere mucho capital. La propuesta se planteó partiendo del supuesto de que el tráfico se situaría en unos 42 500 pasajeros al día. Pero esta cifra, en realidad, se acercaba más a un promedio de 17 000 por día. Además, el precio de 180 rupias (2,70 dólares) para un viaje de ida desde el centro de la ciudad hasta la terminal del aeropuerto disuadía a los posibles pasajeros, que también podían usar la línea convencional del aeropuerto. La

creación de un complejo de ‘aerociudad’ cerca del Aeropuerto Internacional, que funcionaría como un centro de negocios, entretenimiento y turismo, nunca llegó a materializarse. DAMEPL reportó unas pérdidas económicas de hasta 40 millones de rupias al mes (600 000 dólares) y, para retirarse del proyecto, recurrió a excusas como el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de DMRC.²¹

Posteriormente, en julio de 2013, DMRC se hizo cargo de la línea de metro. En los tres años en que el proyecto ha dependido de las autoridades públicas, la eficiencia ha mejorado (con mayor frecuencia y horarios más precisos) y las tarifas se han reducido, de forma que el tráfico alcanzó un máximo de 50 000 pasajeros en un solo día en agosto de 2016. El precio de un viaje de ida en marzo de 2017 es de 60 rupias (0,90 dólares), un tercio del fijado por DAMEPL.²² Dado que aún hay millones de dólares de préstamos pendientes de devolver a los acreedores del proyecto, DMRC y DAMEPL se encuentran en un proceso arbitral para alcanzar un acuerdo.

Es evidente que estos casos apuntan a que, a pesar de la ofensiva constante de las políticas neoliberales en la India, los gobiernos regionales, si disponen de la voluntad para ello, siguen gozando de cierto margen de maniobra para ir contra la corriente. En el caso de Kerala, fue una lucha popular dirigida por estudiantes y la comunidad local la que permitió a un gobierno progresista promulgar políticas remunicipalizadoras en la educación primaria. Delhi y Tamil Nadu son estados relativamente más ricos, con unos presupuestos adecuados para desplegar programas ambiciosos que garanticen la salud comunitaria y la seguridad alimentaria. Pero uno de los principales desafíos para ampliar los servicios públicos será la cuestión de los recursos fiscales. Teniendo en cuenta que el Gobierno central está promulgando nuevas medidas unificadas en materia tribu-

taria, como el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), que empezará a aplicarse en 2017, la capacidad de los gobiernos estatales para promulgar políticas fiscales progresistas se verá comprometida.²³ Sin embargo, lo que permite alimentar la esperanza es el hecho de que muchas luchas populares para defender, ampliar y recuperar servicios esenciales en todo el país también están integradas en luchas más amplias para transformar el Estado neoliberal.



Benny Kuruvilla es investigador del Transnational Institute y trabaja en la ciudad de Nueva Delhi.

Notas

- 1 Jan Swasthya Abhiyan (2012) Universalising Health Care for All. Informe, noviembre. <http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/JSA%20Convention%20Universal%20Health%20Care%20for%20All%20-%20booklet.pdf>
- 2 Mohanty, D. (2015) Orissa govt cancels licence of 3 Reliance Infra power discoms. *Indian Express*, 5 de marzo. <http://indianexpress.com/article/india/india-others/setback-for-reliance-infrastructure-orissa-power-regulator-cancels-distribution-licence-of-anil-ambanis-company/>
- 3 Purohit, M. (2016) Privatising India's water is a bad idea. *The Wire*, 17 de octubre. <https://thewire.in/73597/water-privatisation/>
- 4 Suraksha, P. (2015) 1st of 1000 Mohalla Clinics inaugurated. *Times News Network*, 20 de julio. <http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/1st-of-1000-mohalla-clinics-inaugurated/articleshow/48138525.cms>
- 5 Según el tipo de cambio vigente en febrero de 2016, de 66,5 rupias indias (INR) por dólar estadounidense (USD).
- 6 *Press Trust of India* (2015) Delhi Government allocates Rs. 209 crores for 1000 Mohalla clinics. *Economic Times*, 10 de noviembre. <http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-government-allocates-rs-209-crore-for-1000-mohalla-clinics/articleshow/49738274.cms>
- 7 Sisodia, M. (2017) Delhi Budget (2017-2018) speech of Finance Minister. Government of the National Capital Territory of Delhi, 8 de marzo.
- 8 *Ibid.*, párrafo 10.
- 9 Anand, A. (2017) Delhi Mohalla Clinics: AAP govt probes graft charges, Congress alleges scam. *India Today*, 23 de febrero. <http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-mohalla-clinic-scam-aap-congress/1/889638.html>
- 10 Sharma, D.C. (2016) Delhi looks to expand community clinic initiative. *The Lancet*, 388, 10 de diciembre.
- 11 Kapil, S. (2017) Despite missing 1000 target Mohalla clinics a huge hit. *Asian Age*, 6 de marzo. <http://www.asianage.com/metros/delhi/060317/despite-missing-1000-target-mohalla-clinics-a-huge-hit.html>
- 12 Véase el sitio web del programa de almuerzos escolares: <http://mdm.nic.in/#>
- 13 Rajagopalan, A. (2016) Inside Jayalalithaa's Amma Canteen. *Indian Express*, 2 de mayo. <http://indianexpress.com/article/lifestyle/food-wine/jayalalithaa-amma-canteen-chen-nai-food-politics-2780749/>
- 14 *Ibid.*
- 15 Nath, T. (2017) Weeks after Former CM Jayalalithaa's demise, Amma canteens continue to bring cheer and hope. *Women's Feature Service*. <http://www.thebetterindia.com/79820/amma-legacy-live-on-form-amma-canteens-initiate/> (consultado el 10 de febrero de 2017).
- 16 *Deccan Chronicle* (2016) Amma canteens heading towards record sales, 25 de septiembre. <http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/250916/amma-canteens-heading-towards-record-sales.html>
- 17 Biswas, S. (2011) Is India in the throes of 'distress migration'? *British Broadcasting Corporation*, 27 de septiembre. <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-15056418>
- 18 *Manorama Online* (2016) HC orders shut down of Malaparamba school by June 8, 27 de mayo. <http://english.manoramaonline.com/news/kerala/hc-orders-shut-down-of-malaparamba->

- 19 *Express News Services* (2016) It's official. Malaparamba AUPS is Govt School now, 25 de noviembre. <http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2016/nov/25/its-official-malaparamba-aups-is-govt-school-now-1542341.html>
- 20 Das, M. (2013) Delhi Airport Metro Line debacle: The way forward. *The Hindu Business Line*, 29 de julio. <http://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/delhi-airport-metro-line-debacle-the-way-forward/article4966519.ece>
- 21 *Ibid.*
- 22 Haidar, F. (2016) Back on track: The story of Airport Express metro line's turnaround. *Hindustan Times*, 19 de agosto. <http://www.hindustantimes.com/delhi/airport-express-metro-line-records-highest-number-of-riders/story-1txLRSrbU3xqkWVKopP8wL.html>
- 23 Patnaik, P. (2016). A blow against federalism – the implications of a uniform goods and services tax. *The Telegraph*, 28 de junio. https://www.telegraphindia.com/1160628/jsp/opinion/story_93525.jsp#.WQW0FoV97IU

Capítulo 7

El peligroso espejismo de las asociaciones público-privadas al descubierto

María José Romero y Mathieu Vervynckt

Las asociaciones público-privadas (APP) se promueven cada vez más como una forma de garantizar unos fondos muy necesarios para ejecutar proyectos de desarrollo. Sus artífices sostienen que representan un mecanismo eficiente para superar la brecha de infraestructuras y proporcionar servicios esenciales con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Una APP es un acuerdo contractual de medio o largo plazo entre el Estado, una autoridad regional o local y una compañía del sector privado, en el que el sector privado participa suministrando unos bienes y servicios que tradicionalmente garantizaba el Gobierno. Existen ejemplos de APP en ámbitos como hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, ferrocarriles y servicios de agua, saneamiento y energía. Por lo tanto, repercuten en aspectos relacionados con los derechos humanos básicos de la ciudadanía.

Las APP suelen presentarse como una alternativa a la vía tradicional de adquirir infraestructuras públicas o de prestar servicios sociales. Con el sistema tradicional, cuando se construye una carretera o una escuela, el Estado debe financiar y pagar los costes por adelantado. En cambio, con una APP, los costes se reparten durante un largo período de tiempo. Esto da tregua al erario público y limita las necesidades de endeudamiento desde un buen principio. Sin embargo, puede que las APP, en realidad, generen préstamos y deudas para el futuro, al reducir el espacio fiscal de los Gobiernos y su capacidad para prestar servicios esenciales. Además, los proyectos ejecutados mediante una APP suelen crear infraestructuras

y servicios que, para generar ingresos, cobran a los usuarios una tarifa, lo cual puede excluir a los ciudadanos y las ciudadanas más pobres.

Aunque quienes defienden las APP hacen hincapié en sus posibles beneficios —sobre todo, en las supuestas mejoras en materia de eficiencia que introducen en la prestación de bienes y servicios públicos—, se ha prestado poca atención a analizar uno de los principales elementos que están impulsando estas asociaciones: su uso por parte de los Gobiernos para ocultar la deuda pública mediante prácticas contables poco transparentes y sus consecuencias duraderas. En este capítulo, advertimos a las personas responsables de la toma de decisiones y a la ciudadanía de los costes financieros y sociales de las APP, e invitamos a evaluar de manera transparente los costes reales y a largo plazo de este tipo de acuerdos.

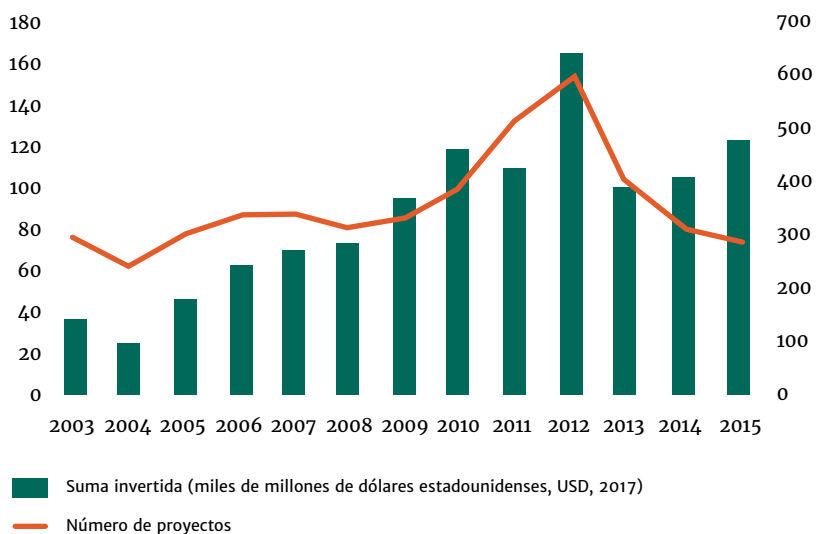
La relevancia de las asociaciones público-privadas

En la última década, la cantidad de dinero invertido en APP en el mundo en desarrollo se ha incrementado de forma espectacular. Como se muestra en el Gráfico 1, entre 2004 y 2012, las inversiones realizadas mediante APP se multiplicaron por seis: de 25 000 millones de dólares estadounidenses a 164 000 millones de dólares. Si bien las inversiones en APP cayeron en 2013 hasta los 99 000 millones de dólares, a partir de 2014 volvieron a incrementarse, y en 2015 alcanzaron los 122 000 millones de dólares.

Es importante destacar que, con el paso de los años, no solo ha aumentado el número de los proyectos financiados mediante APP, sino también la magnitud de estos. De 2003 a 2015, el tamaño promedio de los proyectos aumentó de manera drástica, de los 124 millones de dólares a los 422 millones. Este dato coincide con la tendencia hacia los megaproyectos que se ha observado en la última década, un fenómeno que ha sido analizado desde una perspectiva crítica, entre otros, por Bent Flyvbjerg, de la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford. Flyvbjerg señala que los riesgos y las complejidades se multiplican en paralelo a la escala de

los proyectos. En los grandes proyectos resultan especialmente problemáticos los retrasos, ya que generan sobrecostos y pérdida de beneficios.¹

Gráfico 1. Inversión total en APP y número de proyectos en el mundo en desarrollo, 2003-2015 (en miles de millones de dólares estadounidenses, en términos reales)



Fuente: Cálculos propios de Eurodad a partir de la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Grupo Banco Mundial (*ajustados según el índice de precios al consumo de los Estados Unidos)

Al examinar los grupos de países según sus ingresos en el mundo en desarrollo, el análisis de Eurodad revela que el 66 por ciento de la inversión en APP se llevó a cabo en los países de ingresos medianos y altos, el 33 por ciento en los países de ingresos medios y bajos, y apenas el 1 por ciento en los países de ingresos bajos. En otras palabras, las APP tienden a ser más habituales en los países con mercados grandes y desarrollados, lo cual permite recuperar los costes más rápidamente y garantiza unos ingresos

más seguros. Sin embargo, aunque el porcentaje de la inversión total en APP que llega a los países más pobres del mundo sea escaso, no significa que estas asociaciones no revistan importancia en estos países. De hecho, si se calcula teniendo en cuenta el tamaño de la economía local (PIB), la inversión en las APP ha sido relativamente más alta en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos medianos y altos. Este patrón podría indicar que los países de ingresos bajos son más vulnerables a las consecuencias fiscales de las APP que se discuten en estas páginas.

Los actores clave en el campo de las asociaciones público-privadas

Son muchos los organismos, los Gobiernos donantes y las entidades empresariales que están promoviendo de forma activa que se incrementen las APP, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. A escala mundial, las APP ocupan un lugar destacado en la Agenda de Acción de Addis Abeba que surgió de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2015,² y se presentan explícitamente como un ‘medio de implementación’ de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.³ El Grupo de los 20 (G20) también cuenta con una línea de trabajo para fomentar las APP en las infraestructuras, a través de su Iniciativa Mundial de Infraestructura y su Centro Mundial de Infraestructura, dos mecanismos lanzados durante la presidencia australiana del Grupo.⁴

En el plano europeo, los Gobiernos están cada vez más interesados en utilizar las APP como una forma de proporcionar ayuda al desarrollo, lo que, en la práctica, también puede ayudar a generar oportunidades de negocio para las empresas europeas.

Los bancos multilaterales de desarrollo también desempeñan un papel destacado en el campo de las APP, en especial el Grupo del Banco Mundial. De hecho, han establecido numerosas iniciativas para que asesoren a los Gobiernos sobre cómo modificar su marco normativo de forma que este posibilite las APP, y para financiar proyectos concretos de APP, in-

cluidos proyectos en materia de salud y educación que socavan el acceso de las personas a estos servicios.⁵

En 2014, el Grupo del Banco Mundial creó su propio Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF), una alianza entre Gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo e inversores del sector privado concebida para facilitar la preparación y estructuración de APP de infraestructuras complejas, y en 2016 el mismo Grupo se comprometió a servir de secretaria de la Alianza Mundial de Conectividad de Infraestructuras. El Grupo del Banco Mundial también desempeña un papel fundamental en el momento en que formula orientaciones normativas, que los países suelen tomar como referencia. Entre estas, cabe citar el ‘Marco para la divulgación de información en las alianzas público-privadas’, un informe sobre ‘disposiciones contractuales recomendadas de APP’ y, más recientemente, unas directrices sobre ‘propuestas espontáneas’. Sin embargo, teniendo en cuenta las competencias en materia de desarrollo de estas instituciones, su actividad en este campo se debería someter a un examen crítico.

Los costes fiscales de las asociaciones público-privadas

En la mayoría de los casos, las APP resultan más caras que los procesos tradicionales de contratación pública. Esto se explica por el coste de capital, las expectativas de ganancias de las compañías del sector privado y los costes de transacción que entraña negociar contratos complejos de APP.

Normalmente, el coste de capital es mayor en los proyectos de APP que en las obras del sector público, ya que los Gobiernos suelen pedir préstamos con unas tasas de interés más bajas que las compañías del sector privado. En el Reino Unido, un examen realizado en 2015 por la Oficina Nacional de Auditoría halló “que el tipo de interés efectivo de todas las operaciones financieras privadas (7-8 %) es el doble que el del conjunto de los préstamos gubernamentales (3-4 %)”. En la práctica, esto significa que el coste

de capital de los servicios o infraestructuras gestionados mediante APP es dos veces más caro que si el Gobierno hubiera pedido dinero prestado a bancos privados o emitido bonos directamente.

Además, a las compañías del sector privado se les exige que obtengan beneficios a partir de sus inversiones, lo cual significa un mayor coste para el público y los usuarios. La organización sin fines de lucro Counter Balance reveló que las 215 APP que respaldó el Banco Europeo de Inversiones entre 1990 y 2015⁶ produjeron, por lo general, unas ganancias anuales del 12 por ciento. En el caso de las APP en el Sur Global, donde se entiende que existen más riesgos, los inversores esperan una rentabilidad mínima del 25 por ciento. Según Nicholas Hildyard, autor del informe, las APP representan, en esencia, “el sueño de cualquiera que busque rentas”.⁷

Los proyectos de APP también son contratos muy complejos, con unos elevados costes de negociación, preparación y gestión. También entrañan unas facturas considerables para los asesores jurídicos y financieros que estructuran y negocian el acuerdo. Por ejemplo, según informaba en 2011 el diario *Financial Times*, “en la última década, aproximadamente, abogados, consultores financieros y otros asesores han ganado un mínimo de 2800 millones de libras esterlinas en concepto de honorarios —y seguramente más de 4000 millones de libras—, por establecer y poner en marcha los proyectos”.

Las APP se renegocian con demasiada frecuencia. En efecto, según personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 55 por ciento de todas las APP se renegocian, como promedio dos años después de la firma del contrato, y el 62 por ciento de estas renegociaciones se traducen en un incremento de las tarifas que pagan los usuarios.⁸ La renegociación de los contratos conduce a una falta de competencia y transparencia, y abre la puerta a conductas corruptas. Shaoul (2009)⁹ sostiene que una competencia limitada supone un mayor riesgo para el sector público, ya que las compañías son lo bastante grandes y poderosas como para someter a los reguladores en caso de conflicto, y obligarles a renegociar el contrato

con unas condiciones que les resulten más favorables. Por ejemplo, como resultado de una exhaustiva investigación sobre corrupción centrada en gran medida en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, la revista *The Economist* reveló que el principal método para que la empresa ganara contratos pasaba por presentar unas ofertas mínimas “y después, recurriendo a prácticas corruptas, asegurarse un gran incremento de los costes al añadir complementos, en algunos casos antes de que se secase la tinta del contrato”.¹⁰

Además de mayores costes financieros, la experiencia de varios países (tanto desarrollados como en desarrollo) muestra que las implicaciones fiscales de las APP proceden tanto de pasivos directos como de pasivos contingentes no transparentes (o riesgo de deudas en el futuro). Los pasivos directos son las condiciones de pago establecidas en el contrato, que pueden incluir, por ejemplo, “pagos por brechas en la viabilidad”, es decir, aportaciones de capital para asegurar que pueda prosperar un proyecto que sea deseable económicamente pero no viable comercialmente. Por otro lado, los pasivos contingentes son pagos que se les exigen a los Gobiernos en caso de que se produzca un evento determinado. Puede tratarse de una caída en el tipo de cambio de la moneda nacional o una reducción en la demanda por debajo de un nivel preestablecido. Por lo tanto, la incidencia, el valor y el momento de estos pagos quedan fuera del control del Gobierno. La mayoría de las veces no son transparentes para el público —y ni siquiera para los parlamentos nacionales—, ya que no es fácil cuantificarlos con exactitud, por lo que los proyectos APP suponen un negocio arriesgado.

Debido a los pasivos contingentes, el verdadero coste de una APP puede ser enorme. A menudo, los Gobiernos ofrecen diversos tipos de garantías para atraer a los inversores privados, pero estas pueden crear una carga significativa en el futuro. Estas garantías pueden ir desde la devolución de un préstamo a una entrada mínima de ingresos, pasando por tasas de rentabilidad garantizadas, tipos de cambio de divisas garantizados o indemnizaciones en caso de que un cambio legislativo afecte a la rentabilidad de una inversión.

Las APP ya han dejado un legado fiscal duradero en países como el Reino Unido,¹¹ Portugal,¹² Hungría,¹³ Ghana, Tanzania, Uganda,¹⁴ Perú y Lesotho,¹⁵ donde un hospital gestionado mediante una APP se tragó la mitad del presupuesto de atención de la salud del país, a la vez que garantizó un alto rendimiento, del 25 por ciento, a la compañía del sector privado. La experiencia también demuestra que las consecuencias fiscales de las APP pueden exacerbar o incluso precipitar grandes crisis financieras. Tal como reconoce el Banco Mundial, “todos los proyectos de carreteras ejecutados mediante una asociación público-privada en los países afectados por una crisis macroeconómica (Grecia, Portugal y España recientemente, y antes Malasia y México) sufrieron a la vez problemas de demanda (y un peligro de quiebra), con lo que se creó un riesgo sistémico”.¹⁶ La disminución de la demanda del servicio prestado mediante la APP se deriva de la menor actividad económica durante la crisis, lo cual da lugar a un efecto dominó en el sector público.

Aunque los partidarios de las APP reconocen que estas entrañan los costes financieros extraordinarios que hemos mencionado, también afirman que pueden justificarse gracias a lo que se gana en eficiencia. En algunos casos, el aumento de la eficiencia de las APP proviene de la introducción de mejoras en el diseño, la construcción y el funcionamiento. Algunos estudios aluden a esta mayor eficiencia, pero las pruebas no son concluyentes. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las mejoras de eficiencia dependen del sector, el tipo y el tamaño de los proyectos, de que el sector privado incremente la inversión de capital tal como se indica en el contrato, y del contexto del país en términos de entorno normativo y buen gobierno.

Cuadro I

Las remunicipalizaciones como consecuencia de los costes fiscales de las asociaciones público-privadas: el caso del Reino Unido

Uno de los primeros países que desarrolló APP fue el Reino Unido, donde son conocidas como 'Iniciativas de Financiación Privada' (IFP). La idea de las IFP era atraer inversiones privadas a proyectos públicos con el fin de mantener el gasto 'al margen de los registros contables' del sector público. Sin embargo, los estudios demuestran que muchas IFP han dejado tras de sí consecuencias fiscales persistentes.¹⁷ Por ejemplo, según un informe publicado en 2017 por la Unidad Europea de Estrategia de Servicios (ESSU),¹⁸ el coste público de contrataciones públicas, rescates, rescisiones y contratos con problemas importantes alcanzó los 27 902 millones de libras esterlinas. ESSU calculó que, con esa suma, se podrían haber construido 1520 nuevas escuelas secundarias para 1 975 000 estudiantes, que equivaldrían al 64 por ciento del alumnado de 11 a 17 años de Inglaterra. El informe también llegó a la conclusión de que casi uno de cada diez proyectos de APP en Escocia se ha tenido que suspender mediante una rescisión del contrato, ha sido adquirido por el sector público o se mantiene con problemas importantes. Por ejemplo, el proyecto de escuelas del concejo East Lothian, supervisado por Ballast UK, entró en quiebra en 2003, mientras se encontraba en pleno proceso de renovación de seis escuelas y centros comunitarios. Sin embargo, después de que la empresa matriz retirara la financiación, los subcontratistas se quedaron sin cobrar y terminaron liquidando sus activos, ya que Ballast contaba con una participación del 50 por ciento de la inversión en infraestructura, lo que añadió aún más costes fiscales al erario público.

Cuadro II

Las remunicipalizaciones como consecuencia de los costes fiscales de las asociaciones público-privadas: el caso de Indonesia

En 1997, el Gobierno indonesio celebró dos contratos de APP, de una duración de 25 años, con filiales de las multinacionales Suez y Thames Water. Según un informe publicado por la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), el Transnational Institute (TNI) y el Observatorio de las Multinacionales,¹⁹ ninguno de los dos acuerdos de APP cumplió con las expectativas, en parte debido a los costes fiscales que no tardaron en surgir. Después de 16 años de funcionamiento, Pam Jaya, la empresa pública de agua, y el Gobierno habían acumulado una deuda de al menos 48,38 millones de dólares. El acuerdo de pago establecido por el contrato de asociación entrañaba una tasa sobre el agua que se incrementaba de forma constante, cada seis meses, y que Pam Jaya debía abonar a los operadores privados. Mientras tanto, el precio que pagan los usuarios en Yakarta se ha multiplicado por diez, y la ciudad cuenta ahora con la tarifa de agua más cara de todo el sudeste asiático. En 2012, la Coalición de Residentes de Yakarta en contra de la Privatización del Agua presentó una demanda ciudadana en que se pedía que el Gobierno pusiera fin a los contratos de APP. Y lo lograron. En 2013, el Gobierno anunció que la ciudad de Yakarta remunicipalizará algunos de los servicios de agua al adquirir las acciones de Suez. En 2015, el Tribunal de Distrito de Yakarta Central finalmente anuló el contrato con Suez, arguyendo que los acuerdos no respetaban el derecho humano al agua de los habitantes de Yakarta. Sin embargo, la decisión fue impugnada por la compañía acusada y el caso se sigue juzgando.

Incentivos contables perversos

Dada la complejidad de las APP y sus costes fiscales perjudiciales, cabe preguntarse por qué los países prefieren este tipo de acuerdos que la vía del préstamo público. Los defensores de las APP suelen esgrimir que la participación del sector privado genera inversiones de mayor calidad y permite a los Estados repartir los costes en lugar de tener que recaudar fondos por adelantado, como ocurre con los procesos tradicionales de contratación pública.

Sin embargo, investigaciones de Eurodad demuestran que uno de los principales factores que está llevando a los Gobiernos a recurrir a las APP es que las normas contables poco transparentes les permiten mantener los costes y los pasivos de estos acuerdos ‘al margen de los registros contables’. En otras palabras, los costes no se plasman en el balance presupuestario del Gobierno, lo que significa que el verdadero coste del proyecto se mantiene oculto. Como se señala en el sitio web del FMI: “En muchos países, los proyectos de inversión se han adquirido como asociaciones público-privadas no por razones de eficiencia, sino para eludir las restricciones presupuestarias y aplazar el registro de los costes fiscales que entraña la prestación de servicios de infraestructura”, lo cual termina exponiendo las finanzas públicas a un riesgo fiscal excesivo. Al usar estas prácticas contables perversas, los Gobiernos crean el peligroso espejismo de que las APP son más baratas de lo que realmente cuestan. Los políticos recurren a las APP para aprobar proyectos que han prometido a su electorado, al tiempo que mantienen las cuentas bajo control y respetan los límites presupuestarios legislados.

La Comisión Europea ha advertido sobre “el espejismo de asequibilidad” de este tipo de asociaciones, y expertos del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI han criticado públicamente los incentivos y los riesgos que plantean las APP, además de exhortar de forma explícita a que se refuerce el marco institucional para gestionar los riesgos fiscales que entrañan. Cabe destacar que, como manifestó Tao Zhang, subdirector gerente

del FMI, en una conferencia que pronunció en Australia en diciembre de 2016, “el peligro fiscal es significativo. Las APP no son ‘infraestructura gratuita’”.²⁰ Lamentablemente, estas advertencias no se han expresado con la suficiente fuerza como para que los bancos multilaterales de desarrollo reorienten su enfoque en materia de financiamiento de infraestructuras y pongan un mayor acento en mejorar la eficiencia de la prestación de servicios públicos.

Horizontes de futuro

Eurodad aboga por que se establezcan directrices internacionales firmes en materia de APP, con el fin de asegurar de que responden a objetivos de desarrollo. Estas directrices deberían incluir cuestiones como la divulgación pública de los contratos, un respaldo explícito de las prácticas de ‘registro contable efectivo’ y presentación de informes sobre las APP, y un análisis detallado y transparente de los costes y los beneficios que arroje luz sobre las consecuencias a largo plazo de las APP —tanto para el sector público como para los usuarios y las usuarias—, que incluya los costes sociales, ambientales y fiscales.

Como respuesta al papel destacado del Grupo del Banco Mundial, en febrero de 2017 un grupo de más de 110 organizaciones no gubernamentales y sindicatos de todo el mundo envió una carta al equipo especializado en APP de esa institución y a sus directores ejecutivos para anunciarles que dejarían de participar en las consultas públicas sobre este tipo de asociaciones hasta que el Grupo cambiara de manera drástica su enfoque actual. Teniendo en cuenta que el Grupo del Banco Mundial tiene un mandato en materia de desarrollo, la institución tiene la responsabilidad de asegurarse de que los Gobiernos, al ejecutar proyectos de infraestructura, elijan el mecanismo de financiamiento más sostenible desde el punto de vista fiscal.²¹

Los Gobiernos y las instituciones financieras deberían centrarse en concebir las herramientas adecuadas a nivel de país para determinar si resulta conveniente —y en qué circunstancias— recurrir a una APP en lugar del proceso tradicional de contratación pública. Esto implica que deben elegir el mejor mecanismo de financiación, lo cual incluiría estudiar la posibilidad de solicitar un préstamo público, y dejar de ocultar las verdaderas consecuencias de las APP, reflejando en las cuentas y las estadísticas nacionales los costes del proyecto y sus pasivos contingentes. De esta forma se incrementará la transparencia del proceso de toma de decisiones y se mejorará la responsabilidad democrática.



María José Romero es coordinadora en materia de políticas e incidencia, especializada en finanzas privadas con respaldo público, en la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad). Antes de unirse al equipo de Eurodad, María José trabajó para la Red Latinoamericana Sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, en Perú, en los ámbitos de la justicia fiscal y las finanzas del desarrollo.



Mathieu Vervynckt es analista en materia de investigación y políticas en Eurodad, y su trabajo se centra en las finanzas privadas con respaldo público.

Notas

- 1 Flyvbjerg, B. (2014) What you should know about megaprojects and why: An overview. *Project Management Journal*, 45 (2): 6-19. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/14/09/14.09.0003.pdf>
- 2 Naciones Unidas (2015) Informe de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo: Agenda de Acción de Addis Abeba, A/CONF.227/20. Nueva York: ONU.
- 3 Naciones Unidas (2015) Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1. Nueva York: ONU.
- 4 G20 Australia (2014) The G20 Global Infrastructure Initiative. http://www.g20australia.org/sites/default/files/g20_resources/library/g20_note_global_infrastructure_initiative_hub.pdf
- 5 Lethbridge, J. (2017) World Bank undermines right to universal healthcare. *Bretton Woods Project*. 6 de abril. <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/04/world-bank-undermines-right-universal-healthcare/>; y <https://www.liberianobserver.com/news/ppp-no-solution-to-education-mess/>
- 6 EPEC – European PPP Expertise Centre (2016) PPPs financed by the European Investment Bank from 1990 to 2015. Luxemburgo: Banco Europeo de Inversiones. http://www.eib.org/epcc/resources/publications/ppp_financed_by_EIB_1990_2015
- 7 Hildyard, N. (2016) Corrupt but legal? Bruselas: Counter Balance. http://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2016/12/Corrupt-but-Legal_9Dec.pdf
- 8 Maximilie, Q. (2014) Managing fiscal risks from Public-Private Partnerships (PPPs). Washington: FMI. <http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/cmr/>
- 9 Shaoul, J. (2009) Using the private sector to finance capital expenditure: The financial realities. *Policy, finance & management for public-private partnerships*. Oxford: Wiley-Blackwell. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444301427.ch2/summary>
- 10 *The Economist* (2017) The Odebrecht scandal brings hope of reform, 2 de febrero. <http://www.economist.com/news/americas/21716105-revelations-wholesale-bribery-may-mark-turning-point-latin-americas-battle-against> (consultado en abril de 2017).
- 11 Jubilee Debt Campaign (2017) The UK's PPP disaster. Londres: JDC. http://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/The-UKs-PPPs-disaster_Final-version_02.17.pdf
- 12 La Oficina de Evaluación Independiente del FMI notificó en 2016 que, en el caso de Portugal, “en 2014, esos pasivos [los pasivos asociados con empresas estatales y APP] representaban el 15 por ciento del PIB”. Eichenbaum, M. et al. (2016) The Portuguese crisis and the IMF. Washington: FMI. http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/EAC_BP_16-02_05_The_Portuguese_Crisis_and_the_IMF%20v2.PDF
- 13 El 6 de septiembre de 2011, los ministros de Transporte de la Unión Europea discutieron las posibilidades de implicar al capital privado en la mejora de las infraestructuras de transporte. Al presentar la posición de Hungría, el ministro de Infraestructuras Estatales de este país, Pál Völner, señaló: “Puede que el modelo de APP resulte útil en la ejecución a corto plazo de los proyectos necesarios y en la identificación de fuentes adicionales; sin embargo, a largo plazo, pueden incurrir en costes excesivos”. Gobierno de Hungría (2014) Use of PPPs is in member states exclusive discretion. <http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/use-of-ppp-is-in-member-states-exclusive-discretion>; *Bankwatch* (2017) Build now, pay heavily later. <http://bank-watch.org/public-private-partnerships/background-on-ppps/build-now-pay-heavily-later>
- 14 Anaba, B. y Clifton, S. (2015) Proof is piling up that private sector is not easy development fix. *The Guardian*, 11 de noviembre. http://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/11/private-sector-finance-not-easy-development-fix-public-private-partnerships?CMP=tw_t_gu?CMP=tw_t_gu
- 15 Oxfam (2014) A dangerous diversion. Londres: Oxfam. <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en.pdf>

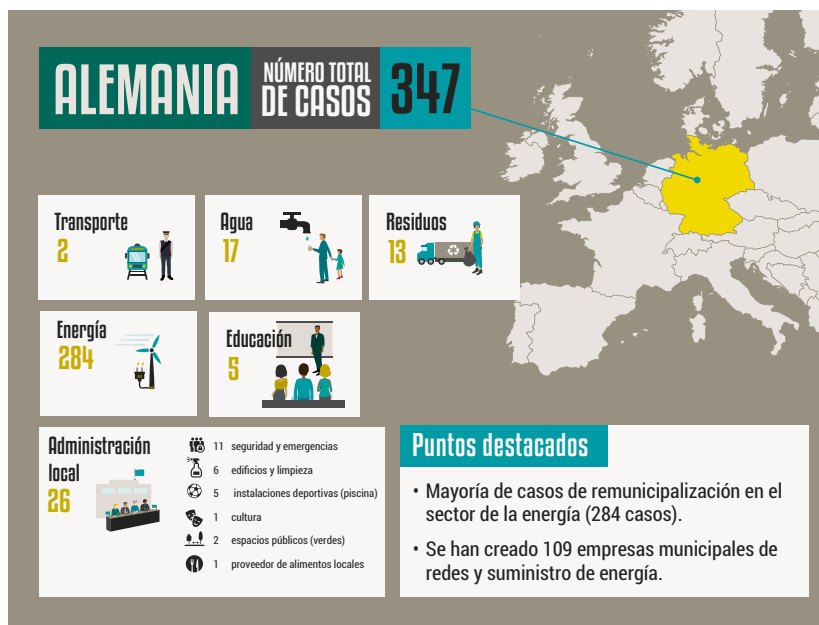
- 16 World Bank Institute (2014) Implementing a framework for managing fiscal commitments from public-private partnerships. Operational Note. Washington: Grupo del Banco Mundial. <http://documents.worldbank.org/curated/en/334471468031782348/pdf/843820WPOBox-380ment-0ForDistribution.pdf>
- 17 Ibid., p. 11; Small, M. (2016) It's not just Scotland's schools. The whole PFI racket is crumbling. *The Guardian*, 12 de abril. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/12/edinburgh-schools-pfi-racket-crumbling-scotland-tax-avoiding-governing-class>; The City of Edinburgh (2007) Independent inquiry into school closures published. http://www.edinburgh.gov.uk/info/20074/schools/1423/independent_inquiry_into_school_closures_published
- 18 ESSU (2017) PFI/PPP buyouts, bailouts, terminations and major problem contracts in UK. Londres: ESSU. <http://www.european-services-strategy.org.uk/publications/essu-re-search-reports/pfipp-buyouts-bailouts-terminations-and-major/pfi-ppp-buyouts-bailouts-and-terminations.pdf>
- 19 TNI (2014) Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global. Amsterdam: Transnational Institute. <https://www.tni.org/files/download/heretostay-es.pdf>
- 20 Ibid., p. 8; *Public Finance International* (2017) Sound economic governance depends on strong civil service, IMF official says. 13 de marzo. <http://www.publicfinanceinternational.org/news/2017/03/sound-economic-governance-depends-strong-civil-service-imf-says>; FMI (2016) Meeting the challenges of growth and infrastructure investment. Washington: FMI. <http://www.imf.org/en/news/articles/2016/12/01/sp120216-meeting-the-challenges-of-growth-infrastructure-investment>
- 21 Eurodad (2017) Trade unions and campaigners around the world accuse World Bank of encouraging dangerous hidden debts. Bruselas: Eurodad. <http://www.eurodad.org/files/pdf/1546710-trade-unions-and-campaigners-around-the-world-accuse-the-world-bank-of-encouraging-dangerous-hidden-debts-boycott-consultation-on-public-private-partnerships-ppps--1491314890.pdf>

Nuestra ciudad, nuestra red: la tendencia hacia la remunicipalización de la energía en Alemania

Sören Becker

El fin de la privatización y el surgimiento de un nuevo modelo de propiedad

¿Es importante quién posee y controla la infraestructura energética? ¿Supone alguna diferencia? En muchos municipios alemanes, la respuesta a esta pregunta ha sido un rotundo ‘sí’, que se ha traducido en una tendencia a la denominada ‘ola de remunicipalizaciones’ en todo el sector energético. Entre las diferentes tendencias remunicipalizadoras que se tratan en este libro, el mayor número de casos proviene del sector de la energía en Alemania. El país cuenta con 347 casos de remunicipalización desde el año 2005, y el sector de la energía representa el porcentaje más destacado, con 284 experiencias. Esta gran cantidad de casos no solo es notable en comparación con los otros sectores estudiados en este libro, sino que las empresas remunicipalizadas en el ámbito de la energía también representan una gran parte de las 900 empresas públicas locales en Alemania.¹ La tendencia remunicipalizadora que se está extendiendo por todo el país, desde pequeños municipios (de 1400 habitantes) hasta grandes ciudades como Hamburgo, y que incluye casos de cooperación intermunicipal, está desplazando el equilibrio de poder entre el sector privado y el público en este ámbito. Hay incluso quien habla de “un renacimiento de la economía municipal”,² dando a entender que estas iniciativas de remunicipalización son significativas más allá del sector de la energía.



En este capítulo, que se divide en dos grandes apartados, se da cuenta de las remunicipalizaciones que han tenido lugar en el sector energético alemán. En el primer apartado se analizan los distintos factores que han facilitado las remunicipalizaciones. En el segundo, se examinan las dinámicas políticas y las estrategias que se hallan tras dos casos concretos de remunicipalización en Hamburgo, comparando un modelo más concertado y jerárquico con otro que entrañó una movilización pública más controvertida y un ejercicio de democracia directa.

¿Por qué el sector de la energía? ¿Por qué Alemania?

La tendencia de la remunicipalización en el sector energético alemán ha adoptado dos formas fundamentales: o bien poner fin a las privatizaciones o bien crear nuevas empresas locales donde antes operaba un proveedor regional (a menudo privado). Las remunicipalizaciones en el

ámbito de la energía afectaron a un sector que fue objeto de privatizaciones generalizadas después de que se liberalizara el mercado de la energía. En efecto, entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, muchas ciudades y municipios vendieron acciones o servicios públicos enteros a postores privados, lo cual dio lugar a un importante proceso de concentración.³ Las llamadas ‘Cuatro Grandes’ se encontraban en pleno auge, integrando corporaciones energéticas (algunas de las cuales todavía son parcial o totalmente propiedad del Estado, como Vattenfall) que, al parecer, dividían el país en esferas de interés, cada una de las cuales controlaba gran parte de la infraestructura energética de una determinada región. Sin embargo, justo después de que se hubieran consolidado las nuevas estructuras del sector energético, comenzaron a aparecer grietas de nuevo. Aunque puede que el impulso de las remunicipalizaciones sorprenda a algunos, se puede enumerar una serie de factores que facilitaron el fenómeno.

Una tradición de empresas locales: Alemania cuenta con una fuerte tradición de empresas públicas locales para la prestación de servicios, no solo en el ámbito de la energía, sino también en otros sectores como el agua y el transporte.⁴ Aunque, a lo largo del tiempo, se han vivido algunos cambios que han reflejado los distintos modelos económicos y políticos dominantes en su momento —desde la acumulación privada hasta un papel más fuerte del Estado después de la Segunda Guerra Mundial y las reformas orientadas al mercado y la privatización a partir de la década de 1980—, los municipios nunca han dejado de desempeñar un papel importante en la prestación de servicios (a veces mediante asociaciones público-privadas).⁵ Por lo tanto, las empresas públicas locales gozan de una larga tradición; a menudo, han integrado diferentes sectores en una sola organización: las llamadas *Stadtwerk* (empresa municipal de servicios). Incluso después de las privatizaciones, la idea de la *Stadtwerk* siempre fue importante como una opción política.

La transición energética como una apertura discursiva y material: La transición energética en Alemania (*Energiewende*), una idea que originalmente defendían unos pocos, cobró un impulso notable con los proyectos de reforma del Gobierno de coalición rojiverde que subió al poder en 1998.⁶ Cabe destacar que la introducción del sistema de tarifas de alimentación garantizadas a través de la Ley de Energías Renovables (EEG, por sus siglas en alemán) dos años más tarde dio lugar a un gran aumento de las instalaciones eólicas, solares y de biomasa en manos de ciudadanos particulares o de fincas agrícolas.⁷ La transición a las energías renovables, estrechamente relacionada con la promesa de eliminar por completo la energía nuclear, se convirtió en uno de los principales discursos políticos del nuevo milenio. Esto supuso una doble apertura: en primer lugar, en la forma en que los nuevos actores entraron en el sector energético y cuestionaron la ortodoxia de que ‘lo privado es mejor’ que imperaba en los procesos de privatización y liberalización; y en segundo lugar, en la diversificación de las opciones en materia de política energética con miras a los nuevos objetivos de sostenibilidad y respeto ambiental. En otras palabras, la *Energiewende* pone de relieve el hecho de que el suministro de energía se ha convertido en algo más que una mera cuestión tecnológica y económica.

La decepción con el desempeño de los operadores privados: Durante mucho tiempo, las ‘Cuatro Grandes’ empresas de energía no respondieron a las demandas de energía renovable.⁸ El desarrollo de las energías renovables se produjo en gran parte a través de proyectos descentralizados y de pequeña escala; en efecto, las renovables no ocupaban un lugar destacado en las estrategias empresariales de las grandes corporaciones, a las que se criticó a menudo por retrasar el ajuste de las redes a la generación descentralizada. Además, los municipios sentían que habían perdido el control sobre el suministro de la energía, tanto en el sentido de ejercer una influencia general sobre las cuestiones relacionadas con este como con respecto a la calidad del servicio y las herramientas disponibles para promover la transición energética. Por otro lado, los operadores privados resultaron ser más eficientes que las empresas municipales que operaban

antes en muy pocas ocasiones. Y lo que es más: en muchos casos, los precios aumentaron.⁹ Los municipios, por su parte, habían perdido unos ingresos relativamente estables por la venta de la energía y la gestión de la red, lo que les impedía la posibilidad de aplicar, como habían hecho en el pasado, medidas de financiación cruzada para otros servicios más costosos, como las piscinas públicas.

El vencimiento de los contratos como una buena oportunidad: Otro factor, más puntual, que facilitó la tendencia remunicipalizadora en Alemania fue el vencimiento de muchos contratos de concesión. Estos contratos establecen las condiciones para usar las calles y otros espacios públicos con el fin de instalar cableado y tuberías, lo cual constituye la base misma para gestionar una red de energía a escala local. Estos contratos, por lo general, se firmaron para 20 años, y la mayoría alcanzó la fecha de renovación durante la primera década de 2000. Aunque casi todos los contratos se renovaron o solo se renegociaron en parte y luego se renovaron, en los municipios donde se llevó adelante la remunicipalización del servicio, el vencimiento de la concesión situó en el centro de la agenda el tema del futuro de la energía en el ámbito local. Así, surgió la oportunidad de modificar las relaciones establecidas. Y en efecto, más de dos tercios de todos los casos de remunicipalización que se recogen en este libro se produjeron a raíz del vencimiento de un contrato.

Las bajas tasas de interés para los créditos municipales: Otro factor que impulsó el fenómeno fue que las autoridades locales pudieran disponer de dinero barato para inversiones municipales. Las políticas de bajo interés del Banco Central Europeo también afectaron al mercado de los créditos municipales, en el que los tipos de interés suelen ser más bajos que los del crédito privado.

En este sentido, la tendencia remunicipalizadora en el sector energético alemán se basa en la confluencia de las tradiciones locales para la prestación de servicios y la dinámica de la *Energiewende*, combinada con el fin de las concesiones y la oferta de crédito barato. Todos estos elementos

generaron unas condiciones propicias. Sin embargo, que estas oportunidades se aprovecharan realmente y las remunicipalizaciones se materializaran es algo que dependió, en última instancia, de los procesos políticos a escala local.

Las dinámicas políticas que fomentaron las remunicipalizaciones

Las remunicipalizaciones exigen una voluntad política por parte de quienes se encargan de tomar las decisiones en el plano local. Por lo tanto, son fruto de la dinámica política local, que a su vez se ve determinada por la concurrencia de elementos como los diversos actores, tradiciones en la prestación de servicios, situación financiera del municipio, etcétera. La postura política de las autoridades locales con respecto a la propiedad pública define en qué medida son conflictivos los procesos de remunicipalización. Por lo tanto, la afiliación de los partidos a la órbita del centro-izquierda no presupone que un ayuntamiento sea favorable a la remunicipalización; de hecho, integrantes del Partido Socialdemócrata en Alemania fueron contrarios a la remunicipalización en muchas ocasiones. Algunos procesos, en especial en los municipios más pequeños, gozaron de bastante consenso, o al menos contaron con una fuerte mayoría en el ayuntamiento. Sin embargo, muchas veces la remunicipalización entrainó conflictos profundos y duraderos entre diferentes facciones de la vida política local y la administración, o incluso entre las élites establecidas y actores de movimientos sociales.

Hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio exhaustivo de los procesos políticos que se hallan tras todas las remunicipalizaciones en el sector energético alemán, por lo que, para ahondar en las dinámicas políticas de esta tendencia, en este capítulo nos centraremos en dos remunicipalizaciones que tuvieron lugar en Hamburgo. En torno al año 2000, la ciudad vendió sus acciones a inversores externos, tanto en la empresa de electricidad y calefacción urbana como en la de gas. A pesar de que el número de habitantes de esta ciudad es mucho mayor que en la mayoría del resto de

iniciativas mencionadas en este libro, el caso resulta muy adecuado para nuestro análisis, ya que en él se pueden observar dos líneas distintas en el proceso remunicipalizador: una bastante tranquila y la otra, manifiestamente conflictiva.

En primer lugar, en 2009, un gobierno formado por conservadores y verdes decretó el establecimiento de una empresa pública llamada Hamburg Energie, concebida para construir plantas de generación de energía renovable y vender la electricidad producida. Hamburg Energie surgió de una decisión política tomada en los círculos del gobierno local. Fue principalmente el Partido Verde el que usó su poder en el gobierno, ante la aprobación definitiva de una central eléctrica de carbón de 1,7 gigavatios contra la que estaban haciendo campaña. La empresa se fundó como una filial autónoma de la red de abastecimiento de agua local, que todavía era de propiedad totalmente pública. Es importante destacar que a Hamburg Energie se le encomendó una misión clara, que, entre otras cosas, entrañaba un compromiso con el “suministro de energía para el público en general y para las instituciones públicas” y la venta de “electricidad respetuosa con el clima (generada sin nucleares ni carbón)”, y la exigencia de que la empresa “planifique, construya y gestione infraestructuras municipales”.¹⁰ Una vez establecida, la empresa consiguió aumentar con gran eficacia la cuota total de energías renovables. A fines de 2015, se habían instalado más de 13 megavatios de energía eólica y se había puesto en marcha un programa de energía solar de 10 megavatios en el que participaban como inversores ciudadanos y empresas locales. Además, la empresa atrajo a más de 100 000 clientes que buscaban una energía renovable y producida localmente.¹¹ De forma que el caso de Hamburg Energie sobresale como un ejemplo de remunicipalización jerárquica que ha demostrado ser un instrumento muy útil para promover una transición hacia las energías renovables.

Frente a esta experiencia, la cuestión del futuro de las redes de energía suscitó un proceso muy conflictivo y antagónico, que se prolongó de 2011 a 2013. Cuando el gobierno socialdemócrata que subió al poder en 2011

manifestó que entre sus planes no estaba remunicipalizar las redes energéticas en un momento en el que estaban a punto de vencer las concesiones, se creó una amplia coalición popular para impulsar al gobierno en esa dirección. En ella participaron movimientos sociales y ambientales, y ONG como Amigos de la Tierra (BUND), sectores de la Iglesia Luterana y del Centro de Asesoría del Cliente, y muchos otros grupos más pequeños. La coalición organizó un referendo cuyo resultado sería vinculante como estrategia para obligar al gobierno a remunicipalizar las redes de energía (electricidad, calefacción urbana y gas) y crear una empresa que respetara las demandas sociales, ecológicas y democráticas de la ciudadanía. Se vivieron procesos parecidos en Berlín (véase el Cuadro I) y en otra ciudad más pequeña, Augsburg. Finalmente, el referendo de Hamburgo se celebró en septiembre de 2013 y consiguió una escasa mayoría del 50,9 %.

Cuadro I

El concepto de ‘empresa ciudadana de servicios’ (*Bürgerstadtwerk*) en Berlín

Al igual que Hamburgo, Berlín también organizó un referendo sobre la remunicipalización de la red de energía. Sin embargo, entre los dos casos hay algunas diferencias. En primer lugar, la coalición que abogaba por la remunicipalización en la capital alemana estaba compuesta por más organizaciones de base que en Hamburgo, donde tomaron la iniciativa ONG sociales y ambientales más grandes. La campaña de Berlín se organizó como un proceso democrático de base cimentado en el consenso, mientras que la campaña de Hamburgo se fundamentó en las estructuras profesionales de Amigos de la Tierra y otras organizaciones. En segundo lugar, el referendo solo se centró en la red eléctrica. Y en tercer lugar, el referendo —que también tuvo lugar a finales de 2013— no consiguió movilizar, por poco, la participación necesaria del 25 por ciento del electorado a favor de la propuesta.

Lo que hace interesante la iniciativa de Berlín, aunque fracasara, es la definición clara de los diferentes instrumentos de participación elaborados en el decreto del referendo, que se podría haber convertido en la constitución de una empresa pública democrática.¹² Estos engloban:

- *Un consejo asesor democrático*, en el que se discutiría la orientación estratégica principal de la empresa que se iba a crear. Habría estado integrado por el concejal de Economía, el concejal de Medioambiente, siete representantes de la plantilla y seis personas elegidas por el público.
- *El derecho a la iniciativa*, de forma que cualquier iniciativa que reuniera al menos 3000 firmas sería estudiada por el consejo asesor.
- *Asambleas públicas* donde se debatirían cuestiones relacionadas con el suministro y la generación de energía. Estas asambleas se celebrarían una vez al año, tanto a escala de toda la ciudad como en cada uno de sus 13 barrios. El consejo asesor se encargaría de examinar las recomendaciones que surgieran de estas asambleas en un plazo de tres meses.
- *Una oficina de defensoría*, que crearía la empresa como el punto de contacto principal para las consultas de los ciudadanos y los clientes.

El caso de Hamburgo ilustra las estrategias aplicadas por los movimientos sociales y el tipo de discurso público que suscitaron. Aunque, normalmente, los intentos de convencer a la clase política local habrían supuesto, sobre todo, dedicarse al cabildeo, los preparativos del referendo implicaron una dinámica de construcción de coaliciones y movilización pública para lograr el grado de atención necesario. En cuanto al referendo

en sí, como señaló uno de los organizadores de la campaña en una entrevista, la estrategia consistió en “convencer al 50 por ciento + x”, lo cual entrañó cuestiones como cómo “lograr el tono adecuado” para atraer a una mayoría de votantes.¹³ Sin embargo, el afán remunicipalizador generó resistencias entre actores establecidos en la vida política local vinculada con la energía. En primer lugar, a finales de 2011 el gobierno de la ciudad —entonces socialdemócrata— aprobó una remunicipalización parcial del 25,1 por ciento y un llamado ‘concepto energético’ en cada uno de los servicios públicos. La idea era restar validez al argumento de que el estado local carecía de influencia en el ámbito del suministro de energía. En los meses previos al referendo, el debate público se fue intensificando cada vez más, en especial a partir de que se lanzara una campaña en contra de la remunicipalización total. Esta contaba con el apoyo de una coalición formada por los principales partidos políticos, asociaciones empresariales e incluso los mayores sindicatos del sector (véase el Cuadro II). Curio-



Referendo de Hamburgo, septiembre de 2013
Fotografía: Unser Hamburg - Unser Netz

samente, los objetivos sociales y democráticos solo desempeñaron un papel menor en los debates, ya que el discurso giró en torno a dos cuestiones principales: el aspecto económico y el tema de si la propiedad de la red es un instrumento viable para fomentar una transición a las energías renovables. Este planteamiento queda muy bien reflejado en el lema “porque vale la pena” que utilizó la campaña a favor de la remunicipalización.

Cuadro II

Los sindicatos y las remunicipalizaciones

Si bien la mayoría de los sindicatos alemanes suelen respaldar la titularidad pública y participan de manera activa en las remunicipalizaciones en otros sectores, en algunos casos de remunicipalización en el ámbito de la energía adoptaron una postura más escéptica e incluso contraria. Esto puede explicarse porque su papel primordial consiste en representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en el sistema alemán de relaciones laborales. En este sentido, los convenios colectivos del sector energético suelen asegurar mayores salarios y prestaciones, mientras que los acuerdos de los servicios públicos podrían suponer un deterioro de estas condiciones. Además, cuando surgió el llamamiento a favor de la remunicipalización, los representantes sindicales acababan de terminar una serie de negociaciones a raíz de las reestructuraciones internas que había propiciado la privatización. La posible racionalización de los recursos humanos para equipararlos con otros sectores de los servicios públicos y la rebaja de los sueldos se consideraban riesgos muy reales.¹⁴ Si el objetivo es que los sindicatos se integren como socios en una posible coalición para remunicipalizar un servicio, es importante tener en cuenta estas cuestiones.

El éxito del referendo en Hamburgo, más que el final del proceso, significó el inicio de una nueva fase en la política remunicipalizadora. En síntesis, la administración que anteriormente se había opuesto a remunicipalizar el servicio se encontró de repente al mando de la reforma. Pese a esta paradoja, el gobierno local trabajó duro para poner en práctica la remunicipalización, negociando contratos y opciones con las concesionarias pertinentes. A fines de 2014, se volvió a adquirir la red eléctrica por 495,5 millones de euros (suma que incluía la compra del 25,1 por ciento en 2011), y una opción para adquirir la red de distribución de gas por unos 355,4 millones de euros en el año 2018 (que probablemente se hará efectiva en 2017).¹⁵ Los principales promotores del referendo participaron como asesores en las reuniones de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Ambientales. Además, en 2016 se creó un Consejo Asesor de Redes, donde también están representados estos grupos. El resultado del referendo desempeña ahora un papel importante como punto de referencia en los debates que están teniendo lugar sobre el futuro del sistema de calefacción urbana, aunque todavía no está claro cómo se debe actualizar la orientación social que también se exige en el proyecto. Es evidente que el referendo en Hamburgo ha incrementado la influencia de los actores que formaron la coalición organizadora. Por otro lado, la remunicipalización parece haber generado cambios más amplios que la cuestión del suministro de energía en sí.

Conclusión

El gran número de remunicipalizaciones en el sector energético alemán revela un giro importante en sus estructuras económicas políticas. Con estas remunicipalizaciones se revirtieron las privatizaciones anteriores o se crearon nuevas empresas públicas locales. Esta tendencia estuvo influenciada por diferentes tradiciones, la apertura del sector energético alemán en el marco de la transición energética y el vencimiento de los contratos de concesión, que actuaron como una oportunidad excepcional.

La propiedad pública en los servicios públicos de energía amplía el abanico de opciones del que disponen los municipios para controlar las infraestructuras y beneficiarse de ellas, además de cambiar por completo las metas y las políticas generales por las que se rige la prestación de energía. Esto significa que las empresas eléctricas municipales podrían servir de vehículo de diferentes instrumentos y programas para aumentar el porcentaje de las energías renovables, entre ellas la creación de capacidades de generación de renovables, programas de coproducción que impliquen a la ciudadanía y programas de investigación sobre cómo integrar las energías renovables. Por último, unas buenas condiciones financieras hacen de la remunicipalización una opción factible para los municipios con más recursos.

En otros casos, fueron los actores sociales o ambientales que no estaban dentro de las instituciones de la política local los que buscaron influir en la administración local para que esta remunicipalizara el servicio. Procesos como el del referendo sobre la red de energía en Hamburgo condujeron a procesos conflictivos y antagónicos, pero también permitieron incrementar la influencia de los movimientos sociales en la política energética local. Aquí es importante asegurar una definición clara de los canales, los derechos y los deberes de participación, así como de los objetivos de la futura empresa. Si bien puede que se produzca cierta tensión entre los mecanismos participativos y la eficacia en el funcionamiento de la empresa, una presentación equilibrada de los intereses de clientes, empleados y propietarios en los órganos de toma de decisiones y control podría ayudar a que los servicios públicos municipales abandonen viejas inercias comerciales y adopten metas sociales y ambientales sin sacrificar la alta calidad del servicio.



Sören Becker es un geógrafo interesado en la relación entre la propiedad colectiva, las tecnologías descentralizadas y el Estado. Sören es coautor del libro *Wege zur Energiedemokratie (Energy Democracy in Europe, en inglés)* y de varias publicaciones académicas sobre energía comunitaria, remunicipalizaciones y otros aspectos de la transición energética en Alemania. Actualmente, es investigador adjunto de la Universidad Humboldt de Berlín y en la Universidad de Bonn.

Notas

- 1 Lormes, I. (2016) *Kommunalisierung der Energieversorgung: eine explorative Untersuchung von Stadtwerke-Neugründungen*. Wiesbaden: VSA, p. 334.
- 2 Bauer, H. (2012) Zukunftsthema Rekommunalisierung. *Die Öffentliche Verwaltung* 36(2), p. 329.
- 3 Bontrup, H.-J. y Marquardt, R.-M. (2011) *Kritisches Handbuch der deutschen Elektrizitätswirtschaft*. Berlín: Ed. Sigma.
- 4 Bönker, F. et al. (2016) Remunicipalisation revisited: long-term trends in the provision of local public services in Germany. En H. Wollmann et al. (eds.), *Public and social services in Europe: from public and municipal to private sector provision*. Londres: Palgrave, pp. 71-85.
- 5 Wollmann, H. (2015) Erbringung öffentlicher und sozialer Dienstleistungen zwischen Kommunen, Staat, Privatem und Dritten Sektor. En M. Döhler et al. (eds.), *Der gut organisierte Staat*. Berlín: Ed. Sigma. Sin embargo, la prestación local de servicios también ha entrañado modelos de asociación público-privada, que se remontan al período histórico durante el que se crearon las primeras centrales eléctricas.
- 6 Gailing L. y A. Röhring (2016) Germany's Energiewende and the spatial reconfiguration of an energy system. En L. Gailing y T. Moss (eds.), *Conceptualising Germany's energy transition: Institutions, materiality, power, space*. Londres: Palgrave, pp. 11-20.
- 7 Trend:research y Leuphana Universität Lüneburg (2013) Definition und Marktanalyse von Bürgerenergie in Deutschland. https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/Studie_Definition_und_Marktanalyse_von_Buergerenergie_in_Deutschland_BBEn.pdf.
- 8 Kungl, G. (2015) Stewards or sticklers for change? Incumbent energy providers and the politics of the German energy transition. *Energy Research and Social Science* 8.

- 9 Matecki, C. y T. Schulten (2013) Zwischen Privatisierung und Rekommunalisierung. En C. Matecki y T. Schulten (eds.), *Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung*. Hamburgo: VSA, pp. 8-17.
- 10 Inscrición en el Registro Mercantil de la ciudad de Hamburgo.
- 11 Las cifras proceden de su página web y de su Informe Comercial para el año 2015, disponible aquí: https://www.hamburgenergie.de/fileadmin/user_upload/dokumente/downloads/HAMBURG_ENERGIE_Geschaeftsbericht_2015.pdf.
- 12 Berliner Energietisch (2012) Neue Energie für Berlin: Eckpunkte des Gesetzentwurfs für eine demokratische, ökologische und soziale Energieversorgung. Versión resumida en inglés: <http://www.berliner-energietisch.net/argumente/7-gute-gruende-deutsch-und-tuerkis-ch#english>
- 13 Entrevista en Hamburgo, 8 de enero de 2015.
- 14 Véase, por ejemplo: Hansen, T. y P. Grau (2013) Ein kritischer Blick auf Rekommunalisierungsprojekte in der Energiewirtschaft. En C. Matecki and T. Schulten (eds.), *Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung*. Hamburgo: VSA, pp. 14,0-4,7. Véase también Hall, D. (2012) *Remunicipalising municipal services in Europe*. http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Redraft_DH_remunicipalization.pdf, p. 7.
- 15 Según los contratos de remunicipalización entre la ciudad y las empresas, que se pueden consultar aquí: <http://www.hamburg.de/pressemeldungen/4413746/2014-12-01-volksentscheid-energienetze/> Estas sumas incluyen tanto la remunicipalización parcial de 2011 como el precio negociado para la remunicipalización total.

Capítulo 9

La propiedad pública vuelve al orden del día en el Reino Unido

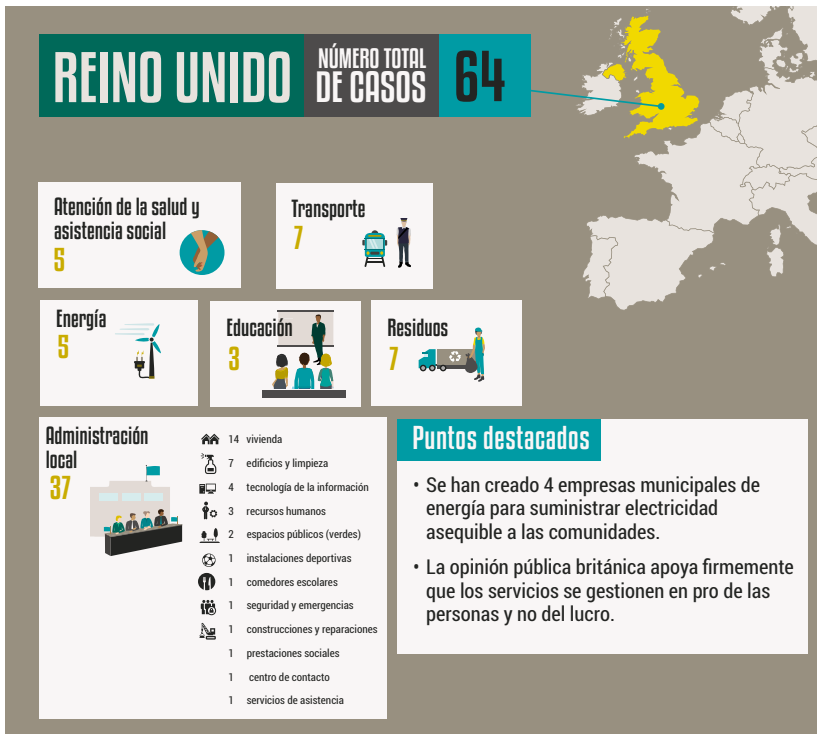
David Hall y Cat Hobbs

La tendencia remunicipalizadora ha alcanzado incluso el Reino Unido, cuna de la ideología *thatcherista* y una isla que ha afirmado su independencia a través del *brexít*. Como en otros lugares, los principales factores que han impulsado que los servicios vuelvan a ser de propiedad pública han sido la necesidad de ahorrar costes y el control sobre la calidad.

Durante la última década, las administraciones locales del Reino Unido han puesto en marcha importantes remunicipalizaciones o han creado nuevos servicios, en especial en los sectores de la energía y el transporte público. En ciudades como Londres, Newcastle y Birmingham, se ha asumido el control municipal de los sistemas de metro, y en otros lugares, como Nottingham, Bristol, Leeds y Escocia, se han establecido las primeras compañías municipales de energía del Reino Unido con el objetivo de suministrar una energía asequible a las comunidades.

Ayuntamientos de todo el país están asumiendo los servicios cuando los contratos externalizados no funcionan, en ámbitos tan diversos como el mantenimiento de carreteras, la vivienda, la gestión de residuos, la limpieza, la tecnología de la información y los recursos humanos. Y varias autoridades locales han optado por pagar para retirarse de asociaciones público-privadas (APP) de hospitales y otros servicios clave años antes de que el contrato venciera oficialmente. Por lo general, los servicios se internalizan sin grandes espectáculos. Sin embargo, los casos mencionados ilustran el rechazo que suscitan sobre el terreno las privatizaciones, a medida que los gobiernos locales (por no decir nacionales) descubren sus problemas.

La opinión pública en el Reino Unido se muestra firmemente partidaria de que los servicios se gestionen en pro de las personas y sin fines de lucro; las encuestas, en efecto, muestran que tanto quienes desean abandonar la UE como quienes prefieren seguir formando parte de ella prefieren la titularidad pública. Este sentimiento popular está empezando a reflejarse en la vida política. Para las elecciones de 2017, el Partido Laborista defendió la propiedad pública de los ferrocarriles, la energía, el agua, los autobuses, los servicios municipales, Royal Mail y el Servicio Nacional de Salud (NHS), marcando una ruptura decisiva con la ‘tercera vía’ de la época de Blair.¹ Campañas como *We Own It* están utilizando ejemplos de remunicipalización para demostrar que la privatización no es un proceso inevitable, sino que se puede revertir o hacer innecesario cuando las empresas públicas desplazan a las grandes multinacionales.²



Servicios locales de metro

La remunicipalización más amplia de unos servicios de transporte público conllevó la rescisión de varias APP, de un valor de 20 000 millones de libras esterlinas, por parte de Transport for London (TfL). La autoridad pública se había visto obligada a recurrir a las APP para llevar a cabo una importante tarea de remodelación del metro de Londres, pero en 2010 las dos mayores asociaciones, conocidas como Metronet y Tubelines, concebidas para renovar el sistema subterráneo, se habían desplomado. Una comisión parlamentaria formada por representantes de varios partidos elaboró un informe que criticaba con dureza la APP de Metronet, así como los argumentos de eficiencia y ‘transferencia del riesgo’ que se utilizan para justificar todas las asociaciones de este tipo:

“La incapacidad de Metronet para operar de forma eficiente y rentable demuestra que el sector privado puede incumplir sus promesas a una escala espectacular (...). Los antiguos accionistas de Metronet han dejado un legado de mala gestión de los programas e integración de sistemas, un control de costes ineficaz, una falta de planificación y una administración fiscal ineficiente (...). Cuesta dar crédito a la afirmación de que los contratos de APP de Metronet consiguieron transferir el riesgo del sector público al privado. De hecho, sucedió lo contrario.”

En cambio, pese a la complejidad del proceso remunicipalizador, TfL puso de manifiesto que la prestación directa por parte del sector público es más eficiente y no se ve limitada por la carga de gestionar los contratos. Aunque las APP ya habían destinado más de 400 millones de libras esterlinas a pagar los honorarios de varios bufetes de abogados, la remunicipalización ofreció varias fuentes de mayor eficiencia “que permitirán una reducción de costes de 1000 millones de libras esterlinas... [y] se han logrado ahorros significativos gracias a eficiencias en materia de contratación y mantenimiento”.³

A raíz de estas remunicipalizaciones, TfL emprendió un examen sistemático de todas las demás APP que se había visto obligada a firmar por otros programas de inversión, con lo que consiguió cada vez más ahorros, no solo por reducir el coste de los dividendos y el interés de la deuda, sino también por otras mejoras de eficiencia.

Tabla 1. Rescisión de APP por parte de Transport for London (TfL)

Proyecto de Iniciativa de Financiación Privada (PFI)	Fecha de inicio	Sector		Valor (millones £)	Situación	Fecha de finalización
Metronet SSL	2000	ML	Renovación	6700	Rescindido	2008
Metronet BCV	2000	ML	Renovación	5400	Rescindido	2008
Tubelines	2000	ML	Renovación	5500	Rescindido	2010

ML=Metro de Londres
Fuente: TfL4

La remunicipalización también ha permitido alcanzar un ahorro parecido en Tyne and Wear Metro, un sistema de tren ligero que da cobertura a la región de Newcastle, con 40 millones de viajes al año. Hasta el año 2016, la gestión estaba externalizada mediante una concesión con Arriva, una filial de Deutsche Bahn, pero desde abril de 2017 depende totalmente de la administración directa de la empresa municipal de transporte Nexus.

La decisión no fue solo de cariz político, sino que se tomó después de analizar los ahorros y las mejoras que se podrían conseguir si se asumía el control del servicio. El proceso entrañó importantes obras de ingeniería, como la modernización del sistema de cableado de fibra óptica y señalización, que corrió a cargo de un nuevo equipo interno y tuvo un coste de unos 11 millones de libras esterlinas, frente a los 24 millones de libras que hubiera costado en caso de que Nexus hubiera externalizado el trabajo a una compañía privada.⁴

Ferrocarriles

El que en su día fue el sistema ferroviario nacional, British Rail, se dividió y privatizó entre 1994 y 1997 y, desde entonces, los servicios de ferrocarril en el Reino Unido han sido prestados por compañías privadas a través de 16 contratos de concesión. La red de vías se privatizó por separado, pero esta sufrió una falta de inversiones, fue objeto de una subcontratación excesiva y, además, demostró una trayectoria catastrófica en materia de seguridad, incluidos dos accidentes graves que se tradujeron en varias muertes y, finalmente, en la quiebra financiera. A raíz de todo ello, el Gobierno volvió a asumir la red de vías a través de Network Rail a partir de 2002. Esta operación representó un gran retorno a la propiedad pública (aunque la situación pública de Network Rail no se reconoció de forma oficial hasta 2012).⁵

Las compañías operadoras han generado una serie de problemas recurrentes, lo cual ha originado al menos dos casos en los que las concesiones privadas se rescindieron y se sustituyeron por empresas del sector público, aunque ambas se volvieron a privatizar más tarde. En 2003, el Gobierno rescindió la concesión otorgada a Connex (una filial de Veolia) para gestionar el servicio de trenes del sureste del país, y puso en su lugar a una empresa del sector público, Southeastern Trains, que gestionó la franquicia hasta 2006, cuando el Gobierno volvió a poner la concesión en manos de un operador privado.⁶ En 2009, la línea de la costa oriental pasó a ser de propiedad pública (después de que National Express renunciara al contrato) y la iniciativa resultó ser gran éxito. El servicio alcanzó un índice de satisfacción de los usuarios del 91 por ciento, requirió muchos menos subsidios públicos, devolvió 1000 millones de libras esterlinas al Tesoro y se convirtió en la franquicia más eficiente del Reino Unido. Sin embargo, el Gobierno volvió a privatizar la línea en 2015.⁷

En el momento de escribir estas páginas, en la primavera de 2017, Southern Rail está experimentando un doble problema. Los pasajeros se han quejado de que el servicio es cada vez menos fiable, y existe una larga

contienda entre la empresa y los sindicatos sobre los niveles de personal, en que la simpatía del público está del lado de los sindicatos. Así, en estos momentos, la opinión pública es muy favorable a que el sector público vuelva a recuperar Southern Rail y el resto de concesiones operativas.⁸

Por último, el Gobierno no ha asignado a ningún operador privado la nueva línea ferroviaria que atravesará Londres de este a oeste, Crossrail, que depende de TfL. Esta es una iniciativa positiva con miras a garantizar la propiedad y gestión públicas, aunque TfL ha subcontratado el funcionamiento real de la línea a un consorcio privado.

Energía

La industria de la electricidad y el gas fue privatizada al completo por los Gobiernos de Thatcher en la década de 1980 y principios de 1990. Algunos municipios han establecido ahora sus propias empresas de suministro de energía, tanto por razones sociales como de fomento de las energías renovables. Esto se explica por el descontento generalizado con respecto a las facturas de energía que pagan los hogares, que se atribuyen al afán de lucro de las compañías privadas y a la incapacidad de los organismos reguladores y los Gobiernos para adoptar medidas eficaces. Por otro lado, existe una presión pública creciente a favor de un giro real hacia una energía renovable más verde. Las autoridades locales han comenzado a actuar en beneficio de la ciudadanía, lo cual es algo muy novedoso para el Reino Unido, donde estas llevaban muchos años sin desempeñar un papel destacado en los sistemas de electricidad y gas.

El Ayuntamiento de Nottingham (532 000 habitantes) decidió crear una nueva empresa de suministro eléctrico en 2015, tras advertir que muchas familias de bajos ingresos tenían graves problemas para pagar las facturas, y que establecer una empresa municipal resultaba la mejor forma de ayudarlas. La empresa, que se llama Robin Hood Energy,⁹ en honor del proscrito de la Edad Media famoso por robar a los ricos para dárselo a los pobres, ofrece un servicio más barato porque no extrae grandes benefi-

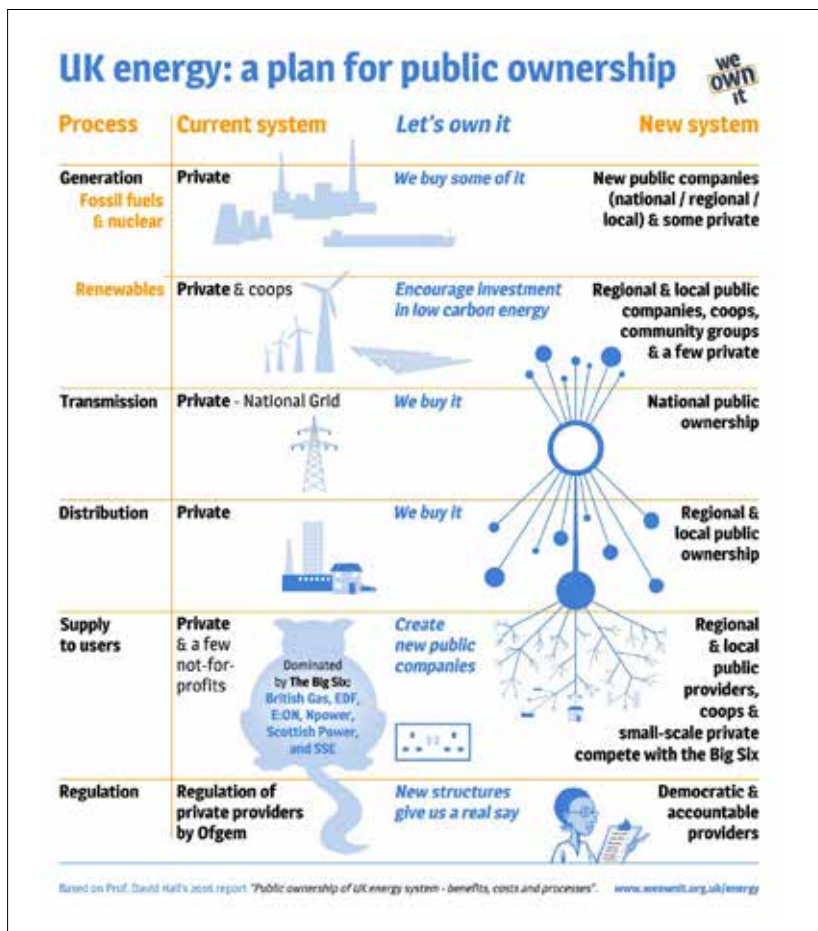
cios de ningún tipo, ni confunde a los clientes con complicados paquetes tarifarios. Según las palabras de la propia empresa: “No tenemos accionistas privados, ni bonificaciones para la junta directiva (...) Solo precios claros y transparentes”.¹⁰ Robin Hood Energy cuenta con los precios más baratos de todo el Reino Unido para las personas que usan contadores de prepago (es decir, los hogares que no han podido pagar las facturas y, por lo tanto, deben abonar la electricidad por adelantado a través de un contador especial que se activa con monedas o tarjetas de crédito), y a los nuevos inquilinos que se trasladan a las viviendas subvencionadas por el Ayuntamiento se les asigna por defecto esta empresa. El impacto de la empresa, muy significativo, supera ya el ámbito de sus propios clientes: el coste medio de la energía en la región de East Midlands, donde se encuentra Nottingham, es ahora el más barato del país.

La empresa también ha creado alianzas con otras grandes ciudades. La ciudad de Leeds (534 000 habitantes) creó la empresa municipal White Rose Energy¹¹ en 2016, con el fin de promover las tarifas sencillas y sin fines de lucro de Robin Hood Energy en las regiones de Yorkshire y Humberside, en especial entre aquellas personas que usan los contadores de prepago. En 2017, las ciudades de Bradford y Doncaster (528 000 y 80 000 habitantes, respectivamente), también preocupadas por los problemas que experimentaban las familias más modestas para pagar las facturas, decidieron sumarse a la alianza White Rose/Robin Hood.

En 2015, el Ayuntamiento de Bristol (428 000 habitantes) creó una empresa municipal de energía, Bristol Energy.¹² Su objetivo consiste en ofrecer precios más bajos que las grandes compañías comerciales, pero también invierte en la generación de energía renovable y cuenta con una tarifa de energía renovable del 100 por ciento; además, prevé destinar al Ayuntamiento un dividendo para que ayude a financiar los servicios locales.

Estos nuevos proveedores municipales, en conjunto, prestan ya servicio a más de 2,2 millones de personas. Y en 2017 se podría alcanzar un impacto aún mayor gracias a la labor de una potente campaña, *Switched On London*,¹³ que está abogando por que Londres cree una empresa energética totalmente pública. Entre los objetivos, se cuenta el suministro de energía a un precio asequible, pero también la inversión en energía renovable, la mejora de la eficiencia energética de los hogares, un salario justo y unas buenas condiciones laborales, y un consejo de administración que incluya a representantes del personal y de la comunidad. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha mostrado de acuerdo con crear una empresa que se llamaría *Energy for Londoners*, pero en marzo de 2017 todavía estaba estudiando distintas opciones.¹⁴ También otros ayuntamientos, como Wirral y Liverpool, han decidido comenzar a ofrecer energía a sus ciudadanos y ciudadanas mediante empresas municipales, ya sea de creación reciente o ya en funcionamiento.¹⁵

Estas iniciativas se ven ahora fortalecidas por algunas propuestas del Partido Laborista que prevén generalizar las empresas municipales de suministro, parecidas a *Robin Hood Energy*, con la idea de que proporcionen electricidad y gas más baratos, gracias a que no deben repartir dividendos entre los accionistas y a que pagan menores tasas de interés. Además, buscan fomentar que los municipios cumplan con su responsabilidad de desarrollar la generación de energía solar y eólica en sus zonas, ya sea directamente o a través de cooperativas locales. A las centrales de carbón y gas existentes se les permitiría seguir funcionando en manos privadas hasta que lleguen al final de su vida útil. De forma que se produciría una transición gradual y simultánea, de un modelo privado en que la energía térmica se vende con fines de lucro, a otro modelo público, en que la energía renovable se suministra de forma universal. Por lo tanto, los gastos de compensación se limitarían al coste de la adquisición de las redes para el sector público. El paso a un sistema público de energía en el Reino Unido se pagaría en diez años. Y cada año se podrían ahorrar 3200 millones de libras, ya que no sería necesario pagar dividendos a los accionistas y el coste del capital sería menor.¹⁶



La remunicipalización de las asociaciones público-privadas

Desde la década de 1990, el Reino Unido ha introducido un amplio abanico de APP en el marco del programa Iniciativa de Financiación Privada (PFI). Para 2011, el programa había caído en un total descrédito, censurado por una serie de informes parlamentarios e incluso criticado por medios de la derecha, como el diario *Daily Telegraph*. Muchos proyectos

ejecutados a través del PFI se han topado con problemas importantes y más de 30 acuerdos se han rescindido.¹⁷ Los factores que han propiciado estas rescisiones son diversos, y van desde la presión pública al derrumbe financiero, pasando por la identificación de medidas de ahorro derivadas del control directo de la gestión pública. Los proyectos PFI representan aproximadamente el 5 por ciento de todas las APP del Reino Unido, pero como entre ellos se encuentran algunos de los de mayor envergadura, se estima que su valor total equivale al 25 por ciento de todas las APP, un porcentaje muy alto.

La rescisión de los acuerdos ha dado lugar en muchas ocasiones a la remunicipalización de los servicios públicos, como:

- **Transporte público local:** en especial las APP remunicipalizadas por TfL (véase arriba).
- **Atención de la salud:** un ejemplo notable fue la compra del proyecto PFI del Hospital Hexham de Northumbria, que fue posible porque el Consejo del Condado de Northumberland decidió prestar a la administración regional del NHS 114,2 millones de libras, que se desembolsaron para poder rescindir el contrato de PFI, pese al riesgo que ello entrañaba para el Consejo. Otro fue el de West Park Hospital, en Darlington, que fue adquirido por la administración del hospital local en 2011. Pero puede que esta vía se vea bloqueada por las autoridades gubernamentales: a principios de 2016, el Gobierno escocés denegó al Consejo de Highland facultades para solicitar más préstamos y comprar dos contratos PFI en centros escolares.
- **Gestión de residuos:** la planta de tratamiento de residuos de Crymlyn Burrows, en Swansea, se puso en marcha en el marco de una PFI, que se rescindió en 2005 y pasó a ser gestionada por el municipio.¹⁸

Perspectivas de futuro

Pese a estas experiencias alentadoras de retorno a la propiedad pública, el actual Gobierno conservador (mayo de 2017) continúa presionando para seguir privatizando. La política más peligrosa y de mayor calado en este sentido es el intento sistemático de subcontratar el máximo de actividades posibles del NHS. En los últimos tres años, el Gobierno también ha privatizado el servicio de Correo. Pero otros planes de privatización menores han descarrilado, como los planes para vender el Registro de la Propiedad y el segundo canal de la televisión pública, Channel 4.

Sin embargo, en general, este período ha presenciado la aparición de fuerzas más potentes en pro de crear un nuevo sector público. Existen tres factores políticos que apuntan a que la tendencia se mantendrá en este sentido. En primer lugar, la mayor parte de la opinión pública del Reino Unido está a favor de que los ferrocarriles, la energía, el agua y otros servicios sean de titularidad pública, y en contra de seguir privatizando mediante APP y externalizar el NHS. Esta opinión surge a partir de amargas experiencias con el precio creciente de la energía y el agua, los accidentes ferroviarios y la falta de inversión del sector privado, pero también de una confianza renovada en el futuro del sector público. Fruto de todo ello es la creación de una campaña nacional de gran éxito, We

Tabla 2. *Apoyo popular a la propiedad pública de los servicios en el Reino Unido (mayo de 2017)*

	Debe ser público %	Debe ser privado %	No sabe %
Energía	53	31	16
Agua	59	25	16
Correo	65	21	14
Ferrocarriles	60	25	15
Autobuses	50	35	15

Fuente: YouGov UK ²¹

Own It, que, por primera vez, alza una voz firme y coherente a favor de la propiedad pública. La campaña ha elaborado un resumen de distintos casos, destinado a la campaña para las elecciones generales de junio de 2017, y un sitio web con información detallada sobre cada sector.¹⁹

En segundo lugar, la polarización del referendo para el *brexit* ha puesto de manifiesto el gran número de personas en Gran Bretaña que se oponen a la complaciente política de la austeridad. Pero las encuestas revelan que el apoyo a la propiedad pública de estos servicios es igual de fuerte entre quienes votaron a favor de abandonar la UE en el referendo y quienes votaron a favor de permanecer en ella.²⁰ Esta realidad abre dos posibilidades positivas: presentar la propiedad pública como una alternativa progresista para que la gente recupere el control sobre su vida, el planeta y la economía, y de este modo, revindicar el apoyo popular más allá de la derecha xenófoba y nacionalista. A raíz del resultado del referendo, se dibuja también la posibilidad de reformar el sector público sin las restricciones que imponen las políticas de la UE sobre el mercado interior y las ayudas estatales, y sus dogmas en materia de política fiscal y macroeconomía.

En tercer lugar, la dirección del Partido Laborista bajo el mando de Jeremy Corbyn está intentando convertir uno de los partidos socialdemócratas más decadentes de Europa en un nuevo partido de izquierdas, como Podemos en el Estado español o Syriza en Grecia, apartándose de las políticas neoliberales de austeridad y privatizaciones, y promoviendo un Gobierno transparente, democrático y de base comunitaria. El manifiesto del Partido Laborista para las elecciones de 2017²¹ plasmaba el compromiso de recuperar el control público de los servicios de ferrocarril, energía, agua y correos, lo cual puede que le haya ayudado a captar más apoyo que cualquier otro partido entre los votantes menores de 40 años.²²

Desde una perspectiva histórica, todos estos cambios están reconstruyendo la capacidad de los municipios para prestar servicios sometidos al control democrático local. En el siglo XIX, Gran Bretaña fue uno de los países que primero desarrollaron el 'socialismo municipal', y ciudades

como Birmingham asumieron la responsabilidad de suministrar agua, gas y electricidad, transporte público, vivienda y otros servicios. Pero a los municipios se les despojó de estas funciones en la segunda mitad del siglo XX: todos los sistemas de gas y electricidad pasaron al control del Gobierno central cuando se nacionalizaron estos sectores, en la década de 1940; el agua fue nacionalizada por el Gobierno de Thatcher en la década de 1980 como preludeo a su privatización; el transporte en autobús se privatizó mediante la liberalización y la externalización del servicio a partir de la década de 1980; y la vivienda pública, a través de la venta de muchas viviendas subvencionadas de la administración local y las restricciones sobre la financiación de nuevas construcciones.²³

Las tendencias también han vuelto a situar en el centro del debate político la cuestión de la propiedad pública de los servicios públicos. Por primera vez en 25 años, el manifiesto del Partido Laborista incluyó el compromiso de que el agua, la electricidad y los ferrocarriles volvieran a ser de titularidad pública, con el objetivo de desarrollar y fortalecer el gobierno local en el Reino Unido; unas políticas en sintonía con la opinión pública.²⁴ Las elecciones del 8 de junio dieron un gran vuelco a favor del Partido Laborista, en parte debido a este claro compromiso con la propiedad pública. La tendencia política en el Reino Unido se dirige ahora con paso firme en contra de las privatizaciones.²⁵



David Hall fue el director fundador de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) en la Universidad de Greenwich, donde colaboró de 2000 a 2013. Actualmente, trabaja como profesor visitante en esa misma Universidad.



Cat Hobbs es la fundadora y directora de We Own It, una nueva organización que aboga por la propiedad pública de los servicios.

Notas

- 1 Labour Party (2017) For the many, not the few: The Labour Party manifesto 2017. Londres. <http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifesto-2017/Labour%20Manifesto%202017.pdf> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 2 We Own It (2017) Manifesto 2017: How public ownership can give us real control. <https://weownit.org.uk/manifesto> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 3 Pruebas por escrito presentadas por Transport for London al Comité Parlamentario Especial del Tesoro (2011) <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasury/1146/1146we05.htm> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 4 *BBC News* (2017). Tyne and Wear Metro to be publicly run by Nexus. 1 de abril. <http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-39466348>; *Rail Technology Magazine* (2014) Bringing contracts back in-house. <http://www.railtechnologymagazine.com/Interviews/bringing-contracts-back-in-house> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 5 Leer más: Sloman, L. (2016) Privatising Network Rail: A 10 billion ticket to disaster. Report, junio. Oxford: We Own It and Transport for Quality of Life. <https://weownit.org.uk/sites/default/files/attachments/Privatising%20Network%20Rail%20-%20a%20C2%A310%20billion%20ticket%20to%20disaster.pdf>
- 6 https://en.wikipedia.org/wiki/Connex_South_Eastern
- 7 <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/27/privatising-east-coast-rail-rip-off>
- 8 [https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_\(Govia_Thameslink_Railway\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_(Govia_Thameslink_Railway))
- 9 Robin Hood Energy: <https://robinhoodenergy.co.uk/>; *Mirror* (2017). Robin Hood energy is taking on the Big Six to help the poor heat their homes. 6 de enero. <http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/robin-hood-energy-taking-big-9571454>; *Doncaster Free Press* (2017). Deal to slash energy costs for Doncaster residents. 24 de marzo. <http://www.doncasterfreepress.co.uk/news/deal-to-slash-energy-costs-for-doncaster-residents-1-8458027> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 10 Robin Hood Energy: <https://robinhoodenergy.co.uk/> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 11 White Rose Energy: <https://www.whiteroseenergy.co.uk/about-us>; *Bradford Telegraph & Argus* (2017). White Rose Energy agreement to undergo further scrutiny at Conservatives' request. 21 de enero. http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/15037995.Council_ener-gy_deal_sets_off_alarm_bells_say_Tories/ (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 12 Bristol Energy: https://bristol-energy.co.uk/about_us (consultado el 19 de mayo de 2017).

- 13 Switched On London Campaign: <http://switchedonlondon.org.uk/> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 14 Alcalde de Londres (2017) DD2077 Energy for Londoners not for profit energy supply company. 17 de enero. <https://www.london.gov.uk/decisions/dd2077-energy-londoners-not-profit-energy-supply-company> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 15 *Liverpool Echo* (2017) Wirral residents could save hundreds each year through Council Energy Company. 20 de marzo. <http://www.liverpoolecho.co.uk/in-your-area/wirral-residents-could-save-hundreds-12769953>
- 16 Hall, D. (2016). Public ownership of the UK energy system—benefits, costs and processes. 14 de abril. <http://www.psiru.org/sites/default/files/2016-04-E-UK-public.pdf>
- 17 Whitfield, D. (2017). PFI/PPP buyouts, bailouts, terminations and major problem contracts in UK. European Services Strategy Unit Research Report No. 9. Londres: ESSU. <http://www.european-services-strategy.org.uk/publications/essu-research-reports/>
- 18 Ibid.
- 19 We Own It (2017) Manifiesto 2017: How public ownership can give us real control. <https://weownit.org.uk/manifiesto> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 20 We Own It (2017) Manifiesto 2017: How public ownership can give us real control. <https://weownit.org.uk/manifiesto> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 21 Labour Party (2017) For the many, not the few: The Labour Party manifiesto 2017. Londres. <http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifiesto-2017/Labour%20Manifiesto%202017.pdf> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 22 *Daily Telegraph* (2017). Labour most popular party among voters under 40, general election poll reveals, 27 de abril. <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/27/labour-ahead-polls-among-voters-40/> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 23 Crewe, T. (2016) Strange Death of Municipal England. *London Review of Books* 38(24): 6-10. <https://www.lrb.co.uk/v38/n24/tom-crewe/the-strange-death-of-municipal-england>
- 24 YouGov (2017) Nationalisation vs privatisation: The public view. <https://yougov.co.uk/news/2017/05/19/nationalisation-vs-privatisation-public-view/> (consultado el 19 de mayo de 2017).
- 25 UK Polling Report (2017) What people noticed from the manifestos, 25 de mayo. <http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/9893>

Una ola ciudadana reivindica unos servicios públicos y democráticos de agua en los municipios catalanes

Míriam Planas

Cataluña vivió su primera experiencia de remunicipalización del agua en 2010, en el municipio de Figaró. Siete años después, se han abierto las puertas para que se remunicipalicen los servicios (o se municipalicen en algunos lugares donde el agua nunca fue pública) y casi 3,5 millones de los siete millones de personas que viven en Cataluña, incluida la capital, Barcelona, podrían presenciar un cambio en el modelo de gestión del agua. Se trata de una oportunidad para avanzar en nuevas formas de gestión del agua como un bien común, que sean más democráticas y que garanticen el derecho al agua, tanto para cubrir las necesidades más básicas de las personas como para garantizar la conservación de los sistemas hídricos. La tendencia de la remunicipalización del agua en Cataluña forma parte de una tendencia más general en todo el Estado español, que se mantiene a pesar de los esfuerzos del Gobierno central, de carácter conservador, para ponerle freno.

El cuasi monopolio de Agbar en Cataluña

En Cataluña, el 83,6 por ciento de la población recibe el suministro de agua de compañías privadas. El Grupo Agbar (Aguas de Barcelona), filial de la multinacional francesa Suez, abastece a un 70 por ciento de la población, es decir, a unos 5,6 millones de habitantes. Y Aqualia, filial de la constructora FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), aproximadamente a otro medio millón. En el plano nacional, en torno al 57 por ciento de la población española recibe agua de un proveedor privado. Agbar, cuya sede se encuentra en Barcelona, es, con diferencia, el actor dominante

en el mercado español. Así pues, históricamente, Barcelona y Cataluña habían conformado el bastión de la gestión privada del agua en el país.

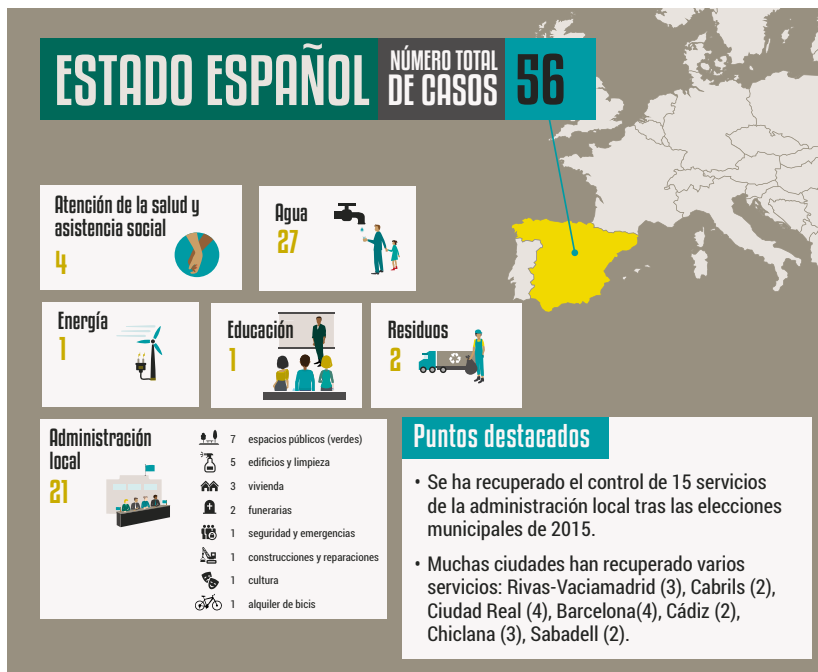
En Cataluña, la gestión privada se concentra en las ciudades grandes y medianas, ya que tienen más población y, por lo tanto, garantizan una mayor capacidad de retorno de las inversiones y el pago de tarifas. En el resto del territorio, existe una larga tradición de gestión pública, que se despliega en 450 pequeñas localidades, es decir, la mitad de los municipios de Cataluña, aunque estos solo representan el 16,4 por ciento de la población.

Según un informe de 2011 del Tribunal de Cuentas español,¹ la gestión privada del agua es un 22 por ciento más cara para las poblaciones pequeñas y medianas que la gestión pública, y que el modelo privado presenta, de promedio, un rendimiento peor. En Cataluña, el promedio de los precios en los municipios gestionados de forma privada es un 25 por ciento más elevado que el promedio en los municipios con gestión pública. En el área metropolitana de Barcelona (que abarca la propia ciudad y otros 22 municipios a su alrededor), la plataforma 'Aigua és Vida' calcula que las tarifas del agua de Agbar son un 91,7 por ciento más caras que en poblaciones vecinas, como El Prat de Llobregat y Barberà, donde la gestión es pública.

Sin embargo, la situación del abastecimiento de agua en Cataluña podría estar a punto de cambiar de forma radical, ya que 14 municipios catalanes ya han municipalizado o remunicipalizado el servicio. En los próximos años (2017 a 2025; véase el anexo), unos 90 municipios, donde viven unos 3,5 millones de personas, finalizan sus contratos de concesión. Además, muchos de los contratos privados vigentes hoy en día no se han sometido al debido concurso público. Decenas de ayuntamientos ya han decidido estudiar la posibilidad de (re)municipalizar el agua y cambiar de modelo. Todo ello, sumado a las dinámicas movilizaciones y plataformas ciudadanas que reivindican una gestión del agua pública y democrática en Cataluña y en todo el Estado español, ha dado lugar a la actual ola (re)municipalizadora.

Cambio de escenario: la ola de (re)municipalizaciones

En 2015, en muchas ciudades españolas, incluidas Madrid y Barcelona, subieron al poder coaliciones progresistas dirigidas por ciudadanos y ciudadanas. Fue la culminación de años de campaña por parte de movimientos ciudadanos a favor del acceso a derechos básicos y contra la corrupción de los partidos políticos tradicionales y sus estrechas conexiones con las grandes empresas. A su vez, creó un entorno político favorable para las remunicipalizaciones. Valladolid (300 000 habitantes) es la ciudad más grande que hasta el momento ha remunicipalizado los servicios de agua en el Estado español.² El Ayuntamiento ha decidido retomar la gestión pública cuando venza el contrato con Agbar, en julio de 2017. Aunque no cabe en el marco de este capítulo, es importante señalar que muchos de estos municipios (que no están dirigidos necesariamente por coaliciones progresistas) no solo se han embarcado en la misión de remunicipalizar el agua, sino también otros servicios. Sin embargo, un obstáculo importante se encuentra en el Gobierno central, que está intentando impedir que las ciudades remunicipalicen servicios públicos. En abril de 2017, el Gobierno central presentó un borrador de los Presupuestos Generales que incluía una disposición adicional (la número 27) que generó una gran preocupación, aunque finalmente no se adoptó tal como se había propuesto.³ La norma habría impedido transferir personal del sector privado a cualquier nuevo organismo público, con el objetivo último de que los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras se posicionaran en contra de las remunicipalizaciones. Por otro lado, habría supuesto que se perdiera la experiencia acumulada y se creara una falta de personal calificado para proporcionar los servicios. El Gobierno central también ha luchado de forma directa contra la remunicipalización en Valladolid. En marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, interpuso una demanda⁴ con el objetivo de evitar que se traspase el personal de la compañía privada a una nueva empresa pública, amparándose en la normativa en materia de ajustes presupuestarios.



El año 2016 marcó un punto de inflexión en la gestión del agua en Cataluña y en todo el Estado español. En el mes de marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el contrato de la empresa mixta (público-privada) que abastece de agua a 23 municipios del área metropolitana de Barcelona. En abril, Collbató, un municipio de 4000 habitantes, se convirtió en el 12.º municipio en recuperar la gestión del servicio en Cataluña, y se encontró con unas pérdidas en la red de más del 60 por ciento. En noviembre, se celebró en Madrid el primer encuentro de ciudades por el agua pública, que contó con la participación de siete alcaldes y alcaldesas de algunas de las ciudades más grandes del Estado, operadores públicos de agua y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este acontecimiento, hasta entonces inédito, era fortalecer y coordinar el movimiento del agua en todo el país, en especial en un contexto en el que el Gobierno central se mostraba firmemente en contra de la remunicipalización. Y finalmente, en diciembre, finalizó el contrato de agua de

la ciudad de Terrassa (215 000 habitantes) con la compañía privada Mina Pública de Terrassa (propiedad de Agbar en un 35,5 por ciento), después de 75 años de concesión.

La tendencia se mantuvo en 2017, año en el que nueve municipios del área metropolitana de Barcelona —que representan a tres de cada cuatro habitantes de la zona— aprobaron mociones a favor de estudiar la gestión pública del agua. El 19 de marzo de 2017, Terrassa fue testigo de la primera gran manifestación a favor de la gestión pública en Cataluña, con la participación de 4000 personas. Tres días después, se anunció la creación de la Asociación Catalana de Municipios por la Gestión Pública del Agua. Los municipios que integran la asociación son Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, cuya población suma un total de 2,5 millones de habitantes. Su objetivo es trabajar por un nuevo modelo de gestión pública vinculado con la promoción de nuevas formas de control social que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. La asociación, además, se compromete a ofrecer asistencia, conocimientos y apoyo a todos aquellos municipios que deseen apostar por este modelo de gestión.

Este giro radical hacia un nuevo modelo se debe en gran medida al trabajo que durante años han desarrollado muchas plataformas ciudadanas para recuperar la gestión del servicio y denunciar las irregularidades y el lucro privado: *Taula de l'Aigua* en Terrassa; *Aigua és Vida Girona* en Girona, una ciudad cuyo contrato vence en 2020; *Aigua és Vida Anoia* en Igualada; *Volem l'aigua clara i neta* en Torelló, donde el contrato finaliza en 2018; *Taula de l'Aigua de Mollet* en Mollet del Vallès, donde el Ayuntamiento ya ha aprobado un estudio para remunicipalizar el servicio cuando venza el contrato, en 2020; y *Aigua és democràcia* en La Llagosta.

El caso de Terrassa: una concesión que se acaba después de 75 años

La compañía privada Mina d'Aigües de Terrassa S.A. gestionó el servicio de agua en Terrassa durante 75 años, en el marco de una concesión que finalizó el 9 de diciembre de 2016. En marzo de 2014, un grupo de personas de movimientos vecinales, sociales y otras a título individual crearon la *Taula de l'Aigua*, una plataforma con el objetivo de recuperar la gestión pública i directa del agua en la ciudad, con participación ciudadana y control social.

Mina es una filial del Grupo Agbar, que controla la gerencia y posee el 35,5 por ciento de las acciones. En 2013, en el que fue el primer conflicto entre la concesionaria y el Ayuntamiento, la compañía presentó una propuesta para aumentar la tarifa un 6 por ciento. El Ayuntamiento solicitó que se justificara ese aumento y acabó rechazándolo, al igual que la Comisión de Precios de Cataluña; en su lugar, propuso un incremento del 1,25 por ciento.

Al acercarse el fin de la concesión, la ciudad empezó a investigar las opciones de las que disponía y a solicitar información de la concesionaria, algo hasta entonces inaudito. La ciudadanía también pidió información al Ayuntamiento, pero Mina se negó a facilitar la mayor parte de esta. Algunos aspectos importantes, como el precio del agua de los pozos de Mina o los costes desglosados del servicio, aún no se conocen. El alcalde de Terrassa expresó claramente su insatisfacción con la forma en que la compañía, que en teoría estaba al servicio del Ayuntamiento, estaba entorpeciendo la demanda de datos con el fin de obstaculizar una posible remunicipalización.

Tras dos años de labor pedagógica y divulgativa por parte de Taula de l'Aigua, se consiguió que el agua fuera un tema central de la agenda política del municipio. En julio de 2016, el Ayuntamiento aprobó una moción a favor de la gestión directa del agua. De los 27 concejales y concejalas de

la ciudad, 20 se manifestaron a favor, tres se abstuvieron y cuatro votaron en contra. La compañía privada afirmaba que el coste de recuperar el servicio sería de 60 millones de euros. El Ayuntamiento, sin embargo, considera que no superará los dos millones. Cuando el Ayuntamiento confirmó el fin de la concesión y el retorno del sistema a la ciudad, en diciembre de 2016, Mina recurrió a los tribunales para invalidar las resoluciones, hasta ahora sin éxito.

El segundo paso de todo este proceso consistió en planificar un nuevo servicio público. *Taula de l'Aigua* de Terrassa, junto con el Consejo de Entidades de Terrassa, convocó el primer Parlamento Ciudadano del municipio, donde se aprobaron dos mociones que posteriormente se presentaron al Ayuntamiento, sobre los objetivos del futuro modelo de gestión y sobre el control social del servicio. Para reivindicar el agua pública y democrática, en marzo de 2017 se organizó en Terrassa una gran manifestación, en apoyo de la decisión del Ayuntamiento de poner fin al contrato.



Manifestación en Terrassa
Fotografía: EPSU, Twitter

El Día Mundial del Agua de 2017, más de 4000 personas llenaron las calles de Terrassa para celebrar el cambio de rumbo en el servicio municipal.

En abril de 2017, el Ayuntamiento de Terrassa puso en marcha el proceso para desarrollar el modelo por el que se gestionará el suministro de agua en la ciudad, que se debe aprobar antes del fin de 2017. Mientras tanto, a la compañía Mina se le ha ampliado la concesión de forma temporal. Durante todo este proceso, la *Taula de l'Aigua* seguirá promoviendo la propuesta de modelo de gestión aprobada por el Parlamento Ciudadano en febrero de 2017, con el fin de que el proceso de recuperación del agua en Terrassa sea también un paso más en la gestión del agua como un bien común.

La remunicipalización del agua en Terrassa es la punta de lanza de la recuperación del servicio de la gestión pública en Cataluña, del mismo modo que la (re)municipalización del agua es la punta de lanza de las remunicipalizaciones de otros servicios básicos. Por lo tanto, el éxito de la remunicipalización de Terrassa y la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión, con una participación ciudadana eficaz, abriría las puertas de muchas otras remunicipalizaciones progresistas y democráticas en las ciudades catalanas.

Barcelona: una oportunidad histórica

La siguiente de la lista podría ser la ciudad de Barcelona y los 22 municipios de su área metropolitana. El agua en Barcelona siempre ha estado bajo el control de la compañía privada Agbar, sin que existiera el debido contrato. En 2010, un juez dictaminó que esta gestión era ilegítima, y obligó a Agbar y al área metropolitana de Barcelona a firmar de manera apresurada un contrato de asociación público-privada (APP) para regularizar la situación. Al principio, Agbar poseía el 85 por ciento de las participaciones de la APP, y el área metropolitana, el 15 por ciento. Posteriormente, Agbar transfirió el 15 por ciento de sus acciones al banco La Caixa.

No obstante, esta nueva APP se aprobó para un período de 35 años, sin un proceso de concurso público y sin una buena justificación técnica. Por ese motivo, en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el

contrato. Agbar interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo del Estado español. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha aprobado en su pleno municipal la elaboración de los informes técnicos y jurídicos necesarios para la transición hacia la gestión pública del agua. Eau de Paris, el operador remunicipalizado de la capital francesa, ha accedido a prestar apoyo jurídico y técnico para esta labor, mientras que Agbar, una vez más, se niega a cooperar y a proporcionar información. Otros ocho ayuntamientos del área metropolitana han seguido los pasos de Barcelona y han aprobado mociones a favor de estudiar la gestión pública del agua. En paralelo, la ciudad de Barcelona ya ha remunicipalizado otros servicios públicos (como jardines de infancia y servicios de prevención de la violencia de género) y ha creado una nueva compañía pública de electricidad.

La participación como ancla

La remunicipalización no solo tiene que ver con que los municipios recuperen el gobierno del servicio y la gestión pública. Si de verdad deseamos que la remunicipalización se afiance y fomente unos servicios de agua democráticos, eficaces y sostenibles, debemos gestionar el agua como un bien común. Es por ello que la participación ciudadana es fundamental en el ámbito de los servicios públicos remunicipalizados, del mismo modo que lo ha sido a la hora de cómo impulsar la remunicipalización misma en Cataluña.

El agua no solo es vida para las personas, que no podemos vivir sin ella, sino también para el medioambiente, por lo que se debe proteger la calidad ecológica de todos los caudales de agua. Esto es de especial importancia en regiones mediterráneas como Cataluña, que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. La fuerte movilización ciudadana a favor del agua en Cataluña siempre ha estado vinculada con esta firme convicción de que el agua es un bien común. Las remunicipalizaciones en el sector del agua representan una herramienta de avance democrático para el municipalismo y exige que los municipios asuman una política de aguas que tenga en cuenta los límites y la calidad de las fuentes locales.

La gestión del agua es una herramienta clave para garantizar el equilibrio regional y el respeto del medioambiente, basada en un concepto del agua no como un recurso, sino como un bien natural y una parte esencial del ecosistema en el que vivimos.

¿Cómo debe ser la participación ciudadana? Cada municipio, cada plataforma, debe empezar a definir qué forma de gestión y gobernanza asegura una mejor implicación por parte de la ciudadanía. ¿Qué tejido social existe en el municipio? ¿Cuáles son los espacios de participación ya existentes? ¿Y cuáles se deberían abrir? ¿Quién debería participar? ¿En qué decisiones debería participar la ciudadanía?

La participación debe ser el ancla de este nuevo modelo de gestión del agua. Y el modelo debe servir para que la recuperación de la gestión pública del agua en los municipios suponga realmente un avance democrático, a través de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de formación y capacitación de la ciudadanía. Todo esto con el fin de mantener alejadas las viejas prácticas del modelo de gestión privada, caracterizados por la opacidad, la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos a costa del agua.



Míriam Planas es integrante de Enginyeria sense Fronteres en Cataluña, donde trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo para garantizar un acceso universal a servicios básicos. También participa en Aigua és Vida, una plataforma ciudadana formada por más de 50 organizaciones que trabajan por una gestión del agua pública, democrática y no comercial.

Notas

- 1 Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011: <http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/11010.pdf>
- 2 Véase en detalle el caso de Valladolid en Remunicipalisation Tracker: http://remunicipalisation.org/#case_Valladolid
- 3 *Eldiario.es* (2017) El Gobierno carga contra los procesos de remunicipalización de los Ayuntamientos a través de los Presupuestos. 16 de abril. http://www.eldiario.es/politica/remunicipalizacion-presupuestos-ayuntamientos__0_631686916.html
- 4 *Eldiario.es* (2017) Montoro se enfrenta a Valladolid y se persona por primera vez en una causa de remunicipalización del agua. 31 de marzo. http://www.eldiario.es/politica/Hacienda-persona-primera-remunicipalizacion-servicio__0_627488367.html

Anexo: fin de las concesiones

Ciudad	Concesionaria	Fin de la concesión
Aiguafreda	Grupo Agbar	2017
Castell-Platja d'Aro	Aqualia	2017
Castellfollit de Riubregós	Grupo Agbar	2017
Garriguella	Grupo Agbar	2017
La Llagosta	Grupo Agbar	2017
La Roca del Vallès	Grupo Agbar	2017
Les Franqueses del Vallès	Grupo Agbar	2017
Navata	Grupo Agbar	2017
Palau-saverdera	Grupo Agbar	2017
Pau	Grupo Agbar	2017
Sant Vicenç de Torelló	Grupo Agbar	2017
Santa Eugènia de Berga	Grupo Agbar	2017
Tagamanent	Grupo Agbar	2017
Térmens	Aqualia	2017
Vallromanes	Grupo Agbar	2017
Vilajuïga	Grupo Agbar	2017
Alpens	Grupo Agbar	2018
Guissona	Grupo Agbar	2018
Juneda	Grupo Agbar	2018
Pals	Grupo Agbar	2018
Sant Llorenç d'Hortons	Grupo Agbar	2018
Sant Pere Pescador	Aqualia	2018
Santa Eulàlia de Ronçana	Grupo Agbar	2018
Soses	Aqualia	2018
Torelló	Grupo Agbar	2018
Almacelles	Aqualia	2019
Bescanó	Grupo Agbar	2019
Cadaqués	Aqualia	2019
Castellterçol	Grupo Agbar	2019
Corbera de Llobregat	Grupo Agbar	2019
La Pobla de Massalua	Grupo Agbar	2019
Oliola	Grupo Agbar	2019
Riudaura	Grupo Agbar	2019
Sant Carles de la Ràpita	Grupo Agbar	2019
Sant Cugat del Vallès	Grupo Agbar	2019
Santa Cecília de Voltregà	N/A	2019
Santa Eulàlia de Riuprimer	Grupo Agbar	2019
Albatàrrec	Aqualia	2020
Dosrius	Grupo Agbar	2020
Girona	Grupo Agbar	2020
La Garriga	Grupo Agbar	2020
Mollet del Vallès	Grupo Agbar	2020

Palau-solità i Plegamans	Grupo Agbar	2020
Puigcerdà	Grupo Agbar	2020
Sant Boi de Lluçanès	Grupo Agbar	2020
Sant Martí d'Albars	Grupo Agbar	2020
Súria	Grupo Agbar	2020
Tavèrnoles	Grupo Agbar	2020
Torroella de Montgrí	Grupo Agbar	2020
Ullà	Grupo Agbar	2020
Granollers	Grupo Agbar	2021
L'Estany	Grupo Agbar	2021
Premià de Dalt	Grupo Agbar	2021
Sant Iscle de Vallalta	Grupo Agbar	2021
Sant Martí de Centelles	Grupo Agbar	2021
Sant Vicenç de Montalt	Grupo Agbar	2021
Berga	Grupo Agbar	2022
Cabrera de Mar	Grupo Agbar	2022
Calafell	Grupo Agbar	2022
Cassà de la Selva	Aqualia	2022
Colera	Grupo Agbar	2022
El Masnou	Grupo Agbar	2022
Masquefa	Grupo Agbar	2022
Piera	Grupo Agbar	2022
Vilassar de Dalt	Grupo Agbar	2022
Callús	Grupo Agbar	2023
El Pla de Santa Maria	Grupo Agbar	2023
Molins de Rei	Aqualia	2023
Polinyà	Grupo Agbar	2023
Sant Andreu de la Barca	Aqualia	2023
Sant Quirze del Vallès	Grupo Agbar	2023
Tiana	Grupo Agbar	2023
Avià	Grupo Agbar	2024
Avinyó	Grupo Agbar	2024
Copons	Grupo Agbar	2024
L'Ametlla del Vallès	Grupo Agbar	2024
Santa Bàrbara	Grupo Agbar	2024
Tàrraga	Grupo Agbar	2024
Alcanar	Grupo Agbar	2025
Caldes d'Estrac	Grupo Agbar	2025
Canet de Mar	Grupo Agbar	2025
Castellar del Vallès	Grupo Agbar	2025
Cunit	Grupo Agbar	2025
Isòvol	Grupo Agbar	2025
Llívia	Grupo Agbar	2025
Talamanca	Grupo Agbar	2025
Vespella de Gaià	Grupo Agbar	2025
Xerta	Grupo Agbar	2025

Ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos

Olivier Petitjean y Satoko Kishimoto

Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo para analizar la remunicipalización de los servicios públicos en diversos sectores a escala mundial. El propósito de este último capítulo es destacar las conclusiones principales y las lecciones clave que nosotros, como editores, hemos extraído mientras preparábamos este volumen, recopilando información y datos de todo el mundo y dialogando con personas implicadas, en diversos grados y de diversas maneras, en procesos remunicipalizadores.

Empleamos el término ‘remunicipalización’ para aludir al proceso por el que se recupera el control y la gestión públicos a escala local de servicios que antes estaban privatizados o se prestaban de forma privada. Somos conscientes de que no siempre es el término más adecuado, ya que, en algunos casos, los servicios recuperados siempre han estado en manos privadas o, simplemente, no existían. En estos casos, sería más apropiado hablar de ‘municipalización’. El término ‘(re)municipalización’ abarcaría ambos casos. Se encuentran también ejemplos de servicios públicos que se han desprivatizado a nivel nacional. Estas ‘renacionalizaciones’ o ‘res-tatalizaciones’ las tratamos por separado, con el fin de centrarnos en las acciones locales y también porque algunas formas de renacionalización (cuando entrañan, por ejemplo, centralizar el poder o rescatar de forma temporal una compañía privada que ha quebrado) no entran en el ámbito de nuestra investigación. Por último, encontramos numerosos ejemplos en los que ciudadanos y usuarios están tomando la iniciativa y recuperando servicios esenciales que antes prestaban entidades comerciales para gestionarlos en pro de sus comunidades. Desde nuestra perspectiva, estos casos también podrían catalogarse como una (re)municipalización, en la

medida en comparten valores de servicio público y objetivos no comerciales. El término ‘desprivatización’ se usa para aludir, en general, a la (re) municipalización, la renacionalización y las iniciativas ciudadanas para recuperar los servicios, que persiguen, en última instancia, acabar con los problemas de las privatizaciones.

Las remunicipalizaciones son algo más habitual de lo que se cree, y funcionan

La lista de (re)municipalizaciones y (re)nacionalizaciones que presentamos en este libro dista mucho de ser exhaustiva. En su versión actual se debería entender, más bien, como un primer paso. Hay muchos más casos en todo el mundo que, por falta de tiempo y recursos, aún no hemos podido identificar. Pero, aún con sus carencias, ilustra los puntos que deseamos destacar. En primer lugar, que existe una fuerte tendencia remunicipalizadora en Europa y en todo el mundo, y que afecta, en distintos grados, a todos los sectores de los servicios públicos. Y en segundo lugar, que esta tendencia, que está pasando prácticamente desapercibida, no solo refleja los numerosos fracasos de las políticas de privatización y austeridad, sino que también está dando lugar a unos servicios públicos de mejor calidad; el tipo de servicios públicos que necesitamos para afrontar los desafíos de nuestros días. El fenómeno es particularmente evidente en el sector energético, donde las (re)municipalizaciones están impulsando la transición hacia sistemas de energía eficientes, asequibles y basados en renovables.

No defendemos que la gestión pública ofrezca una solución a todos los problemas, ni que las remunicipalizaciones sean siempre un camino sencillo. Pero sí que sostenemos que la experiencia en todo el mundo demuestra que las privatizaciones, por lo general, no cumplen sus promesas; que los servicios gestionados desde la esfera pública suelen centrarse más en la calidad, el acceso universal y la asequibilidad, y la consecución de objetivos sociales y medioambientales más amplios; y, de hecho, que los operadores públicos son, a menudo, más innovadores y más eficientes

que los privados, muy al contrario de lo que repiten en sus clásicos mantras los propagandistas de las privatizaciones.

Llevamos muchos años estudiando las experiencias de remunicipalización en el sector del agua. A raíz de nuestro trabajo, publicamos dos informes —*Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global*¹ (noviembre de 2014) y *Our Public Water Future: The Global Experience with Remunicipalisation* (abril de 2015, disponible en inglés, francés y catalán)—² que pusieron de manifiesto lo extendida que estaba esta tendencia en el sector del agua. Con aquel proceso, identificamos 235 casos de remunicipalización del agua en todo el mundo entre 2000 y 2015, incluso en grandes ciudades como París, Berlín, Buenos Aires, Kuala Lumpur y Yakarta. Sabíamos que la experiencia se estaba produciendo también en otros sectores. En aquel momento, estaba ganando terreno otro gran movimiento remunicipalizador en el sector de la energía en Europa, en especial en Alemania. Así que decidimos embarcarnos en la ambiciosa tarea de estudiar el fenómeno de las remunicipalizaciones en general, en todos los servicios públicos, y en todos los continentes, aunque poniendo un acento especial en Europa.

Con la ayuda de muchos socios y colaboradores de ayuntamientos, sindicatos, el mundo académico y la sociedad civil, recopilamos 835 casos de (re)municipalización en 45 países, desde pequeños pueblos a grandes capitales, y en entornos tanto urbanos como rurales. La remunicipalización es especialmente potente en los sectores del agua y la energía (267 y 311 casos, respectivamente), quizás porque son los sectores donde más se impulsaron la liberalización y la privatización. Pero también se observa en los sectores de la gestión de residuos, el transporte, la salud y el trabajo social, y en la amplia gama de servicios prestados por las administraciones locales, desde jardines de infancia, limpieza y parques públicos hasta instalaciones deportivas y comedores escolares. De hecho, en todos los sectores que están o han estado privatizados no se ha tardado

en experimentar un movimiento en pro de la remunicipalización. Quienes deseen impulsar o facilitar privatizaciones en nuevos sectores, como el cuidado de niños y niñas o los servicios de salud, deberían tomar nota de esta lección.

Este movimiento remunicipalizador no tiene una gran visibilidad en los medios de comunicación ni en los debates públicos porque se está produciendo principalmente a escala local o en contextos nacionales específicos y porque los poderosos intereses de las grandes empresas (y a menudo también de los Gobiernos nacionales y las instituciones internacionales) querrían fingir que esas iniciativas locales no existen y que no hay alternativas viables a la privatización y la austeridad. Pero sí las hay.

Las remunicipalizaciones promueven servicios públicos mejores y más democráticos

Las iniciativas remunicipalizadoras rara vez entrañan un mero cambio en la titularidad o en la gestión operativa, ni se limitan a reproducir las condiciones que funcionaban antes de la privatización. La remunicipalización persigue, en esencia, construir unos servicios públicos de mejor calidad. En primer lugar, la idea, muchas veces, consiste en recrear o recuperar los valores del servicio público y un compromiso con el acceso universal, en contraposición al afán comercial de los proveedores privados. Esto significa, por ejemplo, asegurar que un servicio se preste en toda una ciudad o en todo un país, y no solo en aquellas zonas donde resulte más rentable. El capítulo 2, de M'Lisa Colbert, explica que Argentina decidió renacionalizar sus servicios postales y aerolíneas precisamente por este motivo.

En segundo lugar, se trata de garantizar unos servicios asequibles. El movimiento remunicipalizador en Cataluña nació después de la crisis financiera mundial, a raíz de la resistencia contra los desalojos de viviendas y los cortes de agua y electricidad en el Estado español. La creación de empresas municipales de energía en el Reino Unido, que presentan David

Hall y Cat Hobbs en el capítulo 9, que ahora abastecen a un área con una población de 2,2 millones de personas, también se vio impulsada por las políticas abusivas de fijación de precios de las ‘Seis Grandes’ compañías internacionales que controlan el mercado energético en el Reino Unido.

En tercer lugar, la remunicipalización está estrechamente vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas. “No tenemos accionistas privados, ni bonificaciones para la junta directiva. Solo precios claros y transparentes”, según la declaración de principios de la empresa municipal de energía Robin Hood Energy en la ciudad británica de Nottingham. El movimiento remunicipalizador en el Estado español, como explica Míriam Planas en el capítulo 10, surge del mismo rechazo a la cultura del clientelismo político y los numerosos escándalos de corrupción que han caracterizado a estos sectores en el pasado.

Finalmente, otro elemento clave de las remunicipalizaciones pasa por democratizar los servicios públicos, a través de la participación de trabajadores y usuarios, y de un mayor control por parte de autoridades municipales y la ciudadanía. Muchas de las remunicipalizaciones del agua más emblemáticas en Francia, como las de París, Grenoble y Montpellier (véase el capítulo 1), han creado puestos para ciudadanos y representantes de la sociedad civil en los consejos de administración de los nuevos operadores públicos e incluso han establecido estructuras participativas específicas, como ‘observatorios ciudadanos’ que democratizan el debate en torno a la gestión de los servicios públicos, desde el incremento de los precios a las estrategias de gestión a largo plazo. La participación ciudadana y la democratización de los servicios de agua también son un eje fundamental del movimiento remunicipalizador en el Estado español.

Las remunicipalizaciones promueven unas ciudades resilientes y respetuosas con el clima

La remunicipalización no es solo una iniciativa que responde a inquietudes o dinámicas políticas locales sino que, muy a menudo, persigue también encontrar soluciones locales eficaces frente a desafíos y crisis de alcance mundial. También busca inventar y reinventar los servicios públicos del futuro para hacer frente a los retos de satisfacer las necesidades básicas y reducir nuestra huella ambiental a la vez que mitigamos el cambio climático y nos adaptamos a sus consecuencias. Los servicios públicos remunicipalizados muchas veces abren camino en este sentido. Este hecho resulta especialmente manifiesto en el sector de la energía, tanto en Alemania como en otros lugares. Como se documenta en el capítulo 8, escrito por Sören Becker, las nuevas empresas públicas y cooperativas locales han sido pioneras en una transición energética basada en las renovables. En Alemania, la nueva empresa municipal Hamburg Energie, creada en 2009, ya había instalado más de 13 megavatios de energía eólica y 10 megavatios de energía solar en 2015, además de atraer a más de 100 000 clientes que buscaban una energía renovable y producida localmente. En los Estados Unidos, la Cooperativa de Servicios de la Isla de Kauai (KIUC), en Hawaii, se convirtió en 2002 en la primera cooperativa de generación, transmisión y distribución sin fines de lucro del estado, bajo la titularidad y el control de los miembros a los que sirve. Su objetivo declarado es alcanzar un 50 por ciento de energías renovables para 2023; en 2016, ya había logrado el 38 por ciento. En cambio, los gigantes empresariales que surgieron después de que se liberalizara el sector de la energía en Europa han demostrado ser mucho más propensos a imponer precios cada vez mayores a unos clientes cautivos que a impulsar cambios reales.

Lo mismo podría decirse de otros sectores. Hoy día, es casi imposible que una compañía privada dedicada a la gestión de residuos se implique en una auténtica política de ‘residuos cero’, ya que todo su modelo de negocio se basa en maximizar los volúmenes de recogida y en grandes

infraestructuras como plantas incineradoras, y porque alcanzar unos ‘residuos cero’ implica adoptar medidas de prevención y un compromiso con la ciudadanía que va mucho más allá de la capacidad de un operador privado. Las remunicipalizaciones en el sector de los residuos suelen ir de la mano de la decisión de evitar grandes infraestructuras innecesarias, como vertederos e incineradoras, y reducir el volumen de residuos. Por ejemplo, la ciudad francesa de Briançon decidió no renovar el contrato con Veolia como un primer paso para conseguir, en el largo plazo, la meta de ‘residuos cero’.

Del mismo modo, en el sector de la restauración escolar en Francia, muchas remunicipalizaciones se vieron impulsadas por la determinación política de servir alimentos ecológicos locales, mientras que los servicios de compañías privadas como Sodexo solían depender de procesos alimentarios industriales y de cadenas de suministro internacionales. La remunicipalización, en este caso, representa parte de una tendencia más amplia para promover la economía local, sobre todo en el sector de los alimentos, y de proteger la agricultura de la zona. Esta conexión entre la remunicipalización y el desarrollo económico local es igual de fuerte en el sector de la energía en Alemania, como se destaca en los capítulos 5 y 8.

Las remunicipalizaciones ofrecen la oportunidad de fomentar una propiedad pública democrática

El fenómeno de la remunicipalización también revela que las personas, al recuperar los servicios públicos, están reinventando toda una nueva generación de formas y estructuras de propiedad pública. Muchos casos de remunicipalización y, sobre todo, de creación de nuevas empresas públicas, brindan la oportunidad de renovar los compromisos públicos y generar un espacio en el que diversos actores gestionen de manera conjunta la prestación de servicios esenciales de manera más democrática y eficiente, y superando las dinámicas de la propiedad pública tradicional. El abanico de nuevos modelos es muy amplio: empresas municipales de energía,

organizaciones y redes intermunicipales, empresas locales de servicios públicos que son propiedad parcial de la ciudadanía, cooperativas de trabajadores o usuarios, etcétera. Todos estos son posibles modelos de lo que podría ser la futura generación de servicios públicos.

Aquí cabe destacar que este libro trata también sobre la creación de servicios públicos totalmente nuevos. El capítulo 6, de Benny Kuruvilla, explica cómo las autoridades de Delhi y Tamil Nadu, en la India, crearon nuevos servicios de salud y comedores públicos para atender las necesidades básicas de los sectores más pobres. En Europa y en otros lugares, estamos presenciando la creación de nuevas empresas públicas locales en el sector energético, con diversos modelos de propiedad (entidades municipales o asociaciones público-comunitarias). En Francia, se están estableciendo nuevas fincas municipales para abastecer a los comedores escolares. Estas experiencias ponen de manifiesto que, hoy día, todavía es posible y conveniente, tanto en el Norte como en el Sur Global, crear nuevos operadores públicos.

¿Un ‘movimiento’ remunicipalizador en Europa?

El fenómeno de las remunicipalizaciones es especialmente dinámico en Europa. Se contaron 347 casos en Alemania, 152 en Francia, 64 en el Reino Unido y 56 en el Estado español. Las potentes olas remunicipalizadoras que se han producido en el sector de la energía en Alemania o en el sector del agua en Francia son solo las manifestaciones más visibles de una tendencia más profunda. Este movimiento remunicipalizador en Europa se puede entender como una respuesta a las políticas de austeridad; una reacción frente a los excesos de la liberalización y el acaparamiento corporativo de servicios básicos. Sin embargo, esto no significa que las remunicipalizaciones siempre estén muy politizadas, ni que sean patrimonio de un único sector del espectro político. De hecho, como se refleja en los capítulos sobre Francia y Alemania, en particular, las experiencias remunicipalizadoras están siendo impulsadas por grupos de todas las tendencias y, por lo general, surgen de un un consenso local entre varios

partidos. La fractura política en este ámbito muchas veces no se produce entre líneas partidarias, sino entre el nivel local, donde los políticos y los funcionarios deben lidiar con desafíos concretos, y el nivel nacional y europeo, desde donde se imponen las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios. Las ciudades se encuentran en una posición inmejorable para comprender la importancia de los servicios públicos, ya que se ocupan de las consecuencias cotidianas de la austeridad y las privatizaciones.

La remunicipalización es siempre una decisión práctica, orientada por una serie de consideraciones concretas (de carácter económico, técnico, social, político, etcétera). Sin embargo, es evidente que existen distintos tipos y grados de remunicipalización. Algunas autoridades y grupos locales son más propensos a subrayar su aspecto político, y en ocasiones lo ven como parte de un proyecto más amplio de democratizar los servicios públicos y proteger los bienes comunes. Barcelona en Comú, la coalición progresista que subió al poder en la capital catalana en 2015, ha articulado una visión ‘municipalista’, que concibe las ciudades como un lugar de vanguardia para abordar los retos sociales, políticos y ambientales de nuestra época mediante soluciones concretas y alternativas prácticas. La remunicipalización y los servicios públicos ocupan un lugar clave de esa visión. La ciudad de Barcelona ya ha remunicipalizado los servicios de guardería y prevención de la violencia de género, y ha establecido nuevas empresas municipales de servicios funerarios y de suministro eléctrico. El gobierno municipal está adoptando un enfoque sistemático y está evaluando a fondo los 250 servicios que actualmente tiene externalizados. A continuación, decide cuáles son las prioridades para volver a internalizarlos y recuperar la capacidad municipal. El agua y la recogida de residuos se encuentran entre las prioridades principales, pero remunicipalizar estos servicios no será una tarea sencilla. Tras décadas de privatización, las multinacionales que controlan estos sectores tienen intereses muy poderosos. La ciudad se ha marcado el objetivo explícito de emplear a 1900 personas más para 2018 en los servicios que se vayan internalizando, la mitad de los cuales serían nuevos puestos de trabajo. Podría decirse que otras ciudades españolas (Ciudad Real, Cádiz, Rivas-Vaciamadrid) y fran-

cesas (Grenoble, Briançon), que han promovido remunicipalizaciones en varios sectores con miras a garantizar unos servicios públicos más democráticos y sostenibles, comparten esa misma visión.

Por otra parte, están quienes presentan la remunicipalización como una elección puramente racional basada en criterios económicos y técnicos, y sostienen que no se oponen a la gestión privada de servicios esenciales en sí, siempre y cuando las autoridades locales ejerzan el debido control y que se mantenga abierta la posibilidad de retomar la gestión pública. (De hecho, como veremos más adelante, la dificultad de controlar a los proveedores privados es demasiado común y existen mecanismos —como los acuerdos de comercio e inversión— que tienden a dificultar cada vez más la remunicipalización.) No obstante, en general, estos distintos tipos de remunicipalizaciones comparten algunos rasgos comunes, como el compromiso con unos servicios públicos eficaces y transparentes y el rechazo de la propaganda proprivatizadora, que insiste en que las compañías privadas son, por naturaleza, mejores que las públicas. En muchos lugares, los diversos artífices de la remunicipalización están estrechamente aliados para defenderla frente a las amenazas comunes y para permitir que las autoridades locales que desean remunicipalizar servicios puedan hacerlo. Este sería el caso, por ejemplo, del sector del agua, con redes como Aqua Publica Europea en el ámbito de la UE y de France Eau Publique.

Las desprivatizaciones también son una opción viable para el Sur Global

La remunicipalización no se limita, ni mucho menos, a las fronteras de la ‘vieja Europa’. Es una medida muy extendida en Norteamérica y en otros países de altos ingresos. También se cuentan 56 casos en países de ingresos bajos y medios. Puede que en los países del Sur Global se estén produciendo menos remunicipalizaciones porque, hasta ahora, las privatizaciones no han estado tan extendidas o porque la prestación de los servicios tiende a estar centralizada. Aunque el número es menos impresionante, son muchos los casos en los que se ha conseguido recuperar o crear

nuevos servicios públicos, a veces a gran escala. En informes anteriores, documentamos este fenómeno en el sector del agua, y ahora encontramos ejemplos parecidos también en otros sectores. Las ciudades han puesto fin a privatizaciones o a contratos de asociación público-privada nefastos, y han ofrecido servicios similares o mejores a través de la gestión pública. Han establecido nuevos servicios públicos para atender las necesidades de los pobres y reducir su dependencia de los costosos proveedores privados de agua, atención sanitaria o alimentos, como muestran los ejemplos del capítulo 6. Estos ejemplos son tanto más importantes porque muchas veces suponen una diferencia vital para millones de personas. En Delhi, India, 2,6 millones de habitantes pobres se han beneficiado de las nuevas clínicas públicas de salud desde la segunda mitad de 2015. El nuevo fondo de pensiones renacionalizado por el Gobierno boliviano beneficia a 800 000 personas, el 83 por ciento de las cuales hasta entonces no recibía ninguna prestación porque había trabajado en el sector informal o había vivido largos períodos de desempleo.

En el libro también hemos incluido ejemplos de renacionalizaciones — en su mayoría de América Latina—, en la medida en que los motivos y los riesgos se asemejan mucho a los de la desprivatización a escala local y porque hay muchos países donde son los Gobiernos nacionales, y no las autoridades locales, los que controlan los servicios básicos. Como se constata en el capítulo 2, las renacionalizaciones en Argentina y Bolivia han ayudado a los Gobiernos a reducir las desigualdades, aplicar políticas sociales y mantener los servicios públicos en lugares donde los operadores privados no los consideraban rentables.

Problemas habituales de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas en varios sectores

Los problemas asociados con los servicios privatizados y las asociaciones público-privadas (APP), independientemente del sector, son muy parecidos. Se trata de los mismos problemas que identificamos en nues-

tros informes anteriores, centrados en el sector del agua. Y una vez más, encontramos que —en flagrante contradicción con las promesas de las compañías privadas y sus partidarios—, las privatizaciones y las asociaciones público-privadas suelen suponer un coste más alto para las autoridades locales, para las personas que usan los servicios o para ambos, como lo demuestra el fracaso del proyecto para la línea rápida de metro del aeropuerto de Delhi (DAME). La calidad de los servicios prestados tiende a empeorar, a menudo como resultado de la falta de inversiones y mantenimiento, o bien por el deterioro de las condiciones laborales de la plantilla del servicio. Este hecho resulta especialmente evidente en el sector de la recogida de residuos, la limpieza y la salud y los servicios sociales, como lo ilustran los capítulos 4 y 5: ya sea en Oslo o en Wilhelmshaven, Friburgo y Dortmund, la remunicipalización ha supuesto una mejora tanto para la plantilla como para la calidad del servicio. La privatización del hospital en la ciudad costera de Herceg Novi generó problemas en todos los frentes, según informó el Sindicato de Salud de Montenegro. La multinacional Atlas Group solo invirtió tres millones de euros, en lugar de los 119 millones que se habían acordado en el contrato, y no pagó los salarios durante tres meses. La supuesta evasión fiscal de Atlas Group llevó al Gobierno a rescindir el contrato en 2015 y el hospital se volvió a integrar en el sistema de salud pública.

Los servicios se externalizan o se adjudican a proveedores privados, que a menudo son filiales de multinacionales con pocos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en cuanto al dinero que transfieren a sus matrices y accionistas, a expensas de los salarios y de la inversión en infraestructura. En algunos casos, esto incluso genera irregularidades financieras y escándalos de corrupción, como los que han marcado históricamente al sector del agua en Francia y han cundido en todos los países donde han operado las multinacionales del agua.³ También constatamos que la mayoría de los contratos de privatización —y en especial acuerdos financieros complejos como las APP en infraestructuras— introducen un alto nivel de complejidad, que resulta beneficioso para los bufetes de abogados y los auditores, pero que resulta muy poco provechoso para la

ciudadanía. En el capítulo 9 se repasan numerosos ejemplos de ello en el Reino Unido. Huelga decir que todos estos inconvenientes hacen que resulte aún más improbable que los proveedores privados cumplan objetivos sociales y ambientales más amplios.

Unas recomendaciones irresponsables en materia de políticas

Pese a estos lamentables antecedentes, las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP) se siguen promoviendo —o imponiendo— de forma generalizada como una solución a la que pueden recurrir las autoridades locales o nacionales a las que les falta liquidez. En los países de altos ingresos, la presión para privatizar se ha incrementado claramente desde que estalló la crisis financiera mundial, como consecuencia de las políticas de austeridad, el marketing y el cabildeo de las grandes empresas (ya sea por las propias compañías interesadas o por las firmas de auditoría que también se benefician de los contratos),⁴ y una creencia ideológica en la superioridad del sector privado. Obviamente, estas recomendaciones irresponsables proceden de actores —instituciones financieras internacionales, la Unión Europea, a veces Gobiernos nacionales— que no se encargan de prestar los servicios sobre el terreno y que no son responsables directos de los resultados concretos de estas políticas.

Y lo que quizá sea peor: al mismo tiempo que en Europa, como respuesta a las políticas privatizadoras del pasado, se está produciendo una gran cantidad de remunicipalizaciones en diversos sectores, instituciones internacionales y Gobiernos europeos están promoviendo esas mismas viejas políticas en el Sur, a menudo bajo la forma de ayuda al desarrollo exterior. Esto significa que, en lugar de utilizar los fondos al desarrollo para crear o mejorar unos servicios públicos eficaces que satisfagan las necesidades de las poblaciones, los Gobiernos del Sur deben comprometerse con unas costosas y complejas APP, y con unos contratos de licitación que muchas veces no logran los resultados prometidos. Como se documenta en el capítulo 7, escrito por María José Romero y Mathieu Vervynck,

estos acuerdos de APP en el Sur Global son cada vez más habituales. Los megaproyectos que surgen a partir de ellos, ajustados a los intereses de las compañías y los donantes internacionales, tienen poco que ver con la realidad sobre el terreno. En Lesotho, un único proyecto de hospital gestionado mediante una APP se tragó el equivalente a la mitad del presupuesto de salud del país, a la vez que garantizó un alto rendimiento, del 25 por ciento, a la compañía privada.

La ‘buena relación costo-eficacia’ de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas es un espejismo

Uno de los principales argumentos que esgrimen los adalides de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP) para convencer a las autoridades públicas es que sus soluciones ofrecen una mejor relación entre costo y eficacia que la gestión pública. Sin embargo, la experiencia ha demostrado, una y otra vez, que esto es falso. La contratación de una compañía privada para prestar un servicio implica costes extraordinarios inmediatos porque esta debe mantener la transferencia de efectivo a su sociedad matriz y a los accionistas. Quienes defienden las privatizaciones sostienen que estos costes adicionales se compensan con la ‘innovación’ y las ‘economías de escala’ de las grandes compañías, que serían, sin sombra de duda, más eficientes que los servicios públicos. Pero la supuesta mayor ‘innovación’ y ‘eficiencia’ del sector privado se suele reducir a políticas básicas de reducción de los costes, que a menudo resultan perjudiciales en el largo plazo. Como sugiere el capítulo 2, dedicado a las renacionalizaciones en América Latina, a veces las compañías privadas consiguen reducir los costes a corto plazo, pero no abordan los problemas estructurales o la corrupción. Estas políticas ‘de bajo coste’ no tardan en derivar en un deterioro de los servicios debido al mal mantenimiento, la baja inversión, la reducción del personal y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las experiencias de Argentina y Bolivia que se examinan en ese capítulo demuestran que es posible prestar mejores servicios a

menor coste a través de la gestión pública, al tiempo que se logran objetivos en materia de cohesión social y territorial.

Lo mismo puede decirse de muchas otras experiencias con la remunicipalización o con la creación de nuevos servicios públicos a escala local. Cuando París remunicipalizó el agua, el nuevo operador, Eau de Paris, pudo recortar inmediatamente los costes en 40 millones de euros: la suma de dinero que cada año extraían del operador privado las empresas matrices. En el Reino Unido, como explica David Hall en el capítulo 9, la modernización del sistema de cableado de fibra óptica y señalización de la empresa pública de transporte de Newcastle corrió a cargo de un nuevo equipo interno y tuvo un coste de unos 11 millones de libras esterlinas, frente a los aproximadamente 24 millones de libras que hubiera costado en caso de que se hubiera encargado una compañía privada. En general, la rescisión de las APP de transporte en Londres ayudó a reducir los costes en 1000 millones de libras esterlinas, sobre todo gracias a la eliminación de los dividendos de los accionistas y los gastos jurídicos, y a la introducción de medidas de eficiencia en las adquisiciones y el mantenimiento. Cuando la ciudad de Conception Bay South, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, remunicipalizó el servicio de agua, ahorró alrededor de 1,15 millones de dólares canadienses en un período de cinco años. Hay también otros ejemplos de servicios públicos que han vuelto a manos públicas en Canadá y que han conseguido ahorrar sumas parecidas, como en el sector del agua en Hamilton (Ontario), Banff (Alberta) y Sooke (Columbia Británica).⁵

Los ejemplos que demuestran que los servicios públicos garantizan una mejor relación entre coste y eficacia son innumerables. A pesar de ello, el sector privado y algunas autoridades se oponen a las remunicipalizaciones, argumentando que resultan demasiado costosas para el erario público. Es cierto que se han dado casos, como la remunicipalización del agua en Berlín, en los que los antiguos proveedores privados lograron obtener una enorme indemnización del Gobierno, imponiendo así una pesada carga al nuevo operador público y a sus usuarios. Pero en la mayoría de

los casos, estos temores no están justificados en el medio y largo plazo, y muy a menudo ni siquiera en el corto plazo. En la ciudad noruega de Bergen, cuando el Ayuntamiento decidió retomar la gestión de dos centros para el cuidado de personas mayores, la oposición conservadora y los grupos empresariales sostuvieron que representaría un tremendo coste para las finanzas públicas. Pero resultó que, apenas un año después, uno de los centros había equilibrado su presupuesto y, el otro, había logrado un superávit, además de ofrecer mejores condiciones al personal.

En el capítulo 7 se analiza un modelo especialmente falaz e intrincado de las promesas financieras de la privatización: las asociaciones público-privadas (APP). Este tipo de contratos se presentan a las autoridades locales y nacionales, incluidos los Gobiernos del Sur Global, como una manera más fácil de financiar infraestructuras públicas sin tener que solicitar créditos o vaciar las arcas del Estado para conseguir las inversiones de capital necesarias. Los autores demuestran que las APP representan, en realidad, una forma oculta de deuda y que a las autoridades públicas les salen más caras en el largo plazo. Las APP están concebidas para crear un espejismo de asequibilidad y ocultar costes y responsabilidades reales, lo que hace más fácil convencer a las autoridades de que emprendan unos proyectos a gran escala que no responden necesariamente a las necesidades de la población.

Ante todo, no privatizar

Las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP) no solo no suelen cumplir sus promesas, sino que, muchas veces, entrañan contratos que son increíblemente difíciles de modificar o rescindir. Una vez firmado, los proveedores privados pueden blindar las condiciones contractuales, y cualquier cambio que les afecte supone un coste para las autoridades públicas. De hecho, encontramos que, en algunos casos, las dificultades de modificar los arreglos contractuales con los proveedores privados para responder a un contexto cambiante son un motivo impor-

tante para que las autoridades decidan volver a asumir la gestión de los servicios.

Además, una vez que han conseguido un control de facto de los servicios, los operadores privados pueden imponer cambios contractuales. En el capítulo 7 de este libro se apunta que una estrategia extendida entre las grandes empresas internacionales consiste en conseguir contratos APP presentando ofertas bajas, muy poco realistas, y luego conseguir un importante aumento presupuestario añadiendo complementos extraordinarios. Según el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el 55 por ciento de todos los contratos de APP se renegocian, lo cual se traduce, en dos tercios de los casos, en un incremento de las tarifas que pagan los usuarios.⁶ En general, existe un fuerte desequilibrio entre los recursos jurídicos y la experiencia con que cuentan, por un lado, las multinacionales que operan en el mercado de las APP y, por el otro, las autoridades locales y los Gobiernos nacionales del Sur Global.

Y cuando se trata de rescindir un contrato, o incluso de no renovar uno que haya vencido, las autoridades locales y nacionales suelen enfrentarse a una ardua batalla. La experiencia demuestra que las compañías privadas rara vez están dispuestas a compartir toda la información y los conocimientos que permitan a las autoridades públicas controlar y supervisar los contratos privados, y menos aún para remunicipalizar el servicio. Así sucede, sobre todo, cuando los operadores privados llevan muchos años gestionando el servicio, como en la situación actual en Cataluña. En el capítulo 10, de Míriam Planas, se explica cómo la compañía privada de agua Agbar (filial de Suez) se niega a compartir información con las ciudades de Terrassa y Barcelona, con el fin de obstaculizar o desincentivar la remunicipalización.

Y luego están los procedimientos y los recursos judiciales. La trayectoria de batallas judiciales entre autoridades públicas y operadores privados por la rescisión o la no renovación de contratos es larga. Las compañías privadas pueden recurrir —o amenazar con hacerlo— a los tribunales lo-

cales y nacionales para conseguir una indemnización considerable como vía para que remunicipalizar resulte demasiado caro o imposible. El auge de los tratados de comercio e inversión, y de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados asociados a estos, que trataremos más adelante, añade aún otro nivel de dificultad, más arriesgado y costoso, a esta camisa de fuerza jurídica. Estos obstáculos se suman a los costes de la remunicipalización en sí (indemnización, servicios jurídicos, técnicos o de asesoramiento, recuperación del conocimiento) que deben asumir las autoridades locales. Y por eso resulta aún más notable que, pese a todo, tantas ciudades y regiones estén decidiendo emprender medidas y recuperar los servicios públicos.

Hay soluciones mucho mejores que la privatización

Los servicios públicos no son perfectos por el simple hecho de ser públicos. Algunos de ellos incluso sufren problemas importantes que se traducen en servicios insatisfactorios, malas condiciones laborales y costes añadidos para la ciudadanía y los contribuyentes. Los servicios públicos siempre deben mejorar, y algunos de ellos necesitan una reforma urgente. Sin embargo, eso no significa que la privatización represente la salida necesaria y automática. De hecho, muchos de los capítulos del libro ilustran que hay maneras mucho mejores de mejorar, reorganizar y reformar los servicios públicos que limitarse a buscar un ‘apaño rápido’ al subcontratarlos con multinacionales.

Por ejemplo, en el capítulo 4, escrito por Bjørn Pettersen y Nina Monsen, se explica que, en Noruega, la estrecha colaboración entre los sindicatos, la administración municipal y los políticos locales consiguió generar una opción creíble y mucho más atractiva que la privatización para gestionar los servicios públicos. La reducción de los permisos por enfermedad, el incremento de los puestos de trabajo a jornada completa y la innovación digital son algunos de los logros de esta cooperación a tres bandas. Las asociaciones público-públicas, que están especialmente extendidas en

el sector del agua (como lo muestra el reciente ejemplo de colaboración entre el operador remunicipalizado de París y la ciudad de Barcelona), también ofrecen una alternativa potente a la privatización. Gracias a estas colaboraciones desinteresadas, operadores públicos ya establecidos ayudan a otros operadores públicos, prestándoles asistencia técnica e institucional durante un período de tiempo determinado, con el objetivo de que sean más eficientes y, en última instancia, autónomos. Este tipo de acuerdos funcionan también en otros sectores y podrían ampliarse aún a otros. Ya existen distintas formas de cooperación intermunicipal basadas en el mismo tipo de planteamiento, como, por ejemplo, la creación de nuevas empresas municipales de energía en ciudades británicas como Nottingham, York, Bradford y Doncaster, todas ellas asociadas en la alianza White Rose/Robin Hood (véase el capítulo 9).

Por último, la colaboración entre funcionarios públicos, trabajadores y trabajadoras, organizaciones ciudadanas y comunidades se está extendiendo cada vez más, sobre todo en el sector de la energía. El capítulo 8 revela cómo la iniciativa para remunicipalizar la energía en la ciudad alemana de Hamburgo se vio impulsada, en parte, por nuevas formas de compromiso y participación ciudadana. Desde Dinamarca y Escocia hasta Francia y el Estado español, encontramos innumerables ejemplos de sistemas que son propiedad de la ciudadanía o de alianzas entre municipio y ciudadanía. El fuerte impulso remunicipalizador en Cataluña también surge de un movimiento de plataformas ciudadanas que no solo desean que se recupere la gestión pública como un fin en sí mismo, sino que consideran que este sería un primer paso hacia una gestión democrática de los servicios públicos con una continua participación ciudadana (véase el capítulo 10).

El papel de los trabajadores y las trabajadoras

Los trabajadores y las trabajadoras, y sus sindicatos, son actores clave de las experiencias de remunicipalización. Muchas veces, el personal de los servicios es el primero en sufrir las privatizaciones y las políticas de

reducción de los costes, debido a los recortes de plantilla y salariales, el deterioro de las condiciones laborales y los atentados contra los derechos sindicales. Esto explica por qué los sindicatos de servicios públicos, por lo general, prefieren la propiedad pública y por qué muchos de ellos —como la Cámara Federal del Trabajo de Austria (AK), el Sindicato Canadiense de la Función Pública (SCFP-CUPE), UNISON en el Reino Unido, Fagforbundet en Noruega, ver.di en Alemania, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que han sumado fuerzas para hacer realidad este estudio y publicación— han adoptado una postura activa no solo para oponerse a las privatizaciones, sino también en las campañas a favor de la remunicipalización, como forma de defender, a un mismo tiempo, los intereses de los trabajadores y de la sociedad en general. En algunos casos, como ocurrió con el servicio de mantenimiento de los parques públicos en Ciudad Real, en el Estado español, fueron la propia plantilla y los sindicatos quienes iniciaron y lideraron la remunicipalización.

Hay muchos ejemplos concretos que demuestran que la remunicipalización suele beneficiar a los trabajadores y las trabajadoras. En León, también en el Estado español, cuando se remunicipalizaron los servicios de recogida de residuos y limpieza en 2013, no solo se redujo el coste de 19,5 a 10,5 millones de euros anuales, sino que 224 trabajadores consiguieron un contrato público. Cuando Oslo remunicipalizó los servicios de gestión de residuos, los 170 empleados pasaron de estar contratados a tiempo parcial a jornada completa, y lograron salarios municipales y derechos de pensión (véase el capítulo 4). En la ciudad canadiense de Conception Bay South, la plantilla del servicio de agua recién municipalizado disfrutaban no solo de mejores condiciones, sino también de mayor seguridad en el trabajo.

El capítulo 5, de Laurentius Terzic, sugiere que, en la mayoría de los casos, las remunicipalizaciones en Alemania han dado lugar a mejores condiciones laborales. Sin embargo, también se han dado casos en los que los trabajadores y los sindicatos han mostrado cierta renuencia a la

remunicipalización —o se han opuesto a ella— porque temen que esta conduzca a un deterioro de las condiciones de trabajo o a una menor calidad del servicio. Así ha sucedido sobre todo en el sector de la energía, donde los trabajadores y las trabajadoras han gozado tradicionalmente de unas condiciones relativamente buenas en términos de salarios y poder de negociación. El autor señala, sin embargo, que en el caso de la remunicipalización de la red de energía en Hamburgo, los temores expresados por la plantilla sobre el posible deterioro de sus condiciones resultaron injustificados. No obstante, este capítulo hace hincapié en el hecho de que las remunicipalizaciones emprendidas por las autoridades públicas solo por razones económicas de corto plazo conllevan riesgos para el personal —los mismos que la privatización—, tal como lo demuestra la experiencia de remunicipalización de la recogida de basura en Lüneburg.

Por estas razones, es fundamental que las autoridades locales y los grupos ciudadanos trabajen en estrecha colaboración con los sindicatos cuando decidan remunicipalizar y servicio y qué proceso seguirán para retomar la gestión pública. Varios ejemplos de remunicipalización en Noruega ponen de relieve lo fructífera que puede resultar esta colaboración. Quienes se oponen a las remunicipalizaciones no dudan en instrumentalizar la cuestión de las condiciones laborales, como vemos hoy en el Estado español, donde el Gobierno central ha presentado una medida legislativa que prohíbe a las ciudades asumir al personal del servicio privado al remunicipalizar un servicio; una maniobra despiadada para que trabajadores y trabajadoras se posicionen en contra de la medida. La historia de la remunicipalización del agua en Francia demuestra que el personal y los sindicatos se han mostrado en ocasiones reacios debido a las incertidumbres, pero que su actitud tiende a cambiar con el tiempo, a medida que se producen más y más remunicipalizaciones y que las autoridades locales aprenden de experiencias pasadas.

Los acuerdos comerciales, el ISDS y otras amenazas a la democracia local

Las 835 experiencias de (re)municipalización que hemos identificado en este libro ofrecen 835 razones más para rechazar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre Europa y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá, que ahora está pendiente de ratificarse, o cualquier acuerdo parecido de comercio e inversión. Los mecanismos de protección de las inversiones que suele incluir la mayoría de acuerdos de este tipo, también conocidos como ‘solución de controversias entre inversores y Estados’ (ISDS), suponen un alto precio a pagar cuando se desea desprivatizar un servicio, ya que su objetivo principal consiste en proteger, ante todo, las ganancias de los inversores privados extranjeros.

El capítulo 3, escrito por Lavinia Steinfert, revela que la decisión de desprivatizar un servicio público ha desencadenado al menos 20 casos de arbitraje internacional (diez en el sector del agua, tres en la energía, tres en el transporte y cuatro en las telecomunicaciones), y que una de esas demandas de indemnización ha alcanzado hasta los 4700 millones de euros (Vattenfall contra Alemania). El caso de Lituania ilustra cómo la decisión legítima de una ciudad de remunicipalizar la calefacción urbana puede desencadenar una escandalosa demanda arbitral ISDS. En Bulgaria, la simple amenaza de que se recurriría a este mecanismo de arbitraje fue suficiente para socavar los planes del Gobierno de organizar un referendo sobre la posible remunicipalización del servicio de agua en la capital, Sofía. Cuando una demanda ISDS se resuelve a favor de los inversores, los costes se cubren con el dinero que los contribuyentes aportan a los presupuestos públicos, con lo que se puede limitar la asequibilidad de los servicios públicos y aplazar unas inversiones muy necesarias. Por este motivo, las ciudades cada vez son más conscientes de que el actual régimen de comercio e inversión limita gravemente el espacio normativo de los gobiernos locales para asumir o recuperar el control de los servicios y los recursos locales.

Lamentablemente, el ISDS y los acuerdos comerciales son solo un aspecto de las actuales amenazas a la democracia local que dificultan la remunicipalización. En países como el Estado español y el Reino Unido, el Gobierno central está obligando, literalmente, a las autoridades locales a aplicar medidas de austeridad que se han decidido a nivel nacional, como una forma de desviar la responsabilidad de estas políticas. Esos mismos Gobiernos están tratando de forma activa de obstaculizar las remunicipalizaciones, como en el Reino Unido, donde se aprobó un proyecto de ley para prohibir que las ciudades crearan nuevas empresas de autobuses públicos, o en el Estado español, donde el Gobierno central ha decidido llevar ante los tribunales a la ciudad de Valladolid para evitar que esta remunicipalice el servicio de agua.

La importancia de la tendencia remunicipalizadora frente a las asociaciones público-privadas

Para concluir, nos gustaría dedicar unas palabras a una pregunta que nos suelen plantear a menudo y que, sin duda, le surgirá a quien lea este libro: ¿es la tendencia remunicipalizadora realmente tan notable si se la compara con las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP) que se emprenden cada día en todo el mundo? ¿Podríamos estar hablando de un fenómeno marginal?

Hasta el momento, no disponemos de suficientes datos para responder a esta pregunta. Es evidente que las privatizaciones aún mantienen un gran impulso a escala mundial. Sin embargo, el creciente número de desprivatizaciones pone de manifiesto lo insostenibles que resultan las privatizaciones y las APP desde el punto de vista social y económico. Por cada caso de remunicipalización que ha conseguido materializarse con éxito, hay muchos más casos de autoridades locales y ciudadanos que están descontentos con los proveedores privados, pero que aún no han pasado a la acción.

En lo que respecta a algunos países y determinados sectores, sí que sabemos con un alto grado de seguridad que se están produciendo más remunicipalizaciones que nuevas privatizaciones. Este sería el caso del sector de la energía en Alemania, así como del agua y el transporte público en Francia.

En cualquier caso, es imposible comparar la privatización y la desprivatización, porque son fenómenos esencialmente distintos. Son distintos en lo que respecta a los factores políticos y económicos que los impulsan: las grandes empresas y las instituciones financieras internacionales, por un lado, y las autoridades municipales y la ciudadanía, por el otro, con los Gobiernos nacionales de por medio, aunque estos a menudo se inclinan hacia los primeros. Por lo general, es mucho más fácil privatizar un servicio público que remunicipalizarlo. Pero puede que lo más importante sea que las remunicipalizaciones nos explican una historia social y política muy diferente a las privatizaciones: una historia protagonizada por trabajadores y trabajadoras, por la ciudadanía y por los municipios, que están reinventando unos servicios públicos universales para responder a los desafíos sociales y ambientales colectivos. Y esa es, precisamente, la historia que deseábamos explicar en este libro. Esperamos haberlo conseguido.

Notas

- 1 Kishimoto, S., Lobina, E. y Petitjean, O. (2014) *Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global*. Ámsterdam, Londres y París: TNI, PSIRU y Observatorio de las Multinacionales. <https://www.tni.org/es/publicacion/llego-para-quedarse-la-remunicipalizacion-del-agua-como-tendencia-global>
- 2 Kishimoto, S., Lobina, E. y Petitjean, O. (eds.) (2015) *Our Public Water Future: The global experience with remunicipalisation*. Ámsterdam: Transnational Institute et al. <https://www.tni.org/en/publication/our-public-water-future>
- 3 Para un ejemplo reciente en Rumanía, véase: <http://en.rfi.fr/economy/20170602-veolia-investigated-france-over-romania-bribery-accusations>. Véase también el relato del conflicto entre Veolia y Vilnius (Lituania) en el capítulo 3.
- 4 Vila, S. T. y Peters, M. (2016) *La industria de la privatización en Europa*. Ámsterdam: Transnational Institute. <https://www.tni.org/es/publicacion/la-industria-de-la-privatizacion-en-europa>
- 5 Columbia Institute (2016) *Back in house. Why local governments are bringing services home*. Ottawa: CUPE https://cupe.ca/sites/cupe/files/back_in_house_e_web_2.pdf; El informe presenta una panorámica de las últimas experiencias de éxito que se han vivido en el sector municipal canadiense. Actualmente no existen estadísticas completas sobre el alcance total de la remunicipalización en los municipios canadienses ni en otros ámbitos del sector público, como la salud y la educación. Para más información sobre el caso de Conception Bay South, véase: <https://cupe.ca/when-private-goes-public-community-wins>
- 6 Maximilie, Q. (2014) *Managing fiscal risks from Public-Private Partnerships (PPPs)*. Washington: FMI. <http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/cmr/>

Anexo 1

Lista de (re)municipalizaciones en inglés

Legend

D: decisions to remunicipalise


E: contracts expired

T: contracts terminated

S: shares sold by private operators

W: private operators withdrew

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
EDUCATION										
1	Primary schools	India	Kerala	34,800,000	2016		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Private management aided by the government
2	Kindergarten	Germany	Gelsenkirchen	257,651	2012	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	Kirchenkreise, Gelsenkirchen, Wattenscheid
3	Kindergarten	Germany	Bingen am Rhein	24,234	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Kirchengemeinde St. Rupert und St. Hildegard
4	Kindergarten	Germany	Bromskirchen	1,830	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Förderverein der Kindertagesstätte Bromskirchen
5	Conservatorium	Germany	Dresden	543,825	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e. V.
6	Kindergarten	Germany	Oberreichenbach	2,769	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Evangelische Kirchengemeinde
7	Elementary and secondary schools	Nicaragua	Autonomous Region of the Atlantic Coast	481,000	2006		Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
8	Kindergarten	Spain	Barcelona	1,600,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
9	School management	United Kingdom	Bradford Council, Yorkshire & Humberside, United Kingdom	531,200	2009	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	Serco
10	Education and social care	United Kingdom	Stoke-on-Trent Council, West Midlands, United Kingdom	250,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
11	Education	United Kingdom	Leeds Council, Yorkshire & Humberside, United Kingdom	750,000	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	N/A

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
ENERGY 										
12	Gas distribution	Argentina	Buenos Aires	2,890,151	2012	2013	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	Concorcio GASA (which included: YPF Oil Argentina, British Gas (BG), 20% shares traded openly)
13	Wind farm	Denmark	Copenhagen	602,481	1996	2000	Municipalisation	N/A	Other/ combined	N/A
14	Distribution	Dominican Republic	Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte y Samaná (provinces)	785,000	2003		Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	Union Fenosa (Spain)
15	Distribution	Dominican Republic	National District	1,402,749	2003		Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	Union Fenosa (Spain)
16	Street lightning	France	Grenoble	160,000	2015	2023	Remunicipalisation	D	Municipal	GEG (joint-venture between Grenoble and Engie), then Vinci
17	Heating	France	Champigny sur Marne	76,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Engie (GDF Suez)
18	Electricity grid	Germany	Wolfhagen	12,856	2002	2006	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON
19	Electricity grid	Germany	Villingen-Schwenningen (2 Ortsteile: Pfaffenweiler, Obereschach)	N/A	2004	2004	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW
20	Electricity supply	Germany	Bestwig, Lippstadt, Meschede, Olsberg	N/A		2005	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
21	Gas grid	Germany	Waldkirch	21,141	2005		Remunicipalisation	E	Municipal	badenova
22	Gas grid	Germany	Ammerbuch	11,180	2006		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
23	Electricity grid	Germany	Ammerbuch (coincident. Dettenhausen & Waldenbuch)	N/A	2007	2009	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
24	Electricity grid	Germany	Dettenhausen (coincident. Ammerbuch & Waldenbuch)	N/A	2007	2009	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
25	Electricity grid	Germany	Herbrechtingen	12,869	2007	2009	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
26	Gas and electricity grid	Germany	Niederstotzingen	4,527	2007	2008	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
27	Electricity grid	Germany	Samtgemeinde Barnstorf (Flecken Barnstorf, Gemeinde Drebber, Gemeinde Drentwede, Gemeinde Eydelstedt) & Gemeinde Wagenfeld	N/A		2007	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
28	Electricity grid	Germany	Waldenbuch (coincident. Ammerbuch & Dettenhausen)	N/A	2007	2009	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
29	Gas and electricity grid	Germany	Brunsbüttel	12,642	2008	2011	Municipalisation	N/A	Municipal	Eon
30	Electricity grid	Germany	Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Oberteuringen und Tettngang	N/A	2008	2009	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
31	Gas and electricity supply	Germany	Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Oberteuringen und Tettngang	N/A		2008	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
32	Gas grid	Germany	Heddesheim	11,144		2008	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
33	Electricity grid	Germany	Öschingen & Talheim (Stadtteile Mössingen)	N/A	2008	2009	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW
34	Electricity grid	Germany	Prenzlau	19,070	2008	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON
35	Gas and electricity supply	Germany	Springe	28,378	2008	2008	Remunicipalisation	S	Municipal	N/A
36	Electricity grid	Germany	Springe	28,378	2008	2008	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Avacon
37	Electricity grid	Germany	Wehrheim	9,256	2008	2009	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Süwag
38	Gas and electricity supply	Germany	Aerzen, Auetal, Emmerthal, Hameln, Coppenbrügge, Rinteln, Salzhemmendorf	N/A		2009	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
39	Gas and electricity grid	Germany	Denzlingen	13,363	2009	2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
40	Electricity grid	Germany	Edermünde, Gudensberg, Guxhagen, Körle, Malsfeld, Melsungen, Morschen, Niederstein, Spangenberg	N/A	2009	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	E.ON Mitte
41	Electricity grid	Germany	Elchingen	9,192	2009	2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
42	Electricity grid	Germany	Samtgemeinde Emlichheim & Samtgemeinde Uelsen	N/A	2009	2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
43	Gas and electricity supply	Germany	Frankfurt, Hannover, Nürnberg + 54 weitere	N/A	2009	2009	Remunicipalisation	S	Other/ combined	E.ON
44	Electricity grid	Germany	Frickingen	2,886	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	EnBW
45	Gas and electricity supply	Germany	Hamburg	1,803,752	2009	2009	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
46	Electricity grid	Germany	Landsberg am Lech	28,432	2009	2010	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
47	Electricity	Germany	Lich	13,097	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
48	Electricity grid	Germany	Mainhardt (+ Wüstenrot 1 year later)	N/A	2009	2010	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
49	Electricity grid	Germany	Michelbach an der Bilz	3,366		2009	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	EnBW Regional AG
50	Gas and electricity supply	Germany	Müllheim, Staufen	N/A		2009	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
51	Electricity grid	Germany	Wüstenrot (+ Mainhardt 1 year before)	N/A	2009	2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
52	Gas and electricity grid	Germany	Umkirch	5,240	2009		Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
53	Electricity grid	Germany	Volkmarsen	6,743	2009	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte
54	Gas grid	Germany	Volkmarsen	6,743	2009	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte
55	Electricity grid	Germany	Wachtendonk	8,026	2009	2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
56	Gas and electricity grid	Germany	Wedemark	8,026		2009	Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON
57	Gas and electricity grid	Germany	Königswalde	2,276	2009/10		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Envia-M
58	Electricity grid	Germany	Am Lüttau	N/A	2010	2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON
59	Electricity grid	Germany	Amt Nordstormarn	10,599	2010	2011	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
60	Electricity grid	Germany	Amt Rantzau (Bevern, Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Hemdingen und Lutzhorn in 2010 & Ellerhoop in 2011)	N/A	2010	2010/2011	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
61	Gas grid	Germany	Amt Rantzau (Bokholt-Hanredder und Ellerhoop)	N/A	2010	2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
62	Gas and electricity grid	Germany	Amt Südangeln (13 von 16 Gemeinden)	N/A	2010		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
63	Gas and electricity supply	Germany	Bad Neuenahr-Ahrweiler, Schwäbisch Hall	N/A	2010	2010	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
64	Electricity grid	Germany	Baiersbronn (Teilort: Schönmünzach)	N/A		2010	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW Regional AG
65	Gas and electricity supply	Germany	Baden-Württemberg (region)	10,631,278	2010	2010	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	EdF (France, state-owned), OEW, each ca. 45%
66	Gas and electricity supply	Germany	Bochum, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen, Oberhausen	N/A	2010	2011/2014	Remunicipalisation	S	Intermunicipal	Evonik (RAG)
67	Gas grid	Germany	Brilon	25,461	2010	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
68	Electricity grid	Germany	Reichenbach im Vogtland (4 Ortsteile: Brunn, Friesen, Rotschau und Schneidenbach)	N/A	2010	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	envia Verteilnetz GmbH
69	Gas and electricity supply	Germany	Dresden	1,100,000	2010	2010	Remunicipalisation	S	Municipal	EnBW




N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
70	Gas and electricity supply	Germany	Elbtalaua (Samtgemeinde)	20,718	2010	2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
71	Electricity grid	Germany	Glinde	N/A	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
72	Electricity grid	Germany	Gottenheim	2,780	2010	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW Regional (Netze BW)
73	Electricity grid	Germany	Groß Pankow	3,954	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON edis
74	Gas and electricity grid	Germany	Großalmerode	6,997	2010	2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
75	Electricity grid	Germany	Großlöbichau, Ruttersdorf-Lotschen, Schöngleina	N/A	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON Thüringen
76	Gas and electricity grid	Germany	Henningsdorf	25,928	2010	2011	Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON & EMB
77	Gas and electricity grid	Germany	Keltern	9,037	2010	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
78	Electricity grid	Germany	Külshiem	5,254	2010	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW
79	Electricity grid	Germany	Lahntal	6,783	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
80	Electricity grid	Germany	Lehesten	1,746	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Thüringen
81	Electricity grid	Germany	Luckau (+Drahnsdorf)	N/A	2010	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Mitnetz Strom (Envia)
82	Gas grid	Germany	Mögelin & Döberitz (Ortsteile von Premnitz)	N/A		2010	Remunicipalisation	E	Municipal	Energie Mark Brandenburg GmbH
83	Electricity grid	Germany	Nersingen	9,224		2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Lechwerke AG (RWE)
84	Electricity grid	Germany	Neuenburg am Rhein	11,710	2010	2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Energiedienst
85	Electricity grid	Germany	Oststeinbek	8,791	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
86	Electricity grid	Germany	Ratekau	15,193	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Schleswig-Holstein Netz
87	Electricity grid	Germany	Schkeuditz (Ortsteil Glesien)	1,451	2010	2011	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	enviaM
88	Electricity grid	Germany	Schwedt/Oder (zuerst 9, dann die restlichen 4 Ortsteile)	N/A	2010	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON
89	Electricity grid	Germany	Tannenberg	1,138	2010	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Envia M



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
90	Gas and electricity grid	Germany	Wadersloh	12,167	2010	2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	RWE
91	Electricity grid	Germany	Wadgassen	17,540		2010	Remunicipalisation	E	Municipal	Energienetz saar
92	Electricity grid	Germany	Walldürn (Ortsteile: Hornbach, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, NeUnited Statesß, Kaltenbrunn, Reinhardsachsen, Rippberg, Wattersdorf)	N/A	2010	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW Regional AG
93	Gas and electricity supply	Germany	Wangerland	9,061	2010	2010	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
94	Gas and electricity grid	Germany	Wohltorf	2,411	2010	2011	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse
95	Gas and electricity grid	Germany	Wolmirstedt (3 Ortsteile)	N/A	2010	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	E.on Avacon
96	Electricity grid	Germany	Süsel	5,191	2010/2011		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Schleswig-Holstein Netz AG (E.on Hanse)
97	Gas and electricity supply	Germany	Achern, Kappelrodeck, Oppenau, Rheinau, Renchen, Sasbach, Sasbachwalden	N/A	2011	2012	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
98	Electricity grid	Germany	Achern, Kappelrodeck, Oppenau, Rheinau, Renchen, Sasbach, Sasbachwalden	N/A	2011	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Süwag (RWE)
99	Electricity grid	Germany	Amöneburg	5,144	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
100	Gas and electricity grid	Germany	Aspishheim, Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Welgesheim, Wolfsheim, Zotzenheim	N/A		2011	Partnership with citizens	E	Intermunicipal	EWR (electricity), RWE (gas)
101	Gas and electricity grid	Germany	Badenheim, St.Johann, Sprendlingen	N/A		2011	Partnership with citizens	E	Intermunicipal	EWR (electricity), RWE (gas)
102	Electricity grid	Germany	Bad Krozingen	17,448	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Energiedienst AG
103	Electricity grid	Germany	Bärenstein	2,442	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	envia Verteilnetz GmbH
104	Gas and electricity grid	Germany	Brieselang (plus Dallgow-Döberitz & Wustermark)	N/A	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON & EMB



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
105	Electricity grid	Germany	Cölbe	6,725	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte	
106	Gas and electricity grid	Germany	Dallgow (+ Brieselang & Wustermark)	N/A	2011	still negotiating	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON & EMB	
107	Electricity grid	Germany	Diez	10,688	2011	2012	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A	
108	Electricity grid	Germany	Ditzingen	24,272	2011	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	Netze BW	
109	Gas grid	Germany	Ditzingen	24,272	2011	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	Netze BW	
110	Electricity supply	Germany	Donzdorf, Eislingen, Ottenbach	N/A		2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A	
111	Electricity grid	Germany	Elbtalau (Samtgemeinde)	21,425	2011	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A	
112	Electricity grid	Germany	Emsbüren	9,939		2011	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE	
113	Electricity grid	Germany	Frankenau	2,919	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte	
114	Electricity grid	Germany	Frauensee	832	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Thüringer Energie AG	
115	Gas grid	Germany	Frohnau (+ 2 weitere Ortsteile: Geyersdorf, Cunersdorf)	N/A	2011	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Mitteldeutsche Energie (RWE)	
116	Electricity grid	Germany	Frohnau (+ 2 weitere Ortsteile: Geyersdorf, Cunersdorf)	N/A	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Mitnetz Strom -> Envia-M	
117	Electricity grid	Germany	Fronhausen	4,048	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte	
118	Gas and electricity supply	Germany	Gauting, Krailing, Planegg	N/A		2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A	
119	Gas and electricity grid	Germany	Gernewitz, Hainbücht (Ortsteile Stadtroda)	N/A	2011	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	Thüringer Energienetze GmbH	
120	Electricity grid	Germany	Göppingen	56,781	2011	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW Regional (Netze BW)	
121	Electricity grid	Germany	Grimmen	10,019	2011		Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Stadt Greifswald	
122	Electricity grid	Germany	Hann. Münden (alle Ortsteile)	N/A	2011	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Mitte / Energie Netz Mitte GmbH (ENM)	
123	Electricity grid	Germany	Harrisleer	11,285	2011	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Schleswig-Holstein Netz AG (HanseWerkAG)	
124	Electricity grid	Germany	Heddesheim	11,199	2011	2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW	
125	Electricity grid	Germany	Ilvesheim	9100	2011	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW	
126	Electricity grid	Germany	Koblenz	112,586		2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	RWE	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
127	Electricity grid	Germany	Korb	10,544		2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Süwag
128	Gas grid	Germany	Korb	10,544		2011	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
129	Electricity grid	Germany	Lauchringen	7,630	2011	2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
130	Electricity grid	Germany	Lenningen	7,630	2011	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW
131	Gas and electricity supply	Germany	Lohmar	30,348	2011	2012	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
132	Electricity grid	Germany	Lohra	5,465	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
133	Electricity grid	Germany	Ludwigsburg, Kornwestheim	N/A	2011	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
134	Gas and electricity grid	Germany	Merkers-Kieselbach	2,895	2011	2011/2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON
135	Electricity grid	Germany	Mömbris	11,576	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Bayern
136	Electricity grid	Germany	Münchhausen	3,429	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
137	Electricity grid	Germany	Nord-Elm (Samtgemeinde (+ Königsutter am Elm & Mariental))	N/A	2011	2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Avacon AG
138	Electricity grid	Germany	Oersdorf	874		2011	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Schleswig-Holstein Netz AG
139	Electricity grid	Germany	Oranienburg (Ortsteile: Friedrichsthal, Germendorf, Malz, Lehnitz, Schmachtenhagen, Wensickendorf, Zehlendorf)	N/A	2011	2012	Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON edis
140	Electricity grid	Germany	Oranienburg (Kernstadt: Sachsenhausen)	N/A	2011		Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON edis
141	Electricity grid	Germany	Putzbrunn	6,503		2011	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
142	Electricity grid	Germany	Rauschenberg	4,432	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
143	Electricity grid	Germany	Saerbeck	7,191	2011	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
144	Gas and electricity supply	Germany	Stuttgart	623,738	2011	2013	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
145	Gas and electricity supply	Germany	Waldbröl	19,194	2011	2014	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
146	Electricity grid	Germany	Weimar (Lahn)	7,003	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
147	Electricity grid	Germany	Wetter	27,822	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
148	Electricity grid	Germany	Wohratal	2,336	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON-Mitte
149	Gas and electricity grid	Germany	Wustermark (plus Brieselang & Dallgow)	N/A	2011	still negotiating	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON & EMB
150	Electricity grid	Germany	Zeitz (5 Ortsteile)	N/A	2011	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
151	Electricity grid	Germany	Allensbach, Bodman-Ludwigshafen, Reichenau	N/A	2012	2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
152	Gas grid	Germany	Allensbach, Bodman-Ludwigshafen, Reichenau	N/A	2012	2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Erdgas Südwest (EnBWt 79 % & OEW Energie-Beteiligungs GmbH 21 %)
153	Gas and electricity grid	Germany	Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl, Senden	N/A		2012	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
154	Electricity grid	Germany	Bad Sassendorf	11,650	2012	2011	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
155	Gas grid	Germany	Bad Schlema	4,866		2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG
156	Electricity grid	Germany	Baiersbronn (Teilort: Obertal)	N/A		2012	Remunicipalisation	E	Municipal	Elektro Trück
157	Gas and electricity supply	Germany	Bamberg + 31 weitere Gemeinden	N/A		2012	Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	N/A
158	Electricity grid	Germany	Bebra (11 Ortsteile)	N/A		2012	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON
159	Electricity grid	Germany	Blumenau	241,987		2012	Remunicipalisation	E	Municipal	MITNETZ STROM (Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH) -> enviaM: 41,43% ostdeutsche Kommunen & 58,57% Innogy SE -> Tochter RWE
160	Gas and electricity grid	Germany	Bobingen	16,688	2012	2013	Municipalisation	N/A	Municipal	Lechwerke AG (LEW) -> innogy SE -> RWE
161	Gas and electricity grid	Germany	Böblingen	46,714		2012	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
162	Gas and electricity supply	Germany	Darmstadt & weitere	N/A	2012	2012	Remunicipalisation	S	Intermunicipal	N/A
163	Electricity grid	Germany	Dorndorf	2,687	2012	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Thüringer Energie AG (vorm. E.ON Thüringer Energie AG)
164	Electricity grid	Germany	Drahnsdorf (+Luckau)	N/A	2012	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Mitnetz Strom (Envia)
165	Electricity grid	Germany	Edlingen-Neckarhausen	N/A	2012	2014	Municipalisation	N/A	Municipal	Netze BW & MVV Energie
166	Electricity supply	Germany	Freudenberg (Baden)	3,768		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
167	Electricity grid	Germany	Haan	30,166	2012	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
168	Electricity grid	Germany	Halberstadt (2 Ortsteile: Klein Quenstedt und Emersleben)	N/A		2012	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Avacon
169	Electricity grid	Germany	Helmarshausen	1,478	2012	2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON-Mitte
170	Electricity grid	Germany	Herzebrock-Clarholz	15,965	2012	2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	RWE
171	Electricity grid	Germany	Hirschberg	2,183	2012	2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
172	Electricity grid	Germany	Ispringen	6,062		2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
173	Electricity grid	Germany	Kappelrodeck	5,887		2012/2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Ziegler GmbH & Co. KG
174	Electricity grid	Germany	Kaufungen	12,445	2012	2015	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EAM
175	Electricity grid	Germany	Kernen, Remshalden, Urbach, Winterbach	N/A	2012	2017	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW
176	Electricity grid	Germany	Kyritz	9,140	2012	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Edis
177	Gas and electricity grid	Germany	Lohmar	29,820	2012	2013	Remunicipalisation	E	Municipal	Rhenag
178	Electricity grid	Germany	Lindenau & Wildbach (Ortsteile von Schneeberg) + Gemeinde Bad Schlema	N/A		2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Envia M
179	Electricity grid	Germany	Michelfeld	3,659	2012	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW
180	Electricity grid	Germany	Müllheim, Staufen	N/A		2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Energiedienst Netze



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
181	Gas and electricity grid	Germany	Norden	24,895	2012	2013	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
182	Electricity grid	Germany	Neuenkirchen	13,595		2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
183	Electricity grid	Germany	Oberriexingen	3,284	2012	2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Netze BW
184	Gas grid	Germany	Oberriexingen	3,284	2012	2015	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Netze BW
185	Electricity grid	Germany	Oppenau	4,661	2012	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Süwag
186	Electricity grid	Germany	Rheda-Wiedenbrück	47,177	2012	2013	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
187	Electricity grid	Germany	Riederich	4,261	2012	2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	EnBW
188	Gas and electricity grid	Germany	Schwentinental	13,588		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	
189	Gas and electricity grid	Germany	Solingen	158,726	2012	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	Stadt Solingen / MVV-Energie
190	Gas and electricity supply	Germany	Solingen	158,726	2012	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	Stadt Solingen / MVV-Energie
191	Electricity grid	Germany	Sondershausen (12 Ortsteile)	N/A	2012	2013	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Thüringen
192	Electricity grid	Germany	Süßen	9,798		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW
193	Electricity grid	Germany	Titisee-Neustadt	11,819		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW
194	Electricity supply	Germany	Titisee-Neustadt	11,819		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
195	Electricity grid	Germany	Trendelburg	5,302	2012	2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON-Mitte
196	Electricity grid	Germany	Wackerow	1,420	2012	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
197	Electricity grid	Germany	Wahlsburg	2,088	2012	2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON-Mitte
198	Electricity grid	Germany	Weiden	96	2012	2012	Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON
199	Gas grid	Germany	Weimar (8 Ortsteile)	N/A		2012/2013	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON
200	Electricity grid	Germany	Adelberg, Birenbach, Börtlingen, Rechberghausen, Wäschenbeuren	N/A	2013		Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW




N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
201	Gas and electricity supply	Germany	Ahaus, Coesfeld, Dülmen, Stadtlohn, Südlohn, Vreden	N/A		2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
202	Electricity grid	Germany	Backnang	35,496	2013	2017	Remunicipalisation	D	Intermunicipal	Syna GmbH / Süwag Energie AG / RWE
203	Gas and electricity grid	Germany	Bad Neuenahr-Ahrweiler, Schwäbisch Hall	N/A	2013	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
204	Electricity grid	Germany	Bad Schlema	5,229		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
205	Electricity supply	Germany	Berlin	3,437,916	2013	2014	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
206	Electricity grid	Germany	Biebertal (+ Lahnau & Stadt Lollar)	N/A		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte
207	Gas and electricity grid	Germany	Bovenden	13,529	2013	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON-Mitte
208	Electricity grid	Germany	Büchenbach	5,225	2013	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N-ERGIE Netz GmbH
209	Electricity grid	Germany	Donzdorf, Eislingen, Ottenbach	N/A	2013	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnBW
210	Electricity grid	Germany	Eislingen	19,840	2013	2013	Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	EnBW
211	Gas and electricity grid	Germany	Gauting, Krailing, Planegg	N/A		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON
212	Electricity grid	Germany	Goch	33,401	2013	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
213	Gas and electricity grid	Germany	Göttingen + 111 weitere	N/A		2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON SE
214	Gas and electricity supply	Germany	Göttingen + 111 weitere	N/A		2013	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	E.ON SE
215	Electricity grid	Germany	Gräfelfing	13,269		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	E.ON
216	Electricity grid	Germany	Grefrath	15,564		2013	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
217	Gas and electricity grid	Germany	Grimma	28,411	2013	2014	Municipalisation	N/A	Municipal	Enviem Mitteldeutsche Energie (RWE)
218	Electricity grid	Germany	Hamburg	1,803,752	2013	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Vattenfall
219	Gas and electricity grid	Germany	Hildesheim	99,979		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
220	Electricity grid	Germany	Hofheim	38,598	2013	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Süwag



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
221	Electricity grid	Germany	Lahnau (+ Biebertal & Stadt Lollar)	N/A		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte
222	Electricity grid	Germany	Langenfeld	57,083	2013	2014	Remunicipalisation	E	Citizen and/or workers	RWE
223	Electricity supply	Germany	Lauchringen, Wutöschingen	N/A		2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
224	Electricity grid	Germany	Leinfelden-Echterdingen	N/A		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW
225	Gas grid	Germany	Lindenau & Wildbach (Ortsteile von Schneeberg) + Gemeinde Bad Schlema	N/A		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Envia M
226	Electricity grid	Germany	Lollar (+ Municipalities: Biebertal & Lahnaur)	N/A		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Mitte
227	Gas and electricity grid	Germany	Lüdinghausen	23,921	2013	2014	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	RWE
228	Gas and electricity grid	Germany	Paderborn + 43 weitere Gemeinden	N/A		2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	E.ON
229	Gas and electricity grid	Germany	Pfaffenhofen	23,971	2013	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
230	Electricity grid	Germany	Porta Westfalica	35,208		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON
231	Electricity grid	Germany	Recklinghausen	114,147	2013	2019	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
232	Electricity grid	Germany	Remseck am Neckar	24,512	2013	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW & Syna
233	Gas grid	Germany	Remseck am Neckar	24,512	2013	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW & Syna
234	Electricity grid	Germany	Simmerath	15,094		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
235	Gas and electricity grid	Germany	Steinheim	12,757		2013	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
236	Gas and electricity grid	Germany	Sulzbach-Rosenberg	N/A		2015	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Bayern werk AG
237	Electricity grid	Germany	Waltrop	28,971		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
238	Electricity grid	Germany	Warendorf	36,972	2013	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	RWE
239	Electricity grid	Germany	Weinstadt	26,177		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
240	Gas and electricity grid	Germany	Bad Bentheim	15,104	2014	2015	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	RWE



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
241	Electricity supply	Germany	Bad Boll	5,079		2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW	
242	Electricity grid	Germany	Bad Boll	5,079		2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW	
243	Electricity grid	Germany	Bad Godesberg, Beueler	N/A	2014	2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE	
244	Gas and electricity grid	Germany	Bargteheide	15,863	2014	2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Schleswig-Holstein Netz AG / HanseWerk AG (E.ON AG)	
245	Gas grid	Germany	Barsbüttel	12,278	2014	2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON Hanse	
246	Electricity grid	Germany	Bodmanrück (Gemeinden: Bodman-Ludwigshafen, Allensbach, Reichenau)	N/A	2014		Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnBW	
247	Electricity grid	Germany	Brüggen	15,443	2014	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE	
248	Gas grid	Germany	Criewen (Ortsteil von Schweidt)	N/A		2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	E.ON	
249	Electricity grid	Germany	Eppingen	20,919	2014	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW	
250	Energy utility	Germany	Freiberg (Sachsen)	40,829		2014	Municipalisation	N/A	Municipal	Stadtwerke Freiberg, but in possession of HEAG Südthessische Energie AG	
251	Gas grid	Germany	Hohen Neuendorf	25,239	2014		Municipalisation	N/A	Municipal	Energie Mark Brandenburg (EMB)	
252	Gas and electricity supply	Germany	Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke, Westerkappeln	N/A	2014	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A	
253	Electricity grid	Germany	Kirchheim unter Teck	39,389	2014	2013	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW	
254	Electricity grid	Germany	Niestetal	10,674	2014	2014	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	E.ON	
255	Electricity grid	Germany	Samtgemeinde Rehden	N/A	2014	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Westnetz	
256	Gas grid	Germany	Schwedt/Oder (Ortsteile: Criewen, Stendell, Vierraden & Zützen)	N/A		2014	Remunicipalisation	E	Municipal	EWE AG	
257	Gas grid	Germany	Springe	28,378	2014	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	Avacon	
258	Gas grid	Germany	Utendorf (+Kühndorf, Schwarza, Christes & Meinger Ortsteil Herpf)	N/A		2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Thüringer Energie AG	
259	Gas grid	Germany	Weinstadt	26,177	2014	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	Netze BW GmbH	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
260	Electricity grid	Germany	Aarbergen, Bad Camberg, Bad Schwalbach, Heidenrod, Hohenstein, Hünfelden, Hünstetten, Niedernhausen, Weilrod	N/A		2015	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Süwag
261	Gas and electricity grid	Germany	Bad Salzufen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho	N/A		2015	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
262	Electricity grid	Germany	Bad Vilbel (Stadtteil Gronau)	N/A	2015	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Mitte
263	Electricity supply	Germany	Baunatal	27,403	2015	2016	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	E.ON Mitte AG
264	Electricity grid	Germany	Bestwig, Meschede (auch Gas), Olsberg	N/A	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
265	Electricity grid	Germany	Bingen	24,234	2015	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE
266	Gas grid	Germany	Bornheim	46,623	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE
267	Electricity grid	Germany	Gmund am Tegernsee	5,912	2015	2017	Remunicipalisation	D	Intermunicipal	E.ON
268	Gas and electricity supply	Germany	Grimma	28,411		2015	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
269	Electricity grid	Germany	Hagnau am Bodensee	1,397	2015	2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
270	Electricity grid	Germany	Hamel	56,310	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	E.ON Westfalen Weser AG
271	Gas and electricity grid	Germany	Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke, Westerkappeln	N/A	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	RWE, SWD
272	Electricity grid	Germany	Kulmbach	27,099	2015	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Bayernwerk AG (E.ON)
273	Electricity supply	Germany	Kulmbach	27,099	2015	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
274	Gas grid	Germany	Leipzig (22 Ortsteile)	N/A	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	MITGAS
275	Electricity grid	Germany	Moringen	6,979	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	EnergieNetz Mitte GmbH
276	Gas grid	Germany	Müllheim, Staufen	N/A		2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Badenova
277	Electricity grid	Germany	Oldenburg in Holstein	9,663	2015	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	Schleswig-Holstein Netz (HanseWerk)
278	Gas and electricity	Germany	Seegebiet Mansfelder Land	9,325	2015		Municipalisation	N/A	Intermunicipal	EnviaM



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
279	Electricity grid	Germany	Seeheim-Jugenheim	15,948		2015	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	e-netz Südhessen	
280	Electricity grid	Germany	Sersheim	5,471	2015	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	EnBW	
281	Gas grid	Germany	Verl	25,006	2015	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE	
282	Gas and electricity grid	Germany	Wendelstein	15,648		2015	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A	
283	Electricity supply	Germany	Aurich	41,075	2016	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A	
284	Electricity grid	Germany	Crailsheim (9 Ortsteile)	N/A		2016	Remunicipalisation	E	Municipal	ENBW-ODR-Netz	
285	Gas and electricity grid	Germany	Düren	89,024	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	RWE	
286	Gas and electricity grid	Germany	Gifhorn	41,617	2016	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	LandE	
287	Electricity grid	Germany	Harsewinkel	24,183		2016	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE	
288	Electricity grid	Germany	Königeslutter am Elm (+ Nord-Elm & Mariental)	N/A		2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Avacon AG	
289	Electricity grid	Germany	Mariental (+ Nord-Elm & Königeslutter am Elm)	N/A		2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Avacon AG	
290	Electricity grid	Germany	Metzingen	21,172		2016	Remunicipalisation	E	Municipal	EnBW Regional AG	
291	Electricity grid	Germany	Rösrath	28,049		2016	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE	
292	Electricity grid	Germany	Leipzig (19 Ortsteile)	N/A	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	EnviaM	
293	Electricity grid	Germany	Minden	80,212	2016	2016	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Westfalen Weser Netz GmbH	
294	Gas grid	Germany	Minden	80,212	2016	2017	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	Westfalen Weser Netz GmbH	
295	Electricity grid	Germany	Murnau am Staffelsee	11,882	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	Bayernwerk AG	
296	Electricity grid	Germany	Verl	25,006	2016	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	RWE	




N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
297	Electricity grid	Germany	Wenden	19,900		2016	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
298	Electricity grid	Germany	Ahrensburg	31,602		2018	Remunicipalisation	D	Municipal	N/A
299	Gas and electricity grid	Germany	Filderstadt	44,631			Remunicipalisation	E	Intermunicipal	
300	Electricity grid	Germany	Freudenberg (Baden)	3,768			Remunicipalisation	E	Municipal	
301	Electricity grid	Germany	Gomaringen	8,691			Remunicipalisation	E	Intermunicipal	
302	Electric distribution	India	Odisha State	43,730,000	2015		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	
303	Renewable energy supply	Japan	Izumisano	100,551	2014	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	
304	Renewable energy generation and supply	Japan	Nakanojo	16,399		2014	Municipalisation	N/A	Municipal	
305	Biomass production and supply	Japan	Maniwa	45,044	2015		Municipalisation	N/A	Municipal	
306	Renewable energy supply	Japan	Miyama	37,250		2015	Municipalisation	N/A	Municipal	
307	Central heating supply	Lithuania	Vilnius and two other municipalities	542,664	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	
308	Warmth generation and distribution	The Netherlands	Culemburg	27,674		2009	Municipalisation	N/A	Citizen and/or workers	
309	Energy generation and distribution	The Netherlands	Dordrecht	118,782		2012	Municipalisation	N/A	Municipal	
310	Energy generation and distribution	The Netherlands	Haarlemmermeer	144,908	2013	2014	Municipalisation	N/A	Municipal	
311	Electricity	Spain	Barcelona	1,600,000	2017	2018	Remunicipalisation	E	Municipal	
312	Heating and electricity supply	United Kingdom	Bristol	428,100	2013	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	
313	Energy supply	United Kingdom	Scotland	5,295,000	2014	2015	Partnership with citizens	N/A	Citizen and/or workers	
314	Energy switching	United Kingdom	Glasgow	598,830	2015	2016	Partnership with citizens	N/A	Other/ combined	



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
315	Electricity supply	United Kingdom	Nottingham	318,900		2015	Municipalisation	N/A	Municipal		
316	Electricity supply	United Kingdom	Leeds	443,247		2016	Municipalisation	N/A	Municipal		
317	Electric utility	United States	Hermiton, Oregon	17,137	2001		Remunicipalisation	T	Municipal		
318	Electricity supply	United States	Kaua'i island, Hawaii	65,689	2002	2002	Workers and/or citizens	S	Citizen and/or workers		
319	Electric utility	United States	Winter Park, Florida	29,442	2003	2005	Remunicipalisation	E	Municipal		
320	Electric utility	United States	Boulder	97,385	2011	2017	Municipalisation	N/A	Municipal		
321	Electric utility	United States	Minnesota	43,000	2015		Workers and/or citizens	T	Citizen and/or workers		
322	Electricity provision	United States	Apple Valley, California	72,174	2016	2017	Municipalisation	N/A	Municipal		
HEALTH CARE & SOCIAL WORK											
323	Nursing home	Denmark	Syddjurs	41,652	2015	2015	Remunicipalisation	W	Municipal	Forenede Care	
324	Ambulance	Denmark	Region of Southern Denmark	120,2000	2016	2016	Remunicipalisation	W	State/ province/ regional	BIOS Denmark, owned by the Dutch company BIOS-Groep	
325	Regional hospital complex	Finland	Helsinki and Uusimaa	1,600,000		2000	Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	Attendo	
326	Community clinics	India	Delhi	18,980,000	2016	2016	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A	
327	Hospital	Montenegro	Herceg Novi	19,536	2015	2016	Remunicipalisation	T	Municipal	Atlas Group	
328	Nursing home	Norway	Trondheim	187,000	2004	2005	Remunicipalisation	E	Municipal	Norlandia Health Care	
329	Nursing home	Norway	Trondheim	187,000	2004	2005	Remunicipalisation	E	Municipal	Norlandia Health Care	
330	Nursing home	Norway	Moss	32,000	2004	2004	Remunicipalisation	E	Municipal	Nordlandia	
331	Nursing home	Norway	Klæbu	5,800	2010	2011	Remunicipalisation	T	Municipal	Adecco	
332	Nursing home	Norway	Oppegård	27,000	2010	2011	Remunicipalisation	T	Municipal	Adecco	
333	Nursing home	Norway	Bærum	122,000	2010	2010	Remunicipalisation	E	Municipal	Attendo Care A/S	
334	Child welfare	Norway	Sandnes	75,000	2010	2011	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A	
335	Staffing agency	Norway	Bergen	350,000	2015	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
336	Staffing agency	Norway	5 municipalities in central part of Norway	200,000	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
337	Nursing home	Norway	Oslo	600,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Norlandia Health Care
338	Elderly care center	Norway	Bergen	278,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Aleris omsorg
339	Elderly care center	Norway	Bergen	278,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Aleris omsorg
340	Elderly care center	Norway	Middle region of Norway	1,000,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
341	Staffing agency	Norway	Northern region of Norway	500,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
342	Staffing agency	Norway	South Eastern region of Norway	2,000,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
343	Staffing agency	Norway	Oslo	520,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
344	Services for people with disabilities	Spain	Albolote, region of Granada	18,497	2015	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	N/A
345	Women attention	Spain	Barcelona	1,600,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
346	Nursing home	Spain	Gijón	277,733	2016		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
347	Nursing home	Spain	Pamplona	195,650	2016		Remunicipalisation	T	Municipal	Public entity ASIMEC and private Sarquavita
348	Elderly home	Sweden	Gotland	57,265	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Attendo Care
349	Care home	Sweden	Stockholm	935,619	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Vardaga AB
350	Retirement home	Sweden	Stockholm	935,619	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Vardaga AB
351	Elderly home	Sweden	Umeå	75,645	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Carema
352	Nursing and special care	Sweden	Helsingborgs	91,457	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Vardaga AB, Attendo
353	Home and elderly care	Sweden	Laholm	6,527	2015	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Humana



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company 
354	Retirement home	Sweden	Vaxjo	65,345	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	Attendo Care
355	Hospital	United Kingdom	Darlington	105,564	2009	2011	Remunicipalisation	T	Municipal	Norwich Union PPP Fund, now Aviva
356	Hospital	United Kingdom	Northumberland	315,300		2014	Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Lend Lease Infrastructure Fund and Uberior (Aberdeen Asset Management)
357	Hospital catering and cleaning	United Kingdom	Brighton and Hove	273,400	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Sodexo
358	District hospital	United Kingdom	Hinching-Brooke	19,830		2015	Remunicipalisation	W	Municipal	Circle Holdings
359	Patient transport	United Kingdom	Sussex	1,609,500	2016	2016	Remunicipalisation	T	Municipal	Coperforma
LOCAL GOVERNMENT 										
360	Parking	Armenia	Yerevan	1,060,138	2016	N/A	Municipalisation	S	Municipal	City Parking Service
361	Cinema	Austria	Vienna	1,867,960	2002	2002	Workers and/or citizens	S	Other/ combined	City Cinemas
362	Cinema	Austria	Vienna	1,867,960	2002	2002	Workers and/or citizens	S	Other/ combined	City Cinemas
363	Museum	Austria	Vienna	1,867,960	2005	2005	Municipalisation	N/A	Municipal	Viennaer Städtische Versicherung, Donau Versicherung
364	Museum	Austria	Vienna	1,867,960	2007	2007	Municipalisation	N/A	Municipal	Bawag Leasing, Hundertwasser Stiftung
365	Theater	Austria	Vienna	1,867,960		2007	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
366	Parking	Austria	Vienna	1,867,960	2009	2009	Municipalisation	N/A	Municipal	Immoeast AG
367	Funeral	Austria	Vienna	1,867,960	2009	2009	Municipalisation	N/A	Municipal	Pax Bestattungs- und Grabstättenfachbetrieb GmbH
368	Funeral	Austria	Vienna	1,867,960	2010	2010	Municipalisation	N/A	Municipal	Perikles Bestattung GmbH
369	Youth centres (cultural)	Austria	Innsbruck	130,894	2012	2013	Municipalisation	N/A	Municipal	Verein Jugendhilfe Innsbruck
370	Theater	Austria	Vienna	1,867,960		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A


N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
371	Aerial lift (construction)	Austria	Innsbruck	130,894	2014	2014	Remunicipalisation	S	Municipal	Peter Schröcksnadel
372	Housing	Austria	Vienna	1,867,960	2015	2015	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
373	Security	Austria	Vienna	1,867,960	2016	2017	Municipalisation	N/A	Municipal	Securitas
374	Sports and recreation	Canada	Ottawa	933,596	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	PPP with Serco
375	City hall cafeteria (food catering)	Canada	New Westminster	70,996	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
376	Sidewalk construction and repair	Canada	Cotes-des-Neiges-Notre Dame-de-Grace (Montreal, Quebec)	165,031	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
377	Sidewalk construction and repair	Canada	Rosemont-La Petite-Patrie (Montreal, Quebec)	134,038	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
378	Sidewalk construction and repair	Canada	Villerai-Saint-Michel-Park-Extension(Montreal, Quebec)	142,222	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
379	Police station construction	Canada	Winnipeg	650,000	2013		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
380	Snow removal (public space)	Canada	Port Hawkesbury	3,500	2014	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
381	Fire station construction	Canada	Winnipeg	650,000	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Shindoco Realty
382	Parking (public space)	Canada	Calgary	1,237,656	2015	2015	Remunicipalisation	E or T	Municipal	PPP
383	Hospital cleaning	Denmark	The Capital Region of Denmark	1,811,809	2015		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	ISS Denmark
384	Building cleaning	Denmark	Bornholm	39,684		2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Elite Miljø
385	HR-recruitment	Finland	Helsinki, Espoo and Vantaa	60,000 employees in 3 cities	2005	2005	Municipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
386	School cleaning	Finland	Janakkala	16,862	2013	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	ISS Palvelut Oy




N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company 
387	School and day care catering	Finland	Hamina	20,800	2013	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Fazer Food Services
388	School catering	France	Langouët	600	2004		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
389	School catering	France	Plouër sur Rance	3,500	2006		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
390	School catering	France	Nice	1,004,826	2008	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	Sodexo
391	Cleaning	France	Lodeve	7,345	2009	2010	Remunicipalisation	E	Municipal	Groupe Nicollin
392	School catering	France	Mouans-Sartoux	9,500	2010		Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
393	School catering	France	Langonnet	1,900	2010		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
394	School catering	France	Arles	56,000	2011	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	Sodexo
395	School catering	France	Valence Romans agglomération	212,600	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
396	Parking (public space)	France	Blois	46,000	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Vinci (Indigo)
397	School catering	France	Fondettes	10,400	2012		Remunicipalisation	N/A	municipal	N/A
398	School catering	France	Libourne	24,500	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	Avenance
399	School catering	France	Rouen	111,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Avenance
400	School catering	France	Amiens	132,479		2013	Remunicipalisation	E	Municipal	Sogeres
401	School catering	France	Tulle	14,300	2013	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	Elior
402	School catering	France	Avignon	92,200	2014	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Scolarest
403	School catering	France	Bergerac	28,000	2014	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Scolarest-Compass
404	Swimming pool and skating rink	France	Briançon	12,200		2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
405	School catering	France	Bonifacio	3,000	2016		Remunicipalisation	W	Municipal	N/A
406	Parking (public space)	France	Bourg-en-Bresse	41,000	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	SAGS
407	Parking (public space)	France	Clermont-Ferrand	140,000	2016	2017	Remunicipalisation	E	Municipal	Vinci (Indigo)
408	Parking (public space)	France	Nice	1,004,826	2016		Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
409	Building cleaning	Germany	Dortmund	586,181	2003		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
410	Building cleaning	Germany	Freiburg/Breisgau	226,393	2003	2005	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
411	Swimming hall	Germany	Dorsten	75,431	2004	2004	Remunicipalisation	T	Municipal	Atlantis Freizeit GmbH
412	Green area maintenance (public space)	Germany	Nürnberg	509,975	2007	2007	Remunicipalisation	W	Municipal	N/A
413	Rescue service (security emergency)	Germany	Steinburg (Landkreis)	131,457		2007	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Different private companies
414	Structural analyses of buildings (building cleaning)	Germany	Hannover	532,163	2008	2008	Remunicipalisation	T	Municipal	N/A
415	Swimming pool	Germany	Schwerin	96,800	2008	2009	Remunicipalisation	S	Municipal	FIT GmbH
416	Conference center (cultural)	Germany	Bonn	318,809	2010	2010	Remunicipalisation	T	Municipal	SMI Hyundai
417	Rescue service (security emergency)	Germany	Havelland (Landkreis)	N/A	2010	2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	ASB
418	Rescue service (security emergency)	Germany	Mansfeld-Südharz (Landkreis)	141,408	2010	2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Johanniter, ASB
419	Rescue service (security emergency)	Germany	Oder-Spree (Landkreis)	182,397	2010	2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter
420	Rescue service (security emergency)	Germany	Uckermark (Landkreis)	121,014	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Deutsches Rotes Kreuz
421	Rescue service (security emergency)	Germany	Bad Oeynhausen	48,990	2011	2012	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Johanniter
422	Street lighting (public space)	Germany	Düren	90,244	2011	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	Stadtwerke Düren (Stadt Düren / RWE)
423	Swimming pool	Germany	Düren	90,244	2011	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	Stadtwerke Düren (Stadt Düren / RWE)



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
424	Rescue service (security emergency)	Germany	Heinsberg (Landkreis)	41,538	2011	2012	Remunicipalisation	E regional	State/ province/ Johanniter	Malteser, 
425	Rescue service (security emergency)	Germany	Märkisch-Oderland (Landkreis)	190,714	2011	2012	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter
426	Rescue service (security emergency)	Germany	Oberberg (Landkreis)	273,452		2011	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	3 clinics, Rotes Kreuz, Johanniter
427	Swimming pool	Germany	Siegburg	41,016	2012	2013	Remunicipalisation	T	Municipal	s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark
428	Building cleaning	Germany	Wilhelmshaven	75,995	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	7 private companies
429	Rescue service (security emergency)	Germany	Teltow-Fläming (Landkreis)	163,553	2012	2013	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Different private companies
430	Building cleaning	Germany	Bochum	364,742	2013 (second phase)		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
431	Swimming pool	Germany	Winterberg	12,798	2013	2013	Remunicipalisation	T	Municipal	aquasphere Winterberg GmbH
432	Rescue service (security emergency)	Germany	Pewsum	3,228	2014		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	RKSH and others (security)
433	Building cleaning	Germany	Grevenbroich	63,051	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
434	Local food supplier (other)	Germany	Ofterschwang	2,028	2016	2016	Remunicipalisation	S	Municipal	Familie Juppa
435	Catering	India	Tamil Nadu State	72,147,030	2013		Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	N/A
436	Swimming pool	Netherlands	Maastricht	277,721		2013	Municipalisation	N/A	Municipal	Naamloze Vennootschap De Dousberg
437	Swimming pool	Netherlands	Oldenzaal	32,198		2016	Remunicipalisation	T	Municipal	Cone Group
438	Cleaning	Norway	Bodø	53,000	2015		Remunicipalisation	D	Municipal	Eiedomsdrift Nord A/S
439	Security	Norway	Fredrikstad	79,000	2015	2015	Remunicipalisation	T	Municipal	N/A
440	Cleaning	Norway	Tromsø	73,000	2015	2015	Remunicipalisation	T	Municipal	ISS Facility Services A/S

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company 
441	Cleaning	Norway	Stord	19,000	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	ISS Facility Services A/S
442	Bikerental	Spain	Rivas Vaciamadrid	460 workers	2001		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
443	Maintenance of fountains (public space)	Spain	Rivas Vaciamadrid	460 workers	2001		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
444	Renting of public housing	Spain	Rivas Vaciamadrid	460 workers	2001		Municipalisation	N/A	Municipal	Habyco XXI
445	Parks and gardens	Spain	Cabrils	7,197	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	concessions with a private actor
446	Cleaning	Spain	Cabrils	7,197	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	concessions with a private actor
447	Local television (cultural)	Spain	Ciudad Real	200 workers	2015	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Concession with private actor
448	Parks and gardens	Spain	Ciudad Real	80 workers	2015	current contract expires April 2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Concession with private actor
449	School cleaning	Spain	Ciudad Real	200 workers	2015	2016	Remunicipalisation	D	Municipal	Concession with private actor
450	Household services	Spain	Ciudad Real	74,921	2015	2016	Remunicipalisation	D	Municipal	Concession with private actor
451	Funeral services	Spain	Madrid	6,240,000	2015	2016 (contract automatically set to expire)	Remunicipalisation	E	Municipal	mixed ownership (ppp), 49% Funespaña, now controlled by Mapfre known as the Sociedad Mixta de Servicios Funerarios
452	Funeral services	Spain	Barcelona	1,600,000	2016	2019	Municipalisation	N/A	Municipal	N/A
453	Building cleaning	Spain	Cadiz	71 workers	2016		Remunicipalisation	D	Municipal	Concession with private actor
454	Beach rescue and maintenance (security emergency)	Spain	Cadiz	180 workers	2016		Remunicipalisation	D	Municipal	Concession with private actor



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
455	Cleaning and waste collection	Spain	Castelldefels	63,255	2016		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
456	Household services (housing)	Spain	Chiclana	80 workers	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	concessions with a private actor
457	Building cleaning	Spain	Chiclana	80 workers	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	concessions with a private actor
458	Parks and gardens	Spain	Chiclana	20 workers	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
459	Municipal Crane (construction)	Spain	Sabadell	207,444	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
460	Parking meters/ Municipal Crane (public space)	Spain	Santiago de Compostela	95,671	2016		Remunicipalisation	T	Municipal	Setex Aparki
461	Parks and gardens	Spain	Zaragoza	220 workers	2016	2018	Remunicipalisation	E	Municipal	Concession with private partner, FCC
462	Parking meters	Spain	Sabadell	207,444	2017		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
463	Housing benefits	United Kingdom	Lambeth Council	324,400	2000		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	PPP with Capita
464	Sport and leisure	United Kingdom	Cheltenham Council, Eastern	116,800	2003		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	PPP with Leisure Connection
465	School catering	United Kingdom	Newcastle Council, North East, United Kingdom	150,000	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
466	Contact centre	United Kingdom	Redcar and Cleveland, North East	135,300	2007		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
467	Cleaning	United Kingdom	Scotland	5,404,700	2008		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
468	Cleaning	United Kingdom	Wales	3,063,456	2008		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
469	Housing advisory services	United Kingdom	Cotswold District Council, South East, United Kingdom	85,000	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
470	HR and payroll	United Kingdom	Cumbria County Council, North West, United Kingdom	496,000	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
471	IT	United Kingdom	Essex County Council, Eastern, United Kingdom	1,396,600	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
472	Homelessness and housing advice	United Kingdom	West Lindsey Council, East Midlands, United Kingdom	92,000	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
473	IT	United Kingdom	Wiltshire Council, South West, United Kingdom	684,000	2009		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
474	IT	United Kingdom	Broadland Council, Eastern, United Kingdom	130,000	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
475	Housing advice and homelessness agency	United Kingdom	East Dorset Council, South West, United Kingdom	88,000	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
476	Building cleaning	United Kingdom	East Riding Council, Yorkshire & Humberside, United Kingdom	337,000	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
477	Housing	United Kingdom	Hillingdon Council, London, United Kingdom	300,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO
478	Building cleaning	United Kingdom	London Borough of Islington	210,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
479	Hospital cleaning	United Kingdom	Northern Ireland	1,870,451	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
480	Ground and landscape maintenance (public space)	United Kingdom	Rotherham Council, Yorkshire and Humberside	260,000	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
481	Housing management	United Kingdom	Slough Council, South East, United Kingdom	120,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO
482	Building cleaning	United Kingdom	Surrey Council, South East, United Kingdom	1,100,000	2010		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
483	Housing management	United Kingdom	Basildon Council, Eastern, United Kingdom	172,000	2011		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
484	Emergency call (emergency)	United Kingdom	Blaenau Gwent Council, Wales, United Kingdom	70,000	2011		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Worcester Telecare
485	IT	United Kingdom	Coventry City Council, West Midlands, United Kingdom	340,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A





N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
486	Road work	United Kingdom	Cumbria County	498,000	2011		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Capita
487	Housing	United Kingdom	Ealing Council, London United Kingdom	342,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Ealing Homes, an Arms Length Management Organization (ALMO)
488	Housing	United Kingdom	Hammersmith and Fulham Council, London, United Kingdom	182,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO
489	Housing repairs	United Kingdom	Hinckley and Bosworth Council, East Midlands	108,800	2011		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Willmott Dixon
490	Housing	United Kingdom	London Borough of Islington	210,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO Homes for Islington
491	Housing management	United Kingdom	Newham Council, London, United Kingdom	320,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO: Newham Homes
492	Building cleaning	United Kingdom	Perth & Kinross Council, Scotland, United Kingdom	150,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
493	Housing	United Kingdom	Sheffield	640,720	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	ALMO Sheffield Homes
494	Revenues and benefits (others)	United Kingdom	Southwark Council, London, United Kingdom	308,900	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
495	Human resources	United Kingdom	East Riding Council, Yorkshire & Humberside	595,700	2012		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	PPP with Avarto
496	Parking (public space)	United Kingdom	Worthing Council, South East	104,600	2013		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	PPP with NCP
497	Social housing	United Kingdom	Lambeth Council	324,400	2014		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Lambeth Living
498	Support services	United Kingdom	Bedfordshire Council	655,000	2015		Remunicipalisation	T	Municipal	N/A
499	HR and IT etc.	United Kingdom	Somerset County	200,000	2015		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Southwest One, IBM



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
TRANSPORT										
500	Bus line	Austria	Vienna	1,867,960	2007	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
501	Mountain railway	Austria	Mitterbach	506	2011	2011	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	Helmut Meder, Peter Schakmann
502	Railway infrastructure maintenance	Austria	Niederösterreich	1,653,419	2016	2017	Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	ARGE Bahnbau Austria (R&Z Bau GmbH, Leonhard Weiss GmbH & Co KG)
503	Local transit system	Canada	Fort McMurray	65,565	2015		Remunicipalisation	T	Municipal	Tok Transit Ltd.
504	Cable railways	Czech Republic	Krupka	13,260	2009		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Dragon Trade
505	Transport	France	Cholet	104,000	2001	2003	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
506	Local public transport	France	Toulouse	730,000	2005	2006	Remunicipalisation	T	Intermunicipal	Tisséo
507	Local public transport system	France	Belfort	144,000		2007	Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	Keolis
508	Local public transport	France	Forbach	79,500	2009	2010	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
509	Transport	France	Saumur	65,000	2010	2011	Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	Veolia
510	Transport	France	Clermont-Ferrand	469,000	2012		Remunicipalisation	E	N/A	N/A
511	Transport	France	Maubeuge	127,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
512	Transport	France	Nice	536,000	2012	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev
513	Transport	France	Saint-Nazaire	68,616	2012	2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
514	Local public transport system	France	Périgueux	60,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
515	Local public transport	France	Saint-Brieuc	46,173		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev
516	Local public transport	France	Cannes	72,607		2013	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev
517	Transport	France	Aurillac	56,000	2013	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev
518	Transport	France	Thionville	180,000	2013	2014	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
519	Local public transport	France	Chartres	125,500		2015	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev	
520	Local public transport system	France	Abbeville	31,500	2015	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Keolis	
521	Local public transport system	France	Annecy	225,000	2016		Remunicipalisation	T	intermunicipal	N/A	
522	Local public transport system	France	Ajaccio	80,750	2016		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia Transdev	
523	Transport	France	Pau	240,000	2016	2017	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A	
524	Airport	France	Rouen	111,805	2016		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	SNC-Lavalin	
525	Transport services	Germany	Kiel	243,148	2009		Remunicipalisation	S	Municipal	Landeshauptstadt Kiel (51%), Norddeutsche Busbeteiligungsgesellschaft (49%)	
526	Transport services	Germany	Solingen	158,726	2012	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	Stadt Solingen (50,1%), MVV Energie AG (49,9%)	
527	Airport Metro	India	New Delhi	21,750,000	2013	2013	Remunicipalisation	T	Municipal	Reliance Infrastructure - Delhi Airport Express Private Limited	
528	Metro and busses	Portugal	Lisbon	2,900,000	2016		Remunicipalisation	T	Municipal	Grupo Autobuses de Oriente (ADO), Avanza	
529	Bus network	Portugal	Porto	N/A	2016		Remunicipalisation	D	Municipal	STCP	
530	Local bus transportation	Turkey	Denizli	1,000,000		2014	Remunicipalisation	E	Municipal	Turex Turizm	
531	Underground railroad services	United Kingdom	London	8,674,000	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Metronet SSL	
532	Underground railroad services	United Kingdom	London	8,674,000	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Metronet BCV	
533	Underground railroad services	United Kingdom	London	8,674,000	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Tubelines	
534	Highway maintenance	United Kingdom	Ealing Council, London	342,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
535	Highway maintenance	United Kingdom	Rotherham, Yorkshire & Humberside	260,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
536	Highway maintenance	United Kingdom	Thurrock	143,128	2013		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Serco
537	Metro	United Kingdom	Tyne and Wear	1,075,938		2017	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Arriva, Deutsche Bahn subsidiary
WASTE										
538	Solid waste collection	Canada	Port Moody	34,000	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
539	Solid waste collection	Canada	Conception Bay South, Newfoundland and Labrador	25,000	2011	2012	Remunicipalisation	T or E	Municipal	PPP
540	Garbage waste collection	Canada	Paradise	18,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
541	Solid waste collection	Canada	Saint John	70,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
542	Solid waste collection	Canada	Sherbrooke	150,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP
543	Waste collection and recycling	France	Briançon	20,800	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
544	Waste collection	France	Cahors	41,300	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Prévost environnement et Sictom
545	Waste repurposing	France	Arcachon	11,454	2016		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez (Sita)
546	Street cleaning	Germany	Bergkamen	50,896	2002	2002	Remunicipalisation	E	Municipal	Remondis AG & Co. KG
547	Waste management	Germany	Böblingen (Landkreis)	370,392	2003/2008	2004/2009	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
548	Waste water	Germany	Fürstenwalde	32,867	2004	2004	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
549	Waste management	Germany	Rhein-Hunsrück-Kreis	101,854	2004	2006	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
550	Waste management	Germany	Bergkamen	50,896	2005	2006	Remunicipalisation	E	Municipal	Remondis AG & Co. KG

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
551	Waste management	Germany	Uckermark (Landkreis)	122,484	2005	2006	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
552	Waste management	Germany	Aachen (Landkreis) - 8 municipalities	N/A	2005/2008	2006/2009	Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	N/A
553	Waste management	Germany	Düren (Landkreis) - 4 municipalities	N/A	2005/2008	2006/2009	Municipalisation	N/A	State/ province/ regional	N/A
554	Waste management	Germany	Lüneburg (Landkreis)	174,257	2007		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
555	Waste management	Germany	Kiel	243,148	2011	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
556	Waste management	Germany	Wickede an der Ruhr	12,233	2011	2012	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
557	Waste management	Germany	Passau, LK Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen	N/A	2014	2016	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Different private companies
558	Waste water	Germany	Wedemark	28,957	2015	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	KED Kommunale Entsorgungsdienste GmbH & Co. KG
559	Waste disposal	Norway	Oslo	650,000	2017	2017	Remunicipalisation	T	Municipal	Veireno
560	Waste collection and cleaning	Spain	León	129,551	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Urbaser
561	Waste collection and recycling	Spain	Mislata	43,281	2015	N/A	Remunicipalisation	T	Municipal	Sociedad Agricultores de la Vega
562	Waste treatment	United Kingdom	Neath Port Talbot	227,079	N/A	2005	Remunicipalisation	T	Municipal	HLC Environmental Projects
563	Waste disposal and recycling	United Kingdom	North Tyneside	200,000	2008	2009	Remunicipalisation	E	Municipal	External contractor
564	Waste recycling	United Kingdom	Banbridge District Council, Northern Ireland, United Kingdom	46,400	2011	2012	Remunicipalisation	E	Municipal	Bryson Recycling
565	Waste recycling	United Kingdom	Lewes District Council, South East, United Kingdom	92,177	2011	N/A	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
566	Waste and street cleaning	United Kingdom	Northumberland Council, North East, United Kingdom	307,190	2011	N/A	Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	N/A
567	Waste collection, recycling and street cleaning	United Kingdom	London Borough of Islington	210,000	2012	N/A	Remunicipalisation	E	Municipal	Enterprise
568	Waste recycling	United Kingdom (Scotland)	Falkirk	35,000	2016	N/A	Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
WATER 										
569	Wastewater treatment	Belgium	Flanders region	3,800,000	2006		Remunicipalisation	ST	State/ province/ regional	Severn Trent
570	Water	Canada	Hamilton	49,000	2004		Remunicipalisation	E	Municipal	American Water
571	District water and wastewater management	Canada	Port Hardy	4,008	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	EPCOR
572	Wastewater management	Canada	Banff, Alberta	7,584	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	PPPs with EPCOR Utilities, Inc.
573	Wastewater treatment	Canada	Sooke	12,000	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	PPP with EPCOR
574	Water and sanitation	France	SYDEC Landes	87,000	2000-2014		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia, Suez, SAUR
<i>Extension of the régies to new cities for water (+87000) and sanitation (+50000).</i>										
575	Water	France	Briançon	12,000	2000		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	SAUR
576	Water	France	Grenoble (city)	160,000	2,001		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
577	Water	France	Grenoble Metropole Alpes	320,000	2001		Remunicipalisation	T	Intermunicipal	Suez
<i>48 cities excluding Grenoble.</i>										
578	Water	France	Neufchâteau	7,000	2001		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
579	Water and sanitation	France	Pays Châtelleraudais (communauté d'agglomération)	55,000	2001		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>13 cities including Châtelleraut and Naintré for sanitation.</i>										



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
580	Water	France	Venelles	8,500	2002		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
581	Water	France	Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille	24,000	2002/2010		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
<i>12 cities which remunicipalised at expiry.</i>										
582	Water	France	Castres	43,000	2003		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
583	Water	France	Fraisses	4,000	2003		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Veolia
584	Water	France	Varages	1,100	2004		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
585	Water	France	Cherbourg (communauté urbaine)	46,000	2005		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>5 cities</i>										
586	Water	France	Lanvollon-Plouha	16,500	2005		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia/Suez
587	Water	France	Embrun	6,500	2006		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
588	Water	France	Corte	7,000	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	OEHC
589	Water	France	Cournon d'Auvergne	19,000	2007		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
590	Water	France	Le Minervois (communauté de communes)	6,300	2007		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	N/A
<i>15 cities</i>										
591	Water and sanitation	France	Saint-Paul (La Réunion)	100,000	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
<i>Sanitation remunicipalised in 2007, water remunicipalised in 2010.</i>										
592	Water	France	Châtelleraut/ Naintré	38,000	2007		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
593	Water	France	Tournon-sur-Rhône	11,000	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
594	Water and sanitation	France	Angers Loire Métropole	7,000	2008		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	SAUR
<i>Extension of the régie to new cities for water and sanitation.</i>										
595	Water	France	Hauteville-Lompnes	4,000	2008		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
596	Water	France	La Fillière (SIE de La Fillière)	14,000	2008		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
597	Water supply	France	Brignoles	15,912	2008	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
598	Water	France	Belley	9,000	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	Alteau



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
599	Sanitation	France	Benfeld et environs	17,500	2009		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
	<i>Sanitation, joined regional water syndicate SDEA Alsace-Moselle.</i>									
600	Water	France	Digne-les-Bains	18,500	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
601	Water	France	La Grand'Combe (S.I.D.E DE L'AGGLOMÉRATION GRAND'COMBIENNE)	12,000	2009		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Ruas
602	Water	France	Mouthe	1,000	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
603	Water	France	Greater Rouen (Métropole Rouen Normandie)	145,000	2009/2014		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia, Suez
	<i>Progressive extension of the régie to new cities.</i>									
604	Water	France	Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN)	65,000	2009		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
	<i>108 cities</i>									
605	Water	France	Saint-André, Falicon et la Trinité	17,000	2009		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia/Ruas
	<i>Now part of Métropole Nice Cote d'Azur.</i>									
606	Water and sanitation	France	Ungersheim	2,000	2009/2011		Remunicipalisation	N/A	Municipal	N/A
607	Sanitation	France	Greater Albi (communauté d'agglomération de l'Albigeois)	84,000	2010		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
	<i>Sanitation only remunicipalised (water always remained public).</i>									
608	Water	France	Annonay	17,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
609	Water	France	Bonneville	12,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
610	Water	France	Lucé (communauté de communes de Lucé)	15,000	2010		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
	<i>14 cities</i>									
611	Water	France	Paris	2,200,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia/Suez
612	Water	France	Saint-Jean-de-Braye	19,000	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
613	Water	France	Bordeaux	740,000	2011	2018	Remunicipalisation	D	Municipal	Suez
	<i>This remunicipalisation is still debated and there are signs that the newly elected local authorities might reconsider their decision.</i>									
614	Water	France	Brignole	18,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
615	Water <i>10 cities</i>	France	Causse Noir (SIAEP)	25,000	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
616	Water <i>Sanitation was also remunicipalised in 2015.</i>	France	Gueugnon	9,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
617	Water	France	Lacs de l'Essonne	32,000	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia/Suez
618	Water	France	Le Gouray	1,100	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
619	Water	France	Greater Nantes	N/A	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia/Suez
620	Water	France	Ploubezre	3,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
621	Water	France	Saint Briec Agglomération	52,000	2011/2018		Remunicipalisation	D	Intermunicipal	Veolia
622	Water	France	Syndicat de la Baie	5,000	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
623	Water	France	Tarnos, Ondres, Boucau and St-Martin-de-Seignaux	29,000	2011		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
624	Water	France	Vierzon	28,000	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
625	Water	France	Brest Métropole	213,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
626	Water	France	Chenal du Four (Syndicat du Chenal du Four)	6,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
627	Water	France	Gâtine (Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine)	56,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
628	Water	France	Landerneau (SIDEF de Landerneau)	20,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
629	Water <i>Part of the service is still outsourced.</i>	France	Muret	24,000	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
630	Water	France	Saint-Malo	48,000	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
631	Sanitation <i>Sanitation, joined regional water syndicate SDEA Alsace-Moselle.</i>	France	Schweighouse (SIVOM)	12,000	2012		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
632	Sanitation <i>Sanitation</i>	France	Sélestat	60,000	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
633	Water	France	Argenton-sur-Creuse	5,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
634	Water	France	Basse Vallée de l'Adour (syndicat intercommunal)	31,000	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
	<i>25 cities</i>									



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
635	Water	France	Beaurepaire et Saint-Barthélémy	6,000	2013		Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	N/A
636	Water	France	Capbreton	8,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
637	Water	France	Évry Centre Essonne	116,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
638	Water	France	Gannat	6,000	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>Joined SIVOM Sioule et Boule.</i>										
639	Water	France	Kermorvan-Kersauzon (syndicat des eaux)	19,000	2013		Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	Veolia
640	Sanitation	France	Lamentin, Saint-Joseph and Schoelcher (Martinique)	77,000	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez/Veolia
<i>Sanitation, joined the communauté d'agglomération CACEM's régie.</i>										
641	Water	France	Péronne	9,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
642	Sanitation	France	Saint-Pierre des Corps	15,000	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>Water service is still partly outsourced to Veolia (installations and meters). Sanitation was remunicipalised in 2012.</i>										
643	Water	France	Valence-Moissace-Puymirol (syndicat des eaux)	5,000	2013		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	SAUR
644	Water	France	Aubagne	46,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
<i>Joined SPL Eau des Collines for water.</i>										
645	Water	France	Barousse Comminges Save	58,000	2014		Remunicipalisation	T	Intermunicipal	SEM Pyrénées
646	Water	France	Beaulieu, Cap d'Ail, Eze et Villefranche-sur-Mer	17,000	2014		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>Now part of métropole Nice Côte d'Azur.</i>										
647	Water	France	Blois	48,000	2014	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
648	Water	France	Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe)	20,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
<i>Taking effect 2016.</i>										
649	Water	France	Castelsarrasin	13,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
650	Water	France	Courgent	400	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
651	Water supply	France	Fécamp	19,381	2014	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
652	Water	France	Montpellier Méditerranée Métropole	350,000	2014	2016	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
<i>Taking effect 2016.</i>										



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
653	Sanitation	France	Pays d'Aubagne et de l'Étoile	105,000	2014		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
	<i>12 cities, including Aubagne and La Penne-sur-Huveaune, joined SPL Eau des Collines for sanitation.</i>									
654	Water	France	La Penne-sur-Huveaune	6,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
	<i>Joined SPL Eau des Collines for Water.</i>									
655	Water supply (production only)	France	Lille	1,130,000	2014		Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	Suez (partially)
656	Sanitation	France	Mommenheim (SICTEU)	6,000	2014		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez
	<i>Sanitation, joined regional water syndicate SDEA Alsace-Moselle.</i>									
657	Water	France	Portes de l'Eure (communauté d'agglomération)	20,000	2014-		Remunicipalisation	D	Intermunicipal	Veolia/SAUR
	<i>39 cities will be added over time as contracts expire.</i>									
658	Water	France	Terre de Bas (îles des Saintes, Guadeloupe)	1,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
	<i>Remunicipalised together with Capesterre Belle Eau.</i>									
659	Water	France	Terre de Haut (îles des Saintes, Guadeloupe)	2,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
	<i>Remunicipalised together with Capesterre Belle Eau.</i>									
660	Water	France	Bastia (communauté d'agglomération)	58,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	OEHC
661	Water	France	Brugheas	1,500	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
	<i>Joined SIVOM Sioule et Bouble.</i>									
662	Water	France	Fleury les Aubrais	21,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
	<i>Service is still partly outsourced.</i>									
663	Water and sanitation	France	Lamentin / Saint-Joseph (Martinique)	57,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez/Veolia
	<i>Sanitation was remunicipalised in 2013 - both through joining the CACEM régime.</i>									
664	Water supply	France	Montigny-lès-Metz	22,000	2015	2018	Remunicipalisation	E	Municipal	SAUR
665	Water	France	Nice (city)	348,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
	<i>Now part of Métropole Nice Côte d'Azur.</i>									
666	Water	France	Pays de Bitche	25,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia
	<i>Joined SDEA Alsace-Moselle.</i>									
667	Water supply	France	Pays de Gex	86,000	2015	2018	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
668	Water	France	Pays de Nay (SEPA du Pays de Nay)	25,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	SAUR	
669	Water	France	Quimperlé	12,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia	
670	Water	France	Rennes (Eau du Bassin rennais)	480,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia	
<i>56 cities. Production was remunicipalised over the whole area (480000), distribution over Rennes city only (230000).</i>											
671	Water	France	SIAEAG (Guadeloupe)	100,000	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia	
672	Water	France	Troyes	60,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia	
673	Water	France	Valence	65,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia	
674	Water supply	France	Villar-Saint-Pancrace	1400	2015		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez	
675	Water	France	Auch-Nord	N/A	2016		Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia	
676	Water supply and sanitation	France	Cap Excellence (Guadeloupe)	100,000	2016	2017	Remunicipalisation	N/A	Intermunicipal	Veolia	
677	Water supply	France	Cœur d'Essonne Agglomération	193,000	2016	2017	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Suez/Veolia	
678	Water	France	Lesparre	5,600	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez	
679	Water supply and sanitation	France	Nord Grande-Terre (Guadeloupe)	59,000	2016	2017	Remunicipalisation	E	Intermunicipal	Veolia	
680	Water supply	Germany	Bochum, Dortmund	364,742	2003	2003	Remunicipalisation	S	Intermunicipal	E.ON	
681	Water	Germany	Krefeld	222,058	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	RWE	
682	Water	Germany	Bergkamen	110,000	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Gelsenwasser	
683	Water supply	Germany	Frankfurt, Hannover, Nürnberg + 54 weitere	N/A	2009	2009	Remunicipalisation	S	Other/ combined	E.ON	
684	Water supply	Germany	Baden-Württemberg (region)	10,879,618	2010	2010	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	EdF (France, state-owned), OEW, each ca. 45%	
685	Water	Germany	Stuttgart	613,392	2010		Remunicipalisation	D	Municipal	EnBW	
686	Water supply	Germany	Wetzlar	51,649	2010	2011	Remunicipalisation	S	Municipal	Enwag GmbH (Stadt Wetzlar, Thüga AG)	
687	Water supply	Germany	Wiesbaden	276,218	2011	2012	Remunicipalisation	S	Municipal	ESWE (Thüga AG, WVV Wiesbaden Holding)	
688	Water	Germany	Solingen	155,768	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	MWV Energie AG	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
689	Water	Germany	Bielefeld	328,864	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Stadtwerke Bremen/ Essent	
690	Water supply	Germany	Darmstadt & weitere	155,353	2012	2012	Remunicipalisation	S	Intermunicipal	Stadt Darmstadt	
691	Water	Germany	Oranienburg	42,000	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Gelsenwasser	
692	Water	Germany	Berlin	3,501,870	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia/RWE	
693	Water supply	Germany	Wuppertal	608,000	2013	2013	Remunicipalisation	S	Municipal	Wuppertaler Stadtwerke, GDF Suez	
694	Water	Germany	Burg (Sachsen-Anhalt)	22,000	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia	
695	Water supply	Germany	Erbach	13,401	2014	2015	Remunicipalisation	W	Municipal	Heag-Südhessische Energie AG (HSE)	
696	Water	Germany	Rostock	200,000	2014		Remunicipalisation	D	Municipal	Remondis	
697	Water	Italy	Imperia	220,000	2012		Remunicipalisation	D	Intermunicipal	IREN	
698	Water	Italy	Province of Varese	889,000	2013		Remunicipalisation	D	Intermunicipal	A2A	
699	Water	Italy	Termoli	33,000	2015		Remunicipalisation	D	Municipal	Acea	
700	Water	Portugal	Mafra	76,685	2016		Remunicipalisation	T	Municipal	Générale des Eaux & Be Water	
701	Water	Russia	Arzamas	120,000	2014		Remunicipalisation	W	Municipal	Remondis	
702	Water	Spain	Medina Sidonia	11,794	2003		Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia	
703	Water	Spain	Sevilla province	126,845	2007		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	ACS Actividades de Construcción y Servicios	
		<i>Alanís de la Sierra, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Brenes, Las Cabezas, Cantillana, Carmona, Cañada Rosal, Constantina, El Coronil, El Cuervo, El Madroño, Los Molares, Lebrija, Los Palacios y Vfca., El Pedroso, El Real de la Jara, Tocina, Vva. Del Río y Minas, El Viso del Alcor, San Nicolás del Puerto, Utrera.</i>									
704	Water supply	Spain	Figaró-Montmany (Catalonia)	1,110	2009	2010	Remunicipalisation	E	Municipal	CASSA	
705	Water supply	Spain	Arenys de Munt (Catalonia)	8,588	2010	2011	Remunicipalisation	E	Municipal	Agbar - SUEZ Environment	
706	Water	Spain	Arteixo	31,005	2013	2013	Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia (FCC)	
707	Water supply	Spain	La Granada (Catalonia)	2,055	2013	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	Cassa - AGBAR - Suez	
708	Water	Spain	La Línea de la Concepción	62,697	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia (FCC)	
709	Water	Spain	Manacor	41,049	2013		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Agua Manacor S.A.	
710	Water supply	Spain	Lucena (Andalusia)	45,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Agber	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
711	Water supply	Spain	Alfés (Catalonia)	319	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Aigües de Catalunya
712	Water supply	Spain	Daltmar Olèrdola (Catalonia)	3,626	2014	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	AGBAR - Suez
713	Water supply	Spain	Vilalba Sasserra (Catalonia)	699	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	SOREA - AGBAR - SUEZ
714	Water	Spain	Ermua (Basque Country)	10,109	2014	2015	Remunicipalisation	T	Intermunicipal	Aquarbe - Suez
715	Water	Spain	Estella del Marqués	1,486	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia
716	Water supply	Spain	Foixà (Catalonia)	317	2014		Remunicipalisation	E	Municipal	N/A
717	Water	Spain	Guadalcacín	5,233	2014	2015	Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia
718	Water supply	Spain	Montornès del Vallès (Catalonia)	16,150	2014	2014	Remunicipalisation	E	Municipal	CADAC
719	Water	Spain	Rascafría	2,000	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Canal Gestión SA
720	Water supply	Spain	Santa Maria de Palautordera (Catalonia)	9,195	2014	2014	Remunicipalisation	W	Municipal	Comunitat d'Aigües S.L.
721	Water	Spain	Torrecedra	1,254	2014	2015	Remunicipalisation	T	Municipal	Aqualia
722	Water supply	Spain	Massanes	723	2015	2017	Remunicipalisation	E	Municipal	Abastaments d'Aigües de la Tordera
723	Water supply	Spain	Puigverd d'Agramunt (Catalonia)	269	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	SOREA
724	Water supply	Spain	Teo (Galicia)	18,266	2015	2015	Remunicipalisation	T	Municipal	Agbar - SUEZ Environment
725	Water supply	Spain	Collbató (Catalonia)	4,336	2016	2016	Remunicipalisation	E	Municipal	Agbar - SUEZ Environment
726	Water supply	Spain	Terrassa	215,517	2016	2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Mina (Agbar - SUEZ)
727	Water supply	Spain	Valladolid (Castile and León)	306,803	2016	Expected in July 2017	Remunicipalisation	D	Municipal	Agbar - SUEZ Environment
728	Water supply	Spain	Vilagrassa (Catalonia)	513	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	SOREA (Agbar, SUEZ environment)
729	Water	Sweden	Norrköping	87,247	2005		Remunicipalisation	S	Municipal	EON
730	Water	United States	Atlanta, GA	1,200,000	2003		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
731	Water	United States	Angleton, TX	18,862	2004		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
732	Water	United States	Plainfield, IN	27,631	2004		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
733	Water	United States	Laredo, TX	236,191	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water (Suez)
734	Water	United States	Coxsackie, NY	8,918	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
735	Water	United States	Jackson, AL	5,228	2005		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Veolia
736	Water	United States	Pekin, IL	34,094	2005		Remunicipalisation	E	Municipal	United Water
737	Water	United States	East Aurora, NY	6,236	2005		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
738	Water	United States	Conroe, TX	61,533	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
739	Water	United States	Demopolis, AL	7,483	2006		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
740	Water	United States	Five Star Water Supply District, AL	100	2006		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
741	Water	United States	Southern Water & Sewer District, KY	23,524	2006		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
742	Water	United States	North Brunswick, NJ	40,742	2006		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
743	Water	United States	Logan, WV	11,000	2006		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
744	Water	United States	Petaluma (wastewater treatment), CA	58,142	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
745	Water	United States	Karnes City, TX	3,042	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
746	Water	United States	Winchester, NH	4,341	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
747	Water	United States	Stockton, CA	300,899	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	OMI-Thames Water
748	Water	United States	Fairfield-Suisun (wastewater treatment) CA	135,296	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water (Suez)
749	Water	United States	Central Elmore Water & Sewer Authority, AL	50,000	2008		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Veolia
750	Water	United States	Cave Creek, AZ	9,000	2008		Remunicipalisation	E	Municipal	American Water
751	Water	United States	Horn Lake, MS	15,545	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Southwest Water
752	Water	United States	Odem, TX	2,499	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
753	Water	United States	Hayden, ID	13,294	2009		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
754	Water	United States	Durham County, NC	8,000	2009		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
755	Water	United States	Burley (wastewater treatment), ID	9,578	2009		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
756	Water	United States	Surprise, AZ	27,116	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	American Water
757	Water	United States	Biddeford, ME	21,383	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	CH2M Hill OMI
758	Water	United States	O'Fallon, MO	25,002	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	Alliance Water Resources



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company	
759	Water	United States	Kline, PA	1,591	2009		Remunicipalisation	W	Municipal	United Water	
760	Water	United States	North Adams, MA	13,708	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water	
761	Water	United States	Overton, TX	2,554	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
762	Water	United States	Freeport, IL	25,638	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	United Water	
763	Water	United States	Evansville, IN	117,429	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	American Water	
764	Water	United States	Gary, IN	180,000	2010		Remunicipalisation	T*	Municipal	United Water	
	<i>City voted to terminate but then negotiated a "transition agreement" with the company to avoid paying \$450,000 in termination fees. So United Water could say the deal was not officially 'terminated'.</i>										
765	Water	United States	Liberty, MO	30,000	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	CH2M Hill OMI	
766	Water	United States	Webb City, MO	10,996	2010		Remunicipalisation	E	Municipal	CH2M Hill OMI	
767	Water	United States	Skaneateles, NY	5,116	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Severn Trent	
768	Water	United States	Lampasas, TX	7,868	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	CH2M Hill OMI	
769	Water	United States	Leander, TX	25,740	2010		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Southwest Water	
770	Water	United States	Whitesburg (water and wastewater),KY	2,139	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
771	Water	United States	Brunswick -Glynn County, GA	79,626	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water	
772	Water	United States	Tama, IA	2,877	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
773	Water	United States	Schenectady (wastewater treatment), NY	66,135	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
774	Water	United States	Plymouth (water and wastewater), NC	3,878	2011		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia	
775	Water	United States	Manchester Township, NJ	35,976	2011		Remunicipalisation	N/A	Municipal	United Water	
776	Water	United States	Summit City, NJ	21,457	2011		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water	
777	Water	United States	New Albany (wastewater treatment), IN	36,372	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	American Water	
778	Water	United States	Gladewater, TX	6,275	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
779	Water	United States	Lanett AL	6,468	2012		Remunicipalisation	N/A	Municipal	Veolia	
780	Water	United States	Barstow, CA	22,639	2012		Remunicipalisation	E	Municipal	United Water	
781	Water	United States	Coeburn, VA	2,139	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia	
782	Water	United States	Cameron, TX	5,770	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	Severn Trent	

N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
783	Water supply	United States	Florida	22,270	2013	2013	Remunicipalisation	S	State/ province/ regional	Aqua America
784	Water	United States	Storm Lake, IA	10,600	2013		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
785	Water supply	United States	Missoula, Montana	70,000	2014/2016		Remunicipalisation	D	Municipal	Mountain Water Co. (owned by Carlyle group. And it was sold to Canada-based Liberty Utility-the same company in Apple Valley)
786	Water	United States	Reidsville, NC	14,520	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
787	Water	United States	Oakland County, MI	59,515	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	United Water
788	Water supply	United States	Apple Valley	71,000	2015		Remunicipalisation	D	Municipal	Liberty Utilities (Apple Valley Ranchos Water) Corp.
789	Water supply	United States	New Brunswick, New Jersey Approximately	60,000	2015		Remunicipalisation	E	Municipal	New Jersey American Water
790	Waste water treatment	United States	New York	8,550,400	2016		Remunicipalisation	E	Municipal	Veolia
791	Water	Albania	Elbasan	100,000	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	Berlinwasser International
792	Water	Argentina	Buenos Aires Province (74 cities)	2,500,000	2002		Remunicipalisation	W	State/ province/ regional	Enron
793	Water	Argentina	Buenos Aires	9,000,000	2006		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
794	Water	Argentina	Buenos Aires Province (Gran, 6th subregion)	1,700,000	2006		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Impregilo
795	Water	Argentina	Santa Fe and Rosario	2,000,000	2006		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Suez
796	Water	Argentina	Catamarca	200,000	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Proactiva
797	Water	Argentina	Salta	1,100,000	2009		Remunicipalisation	T	Municipal	Latinaguas
798	Water	Argentina	La Rioja	200,000	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Latin Aguas
799	Water	Argentina	Mendoza	1,100,000	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Saur
800	Water	Bolivia	Cochabamba	900,000	2000		Remunicipalisation	T	Municipal	Bechtel
801	Water	Bolivia	La Paz/El Alto	1,600,000	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
802	Water	Central African Republic	Bangui	80,000	2003		Remunicipalisation	WS	Municipal	SAUR
803	Water treatment	Colombia	Bogota	1,500,000	2004		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
804	Water supply	Colombia	Bogota	7,000,000	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Acea, Proactiva
805	Water	Ecuador	Machala	240,000	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Oriolsa
806	Water	Guinea	Conakry and 16 other smaller urban centres	1,824,000	2003		Remunicipalisation	W	Municipal	SAUR/Veolia
807	Water	Hungary	Kaposvar	64,872	2009		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
808	Water	Hungary	Pecs	150,000			Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
809	Water	Hungary	Borsodviz	190,000	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Gelsenwasser
810	Water	Hungary	Budapest	1,740,000	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez, RWE
811	Water	India	Latur	390,000	2012		Remunicipalisation	T	Municipal	SPML (Shubash Projects and Marketing Ltd)
812	Water supply	India	Mysore	920,000	2014	2015	Remunicipalisation	E	Municipal	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)
<i>The Central Jakarta District Court on 24 March 2015 annulled the privatised water contracts signed with Suez (Palyja) and Aetra and ordered the water services to be brought back to the state-owned water company.</i>										
813	Water	Indonesia	Badung Bali	543,332	2013		Remunicipalisation	E	Municipal	Mahasara Buana, Intan Dyandra Mulya, Dewata Artha Kharisma
814	Water	Indonesia	Jakarta	4,950,000	2015		Remunicipalisation	D	Municipal	Suez
815	Water	Kazakhstan	Ust-Kamenogorsk	303,720	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	IR-Group
816	Water	Kazakhstan	Almaty	1,600,000	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia
817	Water (bulk supply)	Kazakhstan	Astana	639,311	2003		Remunicipalisation	W	Municipal	Veolia
818	Water	Lebanon	Tripoli	400,000	2007		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
819	Water	Malaysia	Kuala Lumpur (Selangor state)	5,411,324	2014		Remunicipalisation	D	State/ province/ regional	Syabas, PNSB, SPLASH, ABASS
820	Water	Mexico	Ramos Arizpe	48,228	2,014		Remunicipalisation	T	Municipal	N/A



N°	Specific service	Country	City/Region	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Level of taking back control	Private company
821	Water	Mozambique	Beira, Nampula, Quelimane and Pemba (and Chokwé, Inhambane, Maxixe and Xai-Xai)	242,143	2008		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	Aguas de Mozambique (SAUR and Aguas de Portugal)
822	Water	Mozambique	Maputo	1,766,184	2010		Remunicipalisation	T	Municipal	Aguas de Portugal
823	Water	South Africa	Amathali (Stutterheim)	200,000	2005		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
824	Water	South Africa	Johannesburg	500,000	2006		Remunicipalisation	E	Municipal	Suez
825	Water	South Africa	Nkonkobe (Fort Beaufort)	130,000	2002		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
826	Water	Tanzania	Dar es Salaam	750,000	2005		Remunicipalisation	T	Municipal	Biwater
827	Water	Turkey	Antalya	2,158,000	2002		Remunicipalisation	T	Municipal	Suez
828	Water	Turkey	Izmit	1,600,000	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Thames Water
829	Water	Uganda	Kampala	1,720,000	2004		Remunicipalisation	E	Municipal	ONDEO
830	Water	Ukraine	Lugansk	424,113	2014		Remunicipalisation	T	Municipal	Rosvodokoanal
831	Water	Ukraine	Kirovograd	293,444	2008		Remunicipalisation	T	Municipal	Water Services, LLC
832	Water	Uzbekistan	Bukhara	247,000	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia, then Amiwater
			<i>A second contract with Amiwater was also terminated in 2007.</i>							
833	Water	Uzbekistan	Samarkand	412,000	2007		Remunicipalisation	T	Municipal	Veolia, then Amiwater
			<i>A second contract with Amiwater was also terminated in 2007.</i>							
834	Water	Venezuela	Monagas State	552,000	2001		Remunicipalisation	E	State/ province/ regional	FCC
835	Water	Venezuela	Lara State	1,100,000	2002		Remunicipalisation	T	State/ province/ regional	Aguas de Valencia



Anexo 2

Lista de (re)nacionalizaciones en inglés

Legend

D: decisions to renationalise

E: contracts expired

T: contracts terminated

S: shares sold by private operators

W: private operators withdrew

N°	Specific service	Country	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Private company
ENERGY								
1	Electricity distribution	Albania	2,876,591	2013		Renationalisation	T	ČEZ Group
2	Oil and gas	Argentina	43,417,000	2004	2004	Nationalisation		N/A
3	Oil	Argentina	43,417,000	2012		Renationalisation	T	Repsol
4	Electricity distribution	Belize	468,310	2009	2015	Renationalisation	T	Fortis Energy
5	Hydrocarbon	Bolivia	11,410,651	2006		Renationalisation	T	Repsol YPF
6	Electricity	Bolivia	11,410,651	2010	2011	Renationalisation	T	Rurelec PLC
7	Electricity generation and distribution	Bolivia	11,410,651	2010	2011	Renationalisation	T	Ecoenergy Internacional, Electricidad Corani (subsidiaries of GDF), Electricidad Valle Hermoso and Guaracachi
8	Electricity	Bolivia	11,410,651	2012	2015	Renationalisation	T	Iberdrola Paz Holdings Ltd.
9	Electricity transmission	Bolivia	11,410,651	2012		Renationalisation	T	Red Eléctrica Internacional S.A.U.
10	Transmission grid	Finland	5,488,543	2011		Renationalisation	S	N/A
11	Power station	Hungary	9,830,485	2011		Renationalisation	N/A	Bakonyi Erőmű
12	Oil and gas company	Hungary	9,830,485	2011		Renationalisation	N/A	Surgutneftegas (owned 21.2% of shares)
13	Energy gas reservoirs	Hungary	9,830,485	2013		Renationalisation	N/A	E.ON Storage
14	Gas trading supply	Hungary	9,830,485	2013		Renationalisation	N/A	E.ON Földáztrade Kft.
15	Energy gas reservoirs	Hungary	9,830,485	2013/2014		Renationalisation	N/A	Kft., MMBF Zrt
16	Gas	Hungary	9,830,485	2014		Renationalisation	N/A	FŐGÁZ Zrt.
17	Gas trading supply	Hungary	9,830,485	2013/2015		Renationalisation	N/A	PANRUSGAS Gázkereskedelmi Zrt.
18	Power station	Hungary	9,830,485	N/A		Renationalisation	N/A	Székesfehérvári Fűtőerőmű



N°	Specific service	Country	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Private company
19	Gas distribution grid	Lithuania	2,827,947	2014		Renationalisation	S	Gazprom, E.ON Ruhrgas
20	Electricity purchase	Tanzania	51,820,000	2008/2016		Renationalisation	T	Richmond Development Corporation (2008), Symbion Power Tanzania Ltd. (2016)
21	Biofuels	Uruguay	3,427,000	2006		Nationalisation	N/A	N
22	Electricity generation, transmission, distribution and commercialisation	Venezuela	31,775,371	2007	2011	Renationalisation	S	AES, Electricidad de Caracas, Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello, Electricidad de Valencia, Electricidad de Ciudad Bolívar, Compañía Anónima Luz Eléctrica de Yaracuy, Sistema Eléctrico del estado Nueva Esparta

FINANCE

23	Pensions	Argentina	43,417,000	2008		Nationalisation	T	AFJP
24	Pensions	Bolivia	11,410,651	2006	2010	Renationalisation	T	BBVA, Zurich Financial Services
25	Pensions	Ecuador	16,144,000	2014	2015	Renationalisation	T	N/A
26	Bank	Iceland	332,529	2008		Nationalisation	T	Landsbanki
27	Bank	Venezuela	31,775,371	2008	2009	Renationalisation	S	Grupo Santander

HEALTH CARE AND SOCIAL WORK

28	Stem cell donation	Austria	8,725,931	2015	2016	Nationalisation	S	Österreichische Knochenmarkspendezentrale (association)
----	--------------------	---------	-----------	------	------	-----------------	---	---

POSTAL SERVICES

29	Postal services	Argentina	43,417,000	2003		Renationalisation	T	Grupo Macri
----	-----------------	-----------	------------	------	--	-------------------	---	-------------





N°	Specific service	Country	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Private company
TELECOMMUNICATION								
30	Broadcasting infrastructure/ Electromagnetic Spectrum	Argentina	43,417,000	2004		Renationalisation	T	N/A
31	Public television and radio	Argentina	43,417,000	2009	2009	Nationalisation	N/A	N/A
32	Telephone	Belize	468,310	2009	2015	Renationalisation	T	Lord Michael Ashcroft, Belize Central Bank Ltd.
33	Landline, mobile, internet, TV	Bolivia	11,410,651	2008	2011	Renationalisation	T	Euro Telecom International, subsidiary of Italiana Telecom
34	Landline, mobile, internet, TV	Venezuela	31,775,371	2007		Renationalisation	S	Verizon (28.5% of shares)



TRANSPORT								
35	Airlines	Argentina	43,417,000	2008		Renationalisation	T	Grupo Marsans
36	Railways	Argentina	43,417,000	2013		Renationalisation	T	Corredores Ferroviarios Sociedad Anónima (Grupo Roggio)
37	Infrastructure: airports	Bolivia	11,410,651	2013		Renationalisation	T	Abertis-AEN/A
38	Railways	Estonia	1,315,635		2007	Renationalisation	T	Railroad Development Corporation
39	Railways	Guatemala	16,176,133	2003	2007/2013	Renationalisation	T	Railroad Development Corporation
40	Railroad operations	New Zealand	4,792,340	2008		Nationalisation	T	Toll New Zealand
41	Railways	United Kingdom	65,110,000	2001		Renationalisation	E	Railtrack (RT) for infrastructure and 106 other companies for the operative side

WASTE								
42	Waste management	Hungary		2011		Renationalisation	N/A	Depónia Kft.
43	Waste management	Hungary		2014		Renationalisation	N/A	AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft.





N°	Specific service	Country	Population	Year of decision	Year of implementation	Kind of de-privatisation	How de-privatisation happened	Private company
WATER								
44	Water	Cape Verde	525,000	2005		Renationalisation	TS	Aguas de Portugal
45	Water	Ghana	27,043,093	2011		Renationalisation	E	Vitens, Rand Water
46	Water	Guyana	735,909	2007		Renationalisation	T	Severn Trent
47	Water	Malaysia	31,536,000	2001		Renationalisation	S	Prime Utilities
48	Water	Mali	14,517,176	2005		Renationalisation	T	SAUR

OTHER

49	Print	Germany	82,175,700	2008	2009	Renationalisation	S	Clifford Chance
----	-------	---------	------------	------	------	-------------------	---	-----------------

Metodología del estudio y encuesta participativa

Los datos para elaborar este libro se recopilaron durante un período de 18 meses, desde mediados de 2015 a finales de 2016. La información se basa en una encuesta (véase abajo) en que se pedía a quienes la respondían que identificaran casos de (re)municipalización y (re)nacionalización que se hubieran producido en sus respectivos países entre 2000 y finales de 2016. En colaboración con nuestros socios en el estudio,¹ las encuestas se enviaron a organizaciones que trabajan en el campo de los servicios públicos: seis organizaciones ciudadanas, trece investigadores e investigadoras y cinco sindicatos. Debido a las restricciones de tiempo y recursos, la lista de entidades que respondieron dista mucho de ser exhaustiva (tanto en el plano sectorial como geográfico), y presenta importantes brechas en Asia, África y Australia. Sin embargo, nuestras conclusiones ponen de manifiesto una fuerte tendencia hacia la remunicipalización en un amplio abanico de servicios públicos, tanto en Europa como en otras regiones. Y no cabe duda de que quedan muchos otros por identificar.

Nuestra encuesta se centró en los servicios esenciales, como el agua, la energía, el transporte, la gestión de residuos, el reciclaje, la salud y los servicios sociales, y la educación. También incluimos una categoría general de ‘servicios de la administración local’, donde entran ámbitos como los servicios de edificios y la limpieza, la seguridad y las emergencias, los espacios (verdes) públicos, la vivienda, los comedores escolares, los centros deportivos, las actividades culturales, los servicios funerarios, la construcción y las reparaciones, los recursos humanos, la tecnología de la información y ‘otros’ (como, por ejemplo, servicios de bicicletas o suministro de alimentos locales).

1 Transnational Institute (TNI), Observatorio de las Multinacionales, Cámara Federal del Trabajo de Austria (AK), Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU), Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Internacional de Servicios Públicos (ISP-PSI), Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), We Own It, Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega (Fagforbundet), Proyecto Servicios Municipales (MSP) y Sindicato Canadiense de la Función Pública (SCFP-CUPE).

Pedimos que se explicaran los motivos que impulsaron la (re)municipalización o (re)nacionalización, así como por qué el servicio volvía a estar en manos públicas. Entre los casos, se señalaron las situaciones siguientes:

- remunicipalización por la que unos servicios que antes eran privados o estaban privatizados habían pasado al control y la gestión públicos a escala local, incluidas asociaciones público-públicas (por lo general, cooperación intermunicipal);
- remunicipalización por la que se habían creado asociaciones entre autoridades públicas y cooperativas ciudadanas o de trabajadores y trabajadoras (que actúan en el ámbito local y sin ánimo de lucro);
- cooperativas ciudadanas o de trabajadores y trabajadoras (que actúan en el ámbito local y sin ánimo de lucro) que habían asumido el control de unos servicios que antes dependían de proveedores comerciales con fines de lucro; y
- municipalización, por la que se habían creado nuevas empresas públicas (por lo general, propiedad de la administración municipal).

En todos los casos, pedimos a las personas que respondían que seleccionaran ejemplos en los que la prestación de los servicios públicos se basara en objetivos públicos claros y con un cierto grado de control democrático por parte de los usuarios finales. Estos valores y objetivos públicos incluían cuestiones como la transparencia, la equidad, el acceso universal, la asequibilidad, la sostenibilidad ambiental, la calidad de los servicios, el control sobre la economía y los recursos locales, y un salario digno para el personal. El control democrático se refiere a los mecanismos de participación y rendición de cuentas por parte de los representantes públicos y/o los usuarios y usuarias.

Encuesta participativa

La encuesta se ofreció en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español. A continuación se presenta la versión en español, junto con la breve nota introductoria que la acompañaba.

INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que participe en esta encuesta sobre renacionalizaciones y remunicipalizaciones en su país. Sus respuestas nos ayudarán a entender mejor qué está sucediendo con relación a esta importante tendencia en todo el mundo. El objetivo de la encuesta es recabar información sobre distintos casos de renacionalización y remunicipalización en su país entre los años 2000 y finales de 2016.

Por ‘renacionalización’ se entiende que un servicio público que antes estaba privatizado o externalizado al sector privado (por ejemplo, mediante una asociación público-privada) vuelve a someterse al control del Gobierno central. Por ‘remunicipalización’ se entiende que un servicio público que antes estaba privatizado o externalizado al sector privado (por ejemplo, mediante una asociación público-privada) vuelve a someterse al control de la administración municipal, regional o provincial.

Nos gustaría que respondiera a las preguntas siguientes. Los resultados de esta encuesta aparecerán en una publicación prevista para 2017, en la que se reconocerá su aportación.

Su nombre

Su organización

Su país

Su correo electrónico

RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS POR CADA UNO DE LOS CASOS DE REMUNICIPALIZACIÓN Y/O RENACIONALIZACIÓN.

CASO 1

Pregunta 1: ¿En que sector de servicio se produjo el caso de remunicipalización o renacionalización?

- Agua
- Energía
- Transporte
- Residuos (y reciclaje)
- Atención de la salud y asistencia social
- Educación
- Servicios de la administración local
- Servicio postal
- Telecomunicaciones
- Otros ()

Pregunta 2: ¿En qué ciudad/región/país se produjo la remunicipalización o renacionalización?

Pregunta 3: ¿Cuál es el nombre actual de la empresa remunicipalizada o renacionalizada?

Pregunta 4: ¿Cómo se produjo la remunicipalización o renacionalización de este servicio público?

- Se ha tomado la decisión de remunicipalizar/renacionalizar el servicio, pero aún no se ha puesto en práctica
- El contrato ha vencido, no se ha renovado y el servicio se ha remunicipalizado/renacionalizado
- El operador privado ha vendido las acciones y el contrato del servicio se ha remunicipalizado/renacionalizado
- El contrato se ha rescindido y el servicio se ha remunicipalizado/renacionalizado

- El operador privado ha renunciado al contrato y el servicio se ha remunicipalizado/renacionalizado

Pregunta 5: ¿Quién era el propietario del servicio público privatizado o externalizado antes de la remunicipalización/renacionalización?

(Escriba el nombre de la compañía matriz o de las autoridades locales/regionales/nacionales.)

Pregunta 6 (opcional): Explíquenos el caso. Puede indicar los problemas que entrañó la privatización, quiénes fueron los actores clave, si se produjo una movilización por parte del personal del servicio o la ciudadanía, los desafíos que se enfrentan, los resultados de la remunicipalización/renacionalización, etcétera.

Pregunta 7: En caso de que disponga de ellos, incluya enlaces a páginas web con recursos complementarios, como artículos de prensa en el idioma local.

Pregunta 8: ¿Contó la remunicipalización/renacionalización con el apoyo de todos los sindicatos? En caso de que NO, indique los sindicatos que no sumaron su apoyo.

Pregunta 9: ¿Supuso la remunicipalización/renacionalización un cambio en las condiciones laborales y el salario del personal? En caso de que SÍ, explique BREVEMENTE los cambios PRINCIPALES.

Pregunta 10: ¿Supuso la remunicipalización/renacionalización un cambio en el número de empleados y empleadas del servicio? En caso de que Sí, explique brevemente el cambio, e indique si este también entrañó cuestiones de jornada completa y/o parcial.

Pregunta 11: ¿Se ha producido o se está produciendo algún otro caso de remunicipalización/renacionalización en su región?

Las organizaciones



Transnational Institute (TNI)

Persona de contacto: Lavinia Steinfert, l.steinfert@tni.org
www.tni.org/recuperacion-servicios-publicos



Observatorio de las Multinacionales

Persona de contacto: Olivier Petitjean,
opetitjean@multinationales.org, www.multinationales.org



Cámara Federal del Trabajo de Austria (AK)

<https://wien.arbeiterkammer.at/index.html>



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU) <http://www.epsu.org/>



Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF)

<https://esf-cat.org/>



Internacional de Servicios Públicos (ISP-PSI)

<http://www.world-psi.org/>



Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) <http://www.psiru.org/>



We Own It

<https://weownit.org.uk/>



Sindicato de Personal Municipal y General de Noruega (Fagforbundet) <http://www.fagforbundet.no/>



Proyecto Servicios Municipales (MSP)

<http://www.municipalservicesproject.org/>



Sindicato Canadiense de la Función Pública (SCFP-CUPE)

<https://cupe.ca/>

Cómo participar

- > Las organizaciones que han colaborado en la elaboración de este libro agradecen su participación para mejorar la visibilidad de la tendencia remunicipalizadora. Este libro presenta casos concretos en los que ciudades, regiones y países han acabado con la privatización de los servicios y se han propuesto garantizar unos servicios públicos para todos y todas. La lista de (re)municipalizaciones que ofrecemos dista mucho de ser exhaustiva. Seguiremos documentando más casos como parte de un proceso de aprendizaje colectivo. **Persona de contacto: Lavinia Steinfors, l.steinfors@tni.org**
- > Nos complace compartir la nueva iniciativa 'El pueblo por encima del lucro', una plataforma mundial que presentará a finales de 2017 la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y muchas otras organizaciones aliadas. El nuevo sitio web de 'El pueblo por encima del lucro' servirá de espacio de enlace entre sindicatos, organizaciones y campañas que luchan contra las privatizaciones y las asociaciones público-privadas (APP) en servicios públicos como el agua, la salud, la educación, la energía, la gestión de los residuos y la infraestructura pública. ¡No se lo pierdan!
Persona de contacto: campaigns@world-psi.org
- > El sitio web Water Remunicipalisation Tracker es un espacio para compartir casos de remunicipalización del agua en todo el mundo. En él se van añadiendo nuevos casos y se actualizan los ya registrados de forma periódica, con la ayuda de activistas, gestores públicos de servicios, sindicatos y otros actores comprometidos con la experiencia remunicipalizadora en este sector.
www.remunicipalisation.org

- > La red Reclaiming Public Water (RPW) promueve una gestión pública democrática y centrada en las personas con el fin de lograr que el derecho humano al agua sea una realidad universal. RPW es una red abierta y horizontal que actúa como punto de unión entre activistas de la sociedad civil, sindicalistas, investigadores e investigadoras, asociaciones comunitarias y operadores públicos de agua de todo el mundo. **Persona de contacto: Satoko Kishimoto satoko@tni.org**

- > El Proyecto Servicios Municipales (MSP) explora alternativas a la privatización en los sectores de la salud, el agua, el saneamiento y la electricidad. El MSP es un proyecto interdisciplinario integrado por personas del mundo académico, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y activistas de todo el mundo. El sitio web ofrece una plataforma interactiva para que toda aquella persona interesada pueda participar en debates sobre el tema. **www.municipalservicesproject.org**

- > En el Reino Unido, la cuestión de la propiedad pública de los servicios públicos vuelve a estar en el centro del debate político. La campaña nacional *We Own It* ofrece información para que se escuche más la voz de las personas. Los servicios públicos os pertenecen. Los pagáis, los usáis y afectan a vuestras vidas. Vosotros y vosotras sois más importantes que el lucro. ¡Participa!
<https://weownit.org.uk/people-not-profit>

Desde Nueva Delhi a Barcelona, y desde Argentina a Alemania, miles de políticos, funcionarios públicos, trabajadores, sindicatos y movimientos sociales están trabajando para reivindicar o crear servicios públicos que satisfagan las necesidades básicas de las personas y respondan a los desafíos ambientales.

Normalmente, lo hacen en el ámbito local. Nuestro estudio demuestra que desde el año 2000 se han producido al menos 835 casos de remunicipalización de los servicios públicos en todo el mundo, que afectan a más de 1600 ciudades en 45 países.

¿Por qué hay comunidades de todo el mundo que están recuperando servicios básicos que antes gestionaban operadores privados y volviendo a situarlos en el ámbito de lo público? Este tipo de iniciativas responden a muchos y diversos motivos: el objetivo de acabar con las prácticas abusivas o el incumplimiento de las normas laborales por parte del sector privado, el deseo de reconquistar el control de la economía y los recursos locales, el afán de ofrecer a las personas unos servicios asequibles, o la intención de poner en práctica unas estrategias ambiciosas a favor del medioambiente, por citar algunos.

Las remunicipalizaciones están ganando terreno tanto en ciudades pequeñas como en grandes capitales, siguiendo distintos modelos de titularidad pública y con distintos niveles de implicación por parte de la ciudadanía y la propia plantilla del servicio. Sin embargo, pese a la gran pluralidad de experiencias, se puede dibujar un panorama con un denominador común: es posible construir unos servicios públicos eficientes, democráticos y asequibles. El constante deterioro de la calidad de los servicios y el incremento de los precios no es algo inevitable. Por ese motivo, cada vez son más las comunidades y las ciudades que están acabando con las privatizaciones y volviendo a poner en manos públicas servicios esenciales.



ISBN 9789070563615



9 789070 563615